

PÚBLICO

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ARGENTINA

PROGRAMA GLOBAL DE DESARROLLO URBANO

(AR-0066)

INFORME DE PROYECTO

2 DE SEPTIEMBRE DE 1986

ARGENTINA
PROGRAMA GLOBAL DE DESARROLLO URBANO
(AR-0066)

Indice

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION	1
A. Antecedentes del Proyecto	1
B. La Solicitud y Su Prioridad	3
C. Misiones y Consultores	3
D. Resumen y Conclusión	3
II. MARCO DE REFERENCIA	5
A. Introducción	5
B. Organización y Recursos del Sector Público Argentino ..	6
1. División Política Territorial	6
2. El Gobierno Nacional	6
3. El Nivel Provincial	8
4. El Nivel Municipal	9
C. El Sector Urbano en Argentina	10
1. Características y Evolución Reciente del Sistema Urbano	10
2. Situación Socio-económica de las Ciudades Argentinas	11
3. La Planificación Urbana y Regional	12
D. Intervención del Sector Público en el Desarrollo Urbano	13
1. La Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (SVOA)	13
2. Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)	15
3. Servicios Públicos en el Desarrollo Urbano	18
E. Situación de las Tarifas de Servicios Públicos	21
1. Política General	21
2. Evolución Reciente de las Tarifas a Nivel Nacional	21
3. Situación de Tarifas a Nivel Provincial	22
F. Experiencia Anterior del Banco en el Sector Urbano Argentino	23
G. Acciones de Otras Instituciones	24
H. Conclusión	25

	<u>Página</u>
III. EL PROGRAMA, SU COSTOS Y FINANCIAMIENTO	26
A. Objetivos	26
B. Descripción	26
C. Demanda y Dimensionamiento	29
D. Distribución Sectorial Tentativa de los Recursos del Programa	31
E. Criterios de Elegibilidad y Aprobación de los Proyectos	31
F. Muestra de Proyectos	34
G. Asistencia Técnica	36
H. Refuerzo Institucional de la SVOA	39
I. Costo y Financiamiento	39
1. Costo Total	39
2. Análisis de Costos	40
3. Financiamiento	40
IV. EJECUCION DEL PROGRAMA	42
A. Creación del Programa	42
B. Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano	42
1. Conformación y Ubicación Institucional	42
2. Organización Interna y Funciones	43
3. Requerimientos de Personal Permanente	44
4. Asesoría Técnica a la OPDU	45
C. Ejecución del Subprograma de Obras.....	47
1. Promoción del Programa e Identificación de los Proyectos	47
2. Preparación y Presentación de las Solicitudes ...	47
3. Análisis y Aprobación de los Proyectos	48
4. Formalización de los Créditos	50
5. Autorización para Licitaciones y Adjudicaciones	51
6. Desembolsos a los Subprestatarios	51
7. Reprogramaciones	52
8. Procedimientos de Cobranza	52
9. Administración de los Documentos de Crédito	53
D. Términos y Condiciones de los Subpréstamos (Reglamento de Crédito)	53
1. Sectores Financiables	53
2. Garantías	54
3. Condiciones Financieras de los Créditos	54
4. Límites de Crédito y Aprobación	55
5. Distribución Territorial de los Recursos	55
6. Restricciones al Uso de los Recursos	55
7. Tarifas de Servicios Públicos	56
8. Otros Mecanismos de Recuperación de Costos	57

	<u>Página</u>
9. Procedimientos de Adquisición de Bienes y Servicios	58
10. Mantenimiento de las Obras	59
11. Continuidad del Programa	59
12. Otras Condiciones y Exigibilidad de los Créditos	59
E. Ejecución del Subprograma de Asistencia Técnica	60
F. Cronograma de Compromisos y Desembolsos	62
G. Reconocimiento de Gastos	63
H. Anticipo de Fondos	63
I. Supervisión del Banco	63
J. Auditoría Externa	64
K. Seguimiento y Evaluación	64
L. Evaluación a posteriori	64
V. EL PRESTATARIO Y EL EJECUTOR	66
A. Introducción	66
B. Aspectos Institucionales del Organismo Ejecutor (SVOA)	66
1. Naturaleza y Objetivos	66
2. Antecedentes	67
3. Estructura Organizativa	68
4. Personal	70
5. Fiscalización y Auditoría Externa	71
6. Conclusión	72
C. Análisis Presupuestario del Ejecutor	72
D. FONAVI	73
1. Antecedentes	73
2. Régimen Financiero	75
3. Análisis de los Ingresos del FONAVI	79
4. Proyecciones Financieras de FONAVI	81
VI. JUSTIFICACION DEL PROGRAMA	84
A. Viabilidad Técnica	84
B. Viabilidad Institucional	85
C. Viabilidad Financiera	86
1. Conclusión	86
2. Proyecciones Financieras	87
D. Viabilidad Socio-económica	88
1. Introducción	88
2. Comparación de Situaciones con y sin el Programa	89
3. Análisis de la Muestra	90
E. Conclusión	94

ANEXOS

- II-1 Argentina: Situación Económica Reciente y Perspectivas
- II-2 Ciudades que Superaron 50,000 Habitantes en 1980
- II-3 % de la Población en Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Ciudades con más de 50,000 Habitantes en 1980

- II-4 Perfiles de los Sectores a ser Financiados por el Programa

- III-1 Descripción y Resultados del Análisis Técnico de los Proyectos de la Muestra

- IV-1 Organigrama de la Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano (OPDU)
- IV-2 Funciones Específicas del Director del Programa y de las Direcciones de la Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano
- IV-3 Perfil Profesional del Personal Permanente de la Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano
- IV-4 Términos de Referencia y Perfiles Profesionales de los Asesores a la OPDU a ser Financiados con Recursos del BID y del PNUD
- IV-5 Reglamento de Crédito del Programa
- IV-6 Reglamento de Asistencia Técnica del Programa

- V-1 Estructura del Ministerio de Salud y Acción Social
- V-2 Estructura de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental
- V-3 Función Vivienda - Presupuesto 1985
- V-4 FONAVI: Sistema de Recaudación
- V-5 FONAVI: Proyección de Recaudaciones Anuales y Fuentes y Usos con el Programa de Construcción de Viviendas, 1985-1991.

- VI-1 Estado de Resultados del Programa
- VI-2 Estado de Origen y Aplicación de Fondos del Programa
- VI-3 Estado de Situación
- VI-4 Resultados del Análisis Socio-económico de los Proyectos de la Muestra

CAPITULO I. INTRODUCCION

A. Antecedentes del Programa

- 1.01 Argentina es uno de los países más urbanizados de América Latina y tiene la particularidad de que su urbanización -que ya estaba muy avanzada antes de la Primera Guerra Mundial- ha seguido un proceso relativamente más lento que en la mayoría de los países de la región en décadas recientes. Aunque la Argentina no ha sufrido el mismo proceso explosivo de urbanización experimentado por muchos de los países latinoamericanos desde 1950, todavía existe una brecha significativa entre la demanda y la oferta de infraestructura y equipamientos en las ciudades principales.
- 1.02 Argentina también es uno de los países latinoamericanos donde la población urbana es más altamente concentrada en la ciudad capital. Por otro lado, a partir de 1970 existe una clara tendencia hacia la descentralización de la población urbana del gran Buenos Aires, debido principalmente al crecimiento más rápido de las ciudades intermedias (teniendo entre 150.000 y 650.000 habitantes) y pequeñas (con menos de 150.000 habitantes) en el interior del país, sobre todo las primeras. Entre los distintos tamaños de ciudad, fuera de la periferia inmediata de la ciudad de Buenos Aires, las necesidades insatisfechas para inversiones en infraestructura y equipamientos urbanos actualmente son mayores en las ciudades intermedias, debido principalmente a su mayor dinamismo demográfico en las últimas décadas, en un contexto de recursos limitados para la ampliación y/o mejoramiento de servicios locales.
- 1.03 Dentro de las ciudades intermedias, así como también en el caso del Gran Buenos Aires, las áreas más afectadas por los actuales déficit de servicios urbanos se localizan en la periferia de estos centros, donde se encuentran las poblaciones de menores ingresos. En aquellas ciudades que han sido caracterizadas por mayor dinamismo poblacional en años recientes, adicionalmente, la parte más importante de este crecimiento ha ocurrido justamente en los barrios periféricos donde la carencia de infraestructura y equipamientos es más seria.
- 1.04 Al mismo tiempo, la situación recesiva que ha caracterizado la economía argentina durante los años ochenta ha repercutido negativamente sobre la capacidad de los gobiernos provinciales y municipales de atender la demanda creciente para inversiones en infraestructura y servicios urbanos. Además de eso, la reciente construcción de conjuntos habitacionales de gran dimensión por los Institutos Provinciales de Vivienda, utilizando los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), ha provocado impactos importantes en muchos centros urbanos, ocasionando presiones adicionales sobre los servicios básicos, tanto en los barrios específicos donde se ubican estos conjuntos, como en relación a las instalaciones y redes troncales que atienden a estas ciudades como un todo, de esta forma generando cuellos de botella para su expansión futura.

- 1.05 Directamente, como consecuencia del proceso reciente de expansión urbana, por lo tanto, la creciente demanda de vivienda se ha extendido también a la infraestructura y los equipamientos urbanos en general. Frecuentemente, no obstante, las entidades responsables por el suministro de servicios urbanos en el interior del país no han tenido los recursos necesarios para dar una respuesta adecuada a esta demanda. En la realidad, esta situación de recursos insuficientes ha sido agravada por la reciente descentralización territorial y administrativa de la planificación y ejecución de obras de infraestructura urbana, debido a la debilidad técnica y financiera de muchas de las entidades provinciales que han tenido que asumir estas funciones.
- 1.06 Tampoco han existido los esfuerzos de preinversión que se requieren, a nivel nacional y provincial, para identificar prioridades y preparar proyectos de desarrollo urbano, así como para ofrecer el apoyo técnico necesario para mejorar la administración operativa y financiera de los servicios públicos en las ciudades intermedias y pequeñas en el interior del país. Estas deficiencias se deben, en gran medida, a la ausencia de un mecanismo de asistencia técnica y financiera a nivel nacional que tenga el objetivo de promover el desarrollo urbano a nivel local. El gobierno argentino, consciente de esta necesidad, ha propuesto crear tal mecanismo en la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (SVOA), a través del establecimiento y ejecución del Programa que se analiza en este documento, y cuyo financiamiento parcial ha sido solicitado al Banco durante sus años iniciales de operación.
- 1.07 Más concretamente, el Programa propuesto crearía una fuente permanente de recursos financieros y asistencia técnica a ser canalizados a las provincias y municipios para atender las demandas crecientes de infraestructura y equipamientos urbanos, así como el fortalecimiento institucional de las entidades responsables por la planificación y suministro de servicios urbanos. Paralelamente, el Programa buscaría reforzar el papel de la SVOA, así como de los gobiernos provinciales y municipales, en la orientación y racionalización del proceso de desarrollo urbano a nivel local, con énfasis en las ciudades intermedias y las provincias del interior del país.
- 1.08 Estas finalidades son consistentes con la política del gobierno argentino en relación al sector urbano. Entre sus directrices se incluyen la desconcentración de la población urbana del Gran Buenos Aires y la descentralización de la administración pública nacional -incluyendo la administración federal, a través de la transferencia de la Capital Federal a la Patagonia, recientemente propuesta por el Presidente. Estos objetivos se lograrían respectivamente mediante el mejoramiento de la infraestructura y servicios en las ciudades intermedias y pequeñas, de esta manera reforzando el proceso espontáneo de descentralización urbana ya iniciado, y a través del fortalecimiento institucional y financiero de los gobiernos provinciales y municipales. El Programa que se describe en este

Informe contribuiría directamente a la realización de estos objetivos.

B. La Solicitud y Su Prioridad

- 1.09 Con fecha de 4 de junio de 1985, el Gobierno Argentino, mediante una nota del Ministro de Economía, solicitó el financiamiento del Banco para un Programa Global de Desarrollo Urbano, afirmando que el referido Programa constituye una prioridad del actual Gobierno. El 20 de febrero de 1986, el Secretario de Coordinación Económica, al transmitir la documentación que respalda la solicitud de préstamo, solicitó el envío de una Misión de Análisis.

C. Misiones y Consultores

- 1.10 Para atender tales solicitudes y preparar la documentación correspondiente, el Banco ha efectuado una serie de Misiones de Orientación y autorizado una Misión de Cooperación Técnica de Corta Duración. Entre los días 5 al 13 de mayo y 16 al 25 de septiembre de 1985, se realizaron dos Misiones de Orientación, la primera de las cuales identificó la necesidad de la mencionada Misión de Corta Duración, que fué aprobada por el Presidente del Banco el 9 de agosto de 1985 y efectuó sus labores durante los meses de septiembre a diciembre de 1985; la Misión de Corta Duración estuvo conformado por un economista y un analista financiero-institucional. Adicionalmente, técnicos del Banco realizaron visitas cortas de seguimiento durante los días 18 al 21 de junio y 9 al 13 de diciembre de 1985 y de 3 al 5 de marzo de 1986.
- 1.11 Estas actividades, junto con los esfuerzos de la Unidad de Formulación de la Solicitud de Préstamo al BID, constituida específicamente para esta finalidad en la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, dieron lugar a la amplia documentación de respaldo que se resume en el presente documento.

D. Resumen y Conclusión

- 1.12 El presente Programa contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida de la población urbana argentina, a través de la ejecución de proyectos específicos de infraestructura y equipamientos urbanos en beneficio principalmente de poblaciones de bajos ingresos en las ciudades intermedias y pequeñas del interior del país. Otro objetivo importante será la creación y operación de un mecanismo de crédito y asistencia técnica para la expansión y/o mejoramiento de infraestructura y servicios urbanos, en sectores seleccionados. Para estos fines, el Programa tendrá dos Subprogramas, uno de obras y el otro de Asistencia Técnica. El Programa también contribuirá directamente al fortalecimiento institucional de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (SVOA), que tiene la responsabilidad principal a nivel nacional por la coordinación del desarrollo urbano en la Argentina y que sería el Ejecutor del presente Programa. El costo del Programa se estima en US\$300 millones, incluyendo dos préstamos del BID, uno en divisas por

US\$120,0 millones y otro en moneda local por el equivalente de US\$2,0 millones.

- 1.13 Este documento describirá el Programa propuesto y presentará los resultados principales de los análisis realizados en lo que se refiere a su viabilidad técnica, institucional, financiera y socio-económica. Más concretamente, el Capítulo II contiene el marco de referencia del Programa, dando énfasis a la organización y recursos del sector público argentino, la evolución reciente del sector urbano en el país, la intervención del sector público en el desarrollo urbano y la situación actual de las tarifas de los servicios públicos en la Argentina. El Capítulo III describe los aspectos más resaltantes del diseño del Programa, indicando sus objetivos y características básicas, analizando la demanda para sus recursos, justificando su dimensionamiento y especificando los criterios de elegibilidad y análisis a ser aplicados a los proyectos a financiarse. Asimismo, el Capítulo III presenta la muestra de proyectos específicos analizados por el Banco, así como los costos y el esquema propuesto de financiamiento del Programa.
- 1.14 El detalle del proceso de ejecución del Programa es objeto de descripción en el Capítulo IV donde se puede constatar el avance en el diseño de todos los mecanismos necesarios para una ejecución exitosa. Se destaca la creación de la Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano, que será establecida en la SVOA específicamente para administrar esta operación, y los procedimientos de ejecución de los Subprogramas de Obras - así como los términos y condiciones de los subpréstamos a ser otorgados - y de Asistencia Técnica. El Capítulo V, a su vez, presenta el análisis del Prestatario y del Ejecutor del Programa, pudiéndose constatar que su organización es conducente a la ejecución del Programa y que los recursos de contrapartida local están legalmente comprometidos y son financieramente factibles. Finalmente, el Capítulo VI demuestra la factibilidad del Programa y de los proyectos de la muestra, tanto técnica como institucional, financiera y económica.
- 1.15 La conclusión es de que el Programa propuesto será efectivo en contribuir al desarrollo de las ciudades más necesitadas del país, proveyéndoles de servicios públicos adecuados y de la infraestructura de apoyo necesario. Asimismo, el Programa establecerá un mecanismo de crédito y asistencia técnica para el desarrollo urbano que podrá ser utilizado futuramente para multiplicar los esfuerzos iniciados con esta operación y contribuirá a sentar las bases para el establecimiento de políticas que permitirán racionalizar el desarrollo urbano del país.

CAPITULO II. MARCO DE REFERENCIA 1/

A. Introducción

- 2.01 El Programa que se analiza en este documento buscaría reforzar la intervención del sector público argentino en la expansión, operación y financiamiento de infraestructura y equipamientos urbanos, con énfasis en las ciudades intermedias y pequeñas en el interior del país y de una forma consistente con los esfuerzos a nivel nacional de apoyar la desconcentración de la población urbana del Gran Buenos Aires y de descentralizar la administración de los servicios públicos que apoyan el proceso de desarrollo urbano a nivel local. En este contexto, antes de describir el Programa propuesto es necesario examinar la división de trabajo existente entre los distintos niveles de gobierno en lo que se refiere a la ejecución de infraestructura y servicios urbanos. Eso, a su vez, requiere una breve descripción de la organización y recursos del sector público argentino.
- 2.02 Adicionalmente, para situar el Programa propuesto es necesario examinar resumidamente la evolución reciente del sistema urbano argentino y la situación socio-económica de las ciudades más importantes del país, así como el principal mecanismo existente a nivel nacional para intervención en el desarrollo urbano, el FONAVI, y la entidad que administra este fondo y que administrará el presente Programa, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental. Finalmente, además de considerar la experiencia anterior del Banco en el sector urbano argentino y la de otras instituciones financieras internacionales, es conveniente analizar brevemente el papel de los servicios públicos en el desarrollo urbano y la situación actual de las tarifas de servicios públicos en el país.
- 2.03 De estos análisis, se concluirá que se requiere reforzar los mecanismos existentes de planificación y orientación del desarrollo urbano en la Argentina, así como de operación y financiamiento de la infraestructura y servicios urbanos existentes. También se concluirá que las necesidades de intervención en el interior del país son mayores en las ciudades intermedias, que han crecido más rápidamente que los centros urbanos más grandes del país desde 1970 y que han experimentado los déficit más elevados de infraestructura física y social fuera de la periferia inmediata del Gran Buenos Aires. Finalmente, se concluirá que también se requiere apoyar los gobiernos provinciales y municipales en sus esfuerzos de ampliar y racionalizar los servicios urbanos frente a las demandas crecientes en un contexto económico recesivo a nivel nacional y un cuadro institucional complejo y recientemente agravado por la descentralización administrativa y financiera de sectores importantes como agua potable, desagües cloacales y energía eléctrica.

1/ Ver Anexo II-1 "Argentina: Situación Económica Reciente y Perspectivas".

B. Organización y Recursos del Sector Público Argentino

1. División Política Territorial

- 2.04 El Estado Argentino está organizado en tres niveles político-administrativos y territoriales: el nacional, el provincial y el municipal. Estos tres niveles corresponden a una organización federal en la cual las atribuciones gubernamentales son originarias de los estados provinciales, que las han delegado al Gobierno Nacional. Consecuentemente, las Provincias son entidades autónomas que dictan sus propias constituciones. Los municipios, a su vez, son organizados como parte del régimen provincial. En la actualidad, el sistema federal argentino abarca veintidos provincias, la Capital Federal y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 2.05 En virtud de que el Programa objeto del presente documento se basa en gran medida en la capacidad autónoma de las provincias, sus municipios y sus instituciones de actuar, así como en la distribución de ingresos entre la nación y estos entes, es importante detallar el régimen federal del país, por lo cual se presentan a continuación los aspectos más resaltantes. Esta discusión destacará la descentralización de la organización política-administrativa argentina y la división de trabajo general entre los diversos niveles de gobierno.

2. El Gobierno Nacional

(a) Organización

- 2.06 Con base en la delegación de poderes por las provincias, el Gobierno Nacional tiene las atribuciones de responder a las grandes necesidades generales de la sociedad argentina y de atender los intereses comunes de las distintas subdivisiones territoriales. Los poderes delegados al Gobierno Nacional son todos aquellos indicados en la Constitución Nacional. Adicionalmente, existen "poderes concurrentes" encargados por la Constitución tanto al Gobierno Central, como a las provincias y aún a los municipios por delegación provincial.
- 2.07 El Poder Ejecutivo Nacional es desempeñado por el Presidente que tiene a su cargo la administración general del país. El actual régimen ejecutivo surge de la Ley 23.023 de diciembre 1983 que organiza la administración central en ocho Ministerios: Interior, Relaciones Exteriores y Culto, Defensa, Economía, Obras y Servicios Públicos, Educación y Justicia, Trabajo y Seguridad Social y Salud y Acción Social, constituyendo el Gabinete Nacional.
- 2.08 Los Ministerios están encargados en la elaboración de los objetivos y políticas nacionales, así como en la ejecución de planes, programas y proyectos conforme las directivas impartidas por el Poder Ejecutivo Central. Para el cumplimiento de sus funciones, los Ministerios se componen de Secretarías, Subsecretarías y Direcciones.

Adicionalmente, existen cinco Secretarías con rango ministerial, directamente dependientes del Presidente.

- 2.09 El Estado Argentino también ejecuta un conjunto de acciones, servicios públicos y actividades económicas a través de Empresas y Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria. Estas entidades cubren un espectro amplio de actividades en los sectores de transporte y comunicaciones, industria, servicios públicos, energía y financiamiento, entre otros. Ejecutan políticas definidas por los Ministerios según el sector que corresponda y sus niveles de ingresos y gastos, así como sus necesidades de financiamiento y límites de endeudamiento, son fijados anualmente por la Secretaría de Hacienda.

(b) Recursos y su Coparticipación

- 2.10 Los recursos del Gobierno Nacional dependen de disposiciones constitucionales que atribuyen poderes exclusivamente al Gobierno Federal o en concurrencia con los gobiernos provinciales. Según estas disposiciones, corresponden a la Nación lo siguiente: (i) recursos asignados en forma exclusiva y permanente (impuestos externos sobre el comercio exterior y rentas del correo); (ii) recursos asignados en forma concurrente y permanente con las provincias (impuestos internos); y (iii) recursos asignados transitoria o temporalmente en forma concurrente con las provincias (impuestos directos en casos de urgencia nacional).
- 2.11 A partir de 1935, se instituyó un sistema de unificación y co-participación de impuestos entre la Nación y las provincias. Por medio de este sistema, el Gobierno Federal recauda impuestos en todo el territorio nacional y los distribuye, en primera instancia, entre los dos niveles básicos de gobierno (nacional y provincial) y, en segundo lugar, entre las distintas provincias.
- 2.12 El sistema de co-participación ha sufrido una serie de variaciones desde su creación. En general, las provincias incrementaron su participación en los ingresos totales entre 1935 y 1975, mientras que, entre 1976 y 1983, la parcela provincial disminuyó considerablemente, para recuperar en 1984 el porcentaje alcanzado en 1973.
- 2.13 Según el régimen de co-participación, del total recaudado se destinaba el 3% a un Fondo de Desarrollo Regional y el resto se distribuía en partes iguales entre la Nación (incluyendo 1.8% del total para la Municipalidad de Buenos Aires y 0.2% para el Territorio de Tierra de Fuego) y el conjunto de las provincias. Entre las provincias, a su vez, se distribuye el 65% de los fondos en forma directamente proporcional a la población de las provincias, el 25% en proporción a la brecha de desarrollo entre cada provincia y el área más desarrollada y el 10% restante entre las provincias cuya densidad poblacional es inferior al promedio nacional, en proporción a la diferencia entre la densidad de cada provincia y ese promedio.

3. El Nivel Provincial

(a) Organización

- 2.14 Las provincias definen sus propias constituciones y leyes, crean sus instituciones locales y eligen sus autoridades sin intervención del Gobierno Federal. El Gobierno Central garantiza la autonomía de las provincias desde que las mismas cumplen con las condiciones establecidas en la Constitución Nacional. Las legislaturas provinciales, por lo tanto, no dictan todas las leyes que rigen en sus territorios, ya que la legislación de derecho privado y alguna de derecho público (Códigos Civil, Comercial, Penal, etc.) es materia del Congreso Nacional.
- 2.15 Los gobiernos provinciales tienen a su cargo la organización administrativa y financiera dentro de sus territorios, incluyendo el poder genérico de reglamentación interna de la seguridad y del bienestar de la población (sobre todo a través del suministro de servicios públicos). Dentro de las atribuciones provinciales, se incluye la potestad sobre el suelo urbano, sea directamente o por medio de los municipios, tanto en lo relativo a su uso y zonificación, como en lo que se refiere a las restricciones al dominio del mismo.
- 2.16 La organización institucional de las provincias respeta la división de atribuciones establecida en la Constitución Nacional, generando un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El primero es ejercido por un Gobernador quién es asistido por un conjunto de Ministros. El poder legislativo es ejercido por la legislatura provincial y se establecen tres instancias judiciales. Los gobiernos provinciales también actúan a través de entidades autárquicas, que no están subordinadas jerárquicamente a otro órgano administrativo (Ministerio, etc.), y de empresas públicas.

(b) Recursos

- 2.17 Los recursos de las provincias provienen de varias fuentes. Por una parte, los recursos son obtenidos por recaudación fiscal dentro del territorio provincial (recursos propios). En segundo lugar, los ingresos provinciales se integran por recursos recaudados por el Gobierno Nacional en todo el territorio nacional dentro del régimen de coparticipación federal. Por último, los recursos provinciales son integrados por otras transferencias nacionales, fuera del sistema de coparticipación.
- 2.18 Los principales recursos propios de las provincias se originan en los impuestos inmobiliarios, de sellos, sobre las actividades lucrativas o los ingresos brutos y sobre los automotores. En varias provincias, pagos recibidos de organismos nacionales en concepto de regalías por la extracción de minerales, combustibles o la producción de energía hidroeléctrica representan una fuente importante de recursos. En términos generales, los recursos provinciales se componen

aproximadamente 50% de ingresos propios , 40% de recursos co-participados y 10% de otros ingresos.

4. El Nivel Municipal

(a) Organización

- 2.19 En la organización político-institucional argentina, el municipio es la unidad primaria. Históricamente, las provincias fueron constituidas con base en los municipios y la Constitución Nacional impone como condición a las mismas la organización del régimen municipal dentro de sus territorios. A diferencia de las provincias, las municipalidades no son autónomas, pero constituyen delegaciones de los poderes provinciales, circunscriptas a fines y límites administrativos previstos por la Constitución Nacional.
- 2.20 La existencia institucional de los municipios depende, por lo tanto, de las constituciones provinciales y de las leyes orgánicas municipales dictadas por las respectivas legislaturas provinciales. De esas normas surgen las atribuciones municipales, que incluyen los siguientes: (i) la distribución del gobierno municipal en un órgano ejecutivo unipersonal (intendente) y un órgano deliberativo colegiado (Concepto Deliberante); (ii) una relación de dependencia institucional y financiera con el gobierno provincial; y (iii) la elección popular del intendente en algunos casos o su indicación por el Gobernador o el Consejo Deliberante (que es elegido popularmente) en otros.
- 2.21 Los municipios tienen las siguientes finalidades generales: (i) satisfacción de los intereses públicos locales, incluyendo la prestación de determinados servicios públicos y la realización de ciertas obras públicas dentro de sus territorios; (ii) satisfacción de intereses públicos provinciales, incluyendo la coordinación del ejercicio de sus actividades propias con las acciones de las autoridades provinciales; y, (iii) satisfacción de intereses públicos nacionales. Las principales áreas de regulación municipal, a su vez, son: (i) urbanismo (ordenanzas y decretos reglamentarios de la subdivisión y lotificación del suelo urbano, así como del uso y ocupación del mismo); (ii) edificación; (iii) tránsito; (iv) higiene; (v) uso de bienes públicos de dominio municipal; y (vi) tributación.

(b) Recursos

- 2.22 El régimen de los ingresos municipales incluye tanto recursos propios (originados dentro de la jurisdicción y competencia de los municipios), como participaciones de otros niveles de gobierno. Los recursos propios consisten esencialmente en: (i) ingresos patrimoniales (derivado del derecho de propiedad sobre bienes de dominio público y privado); (ii) precios públicos municipales (como retribución de empresas municipales por la venta de bienes o servicios); (iii) tasas a cargo de los usuarios de servicios públicos (alumbrado público, limpieza e higiene públicas, conservación de calles, desagües pluviales, etc.); (iv) contribuciones especiales de

mejoras (para el caso de obras públicas que producen resultados diferenciales en la valorización de la propiedad); (v) ingresos de capital; y, (vi) impuestos (que son de relativamente poca importancia a nivel municipal).

- 2.23 Los ingresos provenientes de los niveles superiores de gobierno normalmente representan una proporción elevada de los recursos municipales. En este contexto, existen distintos sistemas provinciales de co-participación fiscal con los municipios, así como para la distribución de recursos entre los diversos poderes comunales en cada provincia.

C. El Sector Urbano en Argentina

1. Características y Evolución Reciente del Sistema Urbano

- 2.24 Argentina es uno de los países más urbanizados de América Latina. (Solamente Uruguay y Venezuela tuvieron niveles de urbanización ligeramente más altos que Argentina en 1980). En 1980, 83% de la población total fué clasificado como urbana, comparado con 62% en 1947, indicando que el proceso de urbanización ya estaba bastante avanzado en el país al terminar la Segunda Guerra Mundial. (Aun antes de la Primera Guerra Mundial, Argentina se caracterizaba por un alto nivel de urbanización con casi 57% de su población total residiendo en ciudades en 1914). Entre las provincias argentinas, a su vez, solamente cuatro (Catamarca, Formosa, Misiones y Santiago del Estero - todas en el norte del país) tuvieron poblaciones urbanas inferiores al 60% de sus poblaciones totales en 1980, mientras que cinco provincias (Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Santa Cruz y Santa Fé), además de la Capital Federal (ciudad de Buenos Aires) y el Territorio de Tierra del Fuego, registraron poblaciones urbanas superiores al 80% en este año.
- 2.25 La población urbana argentina continua altamente concentrada en Gran Buenos Aires, aunque ya exista una tendencia de descentralización. Actualmente, Gran Buenos Aires tiene una población superior a diez millones de habitantes, correspondiendo a aproximadamente 43% de la población urbana total del país (eso también es uno de los índices más altos para América Latina, considerando que solamente Uruguay (62%), Paraguay (59%) y Chile (54%) registraron poblaciones urbanas más concentradas que la Argentina en sus ciudades capitales en 1980) y siendo diez veces mayor que la segunda y tercera ciudades, Córdoba y Rosario, que tienen aproximadamente un millón de habitantes cada una. Por otro lado, el grado de concentración de la población urbana en Gran Buenos Aires ha disminuído desde 1960 -cuando la región de la capital contenía casi 47% de la población urbana del país- especialmente desde 1970. Eso significa que las ciudades menores -sobre todo las ciudades intermedias, incluyendo las capitales de provincia- han crecido más rapidamente que la región metropolitana de Buenos Aires durante las últimas décadas. El Anexo II-2 presenta una lista de las principales ciudades argentinas, así como su población en 1980 y sus índices de crecimiento demográfico para el período 1970-80.

- 2.26 La creciente importancia de las ciudades intermedias argentinas se refleja en los siguientes indicadores. En 1947, excluyendo Gran Buenos Aires, existían solamente nueve ciudades con poblaciones superiores a 100,000 habitantes que, conjuntamente, contenían 20% de la población urbana del país; ninguna de estas ciudades, no obstante, tenía una población superior a 500,000. En 1980, por otro lado, las ciudades entre 100,000 y un millón ya sumaban a 17 -cuatro de las cuales con poblaciones superiores a medio millón- y conjuntamente respondían por casi 27% de la población urbana total. A su vez, los centros urbanos entre 20,000 y 100,000 habitantes también aumentaron en número -de 43 a 85 ciudades- y en porcentaje de la población urbana total -de 11% al 15%- entre 1960 y 1980, indicando que también han participado en el proceso de descentralización urbana durante las últimas décadas. (Además de las 103 ciudades con más de 20.000 habitantes en 1980, el censo argentino identificó 608 centros teniendo entre 2.000 y 20.000 habitantes que contenían 15% de la población urbana total en este año, comparado con casi 19% en 1960 e indicando que han crecido menos rápidamente que las ciudades entre 20.000 y un millón durante este período).
- 2.27 En general, las ciudades con poblaciones superiores a medio millón de habitantes, incluyendo Gran Buenos Aires, están creciendo más lentamente que las áreas urbanas menores. Entre las trece ciudades teniendo poblaciones entre 50,000 y 500,000 en 1980 que crecieron más rápidamente durante los años setenta, diez son capitales de provincia y solamente cuatro están localizadas en la región central del país, adonde también se encuentran todas las aglomeraciones urbanas superiores a medio millón de habitantes.
- 2.28 En otras palabras, las ciudades más dinámicas desde 1970 están ubicadas principalmente en el norte y el sur de Argentina, sobre todo en las regiones de Patagonia (Trelew y Neuquen) y del Noreste (Resistencia, Formosa y Posadas), seguido por la región Noroeste (San Salvador de Jujuy, Salta, La Rioja y Santiago del Estero). Debido en gran medida a su mayor dinamismo demográfico en años recientes, estas ciudades están entre las que actualmente presentan la demanda más elevada para inversiones en infraestructura y servicios urbanos.

2. Situación Socio-económica de las Ciudades Argentinas

- 2.29 Los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980 permiten caracterizar la situación socio-económica de las ciudades argentinas, sobretodo en relación a las condiciones de vivienda, escolaridad y dependencia económica de la población. Con base en estas informaciones, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la Secretaria de Planificación de la Presidencia de la República ha publicado un documento con el título La Pobreza en la Argentina que resume la situación socio-económica del país como un todo y de las provincias y centros urbanos individualmente. Más concretamente, se puede comparar la situación de las diversas subdivisiones del país a partir de un indicador síntesis de "necesidades básicas insatisfechas" con relación a vivienda, condiciones sanitarias, educación y empleo. Se describen las variables que componen este

indicador en detalle en el Anexo II-3 que presenta los valores del mismo para todas las ciudades argentinas con poblaciones superiores a 50,000 en 1980.

- 2.30 En general, las provincias en el norte de Argentina tienen índices de necesidades básicas insatisfechas más altos que las provincias del centro y del sur, tanto entre las poblaciones urbanas, como entre las rurales. Mas precisamente, en las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco, Salta y Corrientes, más del 40% de los hogares fueron encontrados en una situación de necesidades básicas insatisfechas en 1980, comparado con menos de 20% de los hogares en la Capital Federal y las provincias de La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fé y Mendoza. Los indicadores para las ciudades individuales (ver Anexo II-3) reflejan bien estas diferencias regionales, ya que los centros urbanos que tienen la mayor incidencia de población en hogares con necesidades básicas insatisfechas incluyen Formosa, San Salvador de Jujuy, Corrientes, Resistencia, Posadas, Tucumán y Catamarca, entre otras. Las ciudades del sur del país -sobretudo Trelew, Neuquen y Comodoro Rivadavia- también se encuentran entre los centros urbanos con los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas.
- 2.31 Comparando las cifras presentadas en los Anexos II-2 y II-3, se puede observar que existe una asociación positiva entre las ciudades que tienen los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas en 1980 y las que han crecido más rápidamente desde 1970. En otras palabras, de un modo general, las ciudades que se expandieron más rápidamente en los años setenta también registraron índices relativamente elevados de necesidades básicas insatisfechas, mientras que los centros urbanos menos dinámicos en términos demográficos -incluyendo Buenos Aires, Rosario, Santa Fé y La Plata, entre otras- tuvieron índices comparativamente bajos de necesidades básicas insatisfechas.
- 2.32 En resumen, en términos regionales, las ciudades localizadas en el norte y el sur de Argentina no solamente están creciendo más rápidamente que las del centro del país, sino que también se caracterizan por índices más altos de necesidades básicas insatisfechas. Eso sugiere que las condiciones socio-económicas en los centros urbanos del norte y del sur (tanto en el sector de vivienda, como en lo que se refiere a la oferta de infraestructura y servicios públicos básicos) son menos favorables que en las ciudades localizadas en las regiones centrales del país.

3. La Planificación Urbana y Regional

- 2.33 El desarrollo de la planificación urbana y regional en la Argentina ha tenido una evolución irregular. En lo relativo a la planificación regional, se han producido diversos planes, pero estos han resultado en pocas realizaciones. En relación al sistema urbano, más específicamente, la política adoptada ha tratado de desalentar la expansión de las ciudades más grandes (sobretudo Buenos Aires, pero también Gran Córdoba, Gran Rosario y las zonas aledañas) con la

intención de promover la desconcentración geográfica de las inversiones, particularmente en el sector industrial. De acuerdo con las evaluaciones realizadas, no obstante, estos esfuerzos han tenido un impacto relativamente reducido sobre las tendencias históricas de concentración industrial y urbana.

- 2.34 La planificación urbana y metropolitana ha transitado un camino semejante a la regional en cuanto a su efectividad. Hasta la fecha, no se ha formulado ninguna política o plan nacional de desarrollo urbano en la Argentina. Asimismo, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (SVOA), que tiene entre sus funciones la responsabilidad de coordinar el desarrollo urbano en el país, ha limitado sus actividades de planificación esencialmente al sector de vivienda. El esfuerzo más reciente en este sentido, el Plan Nacional de Vivienda 1984/89, por ejemplo, contiene solamente un capítulo -de carácter muy general- sobre aspectos del desarrollo urbano que extrapolan al sector habitacional.
- 2.35 En el nivel de la planificación interurbana, así como en el de la planificación regional, la Argentina no ha asumido un esquema de organización territorial que sirva como marco de referencia para los otros niveles de programación. Al no contar con esta orientación, el énfasis en los planes y estrategias intraurbanas ha recaído en el ordenamiento edilicio y circulatorio de las ciudades o en el simple establecimiento de ejes de desarrollo y expansión del tejido urbano.
- 2.36 En la práctica, consecuentemente, lo que se ha logrado en el campo del ordenamiento urbano y metropolitano en la Argentina se debe básicamente a los esfuerzos autónomos de las administraciones locales, aunque los planes resultantes se han preocupado principalmente con los aspectos físicos del desarrollo urbano, dando mucha menor atención a los aspectos económicos, sociales, e institucionales. A pesar de eso, muchas ciudades se han beneficiado de estudios y/o planes de desarrollo desde el siglo pasado cuando empezó el proceso de planificación local en la Capital Federal. Más recientemente, a partir de los años cuarenta, tanto Buenos Aires, como otras ciudades importantes (incluyendo Córdoba, Rosario y Salta) han preparado planes regulares y diversas provincias, particularmente la de Buenos Aires, han apoyado la elaboración de planes de ordenamiento urbano por firmas consultoras contratadas por los gobiernos municipales.

D. Intervención del Sector Público en el Desarrollo Urbano

1. La Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (SVOA)

- 2.37 La Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (SVOA) es la entidad del Gobierno Nacional que está más directamente involucrada en el proceso de desarrollo urbano en el interior del país, particularmente en el sector de vivienda. La SVOA es una de las cinco Secretarías que componen el Ministerio de Salud y Acción Social. Las funciones genéricas de este Ministerio son de asistir al Presidente en los aspectos relacionados con la salud de la población y el medio

ambiente, la promoción y asistencia social, la protección de la familia, la vivienda y los servicios comunitarios y el deporte.

- 2.38 Las preocupaciones de orden general se vinculan con la necesidad de definir y ejecutar políticas públicas para combatir los problemas sociales generados por el proceso de urbanización que acompañó el crecimiento del sector industrial en el país durante la mayor parte del presente siglo. En este contexto, el aumento de los déficits de vivienda e infraestructura urbana ha sido uno de los problemas que se presentaron con mayor agudeza a partir de 1940.
- 2.39 Como respuesta parcial a esta problemática, se organizó el Ministerio de Bienestar Social con las atribuciones explícitas de definir políticas y ejecutar programas de vivienda económica e infraestructura y equipamientos urbanos. En diciembre 1983, se estableció el actual Ministerio de Salud y Acción Social, mediante la fusión de los Ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente y de Acción Social, que, a su vez, habían sido creados en 1981 con base en la división del antiguo Ministerio de Bienestar Social. Del conjunto de funciones del actual Ministerio, las inherentes a vivienda y desarrollo urbano fueron asignadas a la SVOA que también recibió la responsabilidad por las acciones de Gobierno Nacional en el campo del ordenamiento ambiental.
- 2.40 Dentro de la administración nacional, por lo tanto, la política habitacional y urbana es definida por el Ministerio de Salud y Acción Social, a través de la SVOA, que tiene la responsabilidad específica por la elaboración y análisis de programas de vivienda y su financiamiento y la definición de planes para el desarrollo urbano y ordenamiento ambiental. Estructuralmente, la SVOA se compone de diez Direcciones, de las cuales siete están en el área de vivienda y desarrollo urbano y tres en el de ordenamiento ambiental. De las primeras, las más importantes son las Direcciones de Desarrollo Financiero, de Política Habitacional, de Planeamiento Urbano, de Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Investigación y Desarrollo Socio-económico. Una descripción más detallada de la SVOA y sus dependencias se encuentra en el Capítulo V de este Informe.
- 2.41 A nivel de las provincias, las principales acciones del sector público en el campo de la vivienda y desarrollo urbano son realizadas por los Institutos Provinciales de Vivienda y Urbanismo. Estos organismos, que son entidades autárquicas de los gobiernos provinciales, se encargan de la preparación y ejecución de los proyectos de vivienda de interés social, siendo que la ejecución de la infraestructura y los equipamientos urbanos asociados a los conjuntos habitacionales también puede ser llevado a cabo por otros entes locales o directamente por la SVOA.
- 2.42 Para articular las entidades provinciales, existe una Comisión a nivel nacional, presidida por el Secretario de Vivienda e integrada por representantes de los Institutos de Vivienda de todas las provincias, de la Municipalidad de Buenos Aires y del Territorio de Tierra del Fuego. Las atribuciones básicas de esta Comisión son las

de analizar el Plan Nacional de Vivienda (que es preparado periódicamente por la SVOA) y de impulsar formas permanentes de consulta y coordinación con otras entidades responsables por la planificación y/o ejecución de obras en los sectores de vivienda y desarrollo urbano en las distintas provincias.

2. Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)

- 2.43 El principal instrumento financiero del Gobierno Nacional en el campo de la vivienda y el desarrollo urbano es el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). Frente al creciente problema habitacional y de servicios urbanos en el país, se creó el FONAVI en noviembre 1972 (por medio de la Ley No. 19.929), estableciendo un sistema nacional de recaudación de recursos que surgen de los sueldos y salarios de los empleados de las empresas y otras entidades legalmente constituidas de los sectores público y privado y de las remuneraciones de los trabajadores autónomos en el sector privado. Al crear ese fondo, se asignaron su reglamentación y administración a la SVOA, reuniendo en esta Secretaría las funciones de elaboración de políticas y normas generales y de aprobación y financiamiento de proyectos específicos de vivienda, así como de las inversiones asociadas de infraestructura y equipamientos urbanos, en todo el país.
- 2.44 Más concretamente, la Ley de creación del FONAVI determinó que los fondos recaudados fuesen destinados a financiar total o parcialmente la construcción de proyectos de vivienda, la adquisición de terrenos, las obras de urbanización, infraestructura y equipamientos comunitarios complementarios, el redescuento de créditos hipotecarios y los gastos de las operaciones en que interviene. En cuanto a las viviendas a ser financiadas, de acuerdo a la ley, las mismas deben ser exclusivamente "viviendas económicas de interés social" que se destinan solamente a los sectores de menores ingresos de la población.
- 2.45 En mayo de 1977 (por medio de la Ley 21.581), se reformuló la ley original de FONAVI con el objetivo de racionalizar el sistema de financiamiento de la vivienda económica. Entre los cambios introducidos, los más importantes fueron de elevar la contribución patronal sobre las remuneraciones de los empleados del 2.5% al 5% de los salarios, incrementando sustancialmente los recursos del FONAVI, y de circunscribir a la SVOA al ámbito de la programación general de las actividades y la distribución de los recursos del fondo, quitándole, por lo tanto, la responsabilidad por la ejecución y administración de los proyectos financiados. Más concretamente, la nueva norma estableció que la SVOA decide sobre los programas a financiar, las operatorias respectivas y sus normas particulares, pero encargó a los Institutos Provinciales de Vivienda las atribuciones de planificación y realización de los proyectos habitacionales y de las obras complementarias de infraestructura y equipamiento comunitario.

- 2.46 Aún según la Ley 21.581, la SVOA mantuvo jurisdicción administrativa sobre el FONAVI, así como la facultad de dictar las normas reglamentarias y aclaratorias que considere necesarias para el cumplimiento de los objetivos del fondo, dotando a la Secretaría la autoridad de interpretar y reglamentar la ley, lo que permite su adaptación permanente. En este sentido, la Secretaría de Vivienda ha dictado aproximadamente noventa resoluciones reglamentarias desde julio de 1977, incluyendo la Resolución No. 88 de enero 1986 que destina recursos del FONAVI como contrapartida del eventual préstamo del BID para financiar el presente Programa.
- 2.47 Como se indicó anteriormente, en la actualidad, los recursos del FONAVI provienen principalmente de un aporte de 5% sobre los sueldos y salarios del personal empleado tanto en las empresas del sector privado, como en las entidades del sector público a nivel federal, provincial y municipal. Una parte sustancialmente menor de los recursos del fondo viene de aportes por parte de los trabajadores autónomos y en la forma de recuperaciones de las inversiones efectuadas en los proyectos de vivienda de interés social. A continuación se indica la recaudación del FONAVI durante el período 1979-85, así como la estimación preliminar para 1986. Adicionalmente, se indica la participación porcentual de las recuperaciones de inversiones en relación a la recaudación total del FONAVI para el período 1979-85. Un análisis mas detallado de los recursos del FONAVI, así como las proyecciones financieras de este fondo, se presentan en el Capítulo V de este Informe.

<u>Año</u>	<u>Recaudación del FONAVI</u> <u>(US\$ millones)</u>	<u>Recuperación como %</u> <u>de la Recaudación total</u>
1979	555,0	0,1
1980	391,4	2,5
1981	422,9	4,1
1982	519,5	2,1
1983	526,8	1,1
1984	450,0	0,8
1985	547,5	0,5
1986	685,0 *	nd

* estimación nd no disponible

- 2.48 La reducida contribución de las recuperaciones a los recursos totales del FONAVI se debe fundamentalmente a problemas inducidos por la inflación, que hacen que el valor de tales recuperaciones haya perdido la mayor parte de su poder adquisitivo. El mecanismo de cobro incluye no solamente una corrección inflacionaria retrasada de las cuotas de los beneficiarios, sino que, una vez cobradas, existen significativas demoras en su recepción por parte del FONAVI. Estos problemas se han corregido en parte al disminuir la tasa de inflación a partir de la adopción del Plan Austral en junio de 1985 y en parte

debido a mejoras en la velocidad de la recaudación instituídas por la Resolución Reglamentaria No. 84 del FONAVI de septiembre 1985.

- 2.49 Como se analizará en detalle en Capítulo V de este Informe, los recursos del FONAVI que serán destinados como aporte nacional para el presente Programa representarán solamente en la orden del 5% o menos de las recaudaciones anuales proyectadas de este Fondo para el período 1987-91. Además de eso, las condiciones financieras de los subpréstamos (que serán discutidas en Sección D.3 de Capítulo IV de este Informe) garantizarán la recuperación integral en términos reales de los créditos otorgados con los recursos del Programa, de esta forma diferenciando significativamente el desempeño financiero del mismo de la experiencia histórica del FONAVI en este particular.
- 2.50 En términos de resultados físicos, finalmente, con los recursos del FONAVI la SVOA financió la construcción de aproximadamente 212,000 viviendas (y la infraestructura y equipamientos comunitarios correspondientes) entre 1977 y 1985. En relación a toda la vivienda construída por el sector público argentino durante el período 1981-83, FONAVI financió más de 100,000 unidades, representando casi 90% del total, comparado con poco más de 11,000 viviendas financiadas por el Banco Hipotecario Nacional y otras entidades. Durante este trienio, las viviendas construídas por el sector público representarán aproximadamente 31% de todas las unidades habitacionales terminadas en el país.
- 2.51 En general, la participación del sector público en la construcción de la vivienda en la Argentina ha aumentado en relación a la del sector privado, mientras que la participación del FONAVI ha aumentado significativamente en relación a la de otras entidades del sector público. De un modo general, no obstante, la producción anual de viviendas en el país ha disminuído sustancialmente después de 1975 en relación a las cifras registradas en la primera mitad de los años 1970. Más precisamente, entre 1971 y 1975, se produjo un promedio anual de aproximadamente 180,000 viviendas, de las cuales el 84% por el sector privado, mientras que entre 1976 y 1980, el promedio anual cayó a aproximadamente 136,000 (68% del total por el sector privado) y, entre 1981 y 1983, el promedio anual fué 122,000 unidades (69% por el sector privado). De las viviendas construídas por el sector público, a su vez, entre 1971 y 1975, FONAVI fué responsable por menos de 10% del total (la mayor parte habiendo sido financiado por el Banco Hipotecario), comparado con 29% entre 1976 y 1980 y casi 90% del total entre 1981-83, lo que indica la importancia creciente del fondo y de la SVOA en este sector, sobretodo después de la reformulación de la ley de FONAVI en 1977.

3. Servicios Públicos en el Desarrollo Urbano

- 2.52 Los servicios públicos básicos de apoyo al desarrollo urbano incluyen los sectores de infraestructura física y social que serán elegibles por financiamiento con los recursos del presente Programa. Mas concretamente, estos sectores son agua potable, desagues cloacales, equipamientos comunitarios (educación, salud y asistencia a la familia), defensa contra erosión e inundaciones, mejoramiento vial y desagues pluviales, electricidad y alumbrado público y gas. Individualmente y conjuntamente, estos sectores atienden necesidades básicas de la población urbana y son esenciales tanto para la habilitación de nuevas áreas de expansión dentro de las ciudades, como para el mejoramiento o rehabilitación de barrios existentes en donde la demanda para servicios urbanos supera su oferta.
- 2.53 En las secciones siguientes se resumirá, en términos generales, el papel del sector público argentino en la construcción y operación de obras de infraestructura y servicios urbanos, indicando la división de trabajo existente entre los gobiernos nacional, provinciales y municipales, así como el grado actual de cobertura de los servicios urbanos en el país. En el próximo capítulo se definirá, en mayor detalle, los sectores elegibles para financiamiento con los recursos del Programa propuesto. Para ubicar mejor estos sectores en lo que se refiere a su estructura institucional y la situación actual del suministro de los servicios respectivos, se han preparado perfiles de cada uno de ellos que se presentan en el Anexo II-4 de este Informe.

(a) Gobierno Nacional

- 2.54 La intervención directa del Gobierno Nacional en la producción de infraestructura y equipamientos urbanos es relativamente limitada comparada con la participación de los gobiernos provinciales y municipales. El papel del Gobierno Central es esencialmente normativo y financiero, con la ejecución física de obras por entidades del Gobierno Nacional restringida basicamente al territorio de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires.
- 2.55 Más concretamente, en los sectores de agua potable, desagues cloacales y drenajes pluviales, la participación del Gobierno Nacional se concentra en la elaboración de políticas y normas generales sobre el manejo del agua. En este contexto, intervienen distintas Secretarías del Ministerio de Salud y Acción Social, así como la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El Gobierno Federal también financia obras de infraestructura sanitaria en todo el país (incluyendo la infraestructura asociada con los conjuntos habitacionales financiadas con recursos del FONAVI). Por último, en los sectores sanitarios el Estado Nacional interviene directamente en la ejecución de obras y prestación de servicios en la región metropolitana de Buenos Aires, a traves de la empresa Obras Sanitarias de la Nación.
- 2.56 En el sector de energía eléctrica, a su vez, el Gobierno Central elabora la política nacional dentro de la Secretaría de Energía del

Ministerio de Obras y Servicios Públicos, planeando también el abastecimiento energético global del país. Interviene igualmente en el financiamiento de obras eléctricas a nivel nacional, así como en la ejecución de obras específicas en la región metropolitana de la Capital Federal, por medio de la empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA). Las políticas energéticas del país también incluyen el sector de gas natural, pero, en este caso, el Gobierno Nacional actúa a través de la Empresa de Gas del Estado.

(b) Nivel Provincial

- 2.57 Los organismos provinciales tienen un papel muy importante en la producción y mantenimiento de infraestructura y equipamientos urbanos. Por un lado, estas entidades establecen las políticas que se aplican dentro de los límites territoriales de cada provincia y dentro del contexto normativo establecido por el organismo correspondiente a nivel nacional (Obras Sanitarias de la Nación, etc.). Adicionalmente, los bancos oficiales de las provincias, dependiendo de sus disponibilidades, pueden intervenir en el financiamiento de estas obras, aunque estas inversiones normalmente requieren el apoyo financiero del Gobierno Nacional y aún de fuentes internacionales. La ejecución física de las obras, por su parte, se realiza por medio de empresas u organismos autárquicos a nivel de cada provincia, particularmente en los sectores de agua potable, desagües cloacales y energía eléctrica.
- 2.58 Es importante señalar que el papel predominante de las provincias en los sectores sanitarios y de electrificación es relativamente reciente. A partir de 1976, sin embargo, el Estado Nacional progresivamente transfirió sus atribuciones a las provincias y municipios, independientemente de la capacidad real de las distintas jurisdicciones de asumir estas funciones. En muchos casos, estas transferencias involucraron instalaciones físicas a punto de ser obsoletas, induciendo los gobiernos provinciales a optar por la privatización de algunos de los servicios.
- 2.59 Como resultado de la reciente descentralización de servicios públicos, cada provincia ha organizado sus actividades en los sectores respectivos de acuerdo con sus experiencias anteriores en la administración de los mismos y su situación económica. En muchos casos, las provincias han transferido las instalaciones existentes a los municipios o a cooperativas de servicios, mientras que en otros se han reforzado organismos sectoriales existentes de los propios gobiernos provinciales. Por este motivo, existen actualmente distintas modalidades institucionales (organismos centralizados y descentralizados y empresas públicas) entre las entidades provinciales que prestan los servicios de agua potable, desagües cloacales y energía.

(c) Nivel Municipal

- 2.60 Finalmente, en lo que se refiere a la infraestructura urbana, los gobiernos municipales tienen a su cargo la construcción y

mantenimiento de vías urbanas, en coordinación con otras jurisdicciones. Frecuentemente también, cabe a los municipios la responsabilidad por la realización de proyectos de agua potable, desagües cloacales y drenajes pluviales, siendo que los organismos municipales normalmente se hacen cargo del último sector en forma exclusiva, pero dividen con las provincias la ejecución de obras en los dos primeros. Los servicios de salud y educación, por otro lado, muchas veces están a cargo de los municipios por delegación de los gobiernos provinciales, pero la actuación de los gobiernos locales en la expansión de las facilidades en estos sectores ha sido limitada en años recientes por su escasa capacidad financiera.

(d) Cobertura Actual de los Servicios Urbanos

- 2.61 No obstante las informaciones presentadas en el Anexo II-4, se resumirá brevemente a continuación la situación actual de la cobertura de algunos servicios urbanos básicos. De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980 y encuestas llevadas a cabo en 1984 por la Unidad Ejecutora de Saneamiento Hídrico (UNESH), el 68% de la población urbana argentina, comparado con el 13% de la población rural, disponen del servicio de agua potable, lo que representa una cobertura del 58% a nivel nacional. Entre las áreas urbanas, el mayor déficit se observa en el cinturón que bordea a la ciudad de Buenos Aires en donde se tiene una cobertura del 60%, en tanto que las ciudades entre 100.000 y 500.000 habitantes presentan una cobertura de 77% y las de 500.000 a un millón tienen un 79% de cobertura.
- 2.62 En lo que se refiere a los desagües cloacales, según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud, se considera que el 40% de la población urbana argentina tiene sus viviendas conectadas a la red de desagües públicos, en tanto que el 35% dispone de sistemas de saneamiento en el hogar (letrinas, fosas sépticas, etc.) y el 25% restante no tiene servicio. Según estudios realizados por la UNESH y el Consejo Federal de Saneamiento (COFES) sobre la población urbana de 196 localidades de más de 10.000 habitantes, aquellas que corresponden al rango de 10.000 a 500.000 presentan una cobertura del 37% de viviendas conectadas a las redes públicas, la que es menor que la media nacional urbana, mientras que las ciudades con población superior a 500.000 tienen una cobertura del 42%.
- 2.63 Con base en encuestas realizadas en 24 centros urbanos de diversos tamaños entre 1978 y 1981, el Ministerio de Acción Social determinó que por lo menos 38% de la población urbana carecían de vías pavimentadas de acceso a sus hogares. Entre los sectores energéticos, a su vez, se ha estimado que el servicio eléctrico alcanza alrededor de 95% de las viviendas urbanas, comparado con solamente 44% de las rurales, aunque la cobertura -tanto urbana, como rural- varía entre las distintas regiones del país, llegando a prácticamente el 100% en la Provincia de Buenos Aires comparado con 70 a 75% en la región Noreste (Provincias del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones).

- 2.64 En los sectores de equipamiento comunitario (educación, salud, etc.) los problemas son tanto cualitativos, como físicos. En el sector de educación, por ejemplo, aunque la enseñanza primaria y secundaria sea generalmente satisfactoria en términos del grado de cobertura de la población, las condiciones de construcción en que funcionan muchos de los establecimientos educacionales son inadecuadas y requieren la sustitución de facilidades existentes o reparaciones extensivas. Adicionalmente, debido al escaso incremento en el número de escuelas en años recientes, en muchas zonas del país el promedio de alumnos por curso y por aula supera lo aconsejado por las normas pedagógicas vigentes. Esta situación es relativamente más grave en las áreas de expansión de los centros urbanos, donde la demanda de servicios ha crecido más rápidamente que la oferta en la última década. En general, esta misma situación de carencia relativa de servicios en los barrios periféricos de las ciudades argentinas también caracteriza los sectores de salud y asistencia a la familia.

E. Situación de las Tarifas de Servicios Públicos

1. Política General

- 2.65 La política del actual gobierno en lo referente a las tarifas que deben cobrarse por los servicios públicos a nivel nacional es la de que permita lograr la generación de recursos que cubran los costos de prestación del servicio. En este sentido, y dependiendo del grado de defase entre ingresos y egresos, se han ido adaptando planes de aumento de tarifas a nivel de cada empresa y cada sector, que en algunos casos tienden a obtener un balance entre los ingresos y egresos y en otros casos procuran obtener además recursos para suplementar el plan de inversiones de las instituciones. Sin embargo, es de destacar, que el gobierno federal sólo tiene control sobre las tarifas en las instituciones federales, en tanto que en las provinciales y municipales, el control está en los gobiernos provinciales; de ahí que en la discusión que sigue se deben considerar estas situaciones de tarifas por separado.

2. Evolución Reciente de las Tarifas a Nivel Nacional

- 2.66 Durante el año 1985 las tarifas de servicios públicos aumentaron, en términos reales, en un 16.5% en el agregado, aunque se presentaron grandes diferencias entre los diferentes sectores. Por ejemplo, los combustibles aumentaron en un 20.6%, la energía (SEGBA y Agua y Energía Eléctrica) en un 22.9%, transporte se mantuvo relativamente constante, con una disminución del 0.8%, comunicaciones (Empresa Nacional de Teléfonos - ENTEL y Empresa Nacional de Correos y Telégrafos - ENCOTEL), aumentaron en un 10.6%, en tanto que el servicio de agua potable y alcantarillado (Obras Sanitarias de la Nación - OSN) fué el de peor actuación, con una disminución del 11.7%. Durante el año 1986 se han producido aumentos relativamente constantes que han tendido a mantener los valores reales de las tarifas, con excepción del sector de agua y alcantarillado (OSN) donde los aumentos, en marzo de 1986 fueron del orden del 100% en términos reales, a través de un aumento en las tarifas y de una

rezonificación/reclasificación de clientes; estos aumentos de OSN son los últimos que se efectuarán dentro del año 1986, pero aún así, se espera que colocarán a la empresa en una situación superavitaria durante todo el año 1986.

- 2.67 Actualmente, a mediados de 1986, las tarifas que se cobran por servicios públicos en Argentina son las más altas, en términos reales, de los últimos cinco años.

3. Situación de Tarifas a Nivel Provincial

- 2.68 A nivel provincial no se dispone de información confiable referente a la evolución de las tarifas de servicios públicos de agua y alcantarillado y de distribución de energía eléctrica, ya que son los servicios que han sido descentralizados a nivel provincial y, en algunos casos, a empresas municipales o cooperativas de servicios; la dispersión de entidades que prestan estos servicios es ahora muy extensa.
- 2.69 El proceso de transferencia de los servicios públicos a las provincias se realizó a finales de la década de los años setenta en una forma desordenada, sin responder a una planificación previa. Como consecuencia, las provincias no siguieron un patrón de referencia al proceder a la incorporación de los organismos heredados. Por este motivo, existen actualmente distintas modalidades institucionales (organismos centralizados y descentralizados y empresas públicas) entre las entidades provinciales que prestan los servicios de agua potable, desagües cloacales y energía.
- 2.70 Además de eso, las estructuras tarifarias que existían en la ocasión de la descentralización de estos servicios, y que fueron automáticamente transferidas a la provincia, eran deficitarias. Por esta razón, los gobiernos provinciales, en muchos casos, tuvieron que subvencionar los servicios con sus rentas generales. Durante el último quinquenio, no obstante, se ha ido corrigiendo los sistemas tarifarios existentes con el fin de cubrir por lo menos los gastos de explotación y mantenimiento. Estas correcciones han demorado como consecuencia de las dificultades económicas experimentadas por el país a partir de 1980, así como de la necesidad de instrumentar rígidas políticas anti-inflacionarias.
- 2.71 No obstante estas observaciones, como se destaca más adelante, en la muestra de proyectos analizados por la Misión de Análisis se pudo constatar que de las nueve instituciones que presentaron solicitudes de crédito que cobran o deberían cobrar tarifas, cinco cubren sus gastos de operación y mantenimiento, dos están muy cerca de cubrirlos, una cubre menos del 50% y otra no cobra tarifas por ser financiadas a través de un mecanismo de regalías; de estas nueve instituciones, se anticipa que ocho serán elegibles al momento de otorgarse los créditos correspondientes.
- 2.72 Adicionalmente, se efectuó un análisis de la situación de otras instituciones a nivel provincial, no incluidos en la muestra ya

mencionada, a efectos de complementar esta información. Se obtuvo información confiable de las Provincias de Mendoza, Tucumán y Chubut para los servicios de agua y alcantarillado (3 instituciones) y electricidad (3 instituciones); todas las instituciones de servicios de electricidad cubren sus gastos de operación y mantenimiento, con márgenes entre un 10% y un 20% adicional, y de las empresas de servicios de agua y alcantarillado, una sola cubría tales costos con un margen adicional del 53% y las otras dos cubrían solamente entre un 45% y un 70% de tales costos. Es de destacar, no obstante, que en todos los casos analizados la tendencia en los últimos tres años es clara hacia un mejoramiento de la situación de cobertura de gastos.

- 2.73 De acuerdo al análisis precedente se puede concluir que si bien la situación de tarifas a nivel provincial no es totalmente satisfactoria, los resultados permiten inferir que tal situación no tendrá un impacto negativo sobre la demanda de recursos del programa y que la cobertura, luego de la crítica situación existente al momento de la descentralización, ha tenido una mejora continua, que es consistente con los resultados deseados en el Programa.

F. Experiencia Anterior del Banco en el Sector Urbano Argentino

- 2.74 Hasta la fecha, la actuación específica del Banco en el sector urbano en la Argentina se ha limitado a las siguientes operaciones en el campo de la vivienda e infraestructura:

- (a) 47/SF-AR por US\$ 30 millones al Banco Hipotecario Nacional, aprobado el 29 de noviembre de 1962, para financiar la construcción de aproximadamente 15,250 viviendas para familias de bajos ingresos en diversas regiones del país; y
- (b) 117/SF-AR por US\$ 12.2 millones y 136/OC-AR por US\$ 7,0 millones a la Municipalidad de Buenos Aires, aprobados el 3 de noviembre de 1966, para financiar la erradicación de "villas de emergencia", la construcción de obras de infraestructura y saneamiento, la urbanización de terrenos y la construcción de aproximadamente 6,800 viviendas para familias de bajos ingresos en los barrios de Parque Almirante Brown y Ciudad General Belgrano.

- 2.75 Adicionalmente, dentro de los sectores específicos que conforman el presente Programa, el Banco ha participado activamente en proyectos de agua potable y desagües cloacales, mediante nueve operaciones por un monto del equivalente de US\$275,0 millones a través de los préstamos 43/SF, 86/TF, 114/TF, 70/SF, 302/SF, 14/IC, 526/SF, 83/IC y 661/SF; los primeros cinco préstamos están totalmente desembolsados y los proyectos han sido terminados. En lo referente a los últimos cuatro préstamos que financian dos proyectos, la situación es como sigue:

- (a) 83/IC-AR y 661/SF-AR por US\$35,7 millones y US\$ 17,5 millones respectivamente para un programa de agua potable en 160 localidades con población entre 100 y 10.000 habitantes. Al

31 de diciembre de 1985, el avance físico ponderado era del 45%, habiéndose desembolsado el 7% y el 32% de cada préstamo.

- (b) 14/IC-AR y 526/SF-AR por US\$ 31 millones y US\$ 52 millones respectivamente para un programa de agua potable rural y urbana a ser ejecutado por el Sistema Nacional de Agua Potable y por Obras Sanitarias de la Nación. El programa tuvo una ejecución bastante lenta, de aproximadamente ocho años, por problemas físicos, financieros e institucionales. Al expirar el plazo para el último desembolso, el avance de los subprogramas era como sigue:

- subprograma rural: se completó la totalidad de las obras a fines de 1984 en 270 localidades con población entre 100 y 10.000 habitantes, cumpliéndose el 100% de las metas propuestas; y
- subprograma urbano en el distrito de la Matanza en la Provincia de Buenos Aires: a excepción del rubro de medidores, se cumplieron la totalidad de las metas del programa original, que representaron el 72,5% de los recursos del mismo.

2.76 El cumplimiento de las cláusulas de tarifas en los componentes rurales de estos préstamos ha sido satisfactorio ya que los acueductos han sido administrados por cooperativas que tienen instrumentos de presión para lograr tales cumplimientos y el cobro del servicio. En el caso urbano del préstamo 14/IC-AR, la situación ha sido continuamente deficitaria; no obstante, como se mencionó anteriormente, a mediados de 1986, Obras Sanitarias de la Nación efectuó aumentos de tarifas que significaron incrementos de ingresos del orden del 100%, con lo cual se presume que estarían en cumplimiento de tales disposiciones contractuales, aun cuando no existe todavía información financiera detallada que permita un análisis más a fondo.

2.77 Además de los proyectos señalados, el Banco está actualmente considerando un programa de agua potable para dos suburbios de Buenos Aires, con un costo estimado de US\$200 millones, a ser ejecutado por Obras Sanitarias de la Nación.

G. Acciones de Otras Instituciones

2.78 Recientemente, el Banco Mundial aprobó una operación (18 de noviembre de 1985) por US\$60 millones para la rehabilitación de sistemas de agua potable y alcantarillado, la extensión del servicio a nuevas áreas y el fortalecimiento de la planificación y administración de los sectores sanitarios. El programa incluye:

- (a) la preparación de un plan nacional de agua potable y saneamiento, incluyendo el desarrollo de un plan de inversiones, de criterios financieros y técnicos de análisis y diseño de sistemas de servicios, de niveles y estructuras de tarifas, y el análisis de

la estructura institucional y financiera para un adecuado desarrollo del sector;

- (b) mejoras operativas de los sistemas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, incluyendo medición, rehabilitación de sistemas de distribución y mejoras en el manejo del sector;
- (c) rehabilitación y extensión del sistema de agua potable de Córdoba, incluyendo una nueva planta de tratamiento, rehabilitación de una planta existente, terminación de un canal, instalación de estaciones de bombeo y construcción de tuberías principales y de distribución; y
- (d) programa de fortalecimiento institucional de Obras Sanitarias de la Nación, la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Santa Fé y de la Empresa Provincial de Obras Sanitarias de Córdoba (mejoramiento de los sistemas contables, de administración financiera y de compras, así como de los sistemas de planificación de inversiones, operaciones y cobros).

H. Conclusión

- 2.79 De la discusión en las secciones anteriores se puede concluir que existe la necesidad de apoyar el proceso de desarrollo urbano, así como la reciente descentralización de los servicios públicos locales en la Argentina, a través del establecimiento, a nivel del Gobierno Nacional, de un mecanismo de financiamiento y asistencia técnica para la identificación, preparación y ejecución de proyectos de infraestructura y equipamientos. También existe la necesidad de mejorar la operación y administración de los servicios en los centros urbanos, sobre todo en las ciudades intermedias y pequeñas en el interior del país. Se puede concluir también que las inversiones que se requieran en infraestructura y servicios urbanos deberán destinarse principalmente a las áreas de expansión de las ciudades intermedias y pequeñas donde generalmente se concentran las poblaciones de menores ingresos y donde las carencias de infraestructura física y social son mayores.
- 2.80 Adicionalmente, se puede concluir que el fortalecimiento institucional y financiero de las entidades responsables por la planificación, ejecución y operación de los servicios urbanos a nivel provincial y municipal deberá ser un elemento central en cualquier estrategia o esfuerzo de promoción del desarrollo urbano en el interior del país. En términos generales, estas son las preocupaciones básicas del Programa Global de Desarrollo Urbano propuesto por el gobierno argentino y cuyas características y factibilidad se analizarán en los capítulos a continuación.

CAPITULO III. EL PROGRAMA, SU COSTO Y FINANCIAMIENTO

A. Objetivos

- 3.01 El objetivo general del Programa será de mejorar las condiciones de vida de la población urbana argentina, a través de la ejecución de proyectos específicos de infraestructura y equipamientos urbanos, beneficiando preferencialmente los sectores de menores recursos y las ciudades intermedias (entre 150,000 y 650,000 habitantes) y pequeñas (con menos de 150,000 habitantes) en el interior del país. Otro objetivo importante será el establecimiento y operación de un mecanismo de crédito y asistencia técnica a nivel nacional para la ampliación y/o mejoramiento de infraestructura y servicios urbanos a nivel local, principalmente, aunque no exclusivamente, en los barrios donde se concentran las poblaciones de bajos ingresos, beneficiarias o potencialmente elegibles a beneficiarse con los programas habitacionales del FONAVI.
- 3.02 Con este Programa se incrementarán los recursos disponibles en la Argentina para financiar proyectos de desarrollo urbano permitiendo a la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental complementar sus inversiones en el sector de vivienda que actualmente ejecuta a través del FONAVI. Adicionalmente, el Programa buscará fortalecer las instituciones nacionales -particularmente la propia SVOA- provinciales y municipales encargadas de la identificación, formulación, ejecución y operación de proyectos urbanos y canalizará parte del ahorro interno del país hacia la esfera del desarrollo urbano mediante los aportes de los gobiernos locales y la participación de los intermediarios financieros provinciales y de los propios beneficiarios.
- 3.03 En lo que se refiere al fortalecimiento institucional, más concretamente, los objetivos específicos del Programa serán de:
- (a) reforzar la capacidad nacional, provincial y local de identificar, preparar, ejecutar y administrar proyectos de desarrollo urbano;
 - (b) fortalecer las finanzas de las entidades involucradas, promoviendo la utilización de instrumentos de recuperación de costos, tales como la contribución de mejoras y cobros directos a los usuarios de los servicios financiados; y
 - (c) aumentar la eficiencia operativa de las entidades responsables por el suministro de servicios públicos en los centros urbanos del interior del país.

B. Descripción

- 3.04 El Programa consiste en la ejecución de un conjunto de obras de desarrollo urbano a nivel descentralizado de Provincia y Municipio utilizando un mecanismo de transferencia de recursos financieros que permite su recuperación dándole efecto multiplicador y continuidad a

tales recursos. El Programa tendrá dos componentes, una línea de crédito para el financiamiento de obras y un subprograma de asistencia técnica. El primer componente involucrará el otorgamiento de subpréstamos, totalmente recuperables, para proyectos de desarrollo urbano. Estos proyectos serán presentados por las provincias y municipios y analizados y aprobados por la SVOA, con base en la aplicación de los criterios y parámetros establecidos en el Reglamento de Crédito del Programa (Ver Sección E de este Capítulo y el Anexo IV-5) y siguiendo los procedimientos resumidos en el Capítulo IV de este Informe (Ver Sección C del Capítulo IV). Junto con el mecanismo de crédito, se establecerá un componente de asistencia técnica cuyos objetivos específicos serán de apoyar a los eventuales subprestatarios en la preparación de sus solicitudes de crédito, de ayudar la SVOA, los gobiernos provinciales y a otras instituciones del país en la elaboración de estudios y recomendaciones sobre políticas y estrategias de desarrollo urbano y de apoyar los gobiernos provinciales y municipales en el fortalecimiento administrativo y financiero de las entidades responsables por el suministro de los servicios urbanos (Ver Sección G de este Capítulo).

- 3.05 Las actividades de asistencia técnica a las provincias y municipios serán efectuadas por consultores temporales, supervisados y controlados por una Dirección específica dentro de la Oficina que tendrá a su cargo la ejecución del Programa. Parte de las operaciones de asistencia técnica tendrá el carácter de recuperación contingente. El componente será administrado con base en los criterios y condiciones establecidos en el Reglamento de Asistencia Técnica incluido como un anexo a este Informe (Ver Anexo IV-6). Asimismo, paralelamente a las actividades de asistencia técnica a las provincias y municipios, habrá un componente de fortalecimiento institucional de la propia SVOA mediante el financiamiento de un conjunto de asesores especializados en la oficina que tendrá la responsabilidad por la administración del Programa.
- 3.06 Subprestatarios Elegibles: Serán sujetos del crédito del Programa los gobiernos de las provincias y del Territorio Nacional así como los gobiernos municipales, los organismos oficiales competentes de sus respectivos ámbitos de jurisdicción, las entidades públicas nacionales, provinciales, municipales y cooperativas especializadas en urbanización, obras de infraestructura, servicios de equipamiento comunitario y obras complementarias y las entidades con programas de apoyo a los precitados organismos. Además de los organismos mencionados, serán elegibles como beneficiarios de asistencia técnica del Programa entidades nacionales, provinciales y municipales responsables por la definición de políticas y estrategias de desarrollo urbano, así como por la realización de actividades de planificación urbana a nivel local.
- 3.07 Entidades Financieras Participantes: Podrán participar del Programa los bancos provinciales como agentes financieros de los subprestatarios y como garantes de los subpréstamos. Los bancos provinciales también podrán aportar parte del financiamiento de los proyectos específicos.

3.08 Sectores Elegibles: Los subpréstamos del Programa se otorgarán para el financiamiento de obras y equipamientos en los siguientes sectores:

- (a) Agua Potable: construcción, ampliación y/o mejoramiento de uno o más de los componentes de estos sistemas, desde las obras de captación hasta la distribución domiciliaria.
- (b) Desagues Cloacales: construcción, ampliación y/o mejoramiento de uno o más componentes de estos sistemas, desde redes de recolección hasta la disposición final del efluente, incluyendo obras para el control de la contaminación de los cuerpos receptores.
- (c) Equipamiento Comunitarios: obras y equipamientos destinados a resolver a la comunidad las necesidades correspondientes a jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, guarderías infantiles, unidades sanitarias y centros comunitarios (siendo que cada uno de estos tipos de equipamiento será considerado como un componente, pudiendo cada proyecto estar integrado por uno o más componentes).
- (d) Mejoramiento Vial y Desagües Pluviales: pavimentación de la red vial urbana, vehicular o peatonal; construcción de viaductos y obras para la distribución de tránsito, incluyendo trabajos complementarios tales como alumbrado, seguridad, redes de servicios públicos, zonas verdes y señalización; reconstrucción de pavimentos de calles donde las obras han cumplido su vida útil o han sido afectadas por desastres naturales; y construcción de obras para la recolección y evacuación de las aguas de lluvia.
- (e) Gas: obras y equipamientos relacionados con plantas de licuefacción, estaciones reductoras de presión 60/50 a 10 kg. por cm² en gasoductos de aproximación, estaciones reductoras de presión de 10 a 5 kg. por cm², depósitos de gas natural comprimido o propano-butano y redes de distribución domiciliaria.
- (f) Electricidad y Alumbrado Público: ejecución de redes de media tensión hasta 33 Kw. y de distribución en 380/220 volts, subestaciones, transformadores y centros de distribución en baja y media tensión para usos urbanos, luminarias, estructuras y tableros y proyectos de generación de abastecimiento urbano aislado.
- (g) Defensa contra Erosión e Inundaciones: construcción de obras de protección necesarias para evitar daños y perjuicios provocados por inundaciones, aluviones, erosión eólica o hidráulica que afectan a zonas urbanas y/o constituyan un peligro para la población.

3.09 Adicionalmente a los sectores señalados, se ha considerado la posibilidad de proponer, durante la ejecución del Programa, la incorporación de otros sectores, previo acuerdo con el Banco. Mas

concretamente, para la inclusión de nuevos sectores, la Oficina Ejecutora deberá presentar los criterios técnicos de elegibilidad, la metodología de evaluación económica y por lo menos un proyecto en cada sector para la aprobación del Banco, a efectos de establecer las modificaciones pertinentes en el Reglamento de Crédito del Programa.

C. Demanda y Dimensionamiento

- 3.10 Con base en dos métodos o enfoques, la SVOA hizo una estimación preliminar de los montos globales y sectoriales de demanda de recursos para inversiones en infraestructura y equipamientos urbanos en la Argentina para el período de ejecución del Programa propuesto. Adicionalmente, la Unidad de Formulación del Programa (Esta Unidad fue establecida en la SVOA a través de un convenio con el Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo específico de elaborar la solicitud de préstamo al BID para el presente Programa), ha recibido un número significativo de solicitudes de financiamiento por parte de las provincias y, con base en una revisión preliminar de las mismas, ha identificado un conjunto de proyectos potencialmente elegibles para recibir subpréstamos del Programa, entre los cuales se incluyen las operaciones que constituyen la muestra indicativa analizada por el Banco y que será descrita resumidamente en la Sección F. de este capítulo y en mayor detalle en el Anexo III-1.
- 3.11 Sintéticamente, los métodos utilizados por la SVOA para estimar la demanda potencial de recursos para infraestructura y equipamientos urbanos fueron los siguientes: (a) una proyección de las necesidades identificadas en los distintos sectores cubiertos por el Programa con base en los diagnósticos sectoriales correspondientes; y (b) un relevamiento de proyectos potencialmente comprendidos en los sectores del Programa en 16 de las 22 provincias del país. El cuadro a continuación resume los resultados agregados de estas estimaciones.

Demanda Global Potencial para Inversiones en Desarrollo Urbano, 1986-90

<u>Método</u>	<u>Demanda Estimada (millones de US\$)</u>	<u>% que Sería Cubierto por el Programa</u>
Proyección de Necesidades	7.954,3	3,8
Relevamiento de Proyectos	1.389,0	21,6

- 3.12 Los datos presentados en el cuadro anterior indican que el presente Programa atendería una parte muy reducida de las necesidades proyectadas en los diversos sectores cubiertos por el mismo, así como un porcentaje relativamente reducido de las inversiones requeridas para los proyectos relevados en las 16 provincias argentinas. Una fuente más concreta para evaluar la demanda efectiva para los recursos del Programa, sin embargo, es un grupo inicial de

aproximadamente 100 solicitudes que fueron enviadas a la SVOA con anterioridad al relevamiento mencionado.

- 3.13 Los proyectos contemplados en estas solicitudes, en su mayoría, reúnen la característica de poseer alta prioridad para los gobiernos provinciales. Estos proyectos además fueron sometidos a un proceso de pre-selección por parte de la Unidad de Formulación del Programa, quedando, como potencialmente elegibles, un conjunto de 37 operaciones que demandan un monto de inversión de aproximadamente US\$173 millones. En el cuadro a continuación se indica la distribución sectorial y estado de avance de la preparación o análisis (por parte de la SVOA) de estos proyectos.

Inventario de Proyectos en Preparación o Análisis
Número (Monto en US\$ millones)

<u>Sector</u>	<u>Analizados</u>	<u>En Análisis</u>	<u>En Reformulación</u>	<u>Identificados</u>	<u>Total</u>
Agua Potable	4 (28,6)	2 (4,9)	2 (10,5)	1 (5,0)	9(49,0)
Desagües Cloacales	3 (17,4)	3(10,0)	2 (12,5)	2 (8,0)	10(47,9)
Equip. Comunitario	2 (9,5)	—	—	2(13,0)	4 (22,5)
Mejoramiento Vial	1 (1,7)	1(3,4)	—	2(12,0)	4(17,1)
Gas	1 (1,5)	—	1 (10,0)	1 (7,0)	3(18,5)
Electricidad	2 (2,7)	—	—	1 (2,5)	3(5,2)
Defensa Inund.	1 (1,6)	—	2 (9,6)	1 (2,0)	4(13,2)
TOTALES	14(63,0)	6(18,3)	7 (42,6)	10(49,5)	37 (173,4)

- 3.14 De acuerdo con estas cifras, el Programa actualmente cuenta con un inventario de 9 proyectos de agua potable, 10 proyectos de desagües cloacales, 4 de equipamientos comunitarios, 4 de defensa contra erosión e inundaciones, 4 de mejoramiento vial, 3 de electricidad y 3 de gas. De estos, 20 proyectos, teniendo un costo total de US\$81,3 millones, ya han sido analizados o actualmente están en análisis por la SVOA y 17, ascendiendo a US\$92,1 millones, están en varias etapas de preparación. Se hace notar que, de resultar financiables tan solo 50% de los proyectos aún por analizarse, el monto total de inversión requerido sería en la orden de US\$120 millones.
- 3.15 Con base en las consideraciones anteriores, en su solicitud de financiamiento al Banco, el Gobierno Argentino estimó un programa de inversiones y asistencia técnica por el equivalente de US\$300 millones para ejecutarse en un período de cinco años. Durante la misión de análisis se revisaron las estimaciones de demanda mencionadas anteriormente, así como el estado de avance de la preparación de los proyectos en el inventario del Programa y la capacidad de ejecución de la SVOA, llegando a la conclusión de que la magnitud solicitada por las autoridades nacionales sería factible.

D. Distribución Sectorial Tentativa de los Recursos del Programa

- 3.16 Basado en el análisis de demanda en los distintos sectores presentado en la sección anterior y tomando en cuenta el período de compromiso de los fondos y las prioridades sociales y territoriales establecidas por los gobiernos provinciales, la SVOA ha estimado que se obtendrá la siguiente distribución sectorial tentativa de los recursos de crédito del Programa:

<u>Sector</u>	<u>%</u>
1. Agua Potable	30
2. Desagües Cloacales	30
3. Equipamiento Comunitario	10
4. Mejoramiento Vial y y Desagües Pluviales	10
5. Gas	10
6. Electricidad y Alumbrado	5
7. Defensa contra Erosión e Inundaciones	5
Totales	100%

E. Criterios de Elegibilidad y Aprobación de los Proyectos

- 3.17 El Banco ha acordado con la SVOA un conjunto de criterios y parámetros a ser utilizado para determinar la elegibilidad de los distintos proyectos presentados para financiamiento por el Programa. Estos criterios y parámetros, que toman en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros y legales, formarán parte del Reglamento de Crédito del Programa que deberá ser puesto en vigencia como condición previa al primer desembolso del préstamo del Banco en divisas. Algunos de estos criterios son generales, en el sentido de que serán aplicados a todos los proyectos presentados, mientras que otros son específicos a cada sector.
- 3.18 Los criterios generales que deberán ser cumplidos por todos los proyectos para ser elegibles a ser financiados con los recursos del Programa son los siguientes:
- (a) que el proyecto corresponda a una prioridad declarada del gobierno provincial respectivo y que la SVOA haya recibido la solicitud correspondiente;
 - (b) que el proyecto sea técnica, financiera y económicamente viable, de acuerdo a los criterios detallados en el Reglamento de Crédito;
 - (c) que exista la capacidad legal del subprestatario de tomar créditos, del ejecutor del proyecto de ejecutar las obras y/o adquirir los equipamientos del proyecto y del operador u operadores de operar y mantener las facilidades y servicios resultantes de estas obras y equipamientos;

- (d) que, en los casos que corresponda, exista la no objeción del organismo responsable por el sector respectivo sobre la ejecución del proyecto; y
 - (e) que se ha demostrado evidencia de la propiedad de los terrenos donde se construirán las obras y, de ser el caso, autorización para las servidumbres.
- 3.19 Adicionalmente, para ser elegibles como sujetos de crédito del Programa y/o como ejecutores y/u operadores de las obras y equipamientos financiados, las entidades de servicios públicos en los sectores de agua potable, desagües cloacales, energía eléctrica y gas deberán cumplir con la siguiente condición antes que la SVOA pueda firmar el contrato de subpréstamo correspondiente: los ingresos por tarifas que se devenguen en el servicio respectivo, a nivel de la entidad, deben ser superiores a los gastos de operación y mantenimiento de tales servicios.
- 3.20 En el proceso de análisis y como precondition para la aprobación de cada proyecto, se aplicarán los siguientes criterios generales:
- (a) que el proyecto sea diseñado de acuerdo con las normas técnicas expedidas por las entidades responsables del sector a nivel nacional y provincial y que los parámetros de diseño sean compatibles con las características socio-económicas de la población y los objetivos que se pretenden alcanzar;
 - (b) que la solución propuesta resulte de la comparación de alternativas técnicamente viables, de las cuales se ha seleccionado la de mayor factibilidad económica, con base en la aplicación de las metodologías acordadas para los proyectos en cada sector indicadas en el Apéndice B del Reglamento de Crédito del Programa;
 - (c) que las tecnologías utilizadas hayan sido experimentadas en el país y guarden relación con la experiencia y capacitación del organismo que estará al cargo de la explotación del sistema; y
 - (d) que el organismo ejecutor tenga capacidad y experiencia en el tipo de proyecto presentado y disponga de los medios para efectuar la supervisión de las obras.
- 3.21 Los criterios específicos de elegibilidad y aprobación para los proyectos en cada sector son los siguientes:
- (a) Agua Potable: que el proyecto sirva a centros urbanos de más de 10.000 habitantes; demostración de la disponibilidad de caudal suficiente para la vida útil del proyecto, así como calidad del agua conforme a las normas nacionales; en ampliaciones y/o reemplazos de sistemas, justificación de los mismos y relación con el estado de los demás componentes.

- (b) Desagües Cloacales: que se disponga del servicio público de agua potable; que el sistema de disposición final incorpore el tratamiento adecuado para mantener las características mínimas de calidad bacteriológica del cuerpo receptor; tales características estarán en función del uso de dicho cuerpo y de la legislación nacional sobre la materia; en ampliaciones y/o reemplazos de sistemas, justificación de los mismos y relación con el estado de los demás componentes.
- (c) Equipamiento Comunitario: demostración de la existencia de una demanda insatisfecha en las áreas de influencia de los respectivos componentes del proyecto; demostración que la capacidad ofrecida por el proyecto pueda colmarse en los primeros cinco años desde la fecha de su habilitación; demostración de la disposición de la entidad sectorial correspondiente de operar y mantener las obras del proyecto, así como de la disponibilidad de los recursos financieros y humanos requeridos para este fin.
- (d) Mejoramiento Vial y Desagües Pluviales: que se disponga de servicios de agua potable y cloacas; que el proyecto de acceso vehicular a zonas sin transporte público, a zonas donde están localizadas instituciones públicas o privadas o de servicios comunitarios, que acorte longitud y tiempos de viaje en la malla existente y/o que redistribuya flujos vehiculares con el propósito de descongestionar vías saturadas y mejorar la capacidad vial; que se incluyan las obras complementarias necesarias para una buena operación de la vía; en el caso en que se planee recuperar los costos de la obra por el mecanismo de valorización, demostración de la viabilidad del sistema; en el caso de mejoramiento vial, que se hayan realizado los estudios de demanda y oferta requeridos para definir los parámetros de diseño del proyecto; en los casos de desagües pluviales, que los parámetros sean función de la cuenca de aporte y del régimen de lluvia seleccionándose una curva de intensidad/frecuencia para una frecuencia no mayor de 5 años y que la disposición final no afecte negativamente el medio ambiente.
- (e) Gas: que la Empresa de Gas del Estado certifique: (i) que la obra es aceptada para conexión con la red troncal, (ii) que los diseños cumplen con las normas de diseño y seguridad, (iii) que la misma ejecutará la asesoría o supervisión de la construcción, pruebas y puesta en operación, y (iv) que la misma operará y mantendrá el proyecto, una vez construido, o que el organismo que lo haga tenga la capacidad y jurisdicción para hacerlo; que la demanda de consumo permita el uso de volúmenes económicos en la operación del gasoducto de aproximación; cuando el proyecto contemple ampliaciones o mejoras de redes existentes, justificación de las mismas y relación con los sistemas a los que se integre el proyecto, incluyendo la correspondiente aprobación de la Empresa de Gas del Estado.
- (f) Electricidad y Alumbrado: que se disponga de fuentes aseguradas de alimentación; cuando el proyecto contemple ampliaciones o

mejoras del sistema existente, justificación de las mismas y relación con los sistemas a los que se integre el proyecto.

- (g) Defensa contra Erosión e Inundaciones: descripción en forma precisa de la característica del fenómeno que afecta el área de influencia, relación con el plan de la ciudad o comunidad afectada y cuantificación de los daños que actualmente causa el fenómeno; en el caso en que se planee recuperar los costos de la obra por el mecanismo de valorización, demostración de la viabilidad del sistema.

F. Muestra de Proyectos

- 3.22 Como fué indicado en la Sección C. de este Capítulo, la SVOA ya ha recibido un número elevado de solicitudes de financiamiento de las provincias, de las cuales preliminarmente se han identificado 37 proyectos -involucrando un costo total del equivalente de aproximadamente US\$ 173 millones- como siendo potencialmente elegibles a ser financiados con los recursos del Programa. De estos proyectos, 14 han sido completamente analizados por la SVOA y fueron sometidos al Banco como una muestra indicativa del universo de proyectos a ser financiados por el Programa.
- 3.23 Para establecer el estado de avance de preparación del Programa y garantizar que la SVOA pueda iniciar la ejecución del mismo con una masa crítica de proyectos en los distintos sectores, así como para determinar la capacidad de análisis de la Unidad de Formulación del Programa, el Banco ha examinado la factibilidad de los proyectos listados en el cuadro a continuación. De acuerdo al cuadro, los proyectos de la muestra representan un costo de US\$ 63.0 millones, lo que corresponde aproximadamente al 22% de los recursos del Programa disponibles para el financiamiento de obras y equipamientos. Asimismo, en la oportunidad de analizar esta muestra se han revisado los criterios y metodologías que serán utilizados en el análisis ex-ante de los demás proyectos que formarán el universo a ser financiado con los recursos del Programa.

Muestra Indicativa de Proyectos

<u>Sector/Proyecto (Provincia)</u>	<u>Monto (US\$ millones)</u>
1. Agua Potable - Cipolletti/Fernández Oro (Río Negro)	9.4
2. Agua Potable - Corrientes (Corrientes)	9.7
3. Agua Potable - Tandil (Buenos Aires)	5.7
4. Agua Potable - Neuquén (Neuquén)	3.8
5. Cloacas - Neuquén (Neuquén)	11.4
6. Cloacas - Caucete (San Juan)	4.5
7. Cloacas - Rawson (Chubut)	1.5
8. Equipamiento Comunitario - Río Gallegos/Pico Truncado/ Caleta Olivia (Santa Cruz)	5.6
9. Equipamiento Comunitario - Cipolletti (Río Negro)	3.9
10. Mejoramiento Vial - Salta (Salta)	1.7
11. Gas - James Craik (Córdoba)	1.5
12. Electricidad - Salta (Salta)	0.8
13. Electricidad - Posadas (Misiones)	1.9
14. Defensa contra Inundaciones - Salta (Salta)	1.6
<hr/> TOTALES	<hr/> 63.0

3.24 Con base en un instructivo elaborado por el Banco, la Unidad de Formulación del Programa preparó resúmenes descriptivos y analíticos -detallando los resultados de los estudios técnicos, socioeconómicos, financieros e institucionales realizados- para cada uno de los proyectos de la muestra. Sobre la base de estos resúmenes, así como de la documentación más detallada presentada por las provincias y la aplicación de los criterios de elegibilidad y metodologías de análisis contenidos en el Reglamento de Crédito del Programa, el Banco ha efectuado una evaluación de la viabilidad de estos proyectos. Se presenta una breve descripción y resumen de los resultados del análisis técnico de los proyectos de la muestra en el Anexo III-1. Los resultados del análisis socioeconómico de estos proyectos se resumen en Sección D de Capítulo VI de este Informe y en mayor detalle en el Anexo VI-1.

3.25 En forma resumida, los principales resultados de los análisis efectuados por el Banco en lo referente a los proyectos de la muestra son los que se indican a continuación. Un total de 11 proyectos han cumplido satisfactoriamente todos los criterios de elegibilidad y aprobación establecidos en el Reglamento de Crédito del Programa. No obstante, en el caso de dos proyectos -agua potable y desagües cloacales de Neuquén- actualmente se está implantando un sistema tarifario cuyos ingresos internos cubrirán los gastos de operación y mantenimiento de la entidad provincial responsable por el suministro de estos servicios; por lo tanto, aunque se consideran estos proyectos técnica y económicamente viables, su financiamiento con los recursos del Programa dependerá del cumplimiento previo del criterio

de elegibilidad en el Reglamento de Crédito sobre tarifas de servicios públicos. Adicionalmente, en lo que se refiere al proyecto de equipamiento comunitario de Cipolletti, su aprobación por la SVOA será condicionado a la revisión de los diseños y los costos operativos de una de las escuelas primarias contenidas en el mismo para satisfacer el criterio económico de costo-eficiencia; no se anticipan dificultades con el cumplimiento oportuno de este criterio.

G. Asistencia Técnica

- 3.26 La ejecución del Subprograma de Obras para infraestructura y equipamientos urbanos -descrito en las secciones anteriores- en el plazo previsto de cinco años presupone la existencia de proyectos factibles, así como de instituciones locales con la capacidad de ejecutar y operar los mismos y subprestatarios elegibles como sujetos de crédito del Programa. Por este motivo, se ha identificado la necesidad de complementar el financiamiento de los proyectos específicos de desarrollo urbano con un componente de asistencia técnica a las entidades responsables por la identificación, preparación, ejecución, operación y mantenimiento de estos proyectos, así como de los servicios urbanos en general.
- 3.27 El objetivo general del Subprograma de Asistencia Técnica será de apoyar los esfuerzos a nivel nacional y local de planificar y ejecutar proyectos de desarrollo urbano. La finalidad más inmediata del componente será de aportar los medios necesarios para asegurar la adecuada ejecución del subprograma de crédito para infraestructura y equipamientos urbanos.
- 3.28 El Subprograma de Asistencia Técnica contemplará tres tipos básicos de intervención. En primer lugar, a nivel del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, se apoyará la realización de estudios de política y planificación urbana con el objeto de identificar necesidades y determinar prioridades para inversiones de infraestructura y equipamientos en los distintos sectores, tamaños de ciudad y regiones del país. A nivel de los potenciales solicitantes de financiamiento al Programa, a su vez, se otorgará créditos para la contratación de servicios de apoyo a la formulación de proyectos específicos con base en los criterios establecidos en las guías y Reglamentos del Programa. En tercer lugar, el subprograma atenderá las necesidades de fortalecimiento institucional y financiero de los subprestatarios y ejecutores de los proyectos aprobados, así como de otras entidades responsables por la operación de servicios urbanos, dando particular énfasis a la gestión de estos proyectos y servicios y al mejoramiento de los sistemas tarifarios o mecanismos alternativos de recuperación de costos.
- 3.29 Más concretamente, las actividades de asistencia técnica en el campo del desarrollo urbano que serán promovidas por el Programa incluirán las siguientes:
 - a) estudios de política y estrategias de desarrollo urbano - en apoyo a los objetivos generales del Programa, se prestará

asistencia técnica a los gobiernos provinciales y a las entidades responsables por la formulación de la política de desarrollo urbano-regional a nivel nacional, para la definición de políticas y estrategias de desarrollo urbano, así como para la evaluación de los problemas existentes y tendencias futuras de las ciudades susceptibles a ser beneficiadas por los créditos del Programa; en este contexto, existirán tres áreas específicas de actuación:

- i) formulación de metodologías de evaluación o diagnóstico de la problemática urbana y asesoramiento a estudios que realizan las entidades nacionales y/o provinciales competentes en la materia;
 - ii) definición de estrategias de desarrollo urbano a nivel nacional o provincial y/o realización de evaluaciones o diagnósticos urbanos específicos; y
 - iii) realización de actividades específicas de planificación urbana en ciudades seleccionadas y vinculadas directamente a la identificación de proyectos de inversión.
- b) formulación de proyectos específicos - de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Crédito del Programa, los proyectos a ser financiados deberán cumplir con determinados criterios de orden técnico, socio-económico, financiero, institucional y legal; debido a la necesidad de apoyar los equipos técnicos locales en la preparación de los proyectos, según los requerimientos del Programa, se ofrecerá asistencia técnica en las siguientes áreas, entre otras, relacionadas con la elaboración de las solicitudes de crédito, de acuerdo con las necesidades concretas identificadas por la Oficina Ejecutora del Programa en cada caso, y sin que el otorgamiento de financiamiento para la formulación de estos proyectos obligue a la SVOA a brindar financiamiento para su ejecución.
- i) identificación de las inversiones y actividades complementarias que componen el proyecto;
 - ii) determinación de la solución ó alternativa técnica que responda a los criterios de elegibilidad y de evaluación económica y financiera del Programa, con base en una estimación confiable de costos;
 - iii) realización del análisis de factibilidad y justificación global del proyecto;
 - iv) determinación de los requerimientos institucionales y legales derivados de su ejecución y puesta en marcha; y
 - v) definición de los criterios y mecanismos de repago del subpréstamo y las garantías financieras necesarias para asegurar una adecuada ejecución y operación del proyecto.

c) fortalecimiento institucional y/o financiero de los subprestatarios, ejecutores y/o operadores de proyectos y servicios urbanos - estas actividades incluirán apoyo directo a las entidades mencionadas para la ejecución y operación de los proyectos financiados, así como para la administración de servicios públicos urbanos de un modo general, y consistirán en estudios específicos y/o capacitación de recursos humanos locales en las siguientes áreas, entre otras:

i) programación y suministro de servicios urbanos;

ii) mejoramiento de la organización, los sistemas administrativos y los procedimientos internos de los subprestatarios, las entidades ejecutoras de proyectos y/o los operadores de servicios urbanos; e

iii) instrumentalización o mejoramiento de la administración financiera de los servicios urbanos, incluyendo sistemas tarifarios y otros mecanismos de recuperación de inversiones para infraestructura y equipamiento urbanos.

3.30 Las actividades de fortalecimiento institucional y financiero de las entidades responsables por el suministro de servicios urbanos, mencionadas en párrafo 3.29 (c), se dividirán en dos componentes para fines operativos. En los casos de actividades de asistencia técnica asociadas directamente a la ejecución de los proyectos específicos de infraestructura y equipamientos urbanos aprobados por financiamiento con los recursos del Programa, el financiamiento de las mismas provendrá del subpréstamo correspondiente - y, por lo tanto, de los recursos del Subprograma de Crédito del Programa y no del Subprograma de Asistencia Técnica. No se puede estimar a priori el monto de recursos que se requerirá para esta finalidad. Cuando, por otro lado, se trata de actividades de asistencia técnica para fortalecer o mejorar servicios urbanos no vinculados directamente con los proyectos específicos de inversión aprobados por el Programa, estas actividades serán financiadas con parte de los recursos del Subprograma de Asistencia Técnica que se describen a continuación.

3.31 El Subprograma de Asistencia Técnica tendrá un costo total del equivalente de US\$ 3 millones y será financiado, en partes iguales, por recursos de la SVOA/FONAVI y de una parte de los recursos de un préstamo del Banco en moneda local. En principio, estos recursos serán repartidos entre los tres tipos básicos de asistencia técnica de la siguiente forma: (a) estudios de política y estrategias de desarrollo urbano - US\$ 500,000; (b) formulación de proyectos específicos - US\$ 2,000,000; y, (c) fortalecimiento institucional y financiero de entidades involucradas en el suministro de servicios urbanos - US\$ 500,000. Los recursos para la última categoría no incluyen los costos de las actividades específicas de asistencia técnica de apoyo a la ejecución de proyectos de infraestructura y equipamientos urbanos financiados por el Programa y que serán contemplados como parte de los subpréstamos respectivos. Los financiamientos correspondientes a las categorías (a) y (c) tendrán

el carácter de aportes no reembolsables, en cuanto los de la categoría (b) serán de recuperación contingente a la aprobación del subpréstamo para el proyecto de inversión respectivo.

H. Refuerzo Institucional de la SVOA

- 3.32 Además del apoyo del Banco al Subprograma de Asistencia Técnica indicado en el párrafo anterior, el BID también contribuirá directamente al refuerzo institucional de la propia Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental mediante el financiamiento parcial de las actividades de asesoría requeridas por la nueva oficina que ser creado para administrar el Programa. Como se describirá en mayor detalle en la Sección B.4 del próximo capítulo, el Banco financiará cuatro asesores a la SVOA en áreas identificadas por la Misión de Análisis como siendo críticas para la ejecución del Programa durante los años iniciales de su operación, a través de parte (el equivalente de US\$500,000) del mismo préstamo en moneda local que financiará parcialmente el Subprograma de Asistencia Técnica. De manera semejante, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) financiará un igual número de asesores a través de un aporte no reembolsable del equivalente de US\$500.000. También se incluirá como parte de este componente el monto correspondiente a los gastos previos a la aprobación del préstamo por la Unidad de Formulación de la Solicitud de Préstamo al BID; se estima que este monto asciende al equivalente de US\$500.000, la mayor parte de los cuales ya ha sido desembolsado (julio 1986) y, en consecuencia, será reconocido como parte del aporte local del Programa, como se detalla en la Sección G del próximo capítulo.

I. Costo y Financiamiento

1. Costo Total

- 3.33 El costo total del Programa se estima en el equivalente de US\$300.000.000 de conformidad con el siguiente detalle:

	IC	BID OC	APORTE LOCAL	TOTAL	%
Obras	118,80	-	175,50	294,30	98,1
Asistencia Técnica	-	1,48	1,50	2,98	1,0
Refuerzo Instit.SVOA	-	0,50	1,00	1,50	0,5
FIV	1,20	0,02	-	1,22	0,4
Totales	120,00	2,00	178,00	300,00	100,0
Porcentajes	40,0	0,7	59,3	100,0	

2. Análisis de Costos

- 3.34 Del total de los recursos del Programa, el 93,4% se destinarán al Subprograma de Créditos para la construcción de obras, de acuerdo a los estimados de demanda discutidos a lo largo de este capítulo. El 1,5% de los recursos serán destinados al Subprograma de Asistencia Técnica y al fortalecimiento institucional de la SVOA que fueron descritos en los párrafos precedentes. El remanente de los recursos será destinado a la cobertura de las comisiones de compromiso y los intereses del préstamo del BID en divisas y a la cobertura del Fondo de Inspección y Vigilancia.

3. Financiamiento

(a) Recursos del Banco

- 3.35 Como se observa en el cuadro anterior, se propone que el BID participe en el financiamiento del Programa con dos préstamos, uno en divisas por un total de US\$ 120.000.000 proveniente de los recursos del Capital Interregional del Banco y el otro del Capital Ordinario en moneda local por el equivalente de US\$ 2.000.000. El monto de los préstamos sería consistente con los párametros establecidos en la política del Banco para el financiamiento para países del Grupo A en el sector denominado "Desarrollo Urbano e Infraestructura Social."
- 3.36 Los plazos y las otras condiciones de los préstamos propuestos serían los siguientes:

	<u>IC</u>	<u>OC</u>
(i) Interés	Variable	4%
(ii) Comisión de Crédito	1,25%	-
(iii) FIV	1% del préstamo	1% del préstamo
(iv) Plazos		
- de compromiso de recursos	3 años	3 años
- de desembolsos y de gracia	5 años	5 años
- de amortización	25 años	25 años

(b) Recursos Locales

- 3.37 El aporte local del equivalente de US\$ 178.000.000 provendría de la SVOA, utilizando recursos procedentes del FONAVI, y, eventualmente, de los bancos provinciales (también se estima una contribución del orden de los US\$ 500.000 del PNUD). Con base en el análisis de los proyectos de la muestra, se estima que los fondos del FONAVI representarán entre el 90% y el 95% de los recursos del aporte local, en tanto que el resto provendría de los bancos provinciales. Independientemente de eso, el Secretario de Vivienda, a través de la Resolución Reglamentaria del FONAVI No. 88, con fecha 2 de enero de 1986, ha destinado la totalidad del equivalente de US\$180 millones provenientes de la recaudación del FONAVI como contrapartida de las operaciones crediticias del BID para el financiamiento parcial del Programa. La referida Resolución recibió la no objeción del

Tribunal de Cuentas de la Nación en un dictamen con la fecha de 5 de mayo de 1986, permitiendo la utilización de los recursos FONAVI en los rubros contemplados en el Programa y asegurándose así la disponibilidad de la contrapartida local. La factibilidad financiera de obtener estos recursos se detalla en el Capítulo V, donde se analizan las proyecciones financieras del FONAVI.

- 3.38 Este esquema de financiamiento del Programa asegura que el total de los recursos mencionados en el programa de obras (US\$294,3 millones) serán otorgados en forma de crédito, financiando proyectos con un costo total que se estima en alrededor de US\$350 millones.

CAPITULO IV. EJECUCION DEL PROGRAMA

A. Creación del Programa

- 4.01 El Programa será formalmente instituído por medio de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que aprobará los contratos de préstamo del Banco, creará una Cuenta Especial en el presupuesto nacional para administrar los recursos del Programa y establecerá la oficina responsable por la ejecución del mismo (Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano) en el ámbito institucional de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental. La Cuenta Especial será administrada por la SVOA, teniendo una contabilidad independiente y detallada. Los recursos de la Cuenta Especial provendrán de los fondos de los préstamos del BID, la contrapartida del FONAVI y las recuperaciones de los subpréstamos. (En el régimen presupuestario argentino, una Cuenta Especial existe cuando recursos determinados son afectados para gastos específicos, de esta manera separando los fondos de la cuenta general para fines de control financiero y contable. Dicha afectación podrá ser impuesta por medio de una Ley del Congreso o de un Decreto del Poder Ejecutivo).
- 4.02 El uso de los recursos de la Cuenta Especial será limitado esencialmente al otorgamiento de créditos y el financiamiento de asistencia técnica para la promoción del desarrollo urbano - de acuerdo a los criterios de elegibilidad y condiciones establecidos en los Reglamentos correspondientes - y al pago de los servicios de los préstamos del BID. Los saldos que se acumulen, en exceso de las cantidades necesarias para el pago de los servicios de los préstamos del Banco y la cobertura de los gastos con la operación del Programa, se utilizarán para el otorgamiento de nuevos créditos para proyectos semejantes de desarrollo urbano.

B. Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano

1. Conformación y Ubicación Institucional

- 4.03 El Ejecutor del Programa será la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (SVOA) del Ministerio de Salud y Acción Social. La autoridad principal del Programa será el Secretario de Vivienda, quién aprobará y firmará los contratos de subpréstamo para el financiamiento de infraestructura y equipamientos urbanos, así como los convenios de asistencia técnica. Por medio del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional mencionado en la sección anterior, se establecerá la oficina que administrará el Programa - que será formalmente denominada la Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano (OPDU) - como una dependencia directa del Secretario de Vivienda.
- 4.04 La OPDU será coordinada por un funcionario de la SVOA, designado por el Secretario de Vivienda y teniendo el título de Director del Programa de Promoción del Desarrollo Urbano. La Oficina se integrará con personal permanente apoyado por un grupo de asesores temporales financiados, en partes iguales, por el Banco - a través de parte de los recursos de un préstamo en moneda local - y del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - mediante un aporte no reembolsable. El personal permanente de la Oficina será financiado con recursos autogenerados por el Programa, incluyendo comisiones de compromiso de los subpréstamos y/o de inspección y vigilancia de los proyectos financiados.

- 4.05 La base de la OPDU será la ya existente Unidad de Formulación de la Solicitud del Préstamo al BID, establecida en la SVOA mediante un convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno Argentino y el PNUD firmado en junio de 1985. La prórroga de este convenio, asegurando la continuidad de los esfuerzos de orientación y análisis de los proyectos específicos elegibles por financiamiento con los recursos del Programa, permitirá la constitución formal de la OPDU.

2. Organización Interna y Funciones

- 4.06 La OPDU realizará las tareas propias de orientación, análisis y evaluación (ex-ante y ex-post) de los proyectos específicos presentados por las provincias y municipios, así como las funciones de programación, administración, seguimiento y control de las distintas actividades -inversiones y asistencia técnica- financiadas con los recursos del Programa. Para lograr estas tareas la Oficina será organizada en cuatro áreas o Direcciones, teniendo funciones y actividades específicas, como se indica en el organigrama presentado en el Anexo IV-1 de este Informe. Adicionalmente, para asesorar al Director del Programa, se establecerá un Comité de Crédito, de carácter consultivo, compuesto por un representante del área financiera del Banco Hipotecario Nacional (BHN), un miembro designado por el Secretario de Vivienda de su Oficina de Asesores, el Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SVOA y el Director de la Dirección Nacional de Política Financiera de la misma Secretaría.
- 4.07 Las cuatro Direcciones de la OPDU serán: Análisis y Evaluación de Proyectos; Ejecución del Programa; Programación y Control; y, Asistencia Técnica. La Dirección de Ejecución del Programa se dividirá en dos subáreas, el de Administración y Gestión y el de Contratos y Licitaciones. Lo mismo ocurrirá con la Dirección de Programación y Control que se repartirá en los subáreas de Programación y Control Financiero y de Informática. Los asesores del BID y del PNUD serán asignados a las distintas Direcciones y subáreas de acuerdo con sus especialidades y términos de referencia específicos. A continuación, se resumen las funciones generales del Director del Programa, de cada una de las Direcciones de la OPDU y del Comité de Crédito. Se detallan las atribuciones específicas del Director del Programa y de las cuatro Direcciones de la OPDU en el Anexo IV-2.
- 4.08 El Director del Programa será responsable por la programación general de las actividades de la OPDU y la coordinación de la ejecución del Programa a nivel de la SVOA. En esta capacidad, el Director elevará al Secretario de Vivienda todas las materias que requieren decisión superior y conducirá la administración general de la OPDU. En este

contexto, además del apoyo del Comité de Crédito, cuyas actividades serán descritas en párrafo 4.10 abajo, el Director del Programa podrá solicitar la intervención de otras Direcciones de la SVOA para recabar información y/o dar asesoramiento en las tareas y dictámenes de la OPDU cuando lo considere necesario.

4.09 En la Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos se efectuará la orientación y análisis ex-ante, así como la evaluación ex-post, de los proyectos específicos de infraestructura y equipamientos urbanos que se presenten a través de las solicitudes formales de financiamiento al Programa. En la Dirección de Ejecución del Programa se agruparán las principales tareas relacionadas con la preparación y/o seguimiento de los contratos de crédito y la documentación de las licitaciones del Programa, así como con las tareas de inspección y vigilancia de los proyectos aprobados. En la Dirección de Programación y Control se mantendrá actualizada la programación de requerimientos financieros y se elaborarán periódicamente los estados financieros del Programa con arreglo a su plan de cuentas y las metodologías acordadas con el Banco; asimismo, se operará el sistema de procesamiento de datos e información del Programa. Finalmente, la Dirección de Asistencia Técnica tendrá la responsabilidad de administrar el Subprograma de Asistencia Técnica del Programa.

4.10 Como elemento de apoyo al Director del Programa, el Comité de Crédito, tendrá por finalidad asesorar al mismo en las cuestiones generales o particulares relacionadas con los dictámenes de financiamiento de los proyectos específicos que se le remitan, así como con otros asuntos incluyendo el otorgamiento de prórrogas y la rescisión de contratos. También ayudará el Director del Programa en lo que se refiere a la coordinación de actividades con otras áreas de la SVOA y con el Banco Hipotecario Nacional. Los miembros del Comité podrán ser consultados en forma individual o conjunta en las cuestiones atinentes a sus especialidades. Las recomendaciones del Comité, sin embargo, no tendrán carácter de cumplimiento obligatorio y su puesto en práctica parcial o total será facultad del Director del Programa.

3. Requerimientos de Personal Permanente

4.11 De acuerdo con la organización interna de la OPDU y con base en las funciones y actividades a ser realizadas por las diversas áreas de esta oficina, se ha determinado el número y perfil profesional del personal necesario para su operación. Los requerimientos de personal han sido calculados con base en las estimaciones de cargas de trabajo en cada Dirección y subárea. A continuación, se resumen las necesidades de personal en cada Dirección de la OPDU. Se detalla el personal permanente de la OPDU en el Anexo IV-3.

4.12 A nivel de la dirección ejecutiva de la OPDU, el Director del Programa será apoyado directamente por una secretaría ejecutiva con experiencia en programas teniendo financiamiento internacional y por una secretaria administrativa. El personal profesional requerido en las cuatro Direcciones, a su vez, será lo siguiente:

- (a) Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos: un director (con experiencia en el análisis de proyectos de infraestructura urbana), cuatro ingenieros, tres economistas, un analista financiero, un analista institucional, un arquitecto/planificador urbano y un sociólogo/planificador de servicios sociales;
- (b) Dirección de Ejecución del Programa: un director (con experiencia en la ejecución y administración de programas de desarrollo urbano), dos ingenieros, un abogado y dos especialistas en administración;
- (c) Dirección de Programación y Control: un director (con experiencia en la programación y control de programas de desarrollo urbano), dos analistas financieros, un economista, tres profesionales en computación y dos ayudantes técnicos para procesamiento de datos; y
- (d) Dirección de Asistencia Técnica: un director (con experiencia en actividades de pre-inversión para el desarrollo urbano) y un especialista en administración.

4.13 En resumen, el total del personal profesional permanente requerido para operar la OPDU será 32 especialistas, de los cuales 3 serán vinculados a la Dirección Ejecutiva del Programa, 12 a la Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos, 6 a la Dirección de Ejecución del Programa, 9 a la Dirección de Programación y Control, y 2 a la Dirección de Asistencia Técnica. Además del personal mencionado, se anticipa la necesidad de contratar entre 12 y 18 meses hombre de especialistas para tareas de análisis técnico de proyectos de ingeniería de redes (electricidad y gas). Asimismo, en períodos de mayor demanda sobre la capacidad de análisis de proyectos específicos por parte de la OPDU, existirá la posibilidad de contratar consultores temporales, según las especialidades profesionales requeridas, para apoyar el equipo permanente de analistas, de esta manera evitando retrasos en el procesamiento de las solicitudes de crédito.

4. Asesoría Técnica

4.14 Considerando que la operatoria que se aplicará en la ejecución del Programa no tiene antecedentes en la SVOA y requerirá cambios significativos en los procedimientos analíticos y administrativos de la misma, será necesario apoyar la OPDU, durante su período inicial de funcionamiento, a través de un conjunto de asesores especializados. Las responsabilidades básicas de estos especialistas serán de capacitar y apoyar el personal permanente de la Oficina en las distintas actividades relacionadas con la conducción del Programa, de esta forma contribuyendo directamente al objetivo de fortalecimiento institucional de la propia Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental en lo que se refiere a sus atribuciones en el campo del desarrollo urbano.

- 4.15 El criterio de asignación de los asesores responde a la necesidad de apoyar aquellas actividades operativas de la OPDU identificadas, durante la Misión de Análisis, como siendo las más críticas para la adecuada ejecución del Programa. A continuación se indican las áreas específicas de asesoramiento, el vínculo de los especialistas con las distintas Direcciones de la OPDU y la fuente de su financiamiento (BID o PNUD). Los perfiles y términos de referencia preliminares de cada uno de estos asesores se presentan en el Anexo No. IV-4 de este Informe.

<u>Dirección</u>	<u>Area de Especialización</u>	<u>Fuente Financiadora</u>
Análisis y Eval.de Proy.	- ingeniería de proyectos	PNUD
	- evaluación económica de proyectos	BID
	- análisis financiero-institucional	PNUD
Ejecución del Programa	- transacciones financieras	BID
	- asuntos legales	BID
Programación y Control	- programación financiera	PNUD
Asistencia Técnica	- administración de programas	
	de asistencia técnica	BID
	- especialista en estudios urbanos	PNUD

- 4.16 Aunque las actividades específicas del conjunto de asesores serán diversas, estos profesionales apoyarán la OPDU en las siguientes áreas generales:

- (a) formulación y/o revisión de guías, metodologías, y otros documentos instrumentales para la preparación, análisis y evaluación de los proyectos en cada sector;
- (b) orientación de los integrantes permanentes de la Oficina y, de ser el caso, de los responsables por la preparación y ejecución de proyectos específicos a nivel local, en sus respectivas áreas de especialización;
- (c) colaboración en la ejecución de las tareas específicas de administración del Programa; y
- (d) entrenamiento en servicio de los técnicos permanentes de la OPDU.

- 4.17 Durante el período inicial de funcionamiento de la OPDU, los asesores podrán asumir interinamente la conducción de las tareas asignadas a las distintas áreas y subáreas de la misma. Como se trata de la ejecución de un programa complejo y nuevo para el país, se recomienda que las actividades de los asesores sean ejercidas por un período no inferior al plazo necesario para comprometer los recursos originales del Programa.

- 4.18 El financiamiento de los asesores a la OPDU provendrá, en partes iguales, del BID y del PNUD. Los asesores a ser financiados con los recursos del BID serán seleccionados y contratados según procedimientos previamente acordados con el Banco. Adicionalmente, antes del primer desembolso de los préstamos del BID, la SVOA deberá presentar al Banco los términos de referencia definitivos y los procedimientos y cronograma de selección y contratación de los asesores a ser financiados con los recursos del PNUD, así como una copia del convenio de cooperación técnica firmado entre el Gobierno Argentino y el PNUD garantizando los recursos necesarios para el financiamiento de dichos asesores.

C. Ejecución del Subprograma de Obras

1. Promoción del Programa e Identificación de los Proyectos

- 4.19 Las solicitudes de crédito para la realización de proyectos de infraestructura y equipamientos urbanos serán presentadas por los organismos que pueden eventualmente constituirse en subprestatarios o por los respectivos gobiernos provinciales, del Territorio Nacional de Tierra del Fuego y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La SVOA, a través de la OPDU, desarrollará actividades para promover el Programa, tomando contacto con todos los gobiernos provinciales y con las entidades responsables por la producción o suministro de infraestructura y servicios urbanos en las provincias.
- 4.20 En esta etapa, la OPDU promoverá actividades de asistencia técnica para la identificación y conceptualización de proyectos a ser potencialmente financiados con los recursos del Programa. También durante los contactos iniciales, se entregarán a los interesados las guías y demás instrucciones para la formulación de proyectos, así como los Reglamentos de Crédito y de Asistencia Técnica del Programa. Las guías, preparadas por la Unidad de Formulación del Programa y revisadas por la OPDU, se basan en las guías sectoriales del BID, mientras que los Reglamentos del Programa serán los que se han acordado previamente con el Banco.

2. Preparación y Presentación de las Solicitudes

- 4.21 Las solicitudes de crédito serán preparadas por los eventuales subprestatarios con base en la orientación de la OPDU y, si es necesario, con el apoyo de consultores especializados contratados para esta finalidad con los recursos de asistencia técnica del Programa. Las necesidades que motivan cada proyecto específico serán determinadas por la entidad subprestataria, como producto de una evaluación de política del gobierno provincial o de un requerimiento del nivel municipal o del organismo sectorial de servicios. En cualquiera de los casos, no obstante, los proyectos identificados deberán ser contemplados en los respectivos planes de desarrollo urbano y corresponder a una prioridad declarada del gobierno provincial.

- 4.22 El ingreso de las solicitudes de crédito se realizará por un circuito rutinario de la SVOA, hasta llegar a la OPDU. La documentación inicial deberá consistir por lo menos en un perfil preliminar y una justificación del proyecto. Esta documentación deberá ser suficientemente detallada para que la OPDU pueda determinar si el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento de Crédito. La OPDU realizará una revisión preliminar de cada solicitud de acuerdo con las Guías y Reglamentos del Programa y determinará el estado de avance de la preparación del proyecto.
- 4.23 Con base en esta revisión y, una vez establecida, en principio, la elegibilidad del proyecto, la OPDU elaborará un documento especificando las modificaciones y/o informaciones complementarias requeridas e identificando posibles necesidades de asistencia técnica para la preparación de la documentación adicional por parte del eventual subprestatario. En estos casos, las actividades de asistencia técnica tendrán el carácter de recuperación contingente. Las observaciones sobre las solicitudes iniciales serán transmitidas formalmente al solicitante mediante una nota del Director del Programa.
- 4.24 Cumplidas las etapas de orientación - que pueda incluir una o varias misiones de integrantes de la OPDU a la respectiva jurisdicción provincial - y, cuando sea necesario, de asistencia técnica para la preparación del proyecto, el potencial subprestatario presentará a la SVOA la solicitud definitiva de crédito. Este documento deberá incluir por lo menos lo siguiente: un marco de referencia del proyecto, información sobre la organización institucional y legal de las entidades involucradas en la ejecución, operación y mantenimiento de las obras del mismo e informaciones sobre los aspectos técnicos, socio-económicos y financieros del proyecto, sus costos y su esquema de ejecución.

3. Análisis de Aprobación de los Proyectos

- 4.25 La solicitud, una vez integralmente elaborada, será analizada por un comité interdisciplinario de funcionarios de la OPDU nombrado por el Director del Programa. El comité preparará el Informe de Proyecto correspondiente, indicando los resultados de los análisis efectuados y especificando las recomendaciones que deberán tenerse en cuenta para el otorgamiento del eventual subpréstamo. En términos generales, el comité analizará el proyecto en sus aspectos técnicos, económicos, financieros, institucionales y legales, con base en la aplicación de los criterios y metodologías establecidos en el Reglamento de Crédito del Programa.
- 4.26 Más específicamente, todo proyecto será sometido a un análisis técnico que será realizado en base a: (i) un estudio de las necesidades y prioridades indicadas en los planes de desarrollo urbano, municipal, provincial y nacional, según corresponda; (ii) el tamaño y la localización del proyecto; (iii) los estudios y diseños de ingeniería y/o arquitectura; (iv) los costos de las inversiones a realizar, incluyendo los escalamientos e imprevistos; (v) los planos

de financiamiento y de ejecución de las obras, así como de operación de los servicios resultantes; (vi) la capacidad de endeudamiento del subprestatario; y (vii) la naturaleza de las garantías ofrecidas.

- 4.27 En el análisis económico de los proyectos se aplicarán las metodologías de costo-beneficio o de costo-eficiencia, según el tipo de proyecto, requiriendo para el primero, una tasa interna de retorno económico de por lo menos el 12%, y para el segundo, una solución costo-eficiente. En los casos en donde los beneficios principales son medibles en términos económicos, como son en los proyectos de expansión de los sistemas de agua desagüe, electricidad y gas, los proyectos de pavimentación y los de protección contra inundaciones; se deberá aplicar un análisis costo-beneficio. Cuando los beneficios principales son no medibles en términos económicos, como se evidencia en los proyectos de tratamiento de agua, descontaminación, y los de equipamiento comunitario, se deberá constatar de manera rigurosa la necesidad del proyecto y aplicar un análisis de costo-eficiencia. En el Anexo B del Reglamento de Crédito se presentan los lineamientos generales a aplicarse en las evaluaciones de los proyectos.
- 4.28 El análisis financiero se realizará tanto a nivel del subprestatario, como a nivel del proyecto. En el primer caso, se hará un análisis financiero-histórico y una evaluación de las proyecciones financieras del subprestatario para demostrar su capacidad de suministrar el aporte local si corresponde y de amortizar el subpréstamo. A nivel de proyecto también se analizarán las proyecciones financieras, lo que permitirá determinar su contribución al cumplimiento de las disposiciones tarifarias que correspondan o, en su defecto, establecer los mecanismos de recuperación de costos que deberá contemplar el proyecto.
- 4.29 En el análisis institucional, finalmente, se constatará la capacidad legal del subprestatario para obligarse y del organismo executor para contratar o ejecutar obras y/o adquirir bienes, así como del operador de explotar los servicios respectivos. Las metodologías detalladas de los análisis financiero e institucional se describen en las secciones correspondientes del Anexo B del Reglamento de Crédito.
- 4.30 Cuando los resultados de los análisis presentados en el Informe de Proyecto sean favorables, se determinarán las recomendaciones específicas del caso que puedan ser de los siguientes tipos generales: condiciones previas a la firma del contrato de subpréstamo; condiciones previas al primer desembolso del crédito; y, condiciones a ser cumplidas durante el período de ejecución del proyecto.
- 4.31 Cuando los informes de análisis resulten desfavorables, o es necesario efectuar consultas complementarias, el Director del Programa elaborará el dictámen correspondiente y confeccionará una nota al solicitante que será transmitida al mismo siguiendo los procedimientos habituales de la SVOA. En estos casos, la OPDU retendrá las actuaciones sobre el proyecto, en espera de la notificación de los cambios o aclaraciones solicitadas.

- 4.32 Una vez concluido favorablemente el análisis del proyecto, el Director del Programa suscribirá el dictamen final con las recomendaciones correspondientes y este documento será remitido para el conocimiento y aprobación del Secretario de Vivienda. El Secretario tomará la decisión final y, por Resolución, concederá la autorización de financiamiento respectiva, con copias para el subprestatario, el Tribunal de Cuentas de la Nación para su intervención y la OPDU para la gestión del contrato específico de subpréstamo. En los casos en que el costo total del proyecto supere el límite de aprobación para el sector correspondiente acordado con el Banco (ver Sección D.5 de este Capítulo), la documentación del proyecto será sometida al BID para su consideración y autorización, antes de iniciar las tramitaciones para la firma del contrato de subpréstamo respectivo.

4. Formalización de los Créditos

- 4.33 En función de la Resolución del Secretario de Vivienda, y una vez obtenida la no objeción del Tribunal de Cuentas, así como, en los casos que corresponda, la no objeción del Banco, la OPDU procederá a preparar los contratos del subpréstamo y los convenios de garantía específicos del proyecto. En cada caso, se llevarán en consideración las recomendaciones y el dictamen final sobre el proyecto y se incorporarán en el contrato del subpréstamo las condiciones generales establecidas en el Reglamento de Crédito del Programa (Ver Sección VI del Reglamento de Crédito).
- 4.34 Las condiciones previas a la firma del contrato de subpréstamo serán indicadas en la Resolución que autoriza el financiamiento y las mismas deberán ser cumplidas con arreglo a los requerimientos que establezcan la OPDU. Entre estas condiciones serán las siguientes: los subprestatarios deberán (a) designar un agente financiero; (b) establecer una cuenta especial separada dentro de su contabilidad para segregar la administración de los recursos del crédito; y (c) obtener las autorizaciones legales necesarias para realizar tales procedimientos y los demás que se contemplen en la autorización del financiamiento.
- 4.35 Una vez cumplidas dichas condiciones, el subprestatario deberá poner a disposición de la OPDU las respectivas garantías para su análisis y conformidad. La Oficina elaborará el proyecto de contrato de subpréstamo, girándose un ejemplar del mismo a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SVOA para su conocimiento y análisis. Una vez terminada la tramitación interna, se discutirán las cláusulas del contrato con la entidad subprestataria, estableciéndose las fechas y cronogramas definitivos de ejecución del proyecto a financiar.
- 4.36 El paso siguiente será la firma del contrato de subpréstamo entre el Secretario de Vivienda - que será específicamente autorizado para hacerlo por el mismo Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que establecerá la Cuenta Especial y la OPDU - y la autoridad correspondiente del subprestatario, así como del convenio de garantía respectivo entre el dirigente de la SVOA y el representante

autorizado del garante. En la formalización de los subpréstamos, se establecerán los compromisos y condiciones necesarios para garantizar su cumplimiento, así como para la adecuada supervisión y control físico y financiero de la ejecución de los proyectos financiados.

5. Autorización para Licitaciones y Adjudicaciones

- 4.37 Los pliegos y documentación complementaria de la licitación o licitaciones para cada proyecto con contrato de subpréstamo firmado serán presentados a la OPDU para su análisis y aprobación. En todos los casos de licitaciones que contemplen la utilización de recursos del BID, la OPDU presentará al Banco la documentación correspondiente para obtener la no objeción. En caso de la conformidad de la OPDU y del Banco, se informará al subprestatario. De existir objeciones, se comunicarán las mismas y se retendrán las actuaciones hasta que se obtengan del subprestatario las aclaraciones o modificaciones solicitadas.
- 4.38 El llamado a licitación deberá contar con la intervención y aprobación previa de la OPDU y del BID. La OPDU supervisará el cumplimiento de lo acordado por contrato con el BID, especialmente las cláusulas del documento "Procedimiento de Licitaciones" que se anexará a los contratos de préstamo del Banco. El Director del Programa notificará la aprobación del llamado y, a partir de ese momento, el ejecutor del proyecto estará en condiciones de proceder a su publicación.
- 4.39 La OPDU efectuará el seguimiento durante todo el proceso licitatorio, al igual que el BID cuando se prevea financiamiento con fondos del Banco. El ejecutor de cada proyecto, además de la convocatoria, deberá abrir las propuestas, designar un comité para que las estudie y emita el respectivo informe con un cuadro comparativo y la recomendación de adjudicación y, una vez que la SVOA y el Banco hayan manifestado su conformidad, proceder a la adjudicación y contratación.
- 4.40 Las adjudicaciones de los contratos de obras de los proyectos tendrán una tramitación semejante a la descrita anteriormente para las licitaciones. La OPDU confeccionará los formularios que se utilizarán para el análisis de las ofertas.

6. Desembolsos a los Subprestatarios

- 4.41 Los desembolsos a los subprestatarios se efectuarán mediante transferencias directas a sus agentes financieros. En cada agente se habilitará una cuenta específica para el proyecto respectivo, en la cual se acreditarán los desembolsos de la SVOA, así como los aportes del subprestatario, y de la cual se debitarán los pagos a los contratistas y los gastos incrementales de la unidad ejecutora del proyecto.
- 4.42 Los desembolsos podrán realizarse con base en uno de los siguientes procedimientos: (a) reintegros de gastos efectuados, conforme a los

porcentajes de financiamiento acordados para el Programa y a los cronogramas de ejecución aprobados; (b) anticipo de fondos (que no puede superar al 10% del monto del subpréstamo) y reposición en la forma indicada en (a); y (c) pagos a contratistas del exterior por cuenta y orden de los subprestatarios, mediante intervención directa del BID.

- 4.43 El reintegro de gastos efectuados por el subprestatario será tramitado de acuerdo con el siguiente procedimiento: (a) se realiza la medición del avance de las obras y/o la recepción de los materiales adquiridos; (b) se efectúan los cálculos de avance físico y financiero y se descuentan los desacopios conforme las previsiones realizadas; (c) se conforma el certificado de obra por el ejecutor provincial; (d) el agente financiero realiza el pago del respectivo certificado; (e) la misma entidad confecciona el requerimiento de desembolso a la SVOA; y (f) el requerimiento se recibe en la SVOA y la OPDU realiza los controles de certificación, aprueba u observa, emite los formularios internos correspondientes y, con la firma del Director del Programa, ordena el reembolso solicitado, notificando a la Dirección de Administración de la SVOA para su registro.

7. Reprogramaciones

- 4.44 Las solicitudes de los subprestatarios para una reprogramación de los calendarios de desembolsos ingresarán a la SVOA conforme los procedimientos habituales. La OPDU efectuará el análisis y dictaminará sobre la situación del proyecto objeto de la reprogramación. Una copia del dictámen se enviará al BID para su conocimiento y eventuales observaciones. Una vez conocida la opinión del Banco, se comunicará por nota al subprestatario la decisión de la SVOA con relación a la solicitud presentada. En caso de aprobación, se tomará conocimiento y debida nota de los nuevos calendarios para la reprogramación de los compromisos del Programa y del BID.

8. Procedimientos de Cobranza

- 4.45 Los subprestatarios formalizarán su deuda con la SVOA mediante documentos a favor de esta última, por capital e intereses. Los documentos contendrán una cláusula de ajuste de deuda que se materializará aplicando a los saldos de deuda la variación experimentada por el índice de precios mayoristas nacionales entre la fecha de la firma del contrato del subpréstamo y el respectivo vencimiento.
- 4.46 Se solicitará a cada subprestatario que, para el pago en tiempo y forma, los agentes financieros quedan autorizados mediante carta irrevocable de pago sobre las respectivas cuentas corrientes. La OPDU enviará los avisos de vencimiento al subprestatario y a su agente financiero con un mes de anticipación y efectuará una afectación preventiva de los recursos del FONAVI para garantizar la correspondiente devolución. El agente financiero del subprestatario transferirá, a su vencimiento, los fondos correspondientes a la Cuenta Especial del Programa. Los vencimientos serán semestrales y

consecutivos y los plazos de amortización variarán de acuerdo con el sector al cual corresponda cada proyecto.

9. Administración de los Documentos de Crédito

- 4.47 Los documentos de crédito adquiridos por el Organismo Ejecutor mediante el otorgamiento de subpréstamos, sólo podrán ser vendidos, cedidos, transferidos u ofertados en garantía a favor de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Esta restricción surge de la naturaleza misma de la operación, cuyo objeto es el financiamiento de obras específicas y su seguimiento y control hasta su ejecución y operación y que involucra además regulaciones en cuanto al uso de las recuperaciones de los subpréstamos para este mismo tipo de actividades. Por otra parte, el mecanismo institucional no está diseñado para que estas transacciones sean efectuadas en un ámbito más amplio.

D. Términos y Condiciones de los Subpréstamos (Reglamento de Crédito)

- 4.48 Los términos y condiciones de los subpréstamos están indicados en detalle en el Reglamento de Crédito del Programa, el cual ha sido acordado en principio con la Unidad de Formulación del Programa en la SVOA y que se presenta en el Anexo IV-5 de este Informe. El referido Reglamento incluye, adicionalmente, cinco anexos especificando respectivamente: los criterios técnicos de elegibilidad de los proyectos en cada sector; los criterios y metodologías de análisis económico, institucional y financiero; el procedimiento de licitaciones; los requerimientos referentes a las tarifas de servicios públicos; y los lineamientos de evaluación a posteriori. A continuación, se resumen las principales disposiciones del Reglamento de Crédito que deberá ser puesto en vigor antes del primer desembolso de los eventuales préstamos del Banco.

1. Sectores Financiáveis

- 4.49 Con cargo a los recursos del Programa, se podrán financiar proyectos de desarrollo urbano en los siguientes sectores descritos en mayor detalle en el capítulo anterior: agua potable, desagues cloacales, equipamiento comunitario, defensa contra erosión e inundaciones, mejoramiento vial y desagues pluviales, electrificación y alumbrado público y gas. Otros sectores diferentes a estos solo podrán incluirse previa aprobación del Banco.
- 4.50 Los subpréstamos otorgados para proyectos en un mismo sector no podrán totalizar más que el equivalente de US\$ 100 millones de los recursos originales del componente de crédito del Programa. De igual manera, el total de los subpréstamos otorgados para proyectos en los tres sectores de mayor volumen de créditos no podrá exceder del equivalente de US\$ 200 millones de estos recursos.

2. Garantías

- 4.51 La devolución de los créditos podrá ser garantizada por los gobiernos provinciales, municipales y/o entidades bancarias. Las provincias podrán comprometer su participación en los recursos del FONAVI para garantizar el aporte de contrapartida de los subprestatarios y la devolución del crédito en segundo término. Para el caso de afectarse el uso de los recursos del FONAVI, el gobierno de la provincia se comprometerá a efectuar la devolución mediante los fondos de co-participación, de regalía o de cualquier otro crédito, aporte o contribución que en el orden nacional pudiera corresponderle. Previo a la formalización del convenio correspondiente, la SVOA manifestará la aceptación de la garantía propuesta por el subprestatario.

3. Condiciones Financieras de los Créditos

- 4.52 Las amortizaciones de todos los subpréstamos se harán manteniendo su valor constante en términos reales, al indexar con el índice de precios al consumidor. La tasa de interés real a cobrar no podrá ser superior al 1% mensual (en principio, la tasa a aplicar a los subpréstamos será la misma que la que cobre el Banco sobre su préstamo en divisas, aproximadamente el 8,2% anual de tasa efectiva). Las comisiones por compromiso de recursos no excederán del 1% anual del monto no desembolsado del crédito, computable sobre el promedio indicado de saldos de comienzo de mes en el semestre precedente y cobrables semestralmente. Adicionalmente, se podrá cobrar una comisión por concepto de inspección y vigilancia que no excederá del 1% sobre el saldo original del crédito, cobrable una sola vez.
- 4.53 Las tasas de interés y la recuperación de los créditos así determinados permitirán mantener el valor de los recursos del Programa, con lo cual se asegurará la continuidad del mismo y forzará a los intermediarios a adoptar políticas de recuperación de ingresos consistentes con la cobertura de los costos de los servicios prestados. Estas medidas de recuperación del valor real de los recursos transferidos forman parte de la política del gobierno argentino, dentro de su programa económico, y se enmarcan dentro de la política del Banco, si bien tales políticas, vigentes para las operaciones de Programas de Desarrollo Urbano (OP-751), afectando a sectores no productivos, no exigen que las tales tasas de interés deban ser positivas en términos reales.
- 4.54 Los plazos de amortización y períodos de gracia de los créditos serán de hasta 15 años para la amortización contados a partir de la formalización del crédito y comenzando a pagar a los 6 meses del último desembolso; los plazos que se fijen serán una función de las características de cada sector, particularmente en lo referente a la capacidad financiera. Los períodos de gracia otorgados para la amortización de principal podrán también aplicarse para el pago de los intereses, pero no de las comisiones.

4. Límites de Crédito y Aprobación

- 4.55 Salvo que se acuerde de otra manera con el Banco, los límites que se aplicarán en el otorgamiento de los créditos serán los siguientes: (a) monto mínimo de un crédito - el equivalente de US\$500,000; (b) monto máximo de un crédito - el equivalente de US\$10 millones; (c) monto máximo del costo total de un proyecto - el equivalente de US\$15 millones; (d) saldo deudor máximo con el programa de cada subprestatario - el equivalente de US\$ 25 millones; y (e) saldo deudor con el Programa de una provincia, sus municipios, sus instituciones y otros entes localizados en ella (y considerando como una jurisdicción aparte el área metropolitana de la Capital Federal) - el equivalente de US\$ 40 millones.
- 4.56 Los créditos otorgados por el Programa no podrán exceder del 90% del costo total de cada proyecto y la cuota parte de esos créditos proveniente de los recursos del BID no podrá ser superior al 60%.
- 4.57 La aprobación de los proyectos de agua potable y desagües cloacales cuyo costo total exceda del equivalente de US\$ 8 millones, así como de proyectos en los demás sectores cuyo costo total sea mayor que el equivalente de US\$ 5 millones, estará sujeta a la manifestación por parte del Banco de que no objeta.

5. Distribución Territorial de los Recursos

- 4.58 Los recursos del Programa serán distribuidos mayormente en ciudades intermedias, de acuerdo a los siguientes límites: (a) ciudades con población inferior a los 150,000 habitantes - no menos que 25% de los recursos; (b) ciudades intermedias, de entre 150,000 y 650,000 habitantes - no menos del 50%, ni más del 75% de los recursos; y (c) grandes centros urbanos con más de 650,000 habitantes - no más del 25% de los recursos.
- 4.59 Estos límites tienen el objetivo de asegurar que no habrá una concentración de los recursos del Programa en pocas provincias o en pocas ciudades. Cabe señalar adicionalmente que, actualmente no se dispone de una política del Gobierno Argentino que determine prioridades regionales de inversión y que permitiría establecer prioridades geográficas para definir una distribución a priori de los recursos del Programa entre provincias o entre municipios dentro de cada provincia. Uno de los posibles resultados del Subprograma de Asistencia Técnica será la realización de los estudios que se requerirán para fundamentar una política de asignación especial de recursos en apoyo al desarrollo urbano del país.

6. Restricciones al Uso de los Recursos

- 4.60 Los recursos del Programa no deberán destinarse a financiar: (a) gastos generales y/o de administración; (b) adquisiciones o arriendo de bienes inmuebles; (c) refinanciación de deudas; (d) costos de operación y mantenimiento.

7. Tarifas de los servicios públicos

- 4.61 Para ser elegibles como sujetos de crédito del Programa y/o como ejecutores y/u operadores de las obras y equipamientos financiados, las entidades de servicios públicos en los sectores de agua potable, desagües cloacales, energía eléctrica y gas deberán cumplir con la siguiente condición antes que la SVOA pueda firmar el contrato de subpréstamo correspondiente: los ingresos por tarifas que se devenguen en el servicio respectivo, a nivel de la entidad, deben ser superiores a los gastos de operación y mantenimiento de tales servicios.
- 4.62 Además del requisito de elegibilidad ya mencionado, las instituciones de servicios públicos beneficiarias del Subprograma de Obras deberán mantener niveles tarifarios que sean consistentes con la política del Banco en este sentido (el Anexo D del Reglamento de Crédito del Programa establece los lineamientos de la política tarifaria que se aplicarán en este caso; este anexo constituye una aplicación específica de la política general de tarifas del Banco). A partir de la firma del contrato de subpréstamo, y hasta un año después de la terminación de la ejecución del proyecto, se deberán cobrar tarifas a los beneficiarios que permitan, por lo menos, la recuperación de los costos de operación y mantenimiento de los servicios prestados a efectos de evitar la transferencia de recursos con la consecuente disminución en la capacidad de prestación de servicios.
- 4.63 De los sectores mencionados en el Reglamento de Crédito, los servicios públicos sujetos a estas regulaciones incluyen agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y distribución de gas; no incluyen los servicios relacionados con equipamientos comunitarios, defensas contra erosión e inundaciones, mejoramiento vial y desagües pluviales y alumbrado público.
- 4.64 Adicionalmente, a partir de un año después de completarse la ejecución del proyecto objeto del financiamiento y durante el período de amortización de los subpréstamos, las tarifas deben, anualmente, ser suficientes para cubrir los gastos de operación, mantenimiento y depreciación de los activos fijos en servicio debidamente revaluados. Además, para las empresas de gas y electricidad, los recursos deberán ser suficientes para (i) la obtención de una rentabilidad operativa no inferior al 8% anual sobre la inversión inmovilizada revaluada, o (ii) la cobertura de la totalidad del servicio de su deuda y no menos del 30% de las nuevas inversiones en activos fijos y capital de trabajo neto efectuadas durante el año.
- 4.65 Si la aplicación de lo anterior no generase ingresos suficientes para cubrir el oportuno servicio de todas las obligaciones del beneficiario respectivo, el garante y el prestatario (de los subpréstamos), deberán adoptar las medidas necesarias para obtener los recursos adicionales que se requieran para alcanzar dicho fin.
- 4.66 La política de tarifas del Banco será implantada y controlada a través del siguiente procedimiento:

- (a) El prestatario, la Nación Argentina, se compromete a que los contratos de subpréstamo entre la SVOA (entidad federal) y los subprestatarios (de jurisdicción provincial) incluyan el compromiso de que los ejecutores cumplirán con los requerimientos de tal política y de que los gobiernos provinciales gestionarán la correspondiente aprobación.
- (b) Tales contratos contendrán cláusulas donde se estipule que en caso de incumplimiento se podrán dar por exigibles los subpréstamos.
- (c) Cada año, después de aprobada la quinta operación, y hasta tres años después del último desembolso del préstamo del Banco, el Prestatario (la Nación, a través de la SVOA) presentará un informe donde se detalle el cumplimiento de las disposiciones contractuales referentes a tarifas y las acciones que han sido tomadas para asegurar el cumplimiento con lo establecido en los contratos.
- (d) En caso de observar incumplimiento con estas condiciones, el Banco exigirá el cumplimiento de la condición contractual donde se establece que las tarifas deben ser suficientes para cubrir los rubros especificados en la Política del Banco y en caso de ser insuficientes, que se adopten las medidas necesarias para obtener los recursos adicionales que se requieran para tales fines.

8. Otros Mecanismos de Recuperación de Costos

- 4.67 En muchos de los municipios argentinos existen mecanismos de contribución de mejoras, valorización y tasas específicas para recuperar los costos de inversión y/o de operación y mantenimiento de infraestructura y servicios urbanos. El mecanismo de contribución de mejoras consiste en el cobro directo a los beneficiarios de una inversión específica -por ejemplo la pavimentación de una calle o la extensión de una tubería de distribución de gas en el interior de un barrio urbano- previo, o inmediatamente posterior, a la realización de la obra, dividiendo el costo de la misma entre el número total de beneficiarios (que normalmente serían los frentistas de la calle a pavimentar o las familias que tendrán sus casas conectadas a la nueva tubería de gas en los casos citados).
- 4.68 El mecanismo de valorización, a su vez, funciona de una manera parecida al impuesto sobre la propiedad, a través del cual se incrementa el ingreso tributario sobre la propiedad inmobiliaria urbana en función de las inversiones públicas que tienen un impacto sobre el valor de la misma. Este mecanismo se utiliza sobre todo en los casos de mejoramiento de vías urbanas principales y de obras de defensa que pueden tener un efecto importante sobre el valor de la propiedad y cuyo impacto no se limita apenas a los frentistas inmediatos de las obras. Estas obras también normalmente involucran costos mucho más elevados de inversión que las obras que se recuperan a través de la contribución de mejoras, de modo que la aplicación del

mecanismo de valorización permite la recuperación de las mismas sobre un período mayor de tiempo y de una manera proporcional a los beneficios percibidos por cada propietario. La recaudación a través del mecanismo de valorización puede incrementarse mediante la aplicación de la misma alícuota sobre un valor más elevado de la propiedad (resultante de la revalorización de la misma posterior a la realización de las obras que impactan sobre su valor) y/o a través de la reclasificación de la propiedad (de rural a urbana, o entre las distintas categorías de propiedades urbanas de acuerdo con la infraestructura que las beneficia), permitiendo la aplicación de una alícuota mayor, en función de las inversiones públicas realizadas.

- 4.69 Adicionalmente, muchos de los municipios también utilizan un sistema de tasas para financiar la operación y mantenimiento de ciertos servicios urbanos. Estas tasas normalmente son cobradas bimensualmente a los propietarios urbanos para financiar un conjunto de servicios municipales que pueden incluir la limpieza de calles y áreas verdes, el alumbrado de calles y otros lugares públicos y el mantenimiento de vías urbanas y sistemas de desagües pluviales.
- 4.70 El sistema de recuperaciones por medio de contribuciones de mejoras que se preve utilizar en algunas obras financiadas con el Programa cubre básicamente las obras de defensa contra erosión e inundaciones, mejoramiento vial y desagües pluviales. En los proyectos de equipamiento comunitario, a su vez, la política del Gobierno Argentino es de proveer los servicios resultantes gratuitamente a la población beneficiaria.
- 4.71 En el caso de que se planee recuperar los costos de la obra por el mecanismo de valorización, se analizará la viabilidad del sistema principalmente desde los puntos de vista de capacidad de pago de la población beneficiaria, manifestación expresa sobre su disposición a pagar y existencia de los mecanismos legales que permiten el cobro, los que se originan en decisión de los Consejos Deliberantes locales. Cuando el sistema de recuperación sea por tasas, se cuidará que éstas cubran los costos de operación, mantenimiento y en lo posible depreciación.
- 4.72 En el caso de los proyectos en los sectores de mejoramiento vial y desagües pluviales y de defensa contra erosión e inundaciones, la utilización de los mecanismos supuestos para la recuperación de parte o la totalidad de los costos de inversión son consistentes con la política de desarrollo urbano del Banco (OP-751). Adicionalmente, el Banco requerirá que el prestatario, a través de la SVOA, prepare informes anuales sobre los resultados de la aplicación de mecanismos de contribución de mejoras, tasas u otros sistemas de cobro para la recuperación de los costos de los proyectos en los sectores donde aplica.

9. Procedimientos de Adquisición de Bienes y Servicios

- 4.73 Las obras y adquisiciones a ser financiadas con los recursos del Programa serán realizadas y contratadas directamente por los

ejecutores de los proyectos de acuerdo a los procedimientos indicados en el anexo correspondiente del Reglamento de Crédito. En la adquisición de equipos, materiales y otros bienes relacionados con el Programa y en la contratación de obras, los ejecutores utilizarán el sistema de licitación pública. En todos los casos en que dichas adquisiciones o contratos excedan del equivalente de US\$ 200,000 y se financien total o parcialmente con recursos en divisas del eventual préstamo, las respectivas licitaciones tendrán carácter internacional. Cuando las adquisiciones de bienes sean financiadas totalmente con recursos en moneda local, las licitaciones podrán limitarse al ámbito nacional.

10. Mantenimiento de las Obras

- 4.74 En los contratos de crédito firmados entre la SVOA y los eventuales subprestatarios se establecerá que las obras construídas con los recursos del Programa deberán ser administradas, operadas y mantenidas de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas. Para el efecto, las entidades responsables se comprometerán a asignar anualmente en sus respectivos presupuestos partidas adecuadas para el mantenimiento de las obras financiadas.
- 4.75 Adicionalmente, se exigirá contractualmente que, a partir de la aprobación de la quinta operación de subpréstamo y hasta el tercer año siguiente a la fecha del último desembolso del préstamo, la SVOA presente, antes del 31 de Marzo de cada año, un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones respecto a tarifas y mantenimiento correspondientes al año anterior y el plan propuesto para el año siguiente.

11. Continuidad del Programa

- 4.76 Los fondos provenientes de amortizaciones de los créditos concedidos con los recursos del Programa que se acumulen en exceso de las cantidades necesarias para el servicio de los préstamos del Banco y la cobertura de los gastos de operación del Programa, sólo podrán utilizarse para el otorgamiento de nuevos créditos que se ajusten sustancialmente a las normas establecidas en el eventual contrato del préstamo en divisas y en el Reglamento de Crédito del Programa, salvo que después de 5 años a contar de la fecha del último desembolso del financiamiento, el Banco y el prestatario convengan dar otro uso a las recuperaciones, sin apartarse de los objetivos básicos del financiamiento o reducir el plazo de vigencia de esta obligación.

12. Otras Condiciones y Exigibilidad de los Créditos

- 4.77 La Sección VI del Reglamento de Crédito especifica en detalle las condiciones adicionales que deberán incluirse en los contratos de subpréstamo y/o de garantía, según corresponda, incluyendo la obligación de cumplir con los requerimientos del Banco en lo que se refieren a la política de tarifas de servicios públicos, de mantenimiento de las obras financiadas con los recursos del Programa y de evaluación a posteriori de los proyectos financiados. De manera semejante, la Sección VIII del Reglamento indica las circunstancias

en las cuales serían exigibles los créditos otorgados por el Programa.

E. Ejecución del Subprograma de Asistencia Técnica

- 4.78 Las actividades del Subprograma de Asistencia Técnica serán administradas por la OPDU con base en el Reglamento de Asistencia Técnica del Programa que se resumirá a continuación y cuya versión preliminar se presenta en el Anexo No. IV-6 de este Informe. Antes del primer desembolso del préstamo del BID en moneda local, la SVOA deberá poner en vigencia la versión definitiva de este Reglamento previamente acordada con el Banco.
- 4.79 Serán elegibles para recibir recursos para asistencia técnica todos los sectores y beneficiarios indicados en el Reglamento de Crédito del Programa, así como las entidades nacionales, provinciales y municipales responsables por la definición de políticas de desarrollo urbano y/o la realización de actividades específicas de planificación urbana a nivel local. Las entidades interesadas en obtener recursos para asistencia técnica deberán someter una solicitud a la SVOA, especificando los objetivos, justificación, descripción, costo total y cronograma de ejecución de las actividades de asistencia técnica a ser promovidas y los términos de referencia del consultor o consultores a ser contratados.
- 4.80 La OPDU, a través de la Dirección de Asistencia Técnica -y con el apoyo de la Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos en los casos en que corresponda- orientará los eventuales beneficiarios en la preparación de las solicitudes de asistencia técnica. Con esta finalidad, la OPDU establecerá normas y guías específicas con relación a la forma de presentación de las solicitudes, así como la selección y contratación de los consultores.
- 4.81 La Dirección de Asistencia Técnica de la OPDU -con el apoyo de los demás integrantes de la Oficina según sus especialidades y de acuerdo a la naturaleza de la asistencia técnica requerida en cada caso- analizará las solicitudes y recomendará su aprobación o no al Director del Programa, quién tomará la decisión final y autorizará la elaboración del convenio correspondiente. La asignación de los fondos de asistencia técnica - sobre todo en los casos de apoyo a la elaboración de proyectos de inversión potencialmente financiables con los recursos del Programa - será realizada llevando en consideración las prioridades y límites sectoriales y territoriales establecidos en el Reglamento de Crédito del Programa. El monto máximo del financiamiento o aporte para asistencia técnica con los recursos del Subprograma será el equivalente de US\$ 100.000. En todos los casos en que el monto del financiamiento o aporte sea superior al equivalente de US\$ 50.000 se requerirá la no objeción del BID antes de proceder con la firma del convenio de asistencia técnica respectivo.
- 4.82 Una vez firmado el convenio de asistencia técnica, se procederá a la selección y contratación de los consultores según los términos de referencia específicos aprobados por la Dirección del Programa. En

los casos de operaciones de asistencia técnica para apoyar potenciales subprestatarios en la formulación de proyectos, los consultores serán seleccionados y contratados directamente por los beneficiarios, siguiendo procedimientos acordados entre la SVOA y el Banco y una vez obtenida la no objeción de la OPDU y, de ser el caso, del Banco. En los casos de actividades de asistencia técnica para apoyar la realización de estudios de política urbana o de evaluaciones o diagnósticos urbanos, así como para dar apoyo institucional a entidades suministradoras de servicios públicos urbanos fuera del contexto de proyectos específicos de inversión financiados con recursos del Programa, los consultores serán seleccionados y contratados directamente por la OPDU siguiendo procedimientos aceptables al Banco.

- 4.83 En los casos de asistencia técnica a eventuales subprestatarios para la elaboración de proyectos específicos, la OPDU podrá prestar asesoría a los beneficiarios en la selección y contratación de expertos individuales y/o firmas consultoras, mediante la distribución de directrices y otra información sobre procedimientos de selección y contratación, material de referencia, costos y honorarios, etc., así como a través de la información sobre posibles candidatos para realizar los servicios necesarios, por área de especialización y experiencia profesional. Adicionalmente, la OPDU podrá cooperar en las etapas previas a la selección y firma del respectivo contrato o contratos de consultoría y/o designar observadores para ayudar a examinar las propuestas recibidas por el beneficiario y asistir a las reuniones en las cuales los representantes del beneficiario entrevisten, seleccionen o negocien con empresas de servicios profesionales.
- 4.84 El financiamiento de las operaciones de asistencia técnica para la elaboración de proyectos específicos será integrado al monto definitivo del supréstamo para la ejecución de los proyectos respectivos, si los mismos fueran aprobados por la Dirección del Programa. En estos casos, más concretamente, la devolución del crédito para asistencia técnica será realizada de acuerdo con las condiciones de otorgamiento del subpréstamo para el proyecto. Si, por otro lado, el proyecto de inversión no fuera aprobado, el financiamiento de la asistencia técnica no será reintegrable al Programa por parte del beneficiario. De manera semejante, las actividades de asistencia técnica para la definición de políticas o estrategias de desarrollo urbano y/o para la identificación de proyectos de inversión, así como para el apoyo institucional de entidades prestadoras de servicios urbanos no beneficiadas con subpréstamos para la ejecución de proyectos específicos, también serán de carácter no reembolsable.
- 4.85 Los beneficiarios de las operaciones de asistencia técnica se comprometerán a aportar todos los recursos complementarios que sean necesarios para cumplir, en tiempo y forma, las tareas y obligaciones para que se otorge el respectivo financiamiento. Estas obligaciones incluirán la designación o contratación de profesionales y personal técnico de contraparte, así como las prestaciones en servicios,

equipamientos físicos, informaciones y toda otra que sea necesario para la adecuada realización de las actividades comprendidas en la operación.

- 4.86 Los desembolsos de los financiamientos para asistencia técnica se realizarán con base en cronogramas previamente acordados entre la OPDU y los beneficiarios respectivos. La autorización de los pagos finales de los consultores, no obstante, dependerá de la aprobación previa de sus informes finales por parte del beneficiario de la asistencia técnica y de la OPDU.
- 4.87 Los contratos firmados entre expertos individuales y/o entidades consultoras con los beneficiarios del subprograma de asistencia técnica establecerán que la OPDU efectuará la orientación y seguimiento de los trabajos a realizarse. A tales fines, la OPDU podrá requerir toda la información que estime pertinente para evaluar el progreso de la tarea. Adicionalmente, y cuando lo estime necesario, la OPDU podrá enviar misiones especiales de supervisión de estos trabajos. Al concluir cada operación de asistencia técnica, finalmente, la OPDU, a través de la Dirección de Asistencia Técnica, realizará la evaluación ex-post correspondiente.

F. Cronograma de Desembolsos

- 4.88 Conforme el análisis presentado en la Sección C del capítulo anterior, el Programa ha sido dimensionado de forma tal que los recursos del mismo serían totalmente comprometidos durante los tres primeros años del período de ejecución previsto.
- 4.89 Sin embargo, dada la naturaleza de los proyectos incluidos en el Programa y los plazos relativamente largos de ejecución en algunos casos (promedio de 18 meses, con máximo de 36 meses), es necesario prever un período de cinco años para completar los desembolsos correspondientes. En este contexto, se anticipa el siguiente cronograma de desembolsos de los recursos del Programa y de los préstamos del Banco.

Desembolsos (US\$ millones)

<u>Año</u>	<u>Total</u>	<u>BID</u>	
		<u>IC</u>	<u>OC</u>
1	36,9	24,9	0,6
2	62,4	20,7	0,8
3	81,8	27,7	0,3
4	69,9	25,7	0,2
5	<u>49,0</u>	<u>21,0</u>	<u>0,1</u>
Total	300,0	120,0	2,0

G. Reconocimiento de Gastos

- 4.90 En junio de 1985, el Gobierno Argentino, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, firmó un convenio de costo compartido con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableciendo la Unidad de Formulación de la Solicitud de Préstamo al BID en la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental. Con fecha de Junio 28, 1985, la SVOA, mediante una carta firmada por el Director Ejecutivo de la referida Unidad, formalmente solicitó al Banco el reconocimiento - al cargo de los recursos de contrapartida local del eventual préstamo del Banco en divisas - de los gastos realizados con fondos de la Secretaría de Vivienda para la preparación del Programa con anterioridad a la aprobación de mencionado préstamo.
- 4.91 Se estima que al momento de la aprobación del préstamo del BID, los referidos gastos sumarán el equivalente de aproximadamente US\$500,000. Se recomienda el reconocimiento de los mismos, con cargo a la contrapartida local.

H. Anticipo de Fondos

- 4.92 Dada la naturaleza del Programa y para agilizar la ejecución del mismo, se recomienda constituir un anticipo de fondos por un monto que no sobrepase del equivalente del 10% de los recursos de los préstamos del BID (anticipos de US\$12 millones en divisas y US\$200.000 en moneda local), que representan el estimado de los primeros 120 días de compromisos. El anticipo de fondos podrá reponerse para mantener esos niveles en la medida que el ejecutor justifique su colocación.
- 4.93 En virtud de la forma como se ha manejado la preparación del Programa, existen en la actualidad un gran número de solicitudes en diferentes etapas de estudio, tal como se detalló anteriormente, que podrían ser aprobadas una vez que sea constituido oficialmente; con estas solicitudes se estima un compromiso de recursos durante el primer año del orden de los US\$120 millones, de los cuales corresponderían al BID, alrededor de US\$48 millones, en tanto que los desembolsos durante los siguientes años pueden llegarse a situar en cifras que exceden los US\$80 millones, correspondiendo al BID, montos superiores a los US\$30 millones. Este ritmo de compromisos y desembolsos, operando dentro de un Programa, que a su vez se ejecuta otorgando anticipos de fondos para las obras requiere de la flexibilidad que le otorga un anticipo de fondos de la magnitud recomendada.

I. Supervisión del Banco

- 4.94 El Banco llevará a cabo la supervisión del Programa a través de la Representación en Argentina.

J. Auditoría Externa

- 4.95 Los estados financieros del Programa serán auditados por una institución de auditoría externa previamente acordada con el Banco.

K. Seguimiento y Evaluación

- 4.96 Aunque se haya preparado y analizado una muestra indicativa de proyectos, establecido los criterios de elegibilidad y metodologías de evaluación técnica, económica, financiera e insititucional a ser aplicados a los demás proyectos a ser financiado y, definido los procedimientos a ser seguidos en la aprobación de las solicitudes de crédito y la ejecución de las operaciones específicas, se trata de un Programa complejo y nuevo para el país, así como una entidad ejecutora - la SVOA - que no ha tenido experiencia anterior con la administración de un programa de crédito y asistencia técnica para el desarrollo urbano. Por esta razón, se ha recomendado un apoyo directo del Banco a la OPDU a través del financiamiento de un conjunto de asesores para capacitar el personal permanente de la Oficina en aspectos claves de su ejecución durante los años iniciales de operación de la misma.
- 4.97 Adicionalmente, se recomienda que, a los dos años de la fecha de vigencia de los eventuales contratos de préstamo del Banco, se efectúe una revisión conjunta (SVOA y BID) de la marcha del Programa. Esta revisión permitiría, de ser necesario, introducir ajustes en el Reglamento de Crédito y en los procedimientos de ejecución del Programa. Asimismo se revisarán los proyectos, que habiendo sido financiados, integrarían la muestra representativa de proyectos que servirá de base para la evaluación a posteriori del Programa. Un informe de evaluación en marcha se preparará para esta fecha y deberá contener información análoga a la del informe de evaluación a posteriori (como se indica a continuación). También se deberá presentar una muestra de cinco informes de proyectos con sus correspondientes contratos de préstamos para proyectos ya aprobados y en ejecución.

L. Evaluación a posteriori

- 4.98 A los tres años de la fecha del último desembolso del financiamiento propuesto en divisas, la OPDU deberá presentar al Banco un informe de evaluación ex-post en el cual se analice el grado en que se hayan logrado los objetivos del programa.
- 4.99 El informe de evaluación ex-post deberá contener por lo menos la siguiente información:
- (a) montos comprometidos y desembolsados y recuperaciones, indicando prórrogas otorgadas y situación de mora, año por año, desde el inicio del programa;
 - (b) distribución sectorial y provincial de las operaciones de crédito efectuadas, número y monto de inversión;

- (c) distribución por rangos de tamaño de ciudad de las operaciones de crédito efectuadas, número y monto de inversión;
- (d) descripción de estudios y análisis hechos con los fondos de asistencia técnica, detallando costos y resultados;
- (e) número y monto de proyectos identificados, de proyectos analizados y en análisis, de proyectos aprobados o en procesos de aprobación, año por año, desde el inicio del programa;
- (f) análisis de cumplimiento de cláusulas contractuales por parte de los subprestatarios, con particular énfasis en cumplimiento de políticas tarifarias de servicios públicos, y facturación en base a consumo medido.
- (g) análisis de la experiencia y los resultados de las evaluaciones ex-post hechas a los proyectos específicos financiados, hasta la fecha de la presentación; y
- (h) entrega de una muestra representativa de evaluaciones de proyectos efectuadas por OPDU, de acuerdo con la metodología previamente acordada con el Banco.

4.100 El énfasis del informe deberá ser la interpretación de la información relacionada en los elementos listados en el párrafo anterior a luz de los objetivos de desarrollo urbano del país.

CAPITULO V. EL PRESTATARIO Y EL EJECUTOR

A. Introducción

- 5.01 El prestatario, el Gobierno Nacional de la República Argentina, será legalmente responsable de recibir el crédito, hacer los aportes de contrapartida, pagar el servicio de la deuda, así como de cumplir o de hacer cumplir las cláusulas del contrato.
- 5.02 El ejecutor, será la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (SVOA), que tendrá a su cargo desarrollo del programa, y que será la responsable de organizar la oficina que tendrá a su cargo la ejecución del Programa.

B. Aspectos Institucionales del Organismo Ejecutor (SVOA).

1. Naturaleza y Objetivos

- 5.03 La SVOA constituye una jurisdicción del Poder Ejecutivo cuyas funciones se vinculan con la asistencia que presta el gobierno a los sectores de población de menores recursos. Su objetivo principal es el de facilitar el acceso a una vivienda digna. Esta Secretaría es una de las cinco que componen el Ministerio de Salud y Acción Social, cuyas funciones genéricas son las de atender todos los aspectos relacionados con la salud de la población y el medio ambiente, la promoción y asistencia social, la protección de la familia, la vivienda y los servicios sociales y el deporte.
- 5.04 Desde 1969, año en el que se creó el Ministerio de Bienestar Social -hoy denominado Ministerio de Salud y Acción Social- se pueden señalar ciertas características invariables que definen un área de carácter político y otras, más variables, que comportan diferencias en su forma de instrumentación.
- 5.05 Las preocupaciones de orden general se vinculan con la necesidad de organizar políticas públicas de atención a diversos problemas sociales que se presentaron en el país como consecuencia de la ocurrencia de urbanizaciones aceleradas que acompañaron el crecimiento del sector industrial. El aumento del déficit habitacional y de abastecimiento de servicios indispensables fue uno de los problemas que con mayor agudeza se presentó a partir de la década iniciada en 1940.
- 5.06 Las diferentes formas de organizar y llevar a cabo este tipo de programaciones produjo cambios en la estructura jurídica de las oficinas competentes para ello, aunque en la política seguida tales cambios no significaron variaciones de importancia en los aspectos relacionados con la implementación de planes. A continuación se resumen los puntos esenciales en dicha evolución.

2. Antecedentes

- 5.07 En el período que va de 1969 a 1973, a través de varios instrumentos legales, se organizó el Ministerio de Bienestar Social, que constituye el antecedente más remoto de la actual estructura del Gobierno Nacional en lo atinente al ordenamiento dentro de un Ministerio, con misiones y funciones explícitas, de políticas y conducción de programas de desarrollo de la vivienda, esencialmente en lo inherente a vivienda económica y la infraestructura y equipamiento urbano. En 1983, en el marco de la vigencia de la Constitución Nacional, se suceden un conjunto de normas que reordenan el Poder Ejecutivo, estructurándolo en la forma vigente en la actualidad.
- 5.08 La Ley 23.023, retorna a ocho el número constitucional de ministerios. Se crea el Ministerio de Salud y Acción Social, unificando en esta cartera a los anteriores Ministerios de Salud Pública y Acción Social. Así se le reasignan las funciones que originariamente tuvo el Ministerio de Bienestar Social, con excepción de la Secretaría de Seguridad Social, que pasa al ahora Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por el Decreto 15 de 1983 se organizan y distribuyen las respectivas Secretarías y Subsecretarías de cada Ministerio. La estructura organizativa del Ministerio de Salud y Acción Social, se detalla su estructuración en el organigrama del Anexo V-1.
- 5.09 Del conjunto de funciones de este Ministerio, las inherentes a vivienda y urbanismo son tomadas por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (SVOA), nueva denominación de esta Secretaría por la incorporación de las funciones y dependencias de la que fuera Subsecretaría de Medio Ambiente.
- 5.10 En el mes de julio de 1985, mediante decreto N° 1230 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso que el titular de la SVOA, junto con los titulares de otras secretarías del Gobierno Nacional, tomase parte en las reuniones del Gabinete Nacional y ejerciese un conjunto de funciones que corresponden al rango de ministro. En tal sentido, el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Ambiental está autorizado a:
- Orientar las actividades del sector privado en su área;
 - representar política y administrativamente a la misma;
 - resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de su secretaría;
 - coordinar con los ministros y demás secretarios;
 - entender en la reglamentación profesional;
 - intervenir en actividades de cooperación internacional;
 - elevar al Poder Ejecutivo la memoria anual;
 - realizar, promover y auspiciar investigaciones;
 - intervenir dentro de su ámbito en las acciones para lograr la integración regional del territorio nacional y la integración del país con los demás de la región;

- elaborar y suscribir mensajes, proyectos de leyes y decretos originados en el Poder Ejecutivo, como los reglamentos para el cumplimiento de las leyes de la Nación;
- entender en la elaboración de contratos en representación del Poder Ejecutivo, y
- Proponer al Poder Ejecutivo la estructura orgánica de su secretaría y velar por el cumplimiento de las decisiones del Poder Judicial.

5.11 Con la reforma del Decreto 1230/85, el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Ambiental adquiere una posición dentro de la Administración Nacional similar a la de un ministro, aunque limitada, en tanto que forma parte de una estructura ministerial.

3. Estructura Organizativa

5.12 Dentro de la administración nacional, la política habitacional y urbana es definida por el Ministerio de Salud y Acción Social, que cuenta dentro de su estructura con la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, como organismo abocado al análisis y elaboración de los programas de vivienda y su financiación, determinación de planes para el desarrollo urbano y el ordenamiento ambiental, así como el diseño de las políticas e instrumentos necesarios para su gestión. (La estructura organizativa de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento ambiental está indicado en el organigrama reproducido en el Anexo V-2).

5.13 La actual estructura orgánica, que depende del Secretario de Vivienda y Ordenamiento Ambiental cuenta en un primer nivel con un Subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Ambiental y un gabinete compuesto por dos Asesores. El Subsecretario cumple funciones de asistencia ejecutiva y el Gabinete tiene la responsabilidad del asesoramiento directo al Secretario en los temas que a esos efectos le solicite.

5.14 Debajo de este nivel superior, con carácter de política institucional, se despliega la estructura operativa de la Secretaría, según los niveles y normas permanentes de la Administración Pública Nacional. Del Secretario y Subsecretario dependen los Directores, en número de diez, que se puede subdividir en siete del área de Vivienda y Urbanismo y tres de Ordenamiento Ambiental.

5.15 Las funciones de las Direcciones del área de Vivienda y Urbanismo son las siguientes:

- Dirección Nacional de Desarrollo Financiero: entiende en el análisis financiero de proyectos y programas habitacionales. Se ocupa de los estudios y acciones de carácter técnico, económico y financiero tendientes a la proposición de los programas habitacionales del área; asimismo, planifica la asignación de fondos destinados al financiamiento habitacional.

- Dirección Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico: desarrolla la planificación, normatización y fiscalización de los estudios y acciones de carácter tecnológico y de producción del área; como asimismo la promoción y desarrollo de nuevas modalidades constructivas.
- Dirección Nacional de Investigación y Desarrollo Socio-económico: es responsable de planificar, realizar estudios y proponer normas y acciones de carácter socioeconómico, destinados a la elaboración de políticas y planes de desarrollo urbano y vivienda.
- Dirección Nacional de Política Habitacional: elabora y propone los proyectos de políticas y planes habitacionales; asimismo, realizar estudios e investigaciones orientados a la resolución de los problemas habitacionales de la población.
- Dirección Nacional de Planeamiento Urbano: prepara los estudios, análisis y programación de planes de desarrollo urbano, tendientes a definir políticas y acciones que contribuyan al logro de un desarrollo armónico de los asentamientos urbanos, coordinando e integrando los estudios sociológicos, habitacionales, financieros y tecnológicos del área.
- Dirección General de Administración: es responsable del movimiento administrativo del área, de la documentación contable, la contabilidad patrimonial, elaboración de presupuesto y su distribución, atención de las transferencias y libramientos de fondos y la administración del personal.
- Dirección General de Asuntos Jurídicos: se encarga de todo lo relativo al asesoramiento y servicio que en materia jurídica sea necesario para el desenvolvimiento de la SVOA.

5.16 Las funciones de las Direcciones del área de Ordenamiento Ambiental son las siguientes:

- Dirección Nacional de Evaluaciones Ambientales: realiza las tareas de evaluaciones del medio ambiente físico, químico, biológico, con el objeto de mantener una adecuada vigilancia del medio ambiente natural.
- Dirección Nacional de Calidad Ambiental: realiza las acciones destinadas a la formulación de normas de calidad ambiental y en la organización del control de las actividades susceptibles de modificar el medio, a efectos de preservar la salud y los recursos naturales.
- Dirección Nacional de Optimización Ambiental: lleva a cabo las actividades conducentes al diagnóstico de las variables ambientales significativas a escala regional para proponer el marco normativo que contribuye a formular la política nacional de ordenamiento territorial.

5.17 Adicionalmente, dentro del gobierno central existen otras instituciones que colaboran en el desarrollo e implantación de las políticas de vivienda y ordenamiento ambiental:

Comisión de institutos de Vivienda: Esta comisión, creada por Resolución Reglamentaria NB° 71, está presidida por el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Ambiental e integrada por los representantes de los institutos provinciales de Vivienda de cada una de las provincias del territorio nacional y funciona dentro del ámbito de la SVOA, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

Sus atribuciones son las de analizar el Plan Nacional de Vivienda y proponer criterios de desarrollo regional, armónico e integral; impulsar formas permanentes de consulta y coordinar con los organismos responsables de la planificación y ejecución de obras, y analizar y proponer criterios para todas las áreas de acción de la SVOA.

Banco Hipotecario Nacional (B.H.N.) Desde la creación del Ministerio de Bienestar Social, el B.H.N. tuvo diferentes grados de dependencia; en la actualidad depende orgánicamente del Ministerio de Economía, pero mantiene relaciones con la SVOA que se pueden clasificar de:

- política: para el cumplimiento de su objeto, el B.H.N. se rige por las políticas y pautas que en materia de vivienda, edificación y desarrollo urbano fije la SVOA.
- financiera: a los efectos de la administración del Fondo Nacional de la Vivienda, el B.H.N. es el agente financiero exclusivo de la SVOA, asistiendo asimismo en el procesamiento de información y en el sistema de comunicación y apoyo.

4. Personal

5.18 El personal de la SVOA, tiene la siguiente composición:

Composición Actual del Personal de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

Gabinete	2	0,7
Administrativo	185	66,8
Profesional	79	28,6
Maestranza	3	1,0
Servicio	8	2,9
Total:	277	100,0
	===	=====

Cabe mencionar que desde el 1° de enero de 1985 está incluido en esta planta de personal el de la Ex-Subsecretaría de Medio Ambiente.

- 5.19 La evolución del personal de la SVOA en el último quinquenio se indica en el siguiente cuadro:

1980	207
1981	199
1982	189
1983	192
1984	187

5. Fiscalización y Auditoría Externa

- 5.20 El control externo de la marcha general de la Administración Nacional y la Fiscalización y Vigilancia de todas las operaciones financieras patrimoniales del Estado, corresponde según el Decreto Ley 23.354/56, Ley de Contabilidad de la Nación, al Tribunal de Cuentas de la Nación.
- 5.21 La fiscalización de la SVOA es ejercida por el Tribunal de Cuentas de la Nación, el cual actúa en esta jurisdicción a través de una Delegación a cargo de un Delegado Fiscal. Este cuenta con las mismas atribuciones del Tribunal, entre las que se cuenta la de observar los actos administrativos con la consiguiente suspensión del mismo, debiendo en este caso dar traslado para el dictamen definitivo al Tribunal, el que se expedirá en 60 días.
- 5.22 La función central de este organismo consiste en fiscalizar toda erogación que se efectúe en la Administración Pública. Para el caso de la SVOA efectúa tres tipos de análisis de la documentación de egreso del FONAVI:
- cotejar que el concepto de imputación de pago esté previsto presupuestariamente en las cuentas del organismo;
 - controlar la observancia de las disposiciones legales reglamentarias que encuadren el destino de los fondos;
 - verificar la existencia de fondos y analizar el nivel de saldos previstos anualmente.
- 5.23 De esta intervención previa del Tribunal puede emanar la decisión de suspensión del egreso. Otras funciones que ejerce son:
- realizar la declaración de responsabilidades y formulación de cargo, cuando corresponda;
 - informar la cuenta general del ejercicio;
 - aplicar, cuando lo considere procedente, multa a los responsables de transgresiones a disposiciones vigentes, o en caso de desobediencia a sus resoluciones.
- 5.24 Por las características de las operaciones principales de la SVOA, esto es el financiamiento de obras a través de organismos ejecutores

provinciales, es de destacar la existencia de Tribunales de Cuentas de jurisdicción provincial con organización y funciones similares al Tribunal de Cuentas de la Nación.

- 5.25 Aún cuando la SVOA está sujeta a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, como lo estará su Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano, este Tribunal no efectúa labores de auditoría externa de acuerdo a los requerimientos del Banco sobre la materia. Por esta razón, los estados financieros del Programa que deberán ser auditados durante la ejecución del mismo, lo serán por una firma o institución independiente de auditoría que será acordada con el Banco antes del primer desembolso.

6. Conclusión

- 5.26 El análisis del modus operandi de la SVOA es satisfactorio en lo que a los aspectos institucionales se refiere, con las limitaciones que en el manejo financiero se describen más adelante, relacionadas más con las dificultades introducidas por los altos niveles de inflación que con aspectos puramente organizacionales.
- 5.27 Sin embargo, resulta claro de la organización del SVOA que actualmente no cuenta con todos los medios necesarios para llevar a cabo el proyecto que se estudia, que requiere una unidad especializada y con personal experimentado dado el grado de complejidad y extensión del proyecto, y considerando que muchas de sus actividades son ajenas a la modalidad corriente de operar en la SVOA. Por tal razón, como se detalló en el Capítulo precedente, se creará la Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano, que se encargará de la ejecución del Programa.

C. Análisis Presupuestario del Ejecutor

- 5.28 En el ámbito de la gestión presupuestaria de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, puede señalarse que el 99,2% del gasto se financia con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Con respecto a la distribución de gastos se destina el 92,1% a erogaciones de capital y el 7,9% a erogaciones corrientes. Las cifras señaladas permiten apreciar la especificidad de tareas que realiza la Secretaría y su vinculación con la recaudación de un recurso especial cuyo destino se ha establecido a partir de un régimen legal propio.
- 5.29 Se ha considerado de especial interés relacionar también los gastos que realiza la Secretaría en relación a la denominada "Función de Vivienda" en la asignación de créditos que realiza el Gobierno Argentino. Para ello, se han comparado las asignaciones de crédito derivados de los ingresos del FONAVI, con el total de erogaciones que se destinan a la construcción de viviendas en todas las jurisdicciones que componen la administración gubernamental.
- 5.30 Se observa en el Anexo V-3 que el 88,1% del gasto en vivienda que realiza el Gobierno, se efectúa con recursos del FONAVI, que

jurisdiccionalmente está en la órbita de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental bajo el régimen de Cuenta Especial.

- 5.31 En el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social existe también la cuenta especial "Producido Explotación Juegos de Azar" que afecta recursos con el mismo destino a través de planes para la erradicación de viviendas precarias, ranchos y la construcción de viviendas de Servicio en áreas inhóspitas o de especial promoción. La distribución de recursos entre estos dos programas permite inferir que se otorga mayor importancia a los planes de erradicación de ranchos, toda vez que éstos absorben el 96% de los recursos asignados en la Cuenta Especial mencionada.
- 5.32 El otro organismo de cierta relevancia en la asignación de recursos para la construcción de viviendas es el Banco Hipotecario Nacional, aunque los créditos presupuestados representan sólo los gastos de funcionamiento, no reflejando la operativa específica del Banco en cuanto al financiamiento de viviendas.
- 5.33 Desde el punto de vista del financiamiento, el origen del mismo es un 99,7% de recursos con afectación específica, correspondiendo al FONAVI el 88% de los mismos. Es muy baja, por lo tanto, la participación del Tesoro Nacional en el financiamiento de los gastos en vivienda. Dado este esquema de financiamiento, se puede observar que el origen de los recursos que se asignan en el Presupuesto Nacional a la función de vivienda, sin contar los recursos del B.H.N. que sólo financian gastos de funcionamiento, provienen en un 95% de la estructura de recursos instrumentada por la Ley de creación del FONAVI.
- 5.34 El peso principal de las erogaciones recae sobre el FONAVI que representa el 93% de la inversión financiera presupuestada. La asignación de recursos del mismo Fondo en las cuentas de erogaciones corrientes, comporta un 7% de sus ingresos y financia el 86% del total de las erogaciones corrientes que realiza al Secretaría en gastos de funcionamiento, transferencias y bienes y servicios no personales.
- 5.35 En el origen de los recursos del FONAVI, para el ejercicio de 1985, es, esencialmente, de carácter tributario, que participan en un 99,7% respecto del total. Los ingresos provenientes de la recuperación de créditos comportan una participación del 0,3% respecto del total de recursos del Fondo, lo cual, como ya se mencionó anteriormente y se detalla más adelante, es debido a los problemas de alta inflación, que están en vías de solución.

D. FONAVI.

1. Antecedentes

- 5.36 En noviembre de 1972 se sancionó la Ley 19.929 de creación del Fondo Nacional de la Vivienda con recursos provenientes principalmente de

un aporte del 2,5% sobre las remuneraciones del personal en relación de dependencia a cargo del empleador y de la recuperación de las inversiones efectuadas. Se establece en esta ley que los fondos son destinados exclusivamente a financiar total o parcialmente, con garantía real hipotecaria: la construcción de viviendas individuales y colectivas, la adquisición de terrenos, las obras de urbanización, infraestructura, equipamiento social y otras complementarias, el redescuento de créditos hipotecarios y los gastos de las operaciones en que interviene.

- 5.37 En cuanto a las viviendas que se construyan, deben ser exclusivamente "viviendas económicas de interés social", y por decreto reglamentario se establecen las especificaciones técnicas de las mismas. También se determina que solo podrán ser beneficiarios "los sectores de menores ingresos, tanto personas físicas que lo requieran, para construir su vivienda propia y permanente, así como también cooperativas, mutuales, consorcios y otras entidades que no persigan fines de lucro".
- 5.38 Por el Decreto N° 7680/72, reglamentario de esta Ley, el Ministerio de Bienestar Social -Subsecretaría de Vivienda- fué encargado de la aplicación de lo dispuesto por la misma, pudiendo encarar directamente o a través de las entidades previstas la construcción de unidades de vivienda, infraestructura y equipamiento urbano determinando periódicamente los cupos financieros y su distribución para tales programas, establecer un sistema de contralor para verificar la correcta inversión de los fondos. Esta ley convirtió a la entonces Subsecretaría de Vivienda en un organismo de suma relevancia en la operatoria de construcción de viviendas y la consecuente incidencia en la política de construcción de gobierno.
- 5.39 En 1977 se reformularon las prioridades en materia de vivienda con la intención de lograr un ordenamiento del sistema de financiamiento de vivienda económica a través del FONAVI, para lo cual se dicta la ley 21.581, modificatoria de la precedente Ley 19.929.

Los cambios destacables fueron:

- eliminación de la garantía de hipoteca para obras financiadas;
- circunscribir a la SVOA el ámbito de la planificación general de la acción y distribución de recursos, quitándole responsabilidad operativa;
- derivar la operación a los organismos provinciales que en cada jurisdicción deben tener a cargo la ejecución y administración de los programas.
- determinar el nivel socio-económico de los adjudicatarios de las viviendas;
- elevar la contribución patronal sobre las remuneraciones del 2,5% al 5%, y

- garantizar el reintegro del crédito otorgado a las instituciones provinciales con la afectación de los impuestos federales compartidos.

5.40 Según dispuso la Ley 21.581 el FONAVI continúa en jurisdicción de la SVOA, que constituye el organismo de aplicación de esta ley, con facultad para dictar las normas reglamentarias y aclaratorias que considere necesarias para el cumplimiento de los objetivos del FONAVI (Art. 1 y 2), dotando de esta forma a la autoridad de aplicación de la facultad de reglamentar la ley, lo que permite su adaptación permanente.

2. Régimen Financiero

(a) Recursos y Erogaciones

5.41 De acuerdo con el régimen legal vigente, los recursos del Fondo se integran con:

- una contribución equivalente al 5% de las remuneraciones, cualquiera sea la condición y característica del empleador y su ámbito de actuación. Comprende, por lo tanto, a empresas y entidades del sector público y privado.
- una contribución equivalente al 20% de los importes que los trabajadores autónomos tributan en carácter de obligación previsional.
- los recursos provenientes de la recuperación de inversiones realizadas incluyendo intereses y reajustes por depreciación del signo monetario.
- otros recursos generales y especiales, como donaciones y legados, multas o convenios resarcitorios y regímenes de aportes que se pudieran establecer con este fin.

5.42 Se puede apreciar que los recursos del FONAVI se originan fundamentalmente en contribuciones impositivas y recuperaciones de inversiones realizadas con anterioridad y enajenadas de acuerdo con las prescripciones de la ley. Tal como se examinará en el apartado destinado al análisis de la evolución del FONAVI, los recursos de origen fiscal constituyen la parte más importante de los ingresos del mismo.

5.43 Los recursos así obtenidos pueden ser utilizados en:

- construcción de viviendas económicas para familias de recursos insuficientes.
- ejecución de obras de:
 - . Urbanización
 - . Infraestructura
 - . Servicios

- . Equipamiento Comunitario
- . Obras Complementarias de programas comprendidos en el régimen de la ley.
- redescuento de créditos hipotecarios generados por programas u operatorias realizadas en el marco de la misma ley;
- contratación de servicios técnicos y profesionales;
- fomento y participación en programas de investigación y desarrollo tecnológico;
- provisión de componentes destinados a la construcción de viviendas para familias de recursos suficientes;
- otras erogaciones necesarias para el cumplimiento de los fines establecidos en el régimen legal, con excepción de los gastos de personal de la SVOA.

(b) Contribuciones Fiscales

- 5.44 Los aportes correspondientes a las contribuciones fiscales que se calculan sobre sueldos y salarios abonados e ingresos de los trabajadores autónomos, deben recaudarse a través de la Dirección Nacional de Recaudación Provisional. En la práctica, esta situación se verifica para las empresas privadas, empresas pertenecientes al Estado y trabajadores independientes.
- 5.45 Las contribuciones que realizan los organismos y dependencias del Gobierno Nacional se transfieren a través de la Tesorería General de la Nación y las que corresponden a los Gobiernos Provinciales en cuentas especiales del B.H.N. a la orden de SVOA.
- 5.46 Los fondos que se recaudan a través de la Dirección nacional de Recaudación Previsional se liquidan mansualmente sobre un equivalente al 4,3% de los salarios, efectuándose el ajuste (el 0,7% restante), dentro de los 90 días de realizada la conciliación definitiva de saldos en el Organismo recaudador. La recepción de los fondos se verifica regularmente en la tercera semana del mes siguiente al que se efectuó el cálculo correspondiente. Si bien la normativa legal establece que las contribuciones al FONAVI están sujetas a las mismas modalidades y fecha de pago, intereses, recargos y actualizaciones monetarias establecidas para el régimen de aportes jubilatorios, en la práctica se verifican desfases entre ambos tipos de aportes, lo que obliga a efectuar las liquidaciones trimestrales de ajustes de contribuciones antes mencionadas.
- 5.47 Las transferencias de la Tesorería General de la Nación, se realizan por remesas parciales, imputándose a cada organismo a medida que se verifican los respectivos libramientos de pago. El cálculo se realiza en base a la aplicación del 5% sobre la nómina de salarios abonados por los organismos pertenecientes al Gobierno Nacional (Ministerios, Secretarías y Organismos dependientes centralizados y

descentralizados) verificándose su recepción entre 30 y 90 días después del mes correspondiente a dicho cálculo.

- 5.48 Los depósitos que realizan los gobiernos provinciales, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Tierra del Fuego en el B.H.N. se calculan en forma similar, siendo de acreditación inmediata una vez que se realizan. El comportamiento de este capítulo de los Recursos no puede ser uniformado, toda vez que la capacidad contributiva suele estar afectada por las diversas situaciones que se presentan en la ejecución presupuestaria de cada Estado Provincial.

(c) Recuperación de Inversiones Realizadas

- 5.49 El régimen del FONAVI establece dos formas básicas de recuperación de los fondos invertidos:

- por enajenación de viviendas;
- por transferencias de obras de urbanización, infraestructura, servicios a las instituciones públicas encargadas de su operación y mantenimiento.

- 5.50 Estas actividades se rigen por los siguientes principios:

- los procedimientos para el cálculo de los precios de venta y/o transferencia, consignan que los mismos cubrirían la totalidad de los costos directos de la obra.
- los criterios para la actualización de los saldos deudores por desvalorización del signo monetario, establecen que los mismos serán reajustados semestralmente de acuerdo a la evolución del índice de salarios del peón industrial de la Capital Federal, que elabora el INDEC.
- los plazos de devolución para la transferencia a título oneroso de las obras de infraestructura y urbanización, no pueden ser mayores de 10 años y los plazos mínimos para la amortización de saldos deudores por enajenación de vivienda (30 años).
- existe la responsabilidad de los Gobiernos Provinciales relacionadas con la obligación de reintegrar al FONAVI los importes que corresponden en conceptos de amortizaciones por obras de viviendas construídas y enajenadas en su jurisdicción, pudiéndose garantizar tales obligaciones mediante la afectación de los impuestos federales coparticipados o cualquier otro crédito. En el caso de las obras de infraestructura, la Secretaría de Vivienda puede convenir las condiciones particulares de su transferencia con los organismos prestatarios de los servicios.

- 5.51 El valor práctico de la normativa expuesta se vio considerablemente afectado por las condiciones inflacionarias bajo las que se

desenvolvió la economía argentina durante los últimos años, dado que los reajustes semestrales de las deudas, contemplados en la ley, resultaron insuficientes para cubrir los efectos de aumentos de costos que se verificaron mensualmente en las obras financiadas con recursos del Fondo y los retrasos en la recepción de los recursos limitó significativamente el valor de las recuperaciones recibidas como se detalla más adelante.

(d) Intermediarios autorizados por el Régimen Legal

5.52 Son agentes del FONAVI:

- el Banco Hipotecario Nacional, que actúa como agente financiero y mandatario de la SVOA a los fines de la centralización de la recaudación y libramientos de fondos.
- los institutos de vivienda que pertenecen a la esfera de cada Gobierno Provincial, en todo lo concerniente a la ejecución de los proyectos y su adjudicación.
- finalmente, la SVOA puede designar a otras entidades, dependiendo del tipo de proyecto que se ejecute.

El Fondo abona de sus recursos comisiones equivalentes del 1% al 3% respectivamente, sobre el monto de las operaciones encuadradas en el mandato.

(e) Sistemas operativos

5.53 La SVOA es el organismo administrador del FONAVI, facultado para recepcionar a su nombre en el B.H.N. los fondos establecidos por la ley y además, dentro de las consideraciones legales expresas, a establecer las normas reglamentarias que considere necesario para el uso de los poderes en el cumplimiento de los objetivos determinados por la Ley 21.581 (FONAVI).

5.54 En la operativa general de recaudación, asignación de recursos determinada por la SVOA, tiene participación relevante la Dirección General de Administración, la que se ocupa del seguimiento de la documentación y el registro y control de las imputaciones de las operaciones. El B.H.N. es el agente financiero de la SVOA para operatoria FONAVI, sirviendo de apoyo para la generación de estados de saldos y control inicial de la documentación sobre ingresos y egresos.

5.55 Ingresos: de los ingresos al FONAVI, establecidos por ley y ya descriptos, el más significativo es el originado en las contribuciones sobre remuneraciones, siguiéndole los ingresos por recuperaciones.

Todos los recursos ingresan en las cuentas corrientes de la SVOA en el B.H.N. del que obtiene saldos diarios y genera la información sobre estados financieros y el seguimiento de la ejecución de la planificación.

- 5.56 Desembolsos: los pagos efectuados por la SVOA dentro del sistema FONAVI, los realiza a través del B.H.N., por transferencia a los Organismos Ejecutores, que son los responsables de los pagos a las empresas constructoras. La programación de pagos se realiza en función del estado de disponibilidades informado por la Dirección Nacional de Desarrollo Financiero. En base a este plan y previo control de la documentación, el Departamento de Contabilidad efectúa el libramiento de pagos para que el B.H.N. transfiera los fondos.

3. Análisis de los Ingresos del FONAVI

(a) Ingresos por recuperarse

- 5.57 El análisis que sigue está básicamente influido por la política de recuperaciones seguida con los fondos de FONAVI en el período. En efecto, para ese período se había establecido que además del interés del 1.5% mensual sobre capital ajustado en los contratos individuales, los recuperos deberían ajustarse semestralmente en función de la variación del índice del peón industrial elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- 5.58 El mecanismo de reajuste semestral determinado por la ley, representa una pérdida para el sistema que puede tener poca significación en épocas de bajas tasas de inflación, y no resultan tan inconvenientes si se consideran los costos operativos de establecer indexación mensual. Sin embargo, con las elevadas tasas de inflación, como las vividas por el país en los últimos años, puede llegarse a una reducción de la recaudación semestral del orden del 50% en términos reales.
- 5.59 Por otra parte, los mecanismos operativos determinan una segunda pérdida para el sistema cuya significación crece a medida que aumenta la inflación. En efecto, existe el semestre de gracia, por el cual el comprador comienza a pagar las cuotas en el semestre siguiente al de la adjudicación. En tercer lugar la cobranza de las cuotas está a cargo de los institutos provinciales, que disponen de un período de gracia establecido contractualmente para efectuar las transferencias de los recuperos al FONAVI. El promedio de este plazo en los contratos vigentes es de 6 meses.
- 5.60 Estos tres factores resultan en una pérdida para el sistema y un subsidio para los adjudicatarios y para los institutos, cuya importancia depende de las tasas de inflación. La evolución de las recuperaciones de FONAVI desde su creación ha sido la siguiente:

Recuperación de las Cuotas del FONAVI

<u>A ñ o</u>	<u>% de Ingresos Tributarios</u>	<u>Miles US\$ constantes de junio del 85 (BHN)</u>
1979	0,1	522
1980	1,6	9.950
1981	4,1	17.200
1982	2,1	10.800
1983	1,1	5.700
1984	,8	3.500
1985	,5	2.600
85/1-SEM	0,5	870
85/2-SEM	0,6	1.750

- 5.61 En este cuadro puede verse que en 1985 se mantuvo la tendencia decreciente de los mismos si se considera el total del año. Sin embargo, se puede también verificar un salto importante entre el primer y segundo semestre, que refleja por un lado la caída de la tasa de inflación y por el otro la aplicación de índices reales de reajuste, ya que los ingresos del segundo semestre corresponden a pagos efectuados por los beneficiarios en el primer semestre, cuando el reajuste aplicado a las cuotas superó al aumento del índice de la construcción del BHN. Pese a todo ello las recuperaciones solo significan para 1985 el .32% de los ingresos tributarios de FONAVI para 1985.

(b) Ingresos por Recaudación Fiscal

- 5.62 La recaudación fiscal del FONAVI en los últimos siete años es como sigue:

Recaudación FONAVI 1979 - 1985 (*)

<u>A ñ o</u>	<u>Millones US\$ constantes de junio del 85 (BHN)</u>
1979	443,6
1980	512,6
1981	338,4
1982	415,5
1983	421,5
1984	360,5
1985	437,5
85/1-SEM	160,2
85/2-SEM	277,3

(*) Incluye recaudación previsional y aportes de la Secretaría de Hacienda no reintegrables.

- 5.63 En términos reales, existe una tendencia decreciente en la recaudación hasta 1984. Indudablemente en la reducción de la recaudación influyó también el crecimiento de la tasa de inflación y

la reducida incidencia real de las penalidades por el atraso en el ingreso de las recaudaciones. Sin embargo, ante la estabilización económica del Plan Austral, la recaudación del año 1985 superó en más de un 21% al año 1984. Por otro lado, la recaudación del segundo semestre superó en un 72% a la del primer semestre, consecuencia de la aplicación del Plan Austral y de una mayor eficiencia operativa.

4. Proyecciones Financieras de FONAVI.

- 5.64 Las proyecciones financieras del FONAVI que se analizan a continuación fueron elaboradas a efectos de determinar la capacidad financiera del Fondo de hacer frente a sus obligaciones regulares y de aportar los recursos asignados como contrapartida local al Programa.

(a) Proyecciones de las recaudaciones de FONAVI

- 5.65 Las recaudaciones mensuales de todo el año 1985 y del primer trimestre de 1986 dan una clara noción del incremento producido en las recaudaciones FONAVI como resultado del plan Austral. En el cuadro se verifica que el crecimiento producido en el tercer trimestre no se debió exclusivamente a compensación de atrasos, toda vez que en el cuarto trimestre el nuevo nivel alcanzado no solo se mantuvo, sino que se produjo un nuevo incremento. En dólares, la recaudación media mensual, en el primer semestre de 1985 fue de 34,8 millones, creció en el tercer trimestre a 49,0 millones, en el cuarto a 56,9 millones y en el primer trimestre de 1986 a 65,5 millones.

Recaudación real FONAVI

<u>A ñ o</u>	<u>MES</u>	<u>Miles Dólares Corrientes</u>
1985	Enero	47.519
	Febrero	36.468
	Marzo	37.745
	Abril	31.463
	Mayo	30.515
	Junio	25.107
	Julio	48.451
	Agosto	54.282
	Septiembre	45.167
	Octubre	62.959
	Noviembre	53.815
	Diciembre	53.815
1986	Enero	72.543
	Febrero	62.119
	Marzo	61.866
	Total	723.957

- 5.66 Evidentemente, considerar la recaudación del año 1985 como base para las proyecciones no es realista, ya que el total del año es muy inferior al valor que resultaría de proyectar el segundo semestre. Se debe entonces partir de un valor basado en la recaudación del segundo semestre del 85 y los datos disponibles para 1986. La recaudación del primer trimestre del 86, puede ser proyectada al año entero considerándose que el año tiene 13 meses (por el aguinaldo), que al ser pagado con los sueldos de junio y diciembre se refleja en las recaudaciones de enero y julio. Para elegir un punto de partida más conservador, se ha supuesto que en el año 86 la recaudación será una media entre la proyección del primer trimestre y la proyección del segundo semestre del 85, que da un total de US\$638 millones (no se ha tomado en consideración para esta proyección el incremento registrado en el primer trimestre de 1986).
- 5.67 Las proyecciones de las recaudaciones anuales del FONAVI han sido efectuadas en base a su relación histórica con el PBI y al crecimiento de este indicador (a efectos de estas proyecciones se supuso un crecimiento muy modesto del 1% anual; de ser este porcentaje superior, la situación sería aun más favorable de lo indicado a continuación):

Proyección de las Recaudaciones Anuales del FONAVI

(en millones de dólares de Junio de 1985)

<u>A ñ o</u>	<u>Recaudación</u>
1986	685,0
1987	697,3
1988	709,9
1989	723,1
1990	736,4
1991	750,0

(b) Proyección de las Recuperaciones

- 5.68 Las recuperaciones en el segundo semestre de 1985 superaron las previsiones, alcanzando un total de 1,4 millones de australes, valor que se toma como base para las nuevas proyecciones. Debe tomarse en cuenta, como ya se dijo, que este valor corresponde a los pagos efectuados por los beneficiarios en el primer semestre, o sea, antes de la implantación del Plan Austral. Como ya se explicó en el párrafo la poca significación de los recuperos de la cartera existente menor al el .4% de los ingresos de FONAVI torna despreciable cualquier variación, por importante que la misma fuese.

(c) Factibilidad de los aportes del FONAVI al Programa

- 5.69 Para la elaboración de las proyecciones se han considerado los datos reales del segundo semestre de 1985. Como regla general, se establece una separación entre obras iniciadas y obras a iniciar, diferenciando compromisos ya asumidos de los que serán asumidos en el

futuro. Se ha optado por establecer el corte al 30/06/85, aplicando a las obras iniciadas en el segundo semestre de 1985 los mismos criterios sobre inversiones programadas que en las obras nuevas, ya que existe una notoria diferenciación de criterios y costos partir del segundo semestre de 1985.

- 5.70 Los resultados de las proyecciones, en miles de dólares de junio de 1985, se presentan en el Anexo V-5, donde se puede observar que además de la cobertura de sus programas regulares, el FONAVI podrá atender programas extraordinarios de vivienda y atender los requerimientos de contrapartida del programa.
- 5.71 Los saldos que muestran estas proyecciones, para los primeros 5 años de desembolsos de la operación indican que existirían fondos suficientes para hacerle frente a la obligación de US\$180.000.000 en los años 1987 - 1991, a que alcanzarán las contrapartidas nacionales al proyecto, todo ello manteniendo un nivel de construcción de viviendas más alto que el existente hasta el presente.
- 5.72 En efecto, dichas proyecciones muestran disponibilidades acumuladas en cada año superiores a las necesidades de contra partida local del Programa.

(US\$ millones)

<u>Años</u>	<u>Saldo Disponible</u>	<u>Requerimientos de contrapartida (acumulados)</u>
1987	375,1	11,7
1988	362,6	53,0
1989	316,3	107,4
1990	292,3	151,9
1991	291,3	178,0

- 5.73 Desde el punto de vista financiero, los recursos se estiman disponibles, y como se detalla en el Capítulo III, desde el punto de vista legal, tales recursos han sido ya asignados al Programa, contándose con la no objeción del Tribunal de Cuentas de la Nación para su utilización en las actividades previstas.

CAPITULO VI. JUSTIFICACION DEL PROGRAMA

- 6.01 Con base en el análisis efectuado, se puede concluir que la ejecución del Programa propuesto sería factible. A continuación se resumen los principales resultados del análisis de factibilidad realizado, desde los puntos de vista técnico, institucional, financiero y socio-económico. Asimismo, se presentan los resultados de la evaluación socio-económica de los proyectos específicos que constituyen una muestra de las operaciones que se financiarían con los recursos del Programa.

A. Viabilidad Técnica

- 6.02 Durante el análisis del Programa, se pudo verificar el estado de preparación de los diferentes proyectos de la muestra y el trabajo desarrollado por la Unidad de Formulación del Programa en la SVOA. Este trabajo abarcó desde la promoción e identificación de potenciales proyectos hasta el análisis de la documentación recibida de las diferentes provincias, suministrando, en muchos casos, asistencia técnica sobre aspectos de diseño y preparación de las solicitudes de crédito. Dicha actividad representó, al mismo tiempo, un valioso ejercicio para la SVOA que supo aprovechar las recomendaciones de las Misiones del Banco en lo relacionado con el procesamiento de los documentos de respaldo a las solicitudes presentadas.
- 6.03 Lo anterior cubre un aspecto muy importante que se deberá continuar durante la ejecución del Programa, ya que los recursos a ser establecidos por los proyectos de la muestra corresponden a aproximadamente un 22% de lo que se estima será el monto total del Subprograma de Obras, quedando por efectuar el análisis de los demás proyectos del universo a financiar, como efectivamente se está procediendo con los que no formaron parte de la muestra, por estar en trámite.
- 6.04 Otro aspecto a destacar corresponde a la capacidad de ejecución de los subprestatarios por sí mismos o por intermedio de las entidades ejecutoras, lo que marcará la intensidad de la marcha del Programa. Al respecto, tomando como indicativo lo observado en las ciudades visitadas durante la Misión de Análisis se estima que hay buenas perspectivas de que la marcha de los trabajos se efectuará satisfactoriamente, dada la experiencia de los ejecutores en la construcción de obras similares y la prestación de los respectivos servicios, así como la necesidad de las obras a ejecutarse. Este Programa que se presenta después de muchos años en los que la atención a la demanda de infraestructura y equipamientos urbanos no ha sido lo suficiente y donde los déficits se han incrementado en todos los sectores, por lo que se harán los esfuerzos necesarios para lograr una ejecución eficiente de las obras.

B. Viabilidad Institucional

- 6.05 El Programa será administrado por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, a través de la Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano (OPDU) que será específicamente creado con este propósito por medio de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. El mismo Decreto establecerá la Cuenta Especial, en la cual serán depositados los fondos de los eventuales préstamos del Banco y los recursos de contrapartida del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), así como las recuperaciones de los subpréstamos otorgados por el Programa. Estos proyectos, a su vez, serán preparados y ejecutados por entidades de los gobiernos provinciales o municipales, siguiendo la orientación de la OPDU.
- 6.06 No obstante lo señalado, paralelo al Subprograma de Obras para el financiamiento de proyectos específicos de infraestructura y equipamientos urbanos, se ha previsto un Subprograma de Asistencia Técnica con la finalidad de apoyar los eventuales subprestatarios en la identificación y preparación de estos proyectos, así como en el mejoramiento de la administración de los servicios urbanos. Además del objetivo general de fortalecimiento institucional de las entidades involucradas en la preparación y/o ejecución de proyectos de desarrollo urbano a nivel provincial y municipal, este componente garantizaría un flujo adecuado de proyectos elaborados de acuerdo con las guías sectoriales y el Reglamento de Crédito del Programa. De esta forma, por lo tanto, se aseguraría el cumplimiento de los cronogramas de compromiso y desembolso de recursos que se han previsto para el Programa.
- 6.07 Se ha acordado con la SVOA la organización interna de la OPDU y se ha analizado las funciones y actividades de las diversas Direcciones de esta Oficina, así como el número y perfil profesional del personal permanente requerido para la operación del Programa, encontrando a ambos satisfactorios. Asimismo, como se trata de un programa nuevo y complejo, que aplicará procedimientos de análisis y gestión de proyectos distintos de los utilizados por la Secretaría hasta la fecha, se propone apoyar la OPDU mediante el financiamiento de un conjunto de asesores especializados utilizando recursos del Banco y del PNUD. Estos asesores capacitarán los funcionarios permanentes de la OPDU y los apoyarán en la conducción del Programa durante sus años iniciales de ejecución.
- 6.08 Como parte del proceso de análisis de los proyectos específicos presentados al Programa para su eventual financiamiento, por otro lado, los integrantes de la OPDU determinarán la capacidad de ejecución - y de operación de los servicios resultantes - de las instituciones locales involucradas en cada proyecto, con base en los criterios y metodologías establecidas en el Reglamento de Crédito del Programa. Para cada proyecto aprobado, adicionalmente, se establecerá una Unidad Ejecutora específica a nivel local con la responsabilidad de administrar el proceso de ejecución del mismo, de acuerdo con las orientaciones de la OPDU que, a su vez, será responsable por el seguimiento y control de cada proyecto a nivel central.

- 6.09 Finalmente, es relevante observar que la nueva Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano deberá incorporar la mayor parte del personal y toda la experiencia de la Unidad de Formulación del Programa que ha operado en la SVOA desde junio de 1985 con recursos del Gobierno Argentino y del PNUD. Esta Unidad, en un período relativamente corto de tiempo, ha establecido las bases para la creación y operación del Programa propuesto y ha identificado y analizado un conjunto importante de proyectos específicos en diversos sectores, lo que asegurará el oportuno compromiso y desembolso de los recursos del Programa. Con base en las observaciones anteriores, se considera institucionalmente viable el presente Programa.

C. Viabilidad Financiera

1. Conclusión

- 6.10 Luego de los análisis realizados se puede concluir que el Programa propuesto es financieramente factible. Las razones principales que llevan a esta conclusión son las siguientes:
- (a) las fuentes del aporte local, sobre todo el FONAVI, son más que suficientes para atender las necesidades del Programa (ver las proyecciones financieras del FONAVI en la Sección D.4 del Capítulo anterior) y los recursos requeridos ya están legalmente comprometidos al Programa y su obtención es financieramente factible;
 - (b) el sistema de mantenimiento de valor de los subpréstamos, acompañado por una política de tasas de interés reales positivas dentro de un marco económico de inflación moderada, son base para considerar que los recursos del Programa no han de reducirse en términos reales (ver proyecciones financieras del Programa en párrafo 6.11);
 - (c) por otra parte, el sistema que ya está operando en el análisis financiero de las operaciones específicas por parte de los integrantes de la Unidad de Formulación del Programa - y que ha de mejorar con la aplicación del Reglamento de Crédito acordado con el Banco - asegurará un amplio respaldo a las decisiones pendientes acerca de la capacidad financiera, no solo de los proyectos, sino también de los subpréstamos;
 - (d) el régimen de garantías que se establecerá no solo por las Provincias, sino también mediante la afectación de fondos o recaudaciones especiales en cada caso, han de coadyuvar a la seguridad financiera del Programa;
 - (e) la experiencia que se ha logrado en el manejo de fondos de este tipo a altos niveles de inflación ha llevado al equipo que deberá integrar la OPDU a tener profundo entendimiento de las causas del deterioro en términos reales de los mismos, así como de la necesidad de establecer mecanismos tendientes

a evitar repetición de problemas como los que han ocurrido en el pasado; y

- (f) la estructura y composición que se está dando a la parte institucional del Programa deberán asegurar un manejo financiero de alto nivel.

2. Proyecciones Financieras

- 6.11 Los hechos principales en lo que se refieren a las proyecciones financieras para el componente de créditos del Programa son los que se indican a continuación. A efectos de llevar a cabo las proyecciones financieras, las amortizaciones de los préstamos, que son de hasta 15 años, se han agrupado en tres categorías: "A" corresponde a los préstamos que se amortizan en 10 años, "B" para los 12 años y la "C" para los de 15 años, todos con un período de gracia y con capitalización de intereses de 2 años. Las otras condiciones financieras de los subpréstamos son una tasa de interés del 9.5% y una Comisión de Inspección y Vigilancia del 1%. A los efectos de diferenciar claramente las operaciones correspondientes al Programa inicial de las reinversiones, estas se efectúan en la categoría "D", al cual son transferidos todas las recuperaciones (amortizaciones de los créditos) de las otras categorías y en el cual son también reinvertidos los saldos de caja excedentes.
- 6.12 En los Anexos VI-1, VI-2 y VI-3 se muestran las proyecciones del Estado de Resultados y del Estado de Origen y Aplicación de Fondos del Programa y del Estado de Situación, respectivamente, por un lapso de 10 años.
- 6.13 Estas proyecciones indican Estados de Resultados favorables para todo el período analizado excepto en los dos primeros años. Se estima que, en los 10 primeros años de operación del Programa, el total de ingresos llegará al equivalente de US\$183 millones, mientras que los gastos alcanzarán a US\$117 millones, arrojando una utilidad neta en dicho período de US\$66 millones (hay que recordar que la mayor parte de los recursos del Programa son en forma de aportes de capital).
- 6.14 Se estima que las colocaciones alcanzarán al equivalente de US\$398 millones en el período de 10 años analizado, siendo la cartera total neta al final del período de US\$256 millones. Los índices generales del Programa son los siguientes:

INDICES DEL PROGRAMA

AND:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ENDEUD. TOTAL VECES	3.75	1.47	1.05	0.84	0.78	0.70	0.62	0.54	0.47	0.40
% REND. CARTERA VIGENTE P.	5.09%	6.16%	7.20%	8.26%	8.87%	9.68%	9.68%	9.65%	9.63%	9.66%
% REND. CARTERA BRUTA PRO.	9.50%	9.40%	9.55%	9.63%	9.28%	9.32%	9.29%	9.29%	9.28%	9.27%
% REND. TOTAL ACTIVO PRO.	-15.09%	-4.48%	3.12%	7.67%	2.19%	2.50%	2.85%	3.32%	3.79%	4.26%
% REND. CAPITAL NETO PRO.	-71.75%	-12.87%	6.79%	14.71%	3.96%	4.35%	4.74%	5.26%	5.71%	6.11%
% UTILIDAD NETA/TOTAL ING	-311.41%	-62.72%	31.99%	60.94%	25.57%	29.15%	33.40%	38.97%	44.47%	50.06%
% GTOS. FINC./INTER. GANADO	321.06%	115.28%	65.92%	51.44%	47.28%	44.60%	41.88%	38.88%	35.72%	32.43%
% GTOS. ADM./TOTAL INGRESO	70.00%	17.47%	7.09%	3.32%	3.67%	2.54%	2.64%	2.68%	2.73%	2.77%
% GTOS. ADM./CART. BRUT. PRO	8.05%	1.87%	0.83%	0.48%	0.35%	0.24%	0.25%	0.25%	0.26%	0.26%

6.15 Puede verse en estos índices, que, a partir del tercer año luego de haber pasado los gastos iniciales de puesta en marcha del Programa, existirá una situación satisfactoria. Asimismo puede verse a lo largo del período, que el Programa baja su endeudamiento a medida que se van capitalizando utilidades y pagando los préstamos del BID.

6.16 Los rendimientos sobre la cartera también se mantienen prácticamente estabilizados, descendiendo los rendimientos sobre activos y capital neto. Los gastos financieros bajan con relación a los intereses ganados a medida que aumenta la cartera y disminuyen las deudas, y al disminuir los intereses a pagar aumenta el porcentaje de la utilidad neta sobre el total de los ingresos. Frente a ingresos totales del 8,93% de la cartera, los gastos financieros absorben en promedio el 3,99%, los gastos del Programa el 0,36% y los gastos institucionales el 0,1%; así como la amortización de la cooperación técnica alcanza al 0,04, resultando un gasto con relación al promedio de la cartera del 6,03% y una utilidad neta del 3,38%. La tasa de interés mínima para hacer frente a los gastos debería alcanzar el 6,57% de la cartera, estando en cambio ubicada al 8,73%, lo que indica la robustez financiera del Programa.

D. Viabilidad Socio-económica

1. Introducción

6.17 El Programa, que consiste en el establecimiento de un mecanismo financiero y de apoyo técnico para la identificación, preparación y realización de obras de infraestructura y equipamiento urbano, responde a una brecha que existe entre (a) la necesidad de realizar proyectos de desarrollo urbano y (b) la capacidad técnica de formular estos proyectos, por parte de las entidades provinciales y municipales responsables, particularmente para las ciudades intermedias y pequeñas, así como (c) la disponibilidad de fondos para financiar la ejecución de los proyectos formulados. La magnitud de

esta brecha se deduce del análisis de demanda resumido en la Sección C del Capítulo 3 de este Informe.

- 6.18 A continuación se describen los resultados de la evaluación socioeconómica del Programa propuesto. En la primera sección se comparan las situaciones "con" y "sin" el Programa y se resume el impacto general de éste, derivable de los distintos análisis al cual ha sido sujeto. En la segunda sección se presentan los resultados de la evaluación de la muestra indicativa de proyectos, hecha ésta con el doble propósito de: (a) evaluar la capacidad de análisis del equipo económico de la SVOA que participó en la preparación y análisis de la muestra; y (b) obtener una indicación de la rentabilidad e impacto distributivo del Programa.

2. Comparación de Situaciones Con y Sin el Programa

- 6.19 La situación "con programa" se define como una en la cual se establece el mecanismo financiero propuesto y, al mismo tiempo, se procede a dar apoyo técnico para la elaboración de proyectos, así como financiar la ejecución de los proyectos de inversión ya preparados. En base a los análisis de (a) la demanda efectiva para los recursos del Programa, (b) la muestra indicativa de proyectos, así como (c) la capacidad operativa y analítica del ente financiero propuesto, se estima que, al ejecutarse el Programa, la inversión en proyectos ascendería a un promedio de US\$60 millones anuales, durante los cinco años de su ejecución.
- 6.20 La actividad descrita comprendería lo siguiente: (i) la generación de estudios de preinversión y, por ende, la generación de más y mejores proyectos candidatos a ejecución; (ii) la ejecución de proyectos encontrados técnica, económica, y financieramente factibles; (iii) un avance en el sentido de la progresiva racionalización del consumo de los servicios públicos mediante las condiciones tarifarias a imponerse con el Programa, así como por la introducción de micromedición en los sistemas de agua potable; y (iv) el desarrollo de la capacidad técnica y financiera de las entidades gubernamentales provinciales y municipales que participarán en el Programa.
- 6.21 La situación "sin programa" se define como una en la cual las acciones anteriormente descritas no se cumplen y los recursos destinados al Programa quedarían liberados para ser invertidos en proyectos marginalmente rentables, los cuales, sean del sector o no, en general, no contarían con los mecanismos de recuperación previstos para el Programa propuesto. Esto, a su vez, implica que no se generarían, de manera automática y continua, los fondos de inversión que resultarían en la situación con el Programa.
- 6.22 De lo anterior se deduce que el Programa es socialmente rentable por varios motivos. En primer lugar, el Programa fomentará la actividad de preinversión por lo cual será posible obtener una canasta de mayor tamaño de proyectos candidatos a ejecución, y así posibilitar el mejor uso de fondos de inversión. En segundo lugar, los proyectos a financiarse, en general, tendrían una rentabilidad económica que

excede el costo de oportunidad de capital en sus usos alternativos, lo cual garantizaría un beneficio neto para la sociedad. En tercer lugar, se espera que el Programa jugará un papel importante en avanzar la racionalización del consumo de servicios públicos a través de la política tarifaria de la OPDU (que estipula tarifas más en acorde con los costos de la expansión de los sistemas). Esta racionalización eventualmente podría significar ahorros importantes que se derivan de la optimización (en el tiempo) de las inversiones en estos sectores. Finalmente, el desarrollo que se produce de la capacidad técnica y financiera de distintas entidades participantes en el Programa, resultaría en una "externalidad" positiva, cuyo impacto se materializaría a través de la buena formulación y ejecución de futuros proyectos.

3. Análisis de la Muestra

- 6.23 Como se menciona anteriormente, los objetivos del análisis de la muestra son de: (a) evaluar la capacidad de análisis del equipo económico que se integrará a la OPDU; y (b) obtener una indicación de la rentabilidad e impacto distributivo del Programa. En lo que corresponde a la extrapolación de resultados, se menciona que, debido a que el universo potencial de proyectos se encuentra en distintos estados de preparación y, por lo tanto, no puede ser conocido más allá de la información presentada en la sección sobre Demanda y Dimensionamiento en el Capítulo 3 de este Informe, la muestra de 14 proyectos, correspondientes a los distintos sectores del Programa, es únicamente indicativa.
- 6.24 Tomando en consideración que el universo de proyectos potencialmente elegibles, aunque no totalmente conocido, es de una dimensión bastante superior al que se podría financiar con los recursos del Programa, (véase Sección C del Capítulo 3) y que, durante la ejecución del Programa se aplicarían criterios de selección y procedimientos de formulación similares a los aplicados en la selección de los proyectos de la muestra (lo que está previsto a través del Reglamento de Crédito del Programa), se puede esperar que los proyectos a financiarse con el Programa guarden similitud con los proyectos de la muestra. Por este motivo, se anticipa que los resultados obtenidos de su evaluación guardarán relación con los resultados a obtenerse del Programa como un todo.

(a) Capacidad de Análisis de la Unidad de Formulación del Programa

- 6.25 El equipo de economistas que participaron en la preparación y análisis de la muestra es bastante competente en el área de análisis de proyectos. En todos los casos, el equipo investigó adecuadamente la demanda para los servicios del proyecto en su área de influencia directa, buscó soluciones de mínimo costo, y, en algunos casos, como consecuencia del análisis efectuado por el equipo, los proyectos sufrieron reformulaciones para que éstos resulten económicamente factibles. Para el componente de equipamientos comunitarios se halló que en general los análisis hechos eran rigurosos y completos. En

algunos de los análisis de los proyectos de servicios públicos, se detectó que faltaría afinar las definiciones de las situaciones con y sin proyecto, de manera tal de identificar correctamente los costos y beneficios. En particular, cuando se trata de un proyecto de distribución, se deberá identificar adecuadamente, para la situación sin proyecto, la fuente y el uso proyectado del recurso a distribuirse. Esto, a su vez, permitirá identificar el verdadero costo de oportunidad de ese recurso.

(b) Indicación de Rentabilidad e Impacto Distributivo de los Proyectos

- 6.26 Los proyectos de la muestra se analizaron utilizando metodologías convencionales de evaluación económica, calculándose la tasa interna de retorno económico (TIRE) para todos los proyectos salvo los de equipamientos comunitarios en donde se hizo un análisis de costo-eficiencia. Para los proyectos de agua potable se utilizó el modelo SIMOP del Banco. El año base de las evaluaciones es 1985, de acuerdo a la fecha de información presentada para los proyectos. El impacto distributivo se hizo cuantificando directamente, o en su defecto, buscando una aproximación a la proporción del flujo de beneficios netos destinada al grupo de bajos ingresos, salvo para el sector de equipamientos comunitarios en donde se calculó la proporción de beneficiarios que son de bajos ingresos. A continuación se resume los resultados principales de estas evaluaciones. Mayor información sobre metodologías, su aplicación y los resultados del análisis de cada proyecto se presenta en el Anexo VI-1 de este Informe.

SECTOR Y PROYECTO	Solución Costo Eficiente	Tasa Interna de Retorno Econ.	Coefficiente de Impacto Distributivo 1/
Agua Potable		%	%
Cipolletti	si	26	54
Corrientes	si	17	72
Tandil	si	21	87
Neuquén	si	32	61
Desagües Cloacales			
Caucete	si	12	94
Rawsen	si	14	90
Neuquen	si	21	78
Equipamiento Comunitario			
Santa Cruz	si	-	45
Cipolletti	en Revisión	-	95
Defensa contra Erosion e Inundación			
Salta	si	15	100
Mejoramiento Vial			
Salta	si	21	80
Electricidad			
Posadas	si	13	60
Salta	si	23	80
Gas			
James Craik	si	13	nd

1/ Con respecto a la línea de bajos ingreso de A 765 per cápita anual, establecida por el Banco para Diciembre de 1985.

- 6.27 Tomando debida consideración que la metodología aplicada en el sector de desagües cloacales se basa en un cálculo de beneficios exclusivamente a base de costos evitados, y por ende rinde estimaciones mínimas de TIRE, se hizo un análisis de sensibilidad a los resultados del proyecto de Caucete, el único en ese sector que presentaría una tasa marginal. Los resultados de dicho análisis hacen razonable suponer que la tasa real iguala o supera el 12%. Igualmente se hizo un análisis de sensibilidad para el proyecto de gas James Craik, encontrando los resultados sensibles al precio del combustible (que sería sustituido con el proyecto). No obstante, tomando en consideración que la tasa básica es del 13% y el hecho de que Argentina tiene una política deliberada de sustitución de combustibles de venta internacional, política mediante la cual el país manifiesta su deseo de evitar el riesgo de pérdidas asociadas con movimientos súbitos del precio internacional de combustibles, el proyecto se considera socialmente rentable.

- 6.28 Con respecto a los proyectos de Equipamiento Comunitario que incluyen escuelas, guarderías, unidades de salud y centros comunitarios se hizo el siguiente análisis. Para cada componente del proyecto se verificó la existencia de una demanda insatisfecha en el área de influencia relevante para el servicio a brindarse. En el sector educativo se cuantificaron las necesidades de plazas y se compararon con las plazas disponibles en las estructuras ya existentes sumadas con aquellas en ejecución. Para los servicios a ofrecerse en los centros comunitarios y guarderías, se verificó que en los barrios propuestos no existiese un centro similar. También, se constató mediante encuestas, el interés por parte de la comunidad en beneficiarse de estos servicios en una proporción que justifique el tamaño y composición del centro y/o guardería. Con respecto a las unidades sanitarias se constató que en los barrios de su localización existe o se estima que existirá en el futuro inmediato una población de tamaño suficiente para garantizar un uso razonablemente intensivo del centro y que esta población en la actualidad no cuenta con adecuada atención sanitaria.
- 6.29 Adicionalmente, se investigó, mediante el cálculo del costo unitario de producción de los servicios a brindarse por el proyecto, y su comparación con los costos de servicios similares existentes en la zona, los costos de la producción del proyecto. En la mayoría de los casos, los costos del proyecto resultarán inferiores a los de comparación. En el caso de las unidades sanitarias se encontró que para algunos de los servicios el costo por atención era aparentemente menos costoso en instituciones de cobertura social. Sin embargo, se determinó que en promedio, el costo de atención médica en las unidades era inferior al costo de atención comparativo. En forma parecida se encontró que algunas de las escuelas propuestas presentaban costos unitarios superiores a la comparativa existente. Sin embargo, en casi todos los casos, la diferencia se explicaba por que las escuelas nuevas están diseñadas para cumplir con un curriculum más amplio. Solamente en el caso de una escuela primaria del proyecto de Cipolletti se detectó un costo excesivo debido a una propuesta poco económica de adecuar y ampliar una construcción existente. Por este motivo se considera que este componente del proyecto no cumple con la condición de ser costo-eficiente y deberá ser revisado.
- 6.30 Con respecto a los cálculos de los coeficientes de impacto distributivo se comenta el caso del proyecto de equipamiento urbano de Santa Cruz, al Sur del país, en la cual debido a las condiciones de vida existentes en esa ciudad, tanto climáticas como de carencia de producción de bienes de consumo en el área, el costo de vida resulta significativamente más alto que en la mayoría de otras localidades en Argentina. Para estimar la proporción de beneficiarios de bajos ingresos se ajustó la línea de A 675 anual per cápita hacia arriba en un 25% (que a su vez corresponde al 50% de la bonificación mínima ofrecida por empresas y administración pública en general, por residir en río Gallegos). Este porcentaje es una estimación conservadora de la diferencia entre costo de vida en Santa

Cruz y costo de promedio en Argentina y por ende, tal vez se esté subestimando el verdadero impacto distributivo del proyecto.

- 6.31 Tomando en consideración los resultados de la evaluación de la muestra y los comentarios hechos anteriormente sobre la relación esperada entre los proyectos de la muestra y el resto del universo de proyectos a financiarse con los recursos del Programa, se concluye que los proyectos del Programa, cuyos beneficios principales son medibles, tendrán una rentabilidad superior al 12%, y que aquellos proyectos con beneficios principales no medibles, tendrán soluciones costo-eficientes. En base al promedio ponderado de los coeficientes de impacto distributivo de los proyectos (intrasectorialmente se ponderó de acuerdo a los flujos de beneficios generados; intersectorialmente se ponderó de acuerdo a la distribución sectorial esperada en el programa), se estima que aproximadamente el 60% de los beneficios generados por las inversiones a realizarse serán absorbidos por los grupos de bajos ingresos, según la línea de bajos ingresos establecidas por el Banco de A 765 per cápita anual, a Diciembre 1985 (esta estimación no incluye los proyectos de Agua y Desagüe de Neuquén, que aun no tiene factibilidad financiera, ni el de Equipamiento Comunitario Cipolletti que aun no tiene factibilidad económica y están en revisión).

E. Conclusión

- 6.32 El estudio detallado en el presente documento indica que el Programa de Desarrollo Urbano, a través de sus componentes de crédito y de asistencia técnica, respaldado con el refuerzo institucional de la SVOA, es conveniente y necesario para el país. Adicionalmente, se ha establecido que el Programa es factible desde el punto de vista técnico, institucional, financiero y económico y se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos establecidos en las políticas vigentes del país. Por el análisis precedente, se concluye además que el Programa contribuirá a mejorar la calidad de vida en las ciudades argentinas y, en consecuencia, tendrá un efecto positivo sobre su desarrollo en general.

Anexo No. II-1

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

División de Estudios de Países

A R G E N T I N A

Marco de Referencia Económico

28 de julio de 1986

ARGENTINA

Situación Económica Reciente y Perspectivas

A. Situación Económica Reciente

- 1.01 La evolución de la economía argentina se caracterizó por un cambio significativo durante 1985. El Gobierno lanzó a mediados del año un plan drástico de estabilización denominado el "Plan Austral", que tuvo como objetivo primordial lograr la estabilidad de precios en una economía con un largo período de inflación creciente, que en junio de 1985 se hallaba al borde de la hiper-inflación.
- 1.02 El Plan Austral contó con el apoyo generalizado de la población y cumplió con su objetivo de reducir significativamente la inflación y las expectativas inflacionarias. La tasa de inflación se redujo del 28 por ciento mensual en mayo-junio de 1985, a un ritmo de sólo 2,9 por ciento por mes entre julio de 1985 y febrero de 1986, en tanto que los precios mayoristas aumentaron a una tasa promedio de tan sólo 0,5 por ciento en ese mismo período.
- 1.03 Esta brusca reducción de la inflación estuvo acompañada de una gradual recuperación de la producción en los últimos meses de 1985, después de haberse producido una notoria contracción al inicio del Plan, que se reflejó en una gran eliminación de existencias. Sin duda alguna el Plan ha contribuido significativamente a la estabilidad en la economía y la confianza en el exterior.
- 1.04 En materia fiscal, ha habido una mejora sustancial desde la adopción del Plan Austral. El déficit consolidado del sector público no financiero se redujo considerablemente en 1985 al equivalente de 4 por ciento del producto interno bruto (PIB), del 12,5 por ciento en 1984 y 15,7 por ciento en 1983 y desde el segundo semestre de 1985, el financiamiento del déficit se hizo sin recurrir al crédito del Banco Central. Esta mejora se logró a través del mejor comportamiento de los ingresos, que resultó de los ajustes efectuados en junio de 1985, en los impuestos locales y las tarifas de servicios públicos y también por el efecto de la estabilidad de precios en la recaudación. Por el lado del gasto, la congelación de los salarios y la reducción del nivel de inversiones públicas explican el comportamiento señalado.
- 1.05 En el sector externo el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se redujo en 1985 cerca de un 60 por ciento con relación al del año anterior. Esto fue posible mediante el logro de un mayor excedente comercial, principalmente a base de la reducción de las importaciones y en parte por el mayor volumen exportado de cereales, a pesar de la caída de precios internacionales de dichos productos. Asimismo, ha habido un menor egreso por servicios, por efectos combinados de la reducción de tasas de interés internacionales,

renegociación de la deuda, y menores transacciones de bienes. A fines de 1985, se registró una ligera mejora de la posición de reservas internacionales brutas del país.

- 1.06 Dado su elevado nivel de deuda externa, la economía argentina se vio afectada durante 1985 por la situación económica internacional, en particular por la evolución desfavorable de los términos de intercambio y por las políticas fiscales y monetarias de los países desarrollados.
- 1.07 Estos factores que generan elevados niveles de las tasas internacionales de interés en términos reales para la economía argentina, han producido sobre la actividad económica general los siguientes efectos: (a) una caída del PIB del 4,4 por ciento durante el año 1985, debido principalmente a la disminución del producto industrial y del comercio mayorista y minorista; (b) una nueva caída del nivel de inversión (la inversión bruta interna cayó un 16,8 por ciento en 1985 con respecto año anterior); (c) el menor nivel de actividad productiva durante el año 1985 derivó en una reducción del número de horas trabajadas. El nivel general de horas obrero trabajadas en la industria manufacturera cayó alrededor del 8 por ciento con respecto al año 1984. Este fenómeno se reflejó en un aumento de la desocupación y fundamentalmente del subempleo. La tasa de desempleo se elevó del 4,6 por ciento en 1984 al 6,1 por ciento mientras la subocupación aumentó del 5,6 al 6,9 por ciento; y (d) una declinación en el ingreso real de la población. El nivel general del salario por trabajador industrial cayó en términos reales alrededor de un 15 por ciento en 1985 con respecto al año anterior. Esta baja en el ingreso real de la población derivó en una disminución del consumo.
- 1.08 El comportamiento del sector agropecuario fue favorable en el primer semestre de 1985 por la buena campaña agrícola 1984-85 de cereales, cuya producción alcanzó a una cifra sin precedente de 44 millones de toneladas, de las cuales, 13 millones correspondió a la cosecha de trigo. En la campaña agrícola 1985-86, sin embargo, hubo una gran merma debido tanto a la reducción del área sembrada, como a adversas condiciones del clima y de la severa inundación de noviembre de 1985 que afectó principalmente la zona triguera de la Provincia de Buenos Aires. Se estima que la producción de trigo para el año agrícola 1985-86 se reduzca a 8,5 millones de toneladas, con un excedente exportable de solo 3,5 millones de toneladas. En el subsector pecuario en cambio, no se registró mayor variación con relación al comportamiento del año anterior.
- 1.09 La industria manufacturera continuó deprimida en 1985, con una fuerte reducción en su nivel de actividad como resultado de la eliminación de existencias. Los mayores retrocesos se dieron en las ramas de textiles, maquinarias y equipos y minerales no metálicos. En general, los artículos manufacturados fueron afectados por el deterioro de los ingresos de la población. Sin embargo, a partir de septiembre de 1985, ha habido indicios de una lenta recuperación en la demanda de productos manufacturados.

- 1.10 La construcción continuó manifestando un comportamiento negativo debido fundamentalmente por la inactividad de obras públicas, a raíz de la política de austeridad fiscal. La construcción privada por su parte se mantuvo deprimida ante la dificultad de colocar unidades de vivienda por falta de crédito y el alto costo de financiamiento. En efecto, persistió el problema de la alta tasa de interés, que en cierto modo frenó el desenvolvimiento de los sectores productivos y de la construcción.
- 1.11 No obstante, a partir de la aplicación del Plan Austral desde mediados del año 1985 y en particular durante el último trimestre de ese año, comenzó a evidenciarse una recuperación de la actividad productiva. El PIB mostró un crecimiento del 4,7 por ciento durante el cuarto trimestre de 1985 con respecto al trimestre anterior debido principalmente al crecimiento del producto en la industria manufacturera que fue del 13,1 por ciento. En el primer trimestre de 1986, el PIB creció 0,4 por ciento en relación al mismo período del año anterior, destacándose en los resultados el incremento de 5,7 por ciento en la producción industrial y la declinación de 8,4 por ciento en la actividad agropecuaria.

B. Políticas económicas

- 2.01 Durante el primer semestre de 1985, se continuó con la política de ajuste gradual iniciado en 1983, caracterizada por la acentuación de los controles de precios. Sin embargo, el esquema recesivo de las medidas, alentaba mayores expectativas inflacionarias, y tropezaba con los objetivos de reducir el déficit fiscal. Posteriormente, se trató de flexibilizar el control de precios para aliviar la distorsión existente y se impuso una limitación cuantitativa de ajuste salarial al 90 por ciento de la inflación del mes anterior. Se aplicó también una reforma financiera con mayor intervención del Gobierno en el mercado monetario, hecho que ocasionó una nueva alza de la tasa de interés en términos reales.
- 2.02 En junio de 1985, la inflación anual, con respecto al mismo mes del año anterior, sobrepasaba los 1.100 por ciento, con una caída del nivel de actividad, aumento de desempleo, reducción de las inversiones, empeoramiento del desequilibrio fiscal y una situación de incertidumbre generalizada. En estas circunstancias y ante la posible ineficacia de adoptar una estrategia de cambio gradual, el Gobierno anunció el 14 de junio una política de choque conocido como el "Plan Austral".
- 2.03 Los principales elementos del Plan consistieron en: (a) congelación de precios y salarios por tiempo indefinido, excepto los precios de los bienes y servicios de oferta estacional como frutas y hortalizas; (b) la reforma monetaria y la creación de un nuevo signo monetario, el "austral", equivalente a 1.000 pesos argentinos y la implantación de una paridad fija de 0,80 australes por un dólar estadounidense; (c) el financiamiento sano del gasto y del crédito público, y la reducción del déficit del sector público consolidado a alrededor del 2,5 por ciento del PIB, en el segundo semestre de 1985, del 12,5 por

ciento en el primer semestre. Paralelamente se dio a conocer un nuevo memorándum de entendimiento con el FMI, que permitió aliviar el problema de pagos externos, conjuntamente con un acuerdo de financiamiento y renegociación del pago de servicio de la deuda vencida y a vencer en 1985 con los bancos comerciales.

- 2.04 Cabe señalar también, que antes de congelar los precios, se dispuso un alza de la paridad cambiaria, un aumento de los impuestos para aumentar los ingresos fiscales y un fuerte ajuste tarifario (el nivel general de precios y tarifas de las empresas públicas creció en términos constantes 5,5 y 5,1 por ciento durante los meses de mayo y junio de 1985, respectivamente).
- 2.05 La aplicación de estas medidas bajo el esquema adoptado, logró un significativo éxito, y creó un ambiente de confianza de la población. Los logros más sobresaliente del Plan Austral han sido la caída importante de la tasa de inflación y el equilibrio fiscal, además de la relativa estabilidad en los tipos de cambio oficial y paralelo.
- 2.06 Desde el inicio del Plan, el Gobierno sostuvo que el congelamiento de precios y salarios sería de carácter temporal, y hacia fines de 1985, anunció un ajuste general de salarios del 5 por ciento para los trabajadores tanto del sector público como del privado con vigencia a partir de enero de 1986. Se otorgó también un ajuste del 50 por ciento de asignaciones familiares, y se les permitió a las empresas un aumento adicional del 5 por ciento en los salarios durante 1986, solo por incrementos en la productividad.
- 2.07 En febrero de 1986, el Gobierno solicitó una prórroga para finalizar el acuerdo vigente con el FMI, que fue concretado en julio. Asimismo, se espera negociar un nuevo acuerdo con la citada institución en el transcurso del segundo semestre de 1986, que sería complementado con financiamientos de otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID.
- 2.08 En abril de 1986, anunciaron nuevas pautas sobre el sistema de precios y salarios. El congelamiento de precios se sustituyó con precios administrados que se fijarán de acuerdo con los costos de insumos. Los incrementos de salarios serán negociables durante el remanente del año entre el 18 y 25 por ciento para el sector privado y entre el 18 y 21 por ciento para el sector público, con un aumento instantáneo del 5 por ciento para la administración pública. Se acordó también una pequeña devaluación del austral (a 0,83 australes por dólar), y aumentos en las tarifas de gas y electricidad del 6 por ciento, con incrementos mensuales del 2 por ciento para el resto del año y la gasolina subió en 8 por ciento. Posteriormente en los meses de mayo a julio autorizaron una serie de mini-devaluaciones del austral.
- 2.09 Con estos cambios, el Plan Austral entró durante 1986, en una nueva fase, que implica una reorientación de política hacia la consecución de los objetivos de crecimiento económico con estabilidad relativa de precios. Con esta premisa, la política del Gobierno busca la

promoción de las exportaciones, la reactivación de la construcción, la modernización y la transferencia de empresas públicas al sector privado y una mayor participación de éste en actividades de exploración petrolera.

C. Perspectivas

- 3.01 La actividad económica en 1986 se desarrolla dentro de las premisas dadas a conocer como la segunda fase del Plan Austral con la introducción de medidas estructurales encaminadas a consolidar el esfuerzo de estabilización y a la vez promover el crecimiento económico. Asimismo, las señales de una lenta recuperación en las actividades productivas que se vienen observando desde fines de 1985, indican que el país está saliendo gradualmente de la recesión, por lo que se puede prever que habría un moderado crecimiento en 1986. Los incrementos observados en los precios durante abril-junio de 1986, indican, sin embargo, que la inflación anual sería superior a la proyectada por el Gobierno del 28 por ciento, pudiendo llegar a alrededor del 60 por ciento.
- 3.02 Por su parte, el sector externo está íntimamente vinculado al comportamiento futuro de la economía. La caída de precios internacionales de las principales exportaciones argentinas, y un leve aumento de las importaciones, reducirá el excedente comercial en 1986. A su vez, la magnitud de la deuda externa seguirá imponiendo severas restricciones a la economía, dado que el pago de intereses de la deuda representa una proporción importante del ahorro interno. Las condiciones anteriores podrían por lo tanto, producir presiones sobre la política fiscal y la cambiaria, si no hay un aumento compensatorio en el financiamiento externo.
- 3.03 La tendencia que ha seguido la recaudación tributaria desde el lanzamiento del Plan Austral continuaría en el corto plazo. Sin embargo, para acompañar a los objetivos de la reactivación económica, se requerirán de cambios estructurales en la organización del sector público y en particular, en la administración del gasto público. Con ese fin, el Gobierno propone una racionalización y modernización de las actividades del sector, al mismo tiempo que ha anunciado la iniciación de un proceso de traslado al sector privado y de saneamiento de las empresas públicas.
- 3.04 En este contexto, el año 1986, será un año de transición entre la primera fase del Plan Austral, que fue la de control de inflación, y la segunda etapa, que tiene por objetivo lograr el crecimiento con estabilidad. El crecimiento de las exportaciones y la creación de un ambiente favorable para aumentar el nivel de la inversión privada, serán los aspectos más importantes para el desarrollo y crecimiento futuro del país, y que la posibilidad de una estabilización sostenida, dependerá también de la recuperación de las perspectivas de crecimiento real de la economía.

DOC. MARCO-AR
DSK. RG2AR
28-IV-86
ECC/POOL

Ciudades que Superaron 50,000 Habitantes en 1980

<u>Ciudad</u>	<u>Provincia</u>	<u>Población Urbana</u>	<u>Índice de Crecimiento 1970-1980 *</u>
Gran Buenos Aires	Cap.Fed. & Buenos Aires	9,969,826	18
Gran Córdoba	Córdoba	983,969	24
Gran Rosario	Santa Fé	957,301	18
Gran Mendoza	Mendoza	605,623	27
Gran La Plata	Buenos Aires	564,750	16
Gran San Miguel de Tucumán	Tucumán	498,579	36
Mar del Plata	Buenos Aires	414,696	37
Santa Fé	Santa Fé	291,966	36
Gran San Juan	San Juan	291,707	31
Salta	Salta	260,744	48
Gran Bahía Blanca	Buenos Aires	223,818	23
Gran Resistencia	Chaco	220,104	54
Corrientes	Corrientes	180,612	32
Paraná	Entre Ríos	161,638	27
Santiago del Estero	Santiago del Estero	148,758	42
Posadas	Misiones	143,889	48
San Salvador de Jujuy	Jujuy	124,950	51
Río Cuarto	Córdoba	110,254	24
Comodoro Rivadavia	Chubut	96,817	33
San Nicolás	Buenos Aires	96,495	52
Concordia	Entre Ríos	94,222	31
Formosa	Formosa	93,603	53
Neuquén	Neuquén	90,089	109
Gran Catamarca	Catamarca	88,593	38
Tandil	Buenos Aires	79,429	21
San Luis	San Luis	70,999	40
San Rafael	Mendoza	70,959	22
Pergamino	Buenos Aires	68,612	22
Gran Villa María	Córdoba	67,560	20
Zárate	Buenos Aires	67,143	23
La Rioja	La Rioja	67,043	45
Olavarría	Buenos Aires	64,374	23
Junín	Buenos Aires	62,458	6
Gran San Francisco	Córdoba	58,536	20
Coronel Rosales	Buenos Aires	56,108	10
Campana	Buenos Aires	53,994	59
Rafaela	Santa Fé	53,273	22
Trelew	Chubut	52,372	116
Santa Rosa	La Pampa	51,678	54
Qualeguaychí	Entre Ríos	51,400	26
Necochea	Buenos Aires	51,069	28
Mercedes	San Luis	50,992	27
ARGENTINA	—	23,193,000	26

NB. Ciudades subrayadas son capitales de provincia; * $\left(\frac{\text{pob. urbana 1980}}{\text{pob. urbana 1970}} \times 100 \right) - 100$

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 1980.

% de la Población en Hogares con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) en Ciudades con más de 50,000 Habitantes en 1980

<u>Ciudad</u>	<u>Provincia</u>	<u>% Población en Hogares NBI *</u>
Formosa	Formosa	40.4
San Salvador de Jujuy	Jujuy	36.9
Corrientes	Corrientes	36.0
Gran Resistencia	Chaco	35.3
Trelew	Chubut	34.6
Concordia	Entre Ríos	33.8
Posadas	Misiones	32.5
Gran San Miguel de Tucumán	Tucumán	31.7
Neuquén	Neuquén	30.8
Gran Catamarca	Catamarca	29.5
Comodoro Rivadavia	Chubut	28.7
Salta	Salta	27.0
Santiago del Estero	Santiago del Estero	26.4
Qualeguaya	Entre Ríos	25.8
Campana	Buenos Aires	25.3
Gran Buenos Aires	Cap.Fed. & Bue.Air.	25.1
Zárate	Buenos Aires	25.1
Paraná	Entre Ríos	24.3
Gran San Juan	San Juan	22.8
San Nicolás	Buenos Aires	22.7
La Rioja	La Rioja	22.6
Gran Rosario	Santa Fé	22.5
Santa Fé	Santa Fé	22.5
Mercedes	San Luis	22.4
San Luis	San Luis	21.5
Río Cuarto	Córdoba	20.3
Pergamino	Buenos Aires	18.9
Mar del Plata	Buenos Aires	18.8
Gran Córdoba	Córdoba	18.4
Santa Rosa	La Pampa	17.8
San Rafael	Mendoza	17.4
Olavarría	Buenos Aires	17.2
Gran Villa María	Córdoba	16.9
Rafaela	Santa Fé	16.9
Gran La Plata	Buenos Aires	16.3
Gran Mendoza	Mendoza	16.2
Gran Bahía Blanca	Buenos Aires	16.1
Tandil	Buenos Aires	14.8
Necochea	Buenos Aires	12.3
Junín	Buenos Aires	12.0
Gran San Francisco	Córdoba	11.6
Coronel Rosales	Buenos Aires	11.4
ARGENTINA	—	27.7

* NBI es un indicador compuesto de las siguientes variables: los hogares con más de 3 personas por cuarto; los hogares que habitan en pieza de inquilinato, vivienda precaria o vivienda de "otro" tipo; los hogares que no tienen ningún tipo de retrete sanitario; los hogares con algún miembro de 6 a 12 años que no asiste o nunca asistió a la escuela; y los hogares que tiene 4 o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no tiene educación.

Fuente: INDEC, La Pobreza en la Argentina: Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas A Partir de los Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 1980.

Perfiles de los Sectores a ser Financiados por el Programa1. Agua Potable

Comprende la construcción, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de las obras e instalaciones correspondientes a la captación, conducción, tratamiento y distribución de líquido, para ser utilizado en actividades domésticas, comerciales e industriales de la colectividad, incluyendo las instalaciones para contrarrestar incendios y para cubrir el consumo de carácter público de los centros urbanos.

En el orden institucional, los servicios de agua potable son de responsabilidad primaria de los gobiernos provinciales, una vez que en el año 1980, se produjo la transferencia de esos servicios por parte de Obras Sanitarias de la Nación (OSN), a las respectivas provincias con excepción de lo relativo a la Capital Federal y casi toda el área de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, actúan en el sector otras instituciones nacionales o federales, además de OSN, tales como el Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural (SNAP) y la Dirección Nacional de Saneamiento Ambiental (DNSA), las que concretan su participación mediante convenios con las provincias.

El SNAP, creado en 1964, depende del Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y está facultado para diseñar y construir los sistemas, así como para supervisar la operación, mantenimiento y administración de los servicios delegados a las comunidades, en poblaciones rurales cuyos núcleos tienen entre 100 y 10,000 habitantes. Por su parte, la DNSA que depende del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente a través de la Subsecretaría de Promoción de la Salud y Rehabilitación, actúa en zonas rurales no cubiertas por el SNAP.

Complementan la estructura institucional del sector, el Programa de Emergencia de Provisión de Agua Potable (PROAGUA) de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, creada en 1984 para desarrollar acciones en asentamientos precarios del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, así como el Consejo Federal de Entidades de Saneamiento (COFES), creado en 1983, cuyo objetivo es el de propiciar la cooperación interinstitucional en la planificación de esos servicios.

En lo relacionado con la situación actual, se debe resaltar que en Argentina no existe un Plan Nacional de Agua Potable, sino solamente un Plan para el área rural que ejecuta el SNAP, por cuya razón, en los centros urbanos las inversiones se realizan sin tendencias definidas dependiendo de la disponibilidad de recursos. De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980 y encuestas llevadas a cabo en 1984 por la Unidad Ejecutora de

Saneamiento Hídrico (UNESH), el 68% de la población urbana y el 13% de la población rural disponen de servicio de agua potable, lo que representa una cobertura del 58% a nivel nacional.

En lo correspondiente específicamente a la población urbana, el mayor déficit se observa en el cinturón que bordea a la ciudad de Buenos Aires en donde se tiene una cobertura del 60%, la que es menor que la media nacional urbana, en tanto que las ciudades entre 100.000 y 500.00 habitantes presentan una cobertura de 77% y las de 500.000 a 1.000.000 tienen un 79% de cobertura.

2. Desagues Cloacales

En este sector se incluyen la construcción, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de las obras e instalaciones correspondientes a las redes de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras y servidas, necesarias para el saneamiento de los centros urbanos y para el control de la contaminación de los recursos hídricos.

En el aspecto institucional, los servicios de desagues cloacales se incluyen dentro de las responsabilidades de las mismas entidades a cuyo cargo se encuentra la atención de los servicios de agua potable, por lo que son válidas las consideraciones detalladas sobre este tema para dicho sector.

A partir de 1980 cuando se decretó la transferencia de los servicios de agua potable y desagues cloacales por parte de OSN a los órbitas provinciales, el desarrollo de estos servicios ha dependido de la experiencia y potencialidad económica de las provincias y/o sus comunidades, por cuanto la descentralización no fué acompañada de una adecuada asistencia técnica y financiera. Esta situación deficitaria de saneamiento en el país ha comenzado a generar inquietudes en diversos niveles y es así como en el Congreso Nacional se han presentado dos iniciativas de leyes que contemplan, por un lado, la conformación de un Consejo Federal de Saneamiento con un Fondo Nacional proveniente de la contribución de las ciudades de más de 100,000 habitantes para obras en localidades de menores recursos. La otra alternativa considera la autorización a OSN para prestar asistencia técnica al interior del país.

Respecto a la situación actual, según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), se considera que el 40% de la población urbana tiene sus viviendas conectadas a la red de desagues pública, en tanto que el 35% dispone de sistemas de saneamiento en el hogar (letrinas, fosas sépticas, etc.) y el 25% restante no tiene servicio. En relación a la población rural, se calcula que el 35% dispone de sistemas adecuados unitarios (letrinas) y el 65% no tiene servicio de evacuación de excretas.

Según estudios realizados por la UNESH y el COFES sobre la población urbana de 196 localidades de más de 10,000 habitantes, aquellas que corresponden al rango de 10,000 a 500,000, presentan una cobertura del 37%, la que es menor que la media nacional

urbana; las ciudades con población superior a 500,000 habitantes tienen una cobertura del 42%, valor en el cual hay mucha incidencia del alto porcentaje de cobertura (96%) que tiene la Capital Federal.

En términos globales puede sintetizarse que para la población urbana de las 196 localidades con más de 10,000 habitantes, el 68% dispone del servicio de agua potable y el 40% tiene conexiones a la red de desagües cloacales, lo que representa una brecha de 6.1 millones de personas, entre los dos servicios, cifra ésta que constituye el 165% de la brecha calculada para el año 1950.

En igual forma, comparando las estadísticas de los años 1950 y 1985, se observa un retroceso de 16.5 puntos porcentuales en la cobertura del servicio de desagües cloacales que representa un notorio retroceso del país en el campo de saneamiento. Puede afirmarse que, en los últimos años, el aumento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario ha resultado menor que la demanda originada por el crecimiento vegetativo de la población.

3. Equipamiento Comunitario

El sector consiste en la construcción, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de facilidades especializadas para atender las necesidades básicas de la población urbana, sobretudo la población de menores recursos, en los campos de educación, salud y servicios comunitarios de asistencia y apoyo a la familia. Más concretamente, entre las obras incluidas en el sector son jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, unidades sanitarias o de atención primaria de salud, guarderías infantiles y centros comunitarios. A continuación, se resumen las principales características de los más importantes de estos servicios en las áreas de educación y salud.

El sistema educacional argentino está integrado por organismos dependientes del Gobierno Nacional, de los gobiernos provinciales y municipales y del sector privado. La educación primaria es un derecho asegurado por la Constitución Nacional, siendo que, en el sector público, su suministro, como servicio obligatorio y gratuito, ha sido específicamente asignado a los gobiernos provinciales. A nivel nacional, la responsabilidad básica en lo que se refieren a la formación y desarrollo de la educación en todos los niveles recae en el Ministerio de Cultura y Educación. La tarea de compatibilización y coordinación de las actividades educativas en la Argentina, a su vez, es la responsabilidad del Consejo Federal de Educación que está integrado por las principales autoridades del área de la Nación y de las provincias.

La educación en la Argentina está organizada en cuatro niveles, específicamente: (a) el nivel pre-primario (jardines de infantes)

para niños de 4 a 5 años y de carácter no obligatorio; (b) el nivel primario consistiendo en siete grados para niños entre 6 y hasta 14 años, de carácter obligatorio; (c) el nivel medio o secundario, teniendo varias modalidades (general o bachillerato, comercial, técnico y formación profesional, artístico, agropecuario y normal) y generalmente de 5 años de duración; y (d) el nivel superior o terciario incluyendo cursos universitarios y de post-grado, así como cursos no universitarios de especialización.

Según los datos censales de 1980, el nivel de analfabetismo en la Argentina es comparativamente bajo, siendo que menos de 6% de la población total en los grupos de edad de relevancia fué clasificado como analfabeto en este año. No obstante, existen diferencias regionales importantes, con varias provincias en el norte del país (particularmente Chaco, Corrientes y Formosa) registrando tasas de analfabetismo superiores al 10%, mientras que el valor correspondiente para el Gran Buenos Aires fué apenas 3%. En cuanto a la cobertura del sistema educativo nacional, aunque el 94% de la población total en la edad correspondiente estaba matriculado en el primer grado primario en 1980, solamente 53% de los niños que ingresaron en la escuela primaria en 1974 llegaron al séptimo grado en 1980, indicando una baja tasa relativa de retención. En lo que se refiere a la oferta de educación primaria y secundaria, a su vez, en 1984, 75% de todos los alumnos en el nivel primario estaban matriculados en escuelas provinciales, comparado con apenas 25% del total de alumnos en el nivel medio, donde las escuelas operadas por el Gobierno Nacional tuvieron relativamente mayor importancia (44% de la matrícula total).

Aunque la enseñanza primaria y secundaria argentina sea generalmente satisfactoria en términos del grado de cobertura de la población, las condiciones de la construcción en que funcionan muchos de los establecimientos educacionales son inadecuados y requieren la substitución de facilidades existentes o reparaciones extensivas. Adicionalmente, debido al escaso incremento en el número de establecimientos educativos en años recientes, en muchas zonas del país el promedio de alumnos por curso y por aula supera lo aconsejado por las normas pedagógicas vigentes. Finalmente, la situación es relativamente mas grave en las áreas de expansión de los centros urbanos, donde la demanda de servicios educacionales ha crecido más rapidamente que la oferta en la última década

En la Argentina, los servicios de salud son suministrados por tres áreas básicas, el área oficial, el área de "obras sociales" y el área privada. El área oficial comprende todos los servicios que son prestados en establecimientos dependientes del Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales y municipales y se caracteriza por atender basicamente la población de bajos ingresos que no tiene cobertura de "obras sociales", ni está jubilada. Actualmente, los servicios suministrados por este subsector son gratuitos a los usuarios. La población que trabaja y sus familiares, a su vez, son atendidos por el área de obras sociales, siempre que realicen los aportes mensuales correspondientes a las mismas. Esta área tiene instalaciones y equipamientos propios para la atención de la salud

y también opera a través de la contratación de servicios del área privada la que concentra su demanda en los sectores de población de recursos medios y altos que no tienen cobertura de obras sociales o que desean un servicio de mejor calidad.

El proceso avanzado de urbanización y una política sanitaria acorde aseguraron una cobertura adecuada a casi toda la población urbana del país hasta la década de 1970, cuando hubo una reorientación del rol del sector público en el suministro de los servicios de salud. A partir de 1976, más concretamente, la Secretaría de Salud Pública del actual Ministerio de Salud y Acción Social redefinió su papel como siendo esencialmente uno de planificación, control y fiscalización de las acciones del sector, con una descentralización de la ejecución de los servicios públicos y una creciente dependencia en el sector privado. Con la transferencia de los establecimientos nacionales a las provincias y municipios, estas jurisdicciones tuvieron que asumir la responsabilidad por la operación de un conjunto de facilidades que presentaban serias deficiencias que no podían ser superadas con los escasos recursos que estos niveles de gobierno podían destinar al sector.

Al asumir el actual gobierno constitucional en 1983, se encontró una situación de deterioro en los servicios públicos de salud, así como la marginalización de los sectores de bajos ingresos del consumo de los mismos, debido a la política del gobierno militar anterior de arancelar estos servicios. La atención de esta situación ha llevado el Gobierno Central a crear programas especiales como el Programa Alimentario Nacional (PAN) y a proponer, desde el Ministerio de Salud y Acción Social, la reestructuración de todo el sector, a efectos de ampliar su cobertura y mejorar su rendimiento. Este esfuerzo de rehabilitación de los servicios de salud incluye la sustitución y modernización de hospitales deteriorados en el interior del país a través de un posible proyecto con financiamiento del BID (AR-0045) que actualmente está en estudio por el Banco. Al mismo tiempo, se ha suprimido el arancelamiento de los servicios ofrecidos por los establecimientos oficiales de salud, aumentando de esta forma sustancialmente el acceso de los grupos de menores recursos a los mismos.

En cuanto a la oferta de los servicios de salud, finalmente, del número total de establecimientos en 1980 (excluyendo los consultorios privados individuales), aproximadamente 53% dependía del subsector oficial, 42% del área privado y el 5% restante del subsector de obras sociales. De estos totales, aproximadamente dos tercios consistían en establecimientos sin internación, sobretodo en el sector oficial, donde casi tres cuartos del total era constituido de facilidades sin internación. Estos establecimientos incluyen las unidades sanitarias o de atención primaria de salud operadas generalmente por las provincias, entre las cuales las mayores necesidades existen actualmente en las zonas de expansión de los centros urbanos donde se concentran las poblaciones de menores ingresos.

4. Defensa contra Erosión e Inundaciones

Comprende la construcción, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de las obras e instalaciones necesarias para evitar los daños y perjuicios que pueden provocar en los centros urbanos, las inundaciones por desbordamiento de cursos de agua, aluviones, etc., así como debido a la erosión eólica o hidráulica y que constituyan un peligro para la población.

En el aspecto institucional, la atención de los problemas provocados por la erosión e inundaciones son de responsabilidad primaria de los municipios; sin embargo, dada la situación económica de esas entidades, la ejecución de las obras ha sido planificada por las autoridades provinciales por intermedio de los Ministerios de Obras Públicas.

Dadas las características de los proyectos, no es aplicable hacer una descripción de la situación actual del sector o estimar porcentajes de cobertura. Los problemas que se presentan son más bien puntuales, de magnitudes diferentes que deben ser resueltos cuando se transforman en un peligro para los habitantes que, por el crecimiento y expansión de las zonas urbanas, llegan hasta áreas afectadas por los fenómenos naturales o a terrenos bajos o inestables.

En los casos específicos que se incluyen en el Programa, la necesidad de ejecutar las obras es imperiosa ya que no existe nada construido y la amenaza de inundaciones es constante durante el período de lluvias, cuando provoca daños a la propiedad e implica importantes gastos por la limpieza del cauce y de los terrenos afectados.

5. Mejoramiento Vial y Desagues Pluviales

Como proyectos de mejoramiento vial se consideran la construcción, ampliación y pavimentación de la red urbana de calles vehiculares y/o peatonales, incluyendo aceras, viaductos, pasos a desnivel y obras para la distribución del tránsito, así como los trabajos complementarios de las vías para su normal funcionamiento, tales como alumbrado, redes de servicios públicos, zonas verdes, señalización y demarcación. Igualmente se incluyen las obras de reconstrucción o reposición de pavimentos de calles en las cuales se ha cumplido la vida útil del material o que han sido afectadas por desastres naturales.

Los proyectos de desagues pluviales consisten en la construcción, ampliación, mejoramiento o rehabilitación de obras e instalaciones destinadas a recolectar y evacuar las aguas de lluvia en zonas urbanas. Se incluyen los canales interceptores de coronación, destinados a impedir el escurrimiento de las precipitaciones pluviales desde zonas altas hacia los sectores poblados de las ciudades.

En el aspecto institucional y en lo que se refieren a desagües pluviales, estos servicios son de responsabilidad municipal. En pocas ocasiones se ha producido la intervención de la Nación a través de OSN en el interior del país. En todo caso, dicha participación fué posible mediante el régimen de convenios entre OSN y las provincias y los municipios, antes de la transferencia de obras ocurrida en 1980.

Debido al crecimiento de las grandes urbes, se han conformado aglomerados que pertenecen, en general, a sistemas geográficos comunes de escurrimiento que involucran a varios municipios, lo que ha provocado alguna falta de coordinación para efectuar las obras de recolección y disposición de aguas pluviales. En algunas provincias las Direcciones de Hidráulica, dependientes de los Ministerios de Obras Públicas han intervenido en el diseño y construcción de los desagües principales o maestros.

En lo que se relaciona con el mejoramiento vial y dada la naturaleza y alcance de las obras que se consideran en este sector, la responsabilidad es directamente de los municipios, aunque en algunos casos puede existir el apoyo de los gobiernos provinciales a las acciones que adopten las municipalidades sobre este tipo de trabajos.

Respecto a la situación actual del subsector de mejoramiento vial, es difícil cuantificar con exactitud su cobertura por la falta de cifras estadísticas y por las diferentes determinaciones regionales por las cuales un grado de cobertura puede tener significados distintos.

En el período comprendido entre 1978 y 1981, el Ministerio de Acción Social por intermedio de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y de la Dirección Nacional de Investigaciones y Desarrollo Socioeconómico, realizó una encuesta en 24 áreas urbanas, considerando el grado de consolidación de las mismas y sus principales características. Los resultados de esa encuesta y según las hipótesis adoptadas, señalaron que no menos del 38% de la población urbana carece de vía pavimentada de acceso a su hogar. Si se acepta que la pavimentación urbana puede excluir a la población semi-dispersa que se encuentra en las afueras de los centros urbanos, la cifra del déficit oscila alrededor del 40%.

En relación a la situación actual del subsector de desagües pluviales, no es posible señalar la cobertura existente por la inexistencia de cifras consolidadas. La evaluación de la capacidad instalada y la determinación de déficits solo pueden encararse mediante estudios que contemplen la estructura interna de las aglomeraciones las características topográficas, la calidad del suelo, las cuencas de drenaje, los regímenes de lluvia, etc., todo lo cual hace prácticamente imposible llegar a valores confiables, cuando no se disponen de las respectivas estadísticas.

Una evaluación comparativa, considerando la tecnología que generalmente se observa en los centros urbanos para la solución del

problema del alcantarillado, permite establecer que la parte correspondiente a los desagües pluviales tiene prioridad menor que los otros servicios públicos. En muchas ciudades la evacuación del agua de lluvia de los inmuebles se realiza por canalización interna que se descargan en las calles e, igualmente, con frecuencia las aguas servidas provenientes de piletas de lavado, bañeras, etc., se conectan a esas canalizaciones pluviales con el resultado de contaminación callejera con jabones, detergentes y restos de limpieza y el consiguiente deterioro de su estado sanitario.

En resumen, se puede considerar que los desagües pluviales tienen un déficit muy superior al de cualquiera de los demás servicios públicos y que las pocas y reducidas redes existentes tienen muchos problemas de operación por el limitado mantenimiento, en especial de las bocas de tormenta lo que constituye un potencial peligro para la población por las inundaciones que se pueden presentar en la ocasión de precipitaciones de gran intensidad, como ya ha ocurrido en algunos casos con resultados graves tanto por pérdida de vidas humanas, como de bienes de los damnificados.

6. Electricidad y Alumbrado Público

El sector comprende la ampliación y mejoras del servicio público con provisión de energía eléctrica por redes y conexiones domiciliarias en los centros urbanos, así como el alumbrado público de calles y avenidas.

Este servicio es prestado por entes públicos, creados para estos fines a nivel provincial y/o regional. En algunos casos, estas entidades disponen de generación propia, o si están integrados al sistema interconectado nacional (SIN), compran la energía en bloque a este sistema, para después efectuar su distribución y comercialización. Actualmente, el SIN cubre aproximadamente el 81% de la potencia total. Dentro de este programa se efectúan obras de construcción de redes de distribución y subtransmisión, así como subestaciones y conexiones domiciliarias, tendientes a ampliar y mejorar los servicios existentes.

La estructura institucional del sector es compleja, ya que intervienen entidades de orden nacional, regional y provincial. A nivel nacional, el sector depende del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de su Secretaría de Energía. Esta Secretaría tiene a su cargo la planificación del sector, así como el otorgamiento de concesiones para prestación del servicio de jurisdicción nacional. Todas las provincias cuentan con empresas o direcciones de electricidad que se encargan de proveer el servicio en su jurisdicción. Además, existen aproximadamente 600 cooperativas de electricidad que atienden pequeñas o medianas poblaciones o regiones rurales.

El manejo y planeamiento del sistema de distribución es la responsabilidad de cada ente provincial. Por esta razón, su grado de desarrollo varía considerablemente. Las empresas que sirven los grandes centros de consumo tienen generalmente una buena capacidad

técnica y de planeamiento, aspectos que son deficientes en las pequeñas localidades.

La Secretaría de Energía está tomando las medidas para efectuar un estudio de la red de distribución, así como para preparar un plan de desarrollo a mediano plazo en las áreas que tienen el mayor número de consumidores. Para estos fines se ha solicitado apoyo financiero del BIRF. Se ha calculado preliminarmente que se requiere invertir US\$ 245 millones anualmente entre 1986 y 1994 para expandir las redes de distribución.

La cobertura de la electrificación es variable en el país. Mientras que en la Provincia de Buenos Aires es prácticamente 100%, en la zona del Cuyo, Pampa y Patagonia es del orden del 90% y en el Noreste (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes) es del orden del 70-75%. En promedio, se estima que el servicio alcanza el 95% de las viviendas urbanas y el 44% de las rurales.

Es notorio que muchas localidades en el interior del país disponen de redes de distribución y subtransmisión muy antiguos y obsoletos, dimensionadas para consumos menores que los actuales, por lo que son frecuentes los cortes de energía y muy grandes las pérdidas en la transmisión, imposibilitándose además la ampliación del servicio. Se prevé que la mayor parte de las obras de este Programa se orientarán a solucionar o mejorar esta situación.

7. Gas

Desde el punto de vista de la organización productiva la provisión de hidrocarburos en estado gaseoso para su utilización final o como insumo en otros procesos industriales supone una compleja gama de actividades y medios para realizarlas, tales como extracción, tratamiento, transporte, distribución, etc. Visto como infraestructura urbana, el sector puede ser definido como el conjunto de instalaciones y equipos para el abastecimiento de gas natural o propano-butano por redes a usuarios de distintos tipos.

El servicio de gas natural por redes es prestado por la empresa Gas del Estado, (GDE), que tiene a su cargo el manejo de este recurso a nivel nacional. No obstante, las cooperativas o agrupaciones vecinales de localidades apartadas de gasoductos pueden, desde 1985, construir obras de infraestructura y manejarlas y mantenerlas, previa autorización de la Secretaría de Energía y bajo la supervisión de Gas del Estado. Dentro de este programa se preve la ejecución de obras de infraestructura para la construcción de redes de distribución de gas natural, incluyendo las conexiones e instalaciones de reducción de presión en el gasoducto troncal, las conexiones domiciliarias y la instalación de medidores. Normalmente, Gas del Estado participa en todas las obras, suministrando la ingeniería y supervisión y además la cañería y los medidores; también efectúa el empalme con la cañería troncal, y las pruebas.

Gas del Estado es una Sociedad del Estado que depende jerárquicamente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de su Secretaría de Energía, siendo ésta última la responsable de la planificación del sistema energético. GDE opera un extenso sistema de transmisión y distribución desde las cuencas gasíferas hasta los usuarios finales, así como plantas de almacenamiento y envasado de gas licuado en los principales centros de consumo del país. Tiene su sede en la Capital Federal y sucursales y agencias en las provincias y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego.

La Argentina presenta uno de los más altos consumos de gas natural dentro del total de energía, el cual alcanza actualmente el 30% y se prevé llevarlo al 35% en el año 2000. Las reservas probadas de gas natural, superiores a 600 MMTEP, representan el 18.5% de las reservas totales y alcanzarían, a los niveles actuales de consumo, para 44 años más. Se dispone de una red de aproximadamente 10.700 km de gasoductos troncales, con una capacidad de transporte de 45 millones de metros cúbicos por día, y de 31.600 km de redes de distribución, con la cual se sirven 3.2 millones de usuarios, lo que supone unos 12 millones de habitantes servidos.

Las proyecciones de demanda suponen, para el caso medio/alto, una incorporación de 200 mil usuarios entre 1985 y 1994 y de 100 mil entre 1995 y 2000. Para el caso bajo, se supone incorporar 150 mil usuarios entre 1985 y 1987, y 100 mil entre 1988 y 2000. Además, existe una agresiva política de substitución de fuel-oil por gas natural en la industria y las plantas eléctricas. Esta misma política se extiende a la substitución del consumo doméstico de gas licuado y kerosene.

Teniendo en cuenta estas políticas y proyecciones, los proyectos de construcción de redes para dotar de servicio de gas natural a nuevas localidades encuadran dentro de los planes del sector energético. Teniendo en cuenta que los mismos son preparados o aprobados por GDE, no se prevén dificultades acerca de la definición de su factibilidad técnica y económica, no sobre la garantía de disponer del recurso en las cantidades requeridas por la demanda de la zona.

Descripción y Resultados del Análisis Técnico de los
Proyectos de la Muestra

1. Proyecto de Agua Potable de Cipolletti/Fernandez Oro

El costo total del proyecto ascenderá aproximadamente al equivalente de US\$ 9.357.000. Su financiamiento se preve con recursos del Banco (30%), de la SVOA (40%) y de la Provincia de Rio Negro (30%); consecuentemente, se anticipa un crédito del equivalente de US\$ 6.550.000. El proyecto tiene por objeto el abastecimiento de agua potable para Cipolletti y Fernandez Oro, las cuales actualmente tienen un sistema deficitario y en poco tiempo quedarán sin el servicio por término del Convenio que se vence en Abril de 1987 con la ciudad de Neuquen, que es de donde reciben el agua para la distribución; por esta circunstancia, se puede considerar que la población beneficiada con las obras será la totalidad de los habitantes que tienen las dos localidades y que se estima en 58.000 cuando entre en operación el sistema y en 94.000 al final del período de diseño.

El proyecto contempla la construcción de una planta de tratamiento, cuya primera etapa tendrá una capacidad de 35.000 m³/día para satisfacer la demanda hasta el año 2.003, la instalación del denominado "acueducto norte" para reforzar y adecuar la red de distribución existente de Cipolletti y suministrar el servicio a Fernandez Oro y, la instalación de medidores domiciliarios que permita pasar del actual sistema de consumo presunto a uno de servicio medido. Estas obras se complementan con las correspondientes a la captación y conducción del agua cruda que están en ejecución y con la red de distribución existente a la cual están conectados aproximadamente el 90% de los habitantes. El proyecto ha sido diseñado en base a un estudio comparativo de alternativas considerando las diversas posibilidades de fuentes y el aprovechamiento de las instalaciones existentes de la red de distribución. La alternativa seleccionada ha sido justificada técnica y económicamente y se dispone de los planos completos a nivel ejecutivo, los que se consideran adecuados. Para la realización del proyecto se ha estimado un plazo de 24 meses y en el cronograma de obras se han contemplado tres componentes que son: (a) planta de tratamiento y tanque elevado, (b) acueducto norte y, (c) medidores domiciliarios, trabajos que serán contratados mediante licitación pública. El terreno en el que se construirá la planta de tratamiento fué declarada de utilidad pública por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) de acuerdo a lo que le faculta la ley y el trámite de la expropiación se encuentra bastante adelantado.

El subprestarario será el gobierno de la Provincia de Rio Negro y la ejecución estará a cargo del Departamento Provincial de Aguas con sede en la Ciudad de Viedma, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP). Esta unidad será creada dentro de la estructura orgánica-funcional del DPA, con responsabilidad financiera contable, técnica y administrativa y directa vinculación con la subsede del Departamento en Cipolletti; en tal sentido, la Unidad completará la

documentación para convocar licitaciones, adjudicará contratos, supervisará el trabajo, realizará la inspección y vigilancia, presentará informes, etc. En lo que se relaciona con el aporte del subprestatario para la ejecución de las obras y el posterior pago del servicio de la deuda, se destinarán los fondos necesarios, tomando de los recursos provenientes de los ingresos por concepto de regalías hidroeléctricas que percibe la provincia y que son íntegramente destinados al DPA. Para cubrir los costos de administración, operación, mantenimiento y depreciación, se implementará un sistema tarifario por consumo medido, modificando el sistema vigente que se basa en el catastro de los inmuebles, cuya tasa se ha venido incrementando trimestralmente para mejorar los ingresos y disminuir paulatinamente los subsidios del gobierno provincial.

2. Proyecto de Agua Potable de Corrientes

El costo del proyecto se estima aproximadamente en el equivalente de US\$ 9.741.000 y se preve su financiamiento con recursos del Banco (40%), de la SVOA (30%), del gobierno de la Provincia de Corrientes (25%) y del Banco de la Provincia de Corrientes (5%); consecuentemente, se anticipa un crédito del equivalente de US\$ 6.819.000. El proyecto tiene el objetivo de proveer agua potable a la población que carece del servicio, mejorar el abastecimiento a los usuarios que disponen en forma deficitaria y prever el suministro para la población futura de la ciudad de Corrientes, capital y principal centro urbano de la provincia con el mismo nombre; en tal circunstancia, la población beneficiada con las obras se calcula en aproximadamente 105.000 habitantes cuando entre en operación el sistema.

El proyecto consiste en la construcción de una nueva obra de toma para incrementar el caudal de la captación en un 34%, la ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento existente para alcanzar una producción de 6.000 m³/hora, la construcción de una nueva estación de bombeo para impulsar el agua a los sectores de la ciudad que tienen déficit de servicio, la instalación del acueducto para la distribución a la zona sur, la construcción de un tanque de almacenamiento de 10.000 m³. y una estación de rebombeo, la instalación de una tubería matriz para independizar las mallas del casco céntrico y del área sur y, la instalación de medidores domiciliarios para implantar el sistema de servicio medido para el cobro de tarifas en reemplazo del actual sistema de consumo presunto. Estas obras se complementan con las existentes de la red de distribución y tanque de reserva, con las que se espera cubrir la demanda en forma satisfactoria. El proyecto se ha diseñado en base a parámetros de diseño aceptables, analizando comparativamente las diferentes alternativas posibles y considerando el mejor aprovechamiento de las instalaciones existentes. La alternativa seleccionada está justificada técnica y económicamente y se dispone de los planos completos que se consideran adecuados. Para la realización del proyecto se ha estimado un plazo de 36 meses y en el cronograma de obras se han contemplado los siguientes componentes:

(a) nueva obra de toma, remodelación de la planta de tratamiento,

incluyendo modificaciones en el dispersor, floculadores, decantadores y filtros; (b) construcción de una nueva batería de 8 filtros y de la estación de bombeo; (c) construcción del acueducto del sur, tubería matriz para independizar las redes, ampliaciones del impulsor del este e instalación de conexiones domiciliarias y, (d) tanque de almacenamiento y estación de rebombeo del sur. Estas obras serán contratadas mediante licitaciones públicas. En lo que se refiere a la situación legal de los terrenos se debe señalar que todas las obras serán construídas en propiedades fiscales y de dominio del Estado Provincial y por calles de jurisdicción municipal.

El subprestario será el gobierno de la Provincia de Corrientes y la ejecución estará al cargo de la Administración de Obras Sanitarias de Corrientes (A.O.S.C.). La A.O.S.C. es el organismo responsable de la administración, operación y mantenimiento del servicio de agua en la provincia y cuenta con la experiencia y personal necesario para la realización de las obras; en tal circunstancia, se encuentra completando la documentación para convocar las licitaciones y, posteriormente, a través de una Unidad Ejecutora, realizará la supervisión de las obras y se encargará de todas las actividades de inspección y vigilancia del proyecto. En lo que se refiere al aporte del subprestario, este se efectuará tomando de los recursos provinciales que serán depositados en el Banco de la Provincia de Corrientes. Así mismo, esta entidad bancaria contribuirá al financiamiento del proyecto, cubriendo el 5% del costo. Con el nuevo servicio de agua, se propone implantar tarifas que cubran los costos de explotación del sistema; se espera poner esta modificación en práctica en forma paulatina para reemplazar el antiguo régimen que dejó Obras Sanitarias de la Nación (OSN) que consiste en una tasa sobre el catastro de la propiedad.

3. Proyecto de Agua Potable de Tandil

El proyecto tiene un costo estimado aproximadamente en el equivalente de US\$ 5.669.000, habiéndose previsto el financiamiento con recursos del Banco (30%), de la SVOA (30%), de la Provincia de Buenos Aires (30%) y de la Municipalidad de Tandil (10%); consecuentemente, el monto del crédito será del equivalente de US\$ 3.401.000. El proyecto tiene por objetivo proveer agua al 49% de la población que carece del servicio, mejorar el abastecimiento al 7% que tiene deficiencias durante los meses de verano y prever el suministro para la población futura; en tal circunstancia, la población beneficiada con las obras se calcula en aproximadamente 50.000 habitantes cuando entre en operación el sistema. Actualmente, Tandil tiene una población estimada de 90,000 y es la quinta ciudad de la provincia (después de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y San Nicolás), fuera del Gran Buenos Aires.

El proyecto consiste en la ampliación de las cañerías maestras que permitirán la distribución por gravedad desde la reserva existente de 5.500 m³, instalación de cañerías secundarias y menores para cierre de mallas y distribución en la red de relleno e instalación de medidores en las conexiones domiciliarias. Estas obras,

conjuntamente con las existentes, permitirán resolver el abastecimiento de la población en forma satisfactoria. El proyecto se ha diseñado en base a parámetros de OSN que se consideran aceptables y tomando en cuenta el aprovechamiento de las obras existentes en servicio, habiéndose justificado técnica y económicamente. Se dispone de planos generales y de detalle, pliegos de condiciones, metrajes, etc., lo que significa que está completa la documentación para el llamado a licitación. Para la realización del proyecto se ha estimado un plazo de 18 meses y en el cronograma se han contemplado dos componentes que son: (a) instalación de cañerías y (b) medidores domiciliarios, trabajos que serán contratados mediante el sistema de licitación pública. En razón de la naturaleza de las obras, no existen inconvenientes sobre la situación legal de los terrenos, ya que los trabajos se realizarán en calles públicas de jurisdicción municipal.

Como subprestatario de este proyecto actuará la Municipalidad de Tandil, la que además estará a cargo de la ejecución, operación y mantenimiento de las obras, a través de la Dirección Municipal de Obras y Servicios Públicos. Se ha previsto la formación de una Unidad Ejecutora, utilizando parte del personal de la Intendencia, con dedicación completa al proyecto para la supervisión, inspección y vigilancia, aspectos sobre los cuales se considera que la Municipalidad tiene la experiencia necesaria. En lo que se refiere a los aportes de la Provincia y de la Municipalidad, la asignación de fondos provendrá de los recursos provinciales y municipales que se destinarán para estas obras. Al igual que en todos los demás municipios, el sistema de facturación vigente es el mismo que fue utilizado por OSN, el cual no está basado en el consumo de agua, sino en la superficie del terreno, tipo de construcción y ubicación, sobre lo cual se aplica una tasa por servicios; con el nuevo proyecto, al instalar medidores domiciliarios, se pondrá en marcha el sistema sobre consumo medido, para lo cual se tiene un anteproyecto de estructura tarifaria que, según las hipótesis adoptadas, no afectará la economía familiar.

4. Proyecto de Agua Potable de Neuquén

El costo del proyecto se estima aproximadamente en el equivalente de US\$ 3.807.000, previéndose el financiamiento con recursos del Banco (40%), de la SVOA (30%) y de la Provincia de Neuquén (30%); en consecuencia, se anticipa un crédito del equivalente de US\$ 2.665.000. El proyecto tiene como objetivos fundamentales: mejorar el servicio de la población del área oeste de la ciudad, que tiene conexión a la red Bejarano (28.700 habitantes); abastecer a la población de la misma zona que carece de servicio (17.700 habitantes); asegurar el abastecimiento de la población de los conjuntos FONAVI existentes, en construcción y programadas, así como a las 2.500 viviendas de cooperativas que se desarrollan en la zona de la alta barda y la población correspondiente al crecimiento futuro. En tal circunstancia, la población beneficiada con las obras se estima en 50.400 habitantes cuando entre en operación el sistema y en 113.500 al final del período de diseño. En relación al resto de la ciudad, el sector correspondiente al centro-este está servido

por el sistema Bahía Blanca, cuyo mejoramiento se conseguirá con la supresión de la distribución a la ciudad de Cipolletti (ver Proyecto de Agua Potable de Cipolletti/Fernandez Oro discutido anteriormente) y el sector centro-sur que está servido con el sistema Leguizamón que tiene una cobertura del 88%. Actualmente, Neuquén tiene una población estimada en aproximadamente 140,000 habitantes y es la capital y principal ciudad de la provincia con el mismo nombre.

El proyecto consiste en: la ampliación de la actual fuente de captación mediante la perforación de 3 pozos adicionales en una primera etapa, con su respectivo equipamiento; construcción de la planta de tratamiento para la potabilización de agua de los pozos existentes y de los programados; estación de rebombéo, tubería de impulsión y cisterna de 3.000 m³; cañerías de conducción a las redes de distribución; e instalación de medidores domiciliarios. Con este conjunto de obras se solucionará el problema del sistema Bejarano que tiene prioridad por ser el que presenta el más alto déficit de servicio. El proyecto se ha diseñado en base a los parámetros de OSN que se consideran aceptables y aprovechando las instalaciones existentes, habiéndose estudiado comparativamente las posibles alternativas y justificado técnica y económicamente las obras propuestas. Se disponen de los planos de construcción del proyecto completo de ingeniería y la documentación complementaria requerida para el llamado a licitación. Para la ejecución de las obras se ha estimado un plazo de 24 meses de acuerdo a un cronograma, que incluye la realización de los diferentes componentes, mediante licitación pública. En razón de que los terrenos en los cuales se realizarán las construcciones son de propiedad fiscal y las calles son de jurisdicción municipal, no se prevén inconvenientes sobre dicho aspecto.

La provincia de Neuquén será el subprestatario y ejecutor del proyecto, como persona jurídica de derecho público y conforme a las facultades derivadas de la Constitución Nacional y Provincial. Se creará dentro del Ministerio de Economía y Obras Públicas, una Unidad Ejecutora que tendrá la responsabilidad de ejecución del proyecto. Las funciones de la Unidad Ejecutiva serán completar toda la documentación pendiente, realizar el proceso de licitación y adjudicación de obras, efectuar la supervisión, inspección y vigilancia, presentar informes y cumplir con todas las obligaciones que resulten del otorgamiento del crédito. La administración y mantenimiento de las obras, luego de puestas en marcha, estarán a cargo de la Administración Provincial de Aguas, organismo centralizado dependiente de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, que cuenta con la estructura y experiencia necesaria. En lo que se refiere al aporte del subprestatario y al pago del servicio de la deuda, se utilizarán los recursos asignados por Ley de Presupuesto General, de acuerdo al plan de ejecución financiera elaborado por la Dirección General de Programación y Evaluación de la Provincia. Con la ejecución de las obras, se propone implantar un nuevo régimen tarifario basado en el consumo medido, en sustitución del que se encuentra vigente que consiste en una tasa sobre el catastro de la propiedad, que es la metodología que dejó OSN. Las

nuevas tarifas cubrirían los costos de explotación del sistema, incluyendo la depreciación.

5. Proyecto de Desagües Cloacales de Neuquén

El costo total del proyecto se estima aproximadamente en el equivalente de US\$ 11.370.000 y se ha previsto el financiamiento con los recursos del Banco (40%), de la SVOA (30%) y de la Provincia de Neuquén (30%); en consecuencia, se anticipa un crédito del equivalente de US\$ 7.959.000. El proyecto tiene por objetivo proveer de servicios cloacales a la población que no lo tiene, asegurar el servicio a la población futura y controlar la contaminación de los ríos Limay y Negro, a los cuales actualmente se vierten los efluentes cloacales sin tratamiento; en tal circunstancia, la población beneficiada por las nuevas conexiones será de 15.000 habitantes, en tanto que por el tratamiento se servirá a las 176.000 personas de toda la población (por la eliminación de los peligros de contaminación) cuando entre en operación el sistema y a los 312.000 habitantes calculados para el final del período de diseño.

El proyecto consiste en la construcción de 9 kilómetros de colectores, 5 kilómetros de cloaca interceptora, estación de bombeo, planta de depuración de 70.000 m³/día (lodos activados), bocas de inspección, cámaras y demás obras conexas, las cuales constituyen la complementación del actual servicio de alcantarillado sanitario de la ciudad. Este servicio está compuesto por un sistema que cubre los requerimientos de la zona central, otro sistema que evacúa los residuos cloacales del barrio FONAVI y del parque industrial, un tercer sistema que sirve el sector noreste y un cuarto sistema que abarca la zona noroeste. Con este conjunto de obras se solucionará el problema de saneamiento, que actualmente constituye un serio peligro para la población, en toda la ciudad. El proyecto se ha diseñado adoptando los parámetros vigentes de OSN que se consideran aceptables y son congruentes con los correspondientes al sistema de agua potable, habiéndose aprovechado la totalidad de las instalaciones del sistema existente, luego de analizar las diferentes alternativas de trazado de colectores y su respectiva comparación técnica-económica. Se disponen de diseños y planos completos de los colectores, interceptor y planta de tratamiento, así como de los pliegos de licitación. Para la ejecución de las obras se ha estimado un plazo de 30 meses de acuerdo a un cronograma que contempla la realización de los diferentes componentes mediante una sola licitación pública. Las construcciones propuestas se construirán en calles públicas que son de jurisdicción municipal y en terrenos fiscales de dominio del Estado.

Al igual que para el proyecto de agua examinado anteriormente, la Provincia de Neuquén será el subprestatarario y, a través de la misma Unidad Ejecutora, creada dentro de la estructura del Ministerio de Economía y Obras Públicas, se encargará de la ejecución de las obras, cumpliendo las funciones detalladas en el proyecto paralelo de agua potable. En forma similar, la explotación del sistema será de responsabilidad de la Administración Provincial de Aguas. El aporte de contrapartida será realizado por la Provincia, tomando de

los recursos asignados por la Ley de Presupuesto cuya base económica constituyen las regalías de las explotaciones petroleras, producción frutihortícola y turística. Asimismo, el pago del servicio de la deuda será cubierto por la Provincia. Se ha previsto la implantación de tarifas para cubrir los costos de explotación del proyecto y para ello se proponen incrementar progresivamente las tasas vigentes durante los próximos años, hasta llegar a valores que permitan el autofinanciamiento de los servicios.

6. Proyecto de Desagües Cloacales de Caucete

El costo total del proyecto se estima aproximadamente en el equivalente de US\$4.526.000, proponiéndose su financiamiento con los recursos del Banco (40%), de la SVOA (40%) y de la Provincia de San Juan (20%); en consecuencia, se anticipa un crédito del equivalente de US\$3.621.000. El proyecto tiene como objetivos fundamentales permitir la habilitación de los barrios FONAVI que están en construcción, controlar la contaminación de la napa freática, canales de desagüe y del río San Juan, provocada por el uso de pozos absorbentes y vertimientos directos y permitir el desarrollo urbano que actualmente está detenido por falta total del servicio en la ciudad; en tal circunstancia, la población beneficiada con las obras será de 19.000 habitantes en una primera etapa cuando entre en operación el sistema y de 26.000 habitantes calculados como población futura para el período de diseño. El proyecto beneficiará toda la población de Caucete que es la segunda ciudad de la provincia de San Juan.

El proyecto consiste en la construcción de 45 kilómetros de redes de colección, 3 kilómetros de colector principal, 4 estaciones elevadoras, planta de depuración (zanjas aereadas) y demás obras complementarias que permitan la normal operación del sistema que vendría a sustituir a las cámaras sépticas que tiene el 70% de la población, los pozos negros que dispone el 25% de los habitantes y a las letrinas que sirven al 5% restante. El proyecto se ha diseñado en base a los parámetros vigentes de OSN que se consideran aceptables y que son congruentes con el servicio de agua que dispone la ciudad, así como con las condiciones socio-económicas de la población. Esta solución corresponde a la alternativa que es la más conveniente desde el punto de vista técnico y económico, entre las analizadas que contemplaban variaciones en el trazado de colectores, número y localización de estaciones elevadoras y clases de tratamiento aplicables. La preparación del proyecto ejecutivo se encuentra terminado en un 85%, faltando completar planos de detalle y pliegos de licitación. Para la realización de las obras se ha estimado un plazo de 30 meses de acuerdo al cronograma que contempla la construcción mediante una sola licitación pública. Las instalaciones de la planta de tratamiento se ejecutarán en terrenos que se encuentran en trámite de expropiación, y que se estima finalizar durante 1986; en lo que se refiere a los colectores, su trazado se realizará por las calles públicas que son de jurisdicción municipal, sin que se necesiten obtener servidumbres.

La Provincia de San Juan será el subprestatario del proyecto como persona jurídica de derecho público, conforme a las facultades derivadas de la Constitución Provincial. La ejecución, operación y mantenimiento del proyecto serán asumidos por la Empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado, que es una dependencia de la Secretaría de Servicios Públicos. A tal efecto, se creará una Unidad Ejecutora integrada por personal de la Empresa y tendrá a su cargo la atención de los aspectos técnicos, financieros, administrativos y legales, durante el desarrollo de las obras, incluyendo, consecuentemente, la supervisión, inspección y vigilancia. El aporte de contrapartida será realizado por la Provincia, así como el pago del servicio de la deuda. Está prevista la implantación de un régimen tarifario para cubrir los costos de explotación y para el cobro se propone incluir la tarifa en una sola factura conjuntamente con la energía eléctrica.

7. Proyecto de Desagües Cloacales de Rawson

El costo total del proyecto asciende aproximadamente al equivalente de US\$1.532.000, previéndose su financiamiento con recursos del Banco (40%), de la SVOA (35%) y de la Provincia del Chubut (25%); en consecuencia, se anticipa un crédito del equivalente de US\$1.149.000. El proyecto tiene como objetivos mejorar las condiciones sanitarias de la población y controlar la contaminación provocada por la descarga directa al río Chubut de los desechos cloacales provenientes de la limpieza de los pozos y por el mal funcionamiento de los mismos; en tal circunstancia, la población beneficiada con las obras será de 8.000 habitantes cuando entre en operación el sistema y de 13.700 habitantes que es la población futura al final del período de diseño. Actualmente, Rawson tiene una población de aproximadamente 18.000 habitantes y es la quinta ciudad de la provincia de Chubut (después de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel).

El proyecto consiste en la construcción de 22.7 kilómetros de redes de colección, estación de bombeo, cañería de impulsión a la planta de tratamiento - que está en ejecución con un estado de avance del 80% - y construcción de bocas de registro, cámaras, conexiones domiciliarias, etc., necesarias para la normal operación del sistema que se complementa con una serie de colectores independientes que actualmente sirven al 15% de la población en zonas aisladas de la ciudad. El proyecto se ha diseñado adoptando los parámetros utilizados por OSN que se consideran aceptables, los que son congruentes con el sistema de agua existente, así como con las condiciones socio-económicas de la población. Este diseño corresponde a la alternativa que técnica-económicamente es la más conveniente entre las analizadas que contemplaban variaciones en el trazado de colectores y posibilidad de estaciones elevadoras intermedias. La preparación del proyecto ejecutivo está terminada, debiendo completarse los pliegos de licitación. Para la realización de las obras se ha estimado un plazo de 24 meses de acuerdo al cronograma que contempla la construcción mediante una sola licitación pública. Las instalaciones de la planta elevadora y los tendidos de cañerías se ejecutarán en terrenos fiscales de dominio

del Estado o de jurisdicción municipal, sin que se necesiten obtener servidumbres.

La Provincia de Chubut será el subprestatario, por su capacidad legal y financiera para contraer deudas. La ejecución de las obras estará a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, entidad autárquica que funciona bajo el control de Poder Ejecutivo Provincial por conducto del Ministerio de Bienestar Social y que actualmente es responsable de la construcción de la planta depuradora. Se prevé la formación de una Unidad Ejecutora especial para la coordinación, dirección y supervisión de las obras, así como para las demás actividades de inspección y vigilancia. En relación al operador del sistema, en principio, el gobierno de la provincia había propuesto la Municipalidad de Rawson, sin embargo, la Unidad de Formulación del Programa en la SVOA ha recomendado que se encomiende esta actividad a la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Limitada, que está a cargo de la operación del servicio de agua. El aporte de contrapartida y el pago del servicio de la deuda serán realizados por la Provincia, tomando los fondos de los recursos que perciben por concepto de regalías. La ordenanza municipal vigente dispone el cobro de tasas a los usuarios del sistema, en un valor igual al equivalente a 4.5 por mil sobre la tasación fiscal inmobiliaria, para el fondo de saneamiento. Se ha previsto la necesidad de incrementar un 150% a dicha tasa para alcanzar el valor que la población expresó como su disposición a pagar.

8. Proyecto de Equipamiento Comunitario de la Provincia de Santa Cruz

El costo total del proyecto ascenderá al equivalente de aproximadamente US\$ 5,605,000. Su financiamiento se preve con recursos del Banco (35%), de la SVOA (50%) y de la Provincia de Santa Cruz (15%). Consecuentemente, se estima un crédito de aproximadamente US\$ 4,765,000. El proyecto tiene como objetivo incrementar la oferta de equipamiento comunitario en tres centros urbanos en la Provincia de Santa Cruz. Las obras a ser financiadas son dos jardines de infantes, dos escuelas secundarias, tres unidades sanitarias y dos centros comunitarios con guarderías en Río Gallegos, una unidad sanitaria y dos centros comunitarios con guardería en Caleta Olivia, y un centro comunitario con guardería en Pico Truncado. Los beneficiarios del proyecto incluirán los aproximadamente 25,000 habitantes de los Barrios Belgrano, San Martín y El Carmen en Río Gallegos, los 16,000 residentes de los Barrios Miramar y San Cayetano en Caleta Olivia y más de 6,000 habitantes en Pico Truncado. Río Gallegos es la capital y principal ciudad de Santa Cruz, teniendo una población de aproximadamente 57,000 habitantes, Caleta Olivia es la segunda ciudad de la provincia y tiene aproximadamente 27,000 residentes y Pico Truncado tiene una población de alrededor de 12,000 habitantes.

Aunque actualmente no existen planes reguladores en los tres municipios cubiertos, las obras del proyecto han sido localizadas en las áreas de expansión de cada ciudad y dimensionadas de acuerdo con

los estudios de demanda correspondientes para cada componente. Las obras a construir son prototipos que tienen las siguientes características: escuelas secundarias - estructuras en dos plantas, en una superficie cubierta de 2.930 m² y conteniendo 10 aulas, un salón de usos múltiples, 3 talleres, laboratorios, una biblioteca y otras dependencias; jardines de infantes - cinco aulas, un salón de usos múltiples, y locales administrativos en una área cubierta de 988 m²; centros comunitarios con guarderías - una superficie cubierta de 802 m² con ocho salas, depósitos, oficinas y un patio cubierto; y, unidades sanitarias - 3 consultorios, locales administrativos y oficinas para agentes sanitarios en un espacio cubierto de 280 m². Los diseños de todos los edificios están completos y son adecuados para preparar el pliego de licitaciones. El período previsto de ejecución es 12 meses.

El subprestatario será el gobierno de la Provincia de Santa Cruz. La ejecución del proyecto estará a cargo de una Unidad Ejecutora dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales e integrada por técnicos del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, que cuenta con el personal y la experiencia necesarios para la misma. Los Ministerios de Educación y Cultura y de Asuntos Sociales preverán las partidas presupuestarias requeridas para la operación y mantenimiento de los servicios a partir de la recepción de las obras. La Subsecretaría de Salud Pública administrará las unidades sanitarias y la Subsecretaría de Acción Social será responsable por la operación de los centros comunitarios con guarderías, mientras que la Subsecretaría de Educación se hará cargo del funcionamiento de los jardines de infantes y los colegios secundarios. Los terrenos donde se construirán las obras son municipales y serán cedidos en carácter definitivo a la provincia antes del primer desembolso del subpréstamo. El aporte local y el servicio de la deuda del subpréstamo, así como los gastos de operación y mantenimiento, dependerán de recursos presupuestarios de la provincia.

9. Proyecto de Equipamiento Comunitario de Cipolletti

El costo total del proyecto será el equivalente de aproximadamente US\$ 3,895,000. Su financiamiento se preve con recursos del Banco (40%), de la SVOA (45%) y de la Provincia de Río Negro (15%). Se anticipa, por lo tanto, un crédito de aproximadamente US\$ 3,311,000. El proyecto tiene como objetivo incrementar y readecuar espacialmente la oferta de equipamiento comunitario para la población actual y la que se localizará hasta el año 1990 en la zona noreste de Cipolletti, que es el área de expansión de la ciudad. El proyecto incluirá jardines de infantes, escuelas, guarderías y un puesto sanitario, incrementando la capacidad local existente de acuerdo con las siguientes metas: jardines de infantes - 300 plazas; escuelas primarias - 1,000 plazas; escuela secundaria - 600 plazas; guarderías - 196 plazas; y puesto sanitario - capacidad para realizar 70,000 consultas de atención primaria por año en un área de influencia teniendo una población de aproximadamente 10,000 habitantes en 1990. Se estima que un total de 15,000 personas de menores recursos en los barrios existentes de Anai Mapu, Villarino y Don Bosco y un barrio nuevo conteniendo 1224 viviendas FONAVI,

actualmente en construcción, se beneficiarán directamente del proyecto. Cipolletti tiene una población estimada de 55,000 habitantes y es la segunda ciudad (después de San Carlos de Bariloche) en la Provincia de Río Negro.

Los distintos componentes del proyecto han sido localizados en función de la distribución espacial de la demanda actual y futura y servirán al proceso de expansión urbana que prevé el Plan Regulador de Cipolletti. El Proyecto consiste en la construcción de dos jardines de infantes con 5 salas y 422 m² de superficie cubierta cada uno, una escuela primaria teniendo 14 aulas comunes y 3 aulas especializadas en una área cubierta de 1.784 m², una escuela secundaria con 10 aulas comunes y 4 aulas especializadas en una superficie cubierta de 1.494 m², dos guarderías con 4 salas comunes y una sala para lactantes y 422 m² de área construida cada una, y un puesto sanitario teniendo 5 consultorios y una oficina de agente sanitario en 202 m² de superficie construida, así como la ampliación de una escuela primaria existente de 8 aulas, a través de la construcción de 6 aulas y 2 talleres adicionales en una superficie cubierta de 1.932 m². Los diseños de arquitectura, estructura e instalaciones de todas las obras del proyecto están completos y se ha programado un período de ejecución de 20 meses.

El subprestatario será el gobierno de la Provincia de Río Negro y el responsable por la ejecución del proyecto será el Ministerio de Obras Públicas, a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), que cuenta con la experiencia técnica y planta de personal suficiente para esta tarea. La operación de los servicios educacionales (jardines de infantes y escuelas) estará a cargo del Consejo Provincial de Educación que depende el Ministerio de Cultura y Educación, mientras que la operación de la unidad sanitaria será la responsabilidad del Ministerio de Salud y el funcionamiento de las guarderías estará a cargo de la Subsecretaría de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Acción Social. Los terrenos donde se construirán los edificios del proyecto son de propiedad del IPPV, con la excepción del terreno para la escuela secundaria, que actualmente es de dominio municipal, pero será traspasado al IPPV antes del primer desembolso del subpréstamo. La contrapartida local del proyecto, el servicio de la deuda del subpréstamo y los costos de operación y mantenimiento de las facilidades construidas serán aportados con recursos del presupuesto provincial.

10. Proyecto de Defensa contra Inundaciones de Salta

El costo total del proyecto se estima aproximadamente en el equivalente de US\$ 1.562.000, proponiéndose su financiamiento con recursos del préstamo del Banco (30%), de la SVOA (60%) y de la Provincia de Salta (10%); en consecuencia, se anticipa un crédito del equivalente de US\$ 1.406.000. El Proyecto tiene como objetivo fundamental proteger de las inundaciones el área ya habitada del barrio Santa Ana, que cuenta con un 95% de población FONAVI y que continuamente viene sufriendo pérdidas por daños en las propiedades, y habilitar los terrenos en los que se asentará el barrio Limache

destinado para la construcción de nuevas viviendas; en tal circunstancia, la población beneficiada con las obras es de 10.500 habitantes que viven actualmente en la zona de influencia y que en el futuro serán de 54.000 con la ejecución de los planes de vivienda del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV). Actualmente, Salta tiene una población estimada de 330.000 habitantes y es la capital y principal ciudad de la provincia con el mismo nombre.

El proyecto consiste en la canalización y revestimiento del río Ancho en una longitud de 6.690 metros, incluyendo en su recorrido 7 alcantarillas y 3 pasarelas peatonales. Con estas obras se evitarán las inundaciones que se presentan durante la época estival, entre los meses de noviembre y abril, en la cual se producen precipitaciones que oscilan entre 750 y 850 mm., cuya escorrentía, -sumada a los aportes del municipio de Cerrillos, conglomerados vecinos y desagües del propio barrio Santa Ana, totalizan un caudal de 60 m³/seg. - que se desborda del cauce ocasionando importantes pérdidas materiales. Para el diseño del proyecto se adoptó una frecuencia de lluvia de 10 años y los demás parámetros utilizados normalmente para desagües pluviales que se consideran aceptables. Se analizaron distintas soluciones, considerando un dique amortiguador de crecidas, defensas de las márgenes, canalización y revestimiento del canal, siendo esta última la que presentó mejores ventajas desde los puntos de vista técnico y económico. El proyecto ejecutivo está terminado en un 90%, faltando concluir pocos detalles de los pliegos de licitación. Para la realización de las obras se ha estimado un plazo máximo de 12 meses, dependiendo de las condiciones climáticas que se presenten. La ejecución de las obras sería contratada mediante una sola licitación pública que incluya todos los componentes previstos del proyecto. Los terrenos sobre los que se construirá el canal son de propiedad del Estado y las servidumbres de paso bajo puentes de vialidad, serán tramitados oportunamente conforme al Decreto-Ley de Obras Públicas de la provincia.

El subprestatario será el gobierno de la Provincia de Salta, debiendo previamente obtener la necesaria autorización del Poder Legislativo Provincial, para contraer el crédito. El ejecutor será la Administración General de Aguas (AGAS) que, de acuerdo a la Ley de su creación, tiene la responsabilidad de aplicar y vigilar el Código de Aguas, planificar obras hidráulicas, construir obras de desagües, defensas y saneamiento de zonas inundables, etc. Para la realización del proyecto, la AGAS organizará una Unidad Ejecutora, la que se encargará de atender los aspectos financiero-contables, técnicos y administrativos durante el desarrollo de las obras, incluyendo la supervisión de la construcción. El mantenimiento de las obras será encargado a la Sección de Conservación y Mantenimiento de la Dirección General de Hidráulica de la AGAS. El aporte de contrapartida y el pago del servicio de la deuda serán realizados por la provincia, tomando los recursos que se destinan a la limpieza del río Ancho. Dada la naturaleza del proyecto, no se preve el cobro de tasas o tarifas.

11. Proyecto de Mejoramiento Vial de Salta

El costo total del proyecto se calcula aproximadamente en el equivalente de US\$ 1.731.000, cuyo financiamiento se realizaría con recursos del préstamo del Banco (20%), de la SVOA (60%) y de la Municipalidad de Salta (20%); en consecuencia, se preve un crédito del equivalente de US\$ 1.384.000. El proyecto tiene como objetivo resolver el problema del déficit de capacidad de la Avenida "Combatientes de las Malvinas". Esta avenida es el eje urbanístico de los conjuntos habitacionales existentes y de los que se construirán en la zona sur de la ciudad, de acuerdo al programa de vivienda de FONAVI que albergará a 85.000 habitantes en los próximos años; en tal circunstancia, la población beneficiada con las obras es de 29.000 personas que actualmente habitan en la zona y de 115.000 habitantes que se calcula como población futura, incluyendo la correspondiente a los planes FONAVI y la de urbanizaciones particulares, cuya implementación obedece a la disposición del gobierno provincial de destinar esta zona para el crecimiento de la ciudad.

El proyecto consiste en el ensanche de la calzada de la avenida, ampliándole a cuatro carriles con separador intermedio en un tramo de 4.620 metros a partir de su intersección con la Ruta Nacional No.51 hasta el puente sobre el río Ancho que limita la zona sur urbanizada. Dicha avenida se conecta en su origen con una amplia arteria de penetración hacia el centro de la ciudad de Salta, estará dotada de las obras complementarias suficientes para asegurar la correcta operación de la vía y está muy relacionada con el proyecto de canalización del cauce del río Ancho, propuesto para defensa contra inundaciones de la zona sur de la ciudad y discutido anteriormente. Para el diseño del proyecto, se analizó el volumen de tránsito mediante censos en varios puntos de la vía en diferentes días y se determinó el diseño geométrico y demás parámetros correspondientes a la demanda calculada, respetando las normas vigentes de los organismos competentes del sector y que se consideran aceptables. Se estudiaron tres alternativas de trazado y tres de diseño de pavimento, para lograr la solución técnica-económica de mayores ventajas, habiéndose seleccionado el ensanche de la calzada con pavimento rígido. El proyecto ejecutivo está terminado y en condiciones para su llamado a licitación. Para la realización de las obras se ha estimado un plazo de 6 meses y se ha previsto la contratación mediante una sola licitación que contemple todos los componentes. En relación a la situación legal de los terrenos donde se ejecutarán las obras falta solamente la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial para la cesión al Municipio de la franja de la ex Ruta Nacional No. 68, que es objeto de este proyecto.

El subprestatario y ejecutor será el Municipio de Salta, como persona jurídica de derecho público con plena capacidad para suscribir convenios y contratos. Para realizar las tareas de administración del proyecto, así como para la supervisión e inspección de los trabajos, como Unidad Ejecutora fué designada la Dirección General de Pavimentos, Canales e Infraestructura,

dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad. La misma dependencia será responsable de la operación y mantenimiento de la vía. El aporte de contrapartida será cubierto por la Municipalidad, tomando los fondos de los recursos asignados al programa de construcción de obras, preparado por el Departamento Ejecutivo y aprobado por el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad. Para la recuperación de la inversión y pago del servicio de la deuda, el Municipio ha dictado un decreto mediante el cual se dispuso afectar el 7% de la recaudación en concepto de tasas por alumbrado, barrido y limpieza, a la totalidad de contribuyentes de la ciudad, quienes están registrados en un empadronamiento que se actualiza periódicamente para procurar una adecuación permanente a la variación de los gastos.

12. Proyecto de Energía Eléctrica de Salta

El costo total del proyecto se estima en el equivalente de aproximadamente US\$ 825,000. Su financiamiento se prevé con recursos del préstamo del Banco (40%), de la SVOA (48.5%) y de la Provincia de Salta (11.5%). Consecuentemente, se anticipa un crédito de aproximadamente US\$ 730,000. El proyecto tiene por objeto substituir una línea antigua, de menor capacidad de transmisión, por una que permita satisfacer la demanda de los barrios de El Tribuno e Intersindical donde actualmente existen aproximadamente 5,800 usuarios (incluyendo 5,500 residencias, 160 actividades comerciales y 80 industrias), así como de un nuevo conjunto de 250 viviendas del Banco Hipotecario Nacional, actualmente en construcción.

Las obras se desarrollarán como parte de un plan de remodelación, modernización y optimización de la red existente de la ciudad de Salta. El proyecto consiste en la construcción de una línea de transmisión de una terna de 13.2 kV y 6.2 km. de longitud. Los diseños se encuentran terminados y al nivel de detalle para construcción.

El subprestatario será el gobierno de la provincia y el organismo ejecutor será la Dirección Provincial de Energía de Salta (DPES), que cuenta con la capacidad técnica y administrativa necesaria. La construcción se efectuará en un período de seis meses y podrá iniciarse una vez que la Legislatura Provincial autorice la contratación del subpréstamo y el Poder Ejecutivo Provincial designe a la DPES como ejecutora de las obras. La recuperación de las inversiones se efectuará mediante el cobro de tarifas por parte del DPES que también será el operador del servicio.

13. Proyecto de Energía Eléctrica de Posadas

El costo total del proyecto ascenderá a aproximadamente US\$1,857,000. Su financiamiento incluirá recursos del préstamo del Banco (40%), de la SVOA (40%) y de la Provincia de Misiones (20%). Por lo tanto, se estima un crédito de aproximadamente US\$1,485,000. El objetivo del proyecto es de reemplazar una línea antigua de 13.2 kV, construída hace más de 15 años, por una de 33 kV que permitirá atender la demanda actual y futura de una área en la zona noroeste

de Posadas, cuyo desarrollo ya superó la capacidad existente y es el área prevista de expansión de esta ciudad. En la zona del proyecto actualmente se encuentran unos 2,370 usuarios (de los cuales aproximadamente 2,130 son residencias y 240 son actividades comerciales) y se hallan en ejecución planes del FONAVI para la construcción de otras 2,800 viviendas. Posadas tiene una población estimada de 180,000 habitantes y es la capital y principal ciudad de la Provincia de Misiones. Las obras del proyecto forman parte de un programa de modernización y optimización de la red eléctrica de Posadas. Se prevé el aprovechamiento de una línea existente de 33 kV y doble terna, actualmente fuera de servicio por cuanto se utilizaba para interconexión con el Paraguay cuando Posadas tenía un déficit de suministro de energía. La obra comprende la construcción de una terna de 33 kV y 6.3 km. de longitud y de una estación transformadora 33kV/13.2kV en el extremo de la misma. Los diseños se encuentran concluidos a nivel de proyecto ejecutivo para construcción. Se estima un plazo de ejecución de ocho meses.

El subprestatario será el gobierno de la Provincia de Misiones. La entidad encargada de la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto será la empresa Electricidad de Misiones SA. (EMSA), que cuenta con la suficiente capacidad y experiencia para realizar el tipo de proyecto propuesto. EMSA también efectuó los diseños del proyecto y es organismo prestatario del Banco, ya que tiene a su cargo la ejecución del proyecto hidroeléctrico Uruguái, de 120 MV, financiado con los préstamos 85/IC y 666/SF-AR. La recuperación de las inversiones se efectuará mediante el cobro de tarifas por el servicio al cargo de EMSA.

14. Proyecto de Gas de James Craik.

El costo total del proyecto se estima en el equivalente de aproximadamente US\$ 1,520,000. Su financiamiento se prevé con recursos del Banco (30%), de la SVOA (15%), de la Empresa de Gas del Estado (30%), de la Provincia de Córdoba (10%) y de la Municipalidad de James Craik (15%). Consecuentemente, se anticipa un crédito de aproximadamente US\$ 685,000. El proyecto tiene por objeto dotar del suministro de gas natural por redes a la localidad de James Craik que tiene una población de aproximadamente 3,200 habitantes. El proyecto incluirá 954 conexiones, de las cuales 10 corresponden a industrias localizadas en el área y las demás serán domiciliarias. Los usuarios industriales, no obstante, serán responsables por el 67% del consumo total. La fuente de alimentación será el Gasoducto Norte que pasa a 5.8 Km. de la localidad.

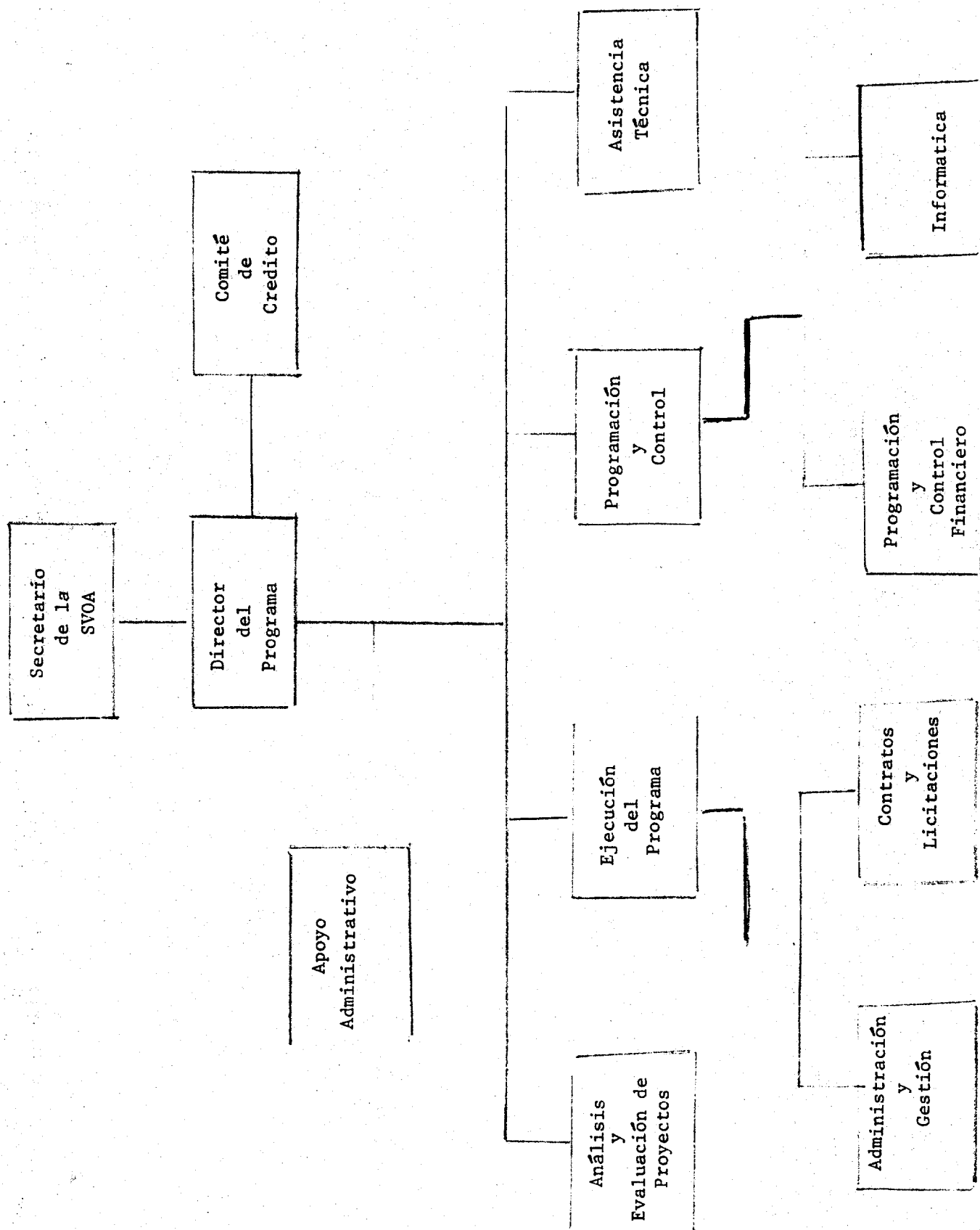
El proyecto forma parte de un programa nacional de ampliación del uso del gas natural y de substitución del consumo de gas oil y fuel oil que contempla la incorporación de 150,000 a 200,000 nuevos usuarios por año. El proyecto consiste en la construcción de un gasoducto de aproximación de 5.85 km. de longitud y un diámetro de 102 mm., así como una red de distribución con una extensión total de 21.2 km., y diámetros variando entre 19 mm. y 203 mm. El proyecto también incluirá la instalación de una cámara reductora de presión troncal de 60 a 10 kg/cm² y otra secundaria que reducirá de 10 a 1.5

kg/cm². El caudal máximo del gasoducto será de 3,000 m³/h. Los diseños se encuentran terminados y se prevé un plazo de ejecución de 24 meses.

El subprestatario será el gobierno de la Provincia de Córdoba. La construcción de este proyecto fué aprobada por Gas del Estado, que, para el efecto, firmó un convenio con la Municipalidad. Según este convenio, la Municipalidad será responsable por la ejecución del proyecto y Gas del Estado por su posterior operación y mantenimiento. Además de eso, Gas del Estado suministrará la cañería y los medidores y efectuará el empalme con el gasoducto troncal, así como la supervisión de las obras ejecutadas por la Municipalidad. Los terrenos de las obras son de propiedad municipal y los requeridos por las estaciones reductoras de presión serán cedidos a Gas del Estado. Las obras, una vez terminadas, quedarán incorporadas en el patrimonio de Gas del Estado. La recuperación de costos se logrará por medio de tarifas aplicadas al consumo de gas. El servicio de la deuda del crédito del Programa será cubierto mediante el cobro de cuotas a los usuarios de la red en la forma de una contribución de mejoras.

ORGANIGRAMA DE LA OFICINA DE PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO (OPDU)

Anexo No. IV-1



Anexo No. IV-2

Funciones Específicas del Director del Programa y de las Direcciones de la Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano

Las principales responsabilidades del Director el Programa serán las siguientes:

- establecer las orientaciones generales para planificar, coordinar, evaluar y controlar la marcha del Programa;
- elevar el programa operativo anual y los planes de trabajo para el conocimiento y aprobación del Secretario de Vivienda;
- suscribir la documentación que emita el Programa y, en especial, aquella que signifique compromisos de fondos;
- coodinar el ingreso de solicitudes y su tramitación;
- recomendar las autorizaciones de financiamiento;
- recomendar sobre las rendiciones que realicen los subprestatarios;
- informar al Secretario sobre el cumplimiento de las metas del Programa y elevar para su decisión los reglamentos, estados demostrativos y balances de la Cuenta Especial, así como toda otra información complementaria; y
- suscribir las solicitudes de desembolso al BID.

Las funciones básicas de la Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos serán las que se indican a continuación:

- elaborar modelos operativos globales y particulares de evaluación y formular o revisar las metodologías de análisis correspondientes para los proyectos en cada sector;
- elaborar o revisar y mantener actualizadas las normas y guías de presentación del Programa;
- entender en la aplicación de los criterios de elegibilidad del Programa
- orientar los eventuales subprestatarios en la preparación de la documentación de apoyo a las solicitudes de crédito;
- apoyar la Dirección de Asistencia Técnica en la orientación de los consultores contratados a través del subprograma de asistencia técnica para apoyar eventuales subprestatarios en la formulación y presentación de proyectos específicos;

- examinar las particularidades y aspectos críticos de cada proyecto, recomendando las reformulaciones necesarias;
- realizar el análisis técnico, socio-económico, financiero e institucional de los proyectos presentados y preparar los informes de proyecto correspondientes; y
- realizar la evaluación ex-post de los proyectos específicos y colaborar en la evaluación ex-post del Programa.

Las funciones de la Dirección de Ejecución del Programa incluirán las siguientes en cada subárea:

i) Administración y Gestión del Programa:

- realizar las tareas de inspección y vigilancia del Programa;
- mantener un adecuado vínculo con las instituciones del gobierno involucradas en la ejecución del Programa;
- llevar un registro y archivo de contratos y convenios y toda otra documentación correspondiente al Programa;
- realizar los trámites administrativos vinculados a los desembolsos de la Cuenta Especial y todas aquellas tramitaciones normales ante instituciones públicas; y
- mantener las relaciones normadas con las dependencias de la SVOA que se ocupan de administrar y registrar los tramites y los movimientos de fondos del FONAVI.

ii) Contratos y Licitaciones:

- elaborar los contratos, convenios y garantías de cada operación de crédito y asistencia técnica;
- verificar el cumplimiento de los procedimientos de licitación y adjudicación de obras en cada proyecto financiado; y
- verificar los contratos que se suscriban con las empresas adjudicatarias de obras en cada proyecto financiado.

La Dirección de Programación y Control, a su vez, tendrá las siguientes responsabilidades básicas, en cada subárea:

i) Programación y Control Financiero:

- elaborar y actualizar el plan financiero del Programa;
- elaborar proyecciones financieras de corto, mediano y largo plazo, detallando compromisos asumidos, saldos disponibles y utilización de créditos por categorías;

- elaborar los estados financieros con arreglo al plan de cuentas, por categorías de inversión y fuentes de financiamiento;
- verificar el cumplimiento de las acreditaciones en la Cuenta Especial del Programa y en las cuentas de los subprestatarios;
- coordinar la administración de la Cuenta Especial y verificar los cargos por intereses y comisiones;
- intervenir en la elaboración de las solicitudes de desembolsos al BID;
- realizar el seguimiento de los subpréstamos a partir de su otorgamiento y durante su amortización (incluyendo cobranzas) y efectuar el análisis de solicitudes de prórroga y/o refinanciamiento;
- emitir informes sobre el cumplimiento de metas y cronogramas y hacer las recomendaciones pertinentes sobre la continuidad de la cooperación financiera en cada caso; y
- coordinar en la elaboración del informe de evaluación ex-post del Programa.

ii) Informática:

- diseñar y procesar modelos de seguimiento y evaluación de proyectos y del Programa;
- registrar información contable y financiero de los proyectos y del Programa;
- registrar y procesar sistemas de control de avance de proyectos;
- preparar y mantener archivos computarizados de ingresos y egresos de fondos, certificados, ordenes de pago, requerimientos de desembolsos y notificaciones de transferencias de recursos del BID;
- procesar solicitudes de desembolsos de los subprestatarios;
- colaborar en la elaboración de y procesar los estados financieros y las proyecciones;
- colaborar en la elaboración de formularios para las solicitudes de desembolsos al BID; y
- preparar y operar un sistema de información para control del PEP de cada proyecto financiado.

Finalmente, la Dirección de Asistencia Técnica tendrá, entre sus funciones, las indicadas a continuación:

- apoyar la Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos en la identificación de necesidades de asistencia técnica asociadas a la elaboración de proyectos específicos de inversión;
- orientar los eventuales beneficiarios en la preparación de solicitudes de asistencia técnica;
- procesar y analizar las solicitudes de asistencia técnica, con el apoyo de los especialistas pertinentes de la Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos en los casos que corresponda, y preparar los informes y recomendaciones correspondientes;
- administrar la selección y contratación de expertos individuales y/o firmas o entidades consultoras, con el apoyo de la Dirección de Ejecución del Programa;
- realizar el seguimiento de los trabajos de asistencia técnica y recomendar los pagos correspondientes, con el apoyo de los especialistas pertinentes de la Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos cuando corresponda; y
- efectuar la evaluación ex-post de las distintas actividades de asistencia técnica promovidas por el Programa.

ARGEN/025

Julio 22, 1986

Anexo No. IV-3

Perfil Profesional del Personal Permanente de las Direcciones
de la Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano (OPDU)

i) Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos

- 1 profesional de nivel senior con experiencia en el análisis y evaluación técnica, socio-económica, financiera e institucional de proyectos de inversión en infraestructura y equipamientos urbanos para hacerse cargo de esta Dirección;
- 3 ingenieros de nivel senior para el análisis técnico de los proyectos, con formación y experiencia en las áreas de ingeniería sanitaria, de ingeniería civil y de proyectos de defensa contra erosión e inundaciones y de mejoramiento vial y desagues pluviales, respectivamente;
- 1 ingeniero sanitario junior para dar apoyo en las tareas de análisis de proyectos de la especialidad;
- 2 economistas senior para las tareas de análisis y evaluación económico de los proyectos;
- 1 economista junior para dar apoyo a las tareas de análisis y evaluación económico de proyectos;
- 1 analista financiero senior para realizar el análisis financiero de los proyectos;
- 1 analista institucional senior para realizar el análisis institucional de los proyectos;
- 1 arquitecto/planificador urbano de nivel senior para realizar el análisis de los aspectos urbanos y/o arquitectónicos de los proyectos; y
- 1 sociólogo/planificador social de nivel senior para el análisis del suministro de los servicios a ser ofrecidos a través de los proyectos de equipamiento comunitario.

ii) Dirección de Ejecución del Programa

- 1 profesional de nivel senior con experiencia en la ejecución y administración de programas de desarrollo urbano, preferentemente financiados por instituciones financieras institucionales, para hacerse cargo de esta Dirección;

a) Subárea de Administración y Gestión

- 1 profesional senior, preferentemente ingeniero, con experiencia en tareas de administración y control de ejecución de programas de financiamiento del desarrollo urbano; y
- 2 profesionales junior para dar apoyo en las tareas de administración y gestión del Programa y preparación de informes de progreso.

b) Subárea de Contratos y Licitaciones

- 1 ingeniero senior para realizar el seguimiento y control de contratos, licitaciones y auditoría de proyectos, preferentemente con experiencia en la contratación de obras y adjudicaciones, adquisiciones y pliegos de licitación elaborados de acuerdo a los procedimientos del BID; y
- 1 profesional junior, preferentemente abogado, para dar apoyo en las tareas de control de contratos y procedimientos de licitación.

iii) Dirección de Programación y Control

- 1 profesional de nivel senior con experiencia en programación y control de programas de desarrollo urbano, preferentemente financiados por instituciones financieras internacionales, para dirigir las tareas de esta Dirección.

a) Subárea de Programación y Control Financiero

- 1 economista senior para tareas de programación y presupuestación de inversiones;
- 1 analista financiero senior para tareas de análisis y control financiero del Programa; y
- 1 analista financiero junior para dar apoyo en las tareas de programación y control financiero del Programa.

b) Subárea de Informática

- 1 profesional en computación de nivel senior con experiencia en análisis de sistemas y diseño de modelos operativos;
- 1 profesional en computación de nivel senior especializado en montaje y operación de sistemas analíticos de evaluación de proyectos y administración de programas;
- 1 profesional en computación de nivel junior para la

operación de tareas de computación con sistemas diseñados en la OPDU y/o con "software" diseñado por organismos internacionales; y

- 2 ayudantes técnicos para tareas de ingreso y digitación de información al sistema de computo.

iv) Dirección de Asistencia Técnica

- 1 especialista de nivel senior con experiencia en actividades de pre-inversión y capacitación de recursos humanos en programas de desarrollo urbano, para coordinar el Subprograma de Asistencia Técnica; y
- 1 profesional junior para dar apoyo en las tareas de organización y administración del Subprograma de Asistencia Técnica.

ARGEN/026
Julio 22, 1986

Términos de Referencia y Perfiles Profesionales de los Asesores
a la OPDU a ser Financiados con Recursos del BID y del PNUD

Además de las responsabilidades generales indicadas en la Sección B.4 de Capítulo IV de este Informe, los distintos asesores ejecutarán los términos de referencia y tendrán los perfiles profesionales que se indican a continuación.

A. Asesores Financiados con Recursos del BID

1. Asesor en Análisis y Evaluación Socio-económico de Proyectos:
cooperará con el Director del Programa y apoyará la Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos en la supervisión y/o realización de las siguientes actividades:

- orientar a las autoridades y organismos provinciales y municipales y otros potenciales subprestatarios del Programa en la preparación de los aspectos económicos de las solicitudes de crédito;
- elaborar o revisar guías de análisis socio-económico para los distintos sectores del Programa, ayudando a establecer metodologías adecuadas, así como necesidades de información para la evaluación de proyectos;
- aplicar las referidas metodologías en casos concretos, participando en el análisis de proyectos específicos en cada sector;
- establecer criterios detallados sobre evaluación del impacto distributivo de los proyectos y los procedimientos para su aplicación sistemática;
- establecer pautas para la presentación sistemática de los resultados del análisis económico de los proyectos;
- asesorar con respecto a los procedimientos de pre-selección de proyectos, ayudando a establecer mecanismos simplificados de identificación de proyectos viables;
- analizar y revisar las conclusiones y recomendaciones que se vayan elaborando sobre las solicitudes de crédito;
- asesorar con respecto al mecanismo de evaluación ex-post de los proyectos financiados, ayudando a definir procedimientos y requerimientos para dicha evaluación; y
- apoyar la Dirección de Asistencia Técnica en la definición del contenido y formulación de los términos de referencia para los estudios generales y particulares de pre-inversión a ser promovidos a través del Subprograma de Asistencia Técnica.

Adicionalmente, el asesor presentará al final de cada año de su contrato un informe al Banco en donde describa metodologías de

análisis utilizadas en evaluaciones ex-ante principales resultados obtenidos y observaciones o recomendaciones al respecto.

El asesor deberá poseer formación de economista a nivel de post-grado y tener, por lo menos, 5 años de experiencia profesional en el análisis y evaluación socio-económico de proyectos de desarrollo urbano. Será contratado por un período de 36 meses a iniciarse dentro de 6 meses del establecimiento de la OPDU.

2. Asesor en Transacciones Financieras: cooperará con el Director del Programa y apoyará la Dirección de Ejecución del Programa en la supervisión y/o realización de las siguientes actividades:

- coordinar las realizaciones del Programa con la Secretaría de Hacienda y el Banco Central en lo referente a las transacciones financieras de la Cuenta Especial;
- coordinar la emisión de Solicitudes de Desembolsos al BID y el seguimiento de la movilización de estos recursos hasta su disponibilidad en la OPDU;
- coordinar y manejar las disponibilidades de recursos financieros de la OPDU en las diferentes instituciones financieras, incluyendo las inversiones temporales de tales recursos;
- coordinar y supervisar los desembolsos de recursos a los beneficiarios de los subpréstamos;
- supervisar y dirigir el proceso de cobro de las obligaciones generales por las operaciones de préstamos y de asistencia técnica;
- coordinar los pagos de las amortizaciones y comisiones relacionadas con el préstamo del BID, asegurándose de la disponibilidad oportuna de los recursos, para su transferencia a la Secretaría de Hacienda y/o Banco Central;
- coordinar el envío de la información financiera relacionada con las transacciones del Programa a las unidades encargadas de la elaboración de los estados financieros;
- supervisar la preparación de los informes relacionados con las transacciones financieras a su cargo con la periodicidad que le sea requerida por la administración de la OPDU;
- participar en la elaboración de documentos de política interna relacionados con la administración financiera de los recursos del Programa; y
- participar, en la medida que le sea solicitada, en la elaboración de la documentación de apoyo de la aprobación de los subpréstamos y operaciones de asistencia técnica, así como en el proceso de toma de decisiones en esas aprobaciones.

El asesor deberá poseer formación de economista o administrador y tener por lo menos 5 años de experiencia en la administración de programas de crédito para proyectos de inversiones, preferentemente de desarrollo urbano. Será contratado por un período de hasta 60 meses a iniciarse dentro de 6 meses del establecimiento de la OPDU.

3. Asesor en Asuntos Legales: cooperará con el Director del Programa y apoyará la Dirección de Ejecución del Program en la supervisión y/o realización de las siguientes actividades:

- Constitución legal del Subprestatario: revisar y detallar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que le dieron origen;
- Capacidad legal para contratar el préstamo: revisar y detallar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que facultan el beneficiario para contratar el préstamo;
- Representación para la firma del convenio de subpréstamo: revisar e indicar la disposición legal o estatutaria en que se funda y como dicha representación es suficiente para celebrar el convenio en la OPDU. (Alternativas: Tratándose de mandato, indicar el acto o contrato en que se origina, y como dicha representación es suficiente para celebrar el convenio con la OPDU);
- Validez del convenio: precisar las razones jurídicas por las cuales las cláusulas del convenio que se suscribirá con la OPDU constituirán obligaciones válidas cuyo cumplimiento puede ser exigido en su oportunidad al subprestatario;
- Capacidad legal para ejecutar el proyecto: señalar las normas legales y/o reglamentarias demostrativas de que el subprestatario tiene la facultad plena para ejecutar el proyecto; caso de que la ejecución del proyecto vaya a llevarse a cabo por intermedio de otra u otras entidades u organismos, el informe jurídico deberá reseñar brevemente la capacidad legal de la entidad que vaya a actuar de ejecutora;
- Adquisición de bienes y/o contratación de servicios: detallar las disposiciones legales aplicables al subprestatario o executor en materia de adquisiciones o contrataciones, dando marcado énfasis al aspecto de licitación pública, a fin de que pueda apreciarse si el reglamento de licitaciones se conforma o no con las normas de política del Banco en esta materia;
- Contratos de Garantía:
 - (i) Capacidad legal para celebrar el contrato de garantía: revisar e indicar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que facultan al garante para celebrar el contrato de garantía con el Banco y explicar la forma en que se les ha dado cumplimiento;

- (ii) Representación para firma del contrato: señalar las disposiciones legales o estatutarias en que se funda y como dicha representación es suficiente para celebrar el contrato con la OPDU; tratándose de mandato contractual, indicar el acto o contrato que la establezca, y cómo dicha representación es suficiente para celebrar el contrato con la OPDU;
- (iii) Validez del contrato: indicar las razones jurídicas por las cuales las cláusulas del contrato de garantía que se suscribirá con la OPDU constituirán obligaciones válidas cuyo cumplimiento puede ser exigido en su oportunidad al garante;
- realizar el seguimiento correspondiente en cada operación de subpréstamo otorgado, informando oportunamente como el subprestatario ha dado cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso, así como en general el grado de cumplimiento de las disposiciones contractuales establecidas en el convenio de subpréstamo y/o contrato de garantía (si son del caso), necesarias para la ejecución del proyecto; y
- intervenir en la preparación de todos aquellos documentos legales necesarios con motivo de la verificación, aprobación, modificación y dispensa de cláusulas contractuales, originadas en el convenio del subpréstamo y/o en el contrato de garantía.

El asesor deberá poseer título de abogado reconocido en el país y tener por lo menos 5 años de experiencia en la ejecución de programas de inversiones públicas, preferentemente de infraestructura urbana. Será contratado por un período de 36 meses a iniciarse dentro de 6 meses de establecimiento de la OPDU.

4. Asesor en Asistencia Técnica: cooperará con el Director del Programa y apoyará la Dirección de Asistencia Técnica en la supervisión y/o la realización de las siguientes actividades:

- asesorar en el establecimiento de las políticas y pautas generales de las actividades de asistencia técnica del Programa;
- establecer las políticas de adiestramiento del personal permanente de la OPDU y definir y administrar las actividades específicas de entrenamiento en servicio de estos profesionales;
- establecer pautas para definir la asistencia técnica necesaria en los proyectos específicos en cada sector;
- establecer o revisar los métodos y procedimientos de evaluación, selección y contratación de expertos individuales y/o firmas consultoras para cada tipo de asistencia técnica a ser promovido o financiado por el Programa;

- establecer los métodos y pautas de determinación de montos a otorgar en cada operación específica de asistencia técnica;
- establecer criterios específicos y procedimientos para la formulación, análisis y aprobación de los términos de referencia a utilizar para cada tipo de asistencia técnica;
- establecer un sistema de seguimiento y evaluación de las actividades de asistencia técnica del Programa;
- ayudar en la puesta en marcha y aplicación de las recomendaciones formuladas sobre las actividades de asistencia técnica del Programa;
- evaluar los resultados de las operaciones de asistencia técnica promovidas o financiadas por el Programa; y
- elaborar las bases técnicas y financieras para un nuevo Subprograma de Asistencia Técnica, proponiendo las medidas y modificaciones requeridas.

El asesor deberá poseer formación de economista, administrador o planificador urbano y tener por lo menos 5 años de experiencia en la ejecución de programas de asistencia técnica, preferentemente para el desarrollo urbano. Será contratado por un período de 36 meses a iniciarse dentro de 6 meses del establecimiento de la OPDU.

B. Asesores Financiados con Recursos del PNUD

1. Asesor en Ingeniería de Proyectos: cooperará con el Director del Programa y apoyará la Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos en la supervisión y/o realización de las siguientes actividades:
 - orientar a las autoridades y organismos provinciales y municipales y otros subprestatarios potenciales del Programa en la preparación de los aspectos técnicos de las solicitudes de crédito;
 - formular normas y pautas para el análisis de la ingeniería de los proyectos presentados;
 - aplicar las pautas en el análisis de proyectos específicos;
 - analizar y revisar las conclusiones y recomendaciones que se vayan formulando sobre las solicitudes de crédito presentadas;
 - apoyar la Dirección de Ejecución del Programa en el establecimiento de las políticas de control de licitaciones y auditoría de proyectos y en la evaluación de los resultados de su aplicación, en el establecimiento de metodologías de auditoría técnica y en su aplicación a casos específicos; y

- apoyar la Dirección de Asistencia Técnica en la identificación de necesidades y definición de los términos de referencia de las actividades de asistencia técnica en materia de formulación de proyectos.

El asesor deberá poseer título de ingeniero civil o sanitario y tener por lo menos 5 años de experiencia en la preparación y/o análisis técnico de proyectos de infraestructura urbana. Será contratado para un período de 48 meses a iniciarse dentro de 6 meses del establecimiento de la OPDU.

2. Asesor en Análisis Financiero-Institucional de Proyectos: cooperará con el Director del Programa y apoyará la Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos en la supervisión y/o realización de las siguientes actividades:

- orientar a las autoridades y organismos provinciales y municipales y otros potenciales subprestatarios del Programa en la preparación de los aspectos financiero-institucionales de las solicitudes de crédito;
- refinar las políticas del Programa en materia del análisis financiero-institucional de los proyectos;
- formular o revisar las guías de aplicación de las metodologías de análisis financiero e institucional de los proyectos;
- aplicar las referidas metodologías en casos concretos, participando en la evaluación de proyectos específicos en cada sector;
- realizar una evaluación permanente del contenido de los análisis financieros-institucionales de los proyectos específicos;
- analizar y revisar las conclusiones y recomendaciones que se vayan elaborando sobre las solicitudes de crédito; y
- apoyar la Dirección de Asistencia Técnica en la definición del contenido y términos de referencia técnica a prestar en materia de formulación de proyectos y fortalecimiento institucional y financiero de servicios urbanos.

El asesor deberá poseer formación de economista o administrador y tener por lo menos 5 años de experiencia en la preparación y/o análisis financiero-institucional de proyectos de inversión, preferentemente de infraestructura urbana. Será contratado por un período de 48 meses a iniciarse dentro de 6 meses del establecimiento de la OPDU.

3. Asesor en Análisis y Programación Financiera: cooperará con el Director del Programa y apoyará la Dirección de Programación y Control en la supervisión y/o la realización de las siguientes actividades:

- analizar la situación y resultados financieros del Programa;
- establecer las políticas financieras y los presupuestos anuales del Programa;
- orientar las tareas del Subárea de Programación y Control Financiero;
- elaborar los estatutos financieros del Programa; y
- evaluar en forma permanente el contenido de los trabajos de su área que se realicen en la Dirección.

El asesor deberá poseer formación de economista, contador o administrador y tener por lo menos 5 años de experiencia en actividades de programación y control financiero de programas de inversión, preferentemente de infraestructura urbana. Será contratado por un período de 48 meses a iniciarse dentro de 6 meses del establecimiento de la OPDU.

4. Asesor en Programación y Análisis Urbano: cooperará con el Director del Programa y apoyará la Dirección de Asistencia Técnica en la supervisión y/o realización de las siguientes actividades:

- asesorar en el establecimiento de las políticas y pautas generales de las actividades de asistencia técnica del Programa;
- asesorar en el establecimiento de la política de adiestramiento del personal permanente de la OPDU y en la definición de las actividades específicas de entrenamiento en servicios de este personal;
- realizar recomendaciones sobre la selección de consultores y la ejecución de las actividades de asistencia técnica;
- orientar la preparación de, y analizar, las solicitudes de asistencia técnica, particularmente las que se refieren a estudios, de política y estrategias de desarrollo urbano, y recomendar las prioridades del Programa para la promoción de estudios en esta área;
- participar en la evaluación de las actividades de asistencia técnica del Programa; y
- apoyar la Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos en el análisis de los impactos urbanos y sociales de los proyectos específicos sometidos al Programa.

El asesor deberá poseer formación, de economista y/o planificar urbano-regional y tener por lo menos 5 años de experiencia en programas de pre-inversión y/o capacitación de recursos humanos para el desarrollo urbano. Será contratado por un período de 48 meses a iniciarse dentro de 6 meses del establecimiento de la OPDU.

ARGENTINA
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO
REGLAMENTO DE CREDITO

I. Propósito

- 1.01 El propósito de este Reglamento es establecer los términos y condiciones por los que se regirán los créditos otorgados para el financiamiento de la ejecución de obras y la adquisición de bienes a ser efectuados con los recursos del Programa Obras de Desarrollo Urbano (en adelante denominado "El Programa"), cuya ejecución estará a cargo de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (SVOA) del Ministerio de Salud y Acción Social a través de la Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano (OPDU), con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los aportes de contrapartida local.

II. Objetivos y descripción

- 2.01 El programa de obras tiene como objetivo principal el mejoramiento de la infraestructura y equipamientos urbanos, en particular en ciudades intermedias del interior del país y principalmente -aunque no exclusivamente- para satisfacer necesidades de poblaciones de bajos ingresos, beneficiadas directa o indirectamente, por los programas habitacionales del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). Este objetivo se atenderá a través de un programa de créditos a nivel provincial y municipal. El Programa de Obras forma parte de un Programa de Promoción del Desarrollo Urbano, que adicionalmente, a través de un Programa de Asistencia Técnica, tiene como objetivo fortalecer las instituciones nacionales y locales encargadas de la preparación de proyectos de infraestructura y equipamientos urbanos para su eventual financiamiento, así como de la operación de los servicios correspondientes y, en general, promover el desarrollo urbano en el país.

III. Organización

1. Recursos del Programa

- 3.01 Los recursos originales del programa estarán constituidos por los fondos de la parte correspondiente del préstamo del BID para el otorgamiento de créditos, que asciende a un monto de US\$ millones, complementados por los recursos de contrapartida aportados por la SVOA provenientes del FONAVI, de los subprestatarios y/o entidades financieras provinciales que ascienden al equivalente de US\$ millones, para un total del equivalente de US\$ millones. Las recuperaciones de los créditos otorgados con los recursos del programa, que se acumulen en exceso de las cantidades necesarias para el servicio de préstamo del BID y la cobertura de los gastos asociados con la operación del Programa, serán también utilizadas para el

otorgamiento de créditos, siguiendo, en lo substancial las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

2. Rubros financiables

- 3.02 Los recursos disponibles podrán ser comprometidos en créditos para la ejecución de obras de infraestructura y equipamientos urbanos. También podrán financiarse, con cargo a los recursos del crédito provenientes de la cuota parte de la SVOA, los gastos financieros durante el período de construcción y los correspondientes a gastos incrementales de ingeniería y administración para la preparación y ejecución de los proyectos, que hayan sido financiados a través del subprograma de asistencia técnica.

3. Sectores elegibles

- 3.03 Serán objeto de crédito las obras y equipamientos en los siguientes sectores.

(a) Agua potable

Construcción, ampliación y/o mejoramiento de uno o más de los componentes de estos sistemas, desde las obras de captación hasta la distribución domiciliaria, para centros urbanos con población total mayor de 10.000 habitantes.

(b) Desagües cloacales

Construcción, ampliación y/o mejoramiento de uno o más componentes de estos sistemas, desde redes de recolección hasta la disposición final del efluente, incluyendo obras para control de la contaminación de los cuerpos receptores.

(c) Equipamiento comunitario

Obras y equipamientos destinados a resolver a la comunidad las necesidades correspondientes a Jardines de infantes, Escuelas primarias y secundarias, Guarderías infantiles, Unidades sanitarias y Centros comunitarios (cada una de esas funciones será considerada como un componente, pudiendo cada proyecto estar integrado por uno o más componentes).

(d) Defensa contra erosión e inundaciones

Construcción de obras de protección necesarias para evitar daños y perjuicios provocados por inundaciones, aluviones, erosión eólica o hidráulica, que afecten a zonas urbanas pobladas y/o constituyan un peligro para la población.

(e) Mejoramiento Vial y desagües pluviales

Apertura, ampliación de calles y pavimentación de la red vial urbana, vehicular o peatonal; construcción de viaductos y obras

para la distribución de tránsito, incluyendo trabajos complementarios tales como alumbrado, seguridad, redes de servicios públicos, zonas verdes, y señalización; reconstrucción de pavimentos de calles donde las obras han cumplido su vida útil o han sido afectadas por desastres naturales. Construcción de obras para la recolección y evacuación de las aguas de lluvia.

(f) Electricidad y Alumbrado Público

Ejecución de redes de media tensión hasta 33 Kw. y de distribución en 380/220 volts, subestaciones, transformadores y centros de distribución en baja y media tensión para usos urbanos, luminarias, estructuras y tableros y los proyectos de generación de abastecimiento urbano aislado.

(g) Gas

Obras y equipos relacionados con, plantas de licuefacción de gas, estaciones reductoras de presión 60/50 a 10 kg. por cm². en gasoductos de aproximación, estaciones reductoras de presión de 10 a 5 kg. por cm², depósitos de gas natural comprimido o propano-butano y redes de distribución domiciliaria.

4. Criterios de elegibilidad general

3.04 El financiamiento de un proyecto por parte del Programa está sujeto al cumplimiento de los criterios generales de elegibilidad indicados a continuación, así como de los criterios sectoriales estipulados en el anexo A de este Reglamento, y los criterios de aprobación estipulados en el Capítulo V de este Reglamento. Como criterios generales, los solicitantes de crédito deberán demostrar:

- (a) que el proyecto corresponde a una prioridad declarada del gobierno provincial correspondiente;
- (b) que el proyecto sea técnica, financiera y económicamente viable;
- (c) la capacidad legal del prestatario de adquirir créditos, del ejecutor de ejecutar las obras y adquirir los equipamientos del proyecto y del operador u operadores de operar y mantener estas obras y equipamientos;
- (d) que, en los casos que corresponda, exista la no objeción del organismo responsable por el sector correspondiente sobre la ejecución del proyecto; y
- (e) evidencia de la disponibilidad de los terrenos en que se preve construir las obras y de la forma de transferencia al organismo que se hará cargo de los mismos, cuando estos no fueren terrenos fiscales, y de ser el caso, autorización para las servidumbres.

- 3.05 Adicionalmente, para ser elegibles como sujetos de crédito de los recursos del programa y/o como ejecutores y/o operadores de las obras y equipos financiados con los mismos, las empresas y cooperativas de servicios públicos deberán cumplir con la siguiente condición, al momento de aprobarse la solicitud del crédito: los ingresos por tarifas que se devenguen en el servicio respectivo, a nivel de la empresa, deben ser superiores a los gastos correspondientes de operación y mantenimiento de tales servicios, determinados sobre un período inmediatamente precedente no inferior a un trimestre ni superior a dos años.

5. Registro y control

- 3.06 El movimiento de recursos del Programa se registrará en una cuenta especial de la SVOA, bajo el rubro denominado "Programa de Crédito para el Desarrollo Urbano" (PCDU), de modo de permitir la formulación de estados de situación patrimonial y financiera, de resultados financieros y de origen y aplicación de fondos del Programa, de acuerdo con el código de cuentas que habrá acordado con el BID, antes del comienzo de las operaciones.

IV. Operación del Programa

1. Beneficiarios elegibles

- 4.01 Serán elegibles para obtener créditos con los recursos del Programa los siguientes entes:

- (a) Gobiernos de las Provincias, del Territorio Nacional, de los respectivos municipios y de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.
- (b) Entidades públicas nacionales, provinciales y municipales y otros organismos competentes en sus respectivos ámbitos de jurisdicción.
- (c) Cooperativas de servicios públicos especializadas en obras complementarias de infraestructura y equipamiento.

- 4.02 Estos entes, además de cumplir con las autorizaciones y garantías legales que correspondan, deben demostrar capacidad administrativa, técnica y financiera para la ejecución de los correspondientes proyectos. Para poder ser prestatarios directos del Programa, deberán demostrar la capacidad financiera para el servicio oportuno del crédito; de lo contrario, se deberá recurrir a la intermediación de un ente que sí posea tal capacidad, o la garantía de tales entes.

2. Garantía

- 4.03 El servicio de los créditos podrá ser garantizado por los gobiernos provinciales, municipales y entidades bancarias.

Asimismo, las provincias comprometerán su derecho a la participación de los recursos del FONAVI para garantizar el aporte de contrapartida de los prestatarios y la devolución del préstamo en segundo término. Para el caso de afectarse el derecho al uso de los recursos del FONAVI, el Gobierno de la Provincia se comprometerá a efectuar la devolución mediante afectación de los fondos de coparticipación, de regalía o de cualquier otro crédito que en el orden nacional le correspondiera. Previo a la formalización del compromiso, la SVOA manifestará la aceptación de la garantía, propuesta por el prestatario.

3. Denominación de los créditos

- 4.04 Los créditos estarán denominados y serán pagaderos en australes.

4. Tasas de interés

- 4.05 La tasa de interés a aplicar a los créditos otorgados con recursos del Programa no podrá ser superior al 1% mensual, calculada sobre los saldos deudores indexados.

5. Indexación

- 4.06 Los desembolsos y las amortizaciones de los créditos otorgados con recursos del Programa se harán manteniendo su valor constante, de acuerdo al índice de precios correspondiente (de costos de construcción para desembolsos y de precios mayoristas para amortizaciones).

6. Comisiones

- 4.07 Las comisiones por compromisos de recursos no excederán del 1% del monto no desembolsado del crédito, computable sobre el promedio de los saldos indexados de comienzo de mes en el semestre precedente, cobrable semestralmente. Adicionalmente, podrá cobrarse una comisión por concepto de inspección y vigilancia que no excederá del 1% sobre el saldo original del crédito, cobrable una sola vez.

7. Plazos y períodos de gracia

(a) Desembolsos

- 4.08 Los plazos de desembolsos de los créditos no podrán ser superiores a tres años, y en ningún caso podrán exceder el plazo para el desembolso final del préstamo del BID.

(b) Amortización

- 4.09 Los plazos de amortización y períodos de gracia de los créditos serán de hasta 15 años para la amortización contados a partir de la formalización del crédito y comenzando a pagar a los 6 meses del último desembolso; los plazos que se fijen serán una función de las características de cada sector, particularmente en lo

referente a la capacidad financiera. Los períodos de gracia otorgados para la amortización de principal podrán también aplicarse para el pago de los intereses, pero no de las comisiones.

8. Límites de crédito

4.10 Los límites que se aplicarán en la operación de los créditos serán los siguientes:

- (a) El monto mínimo de un crédito será del equivalente de US\$500.000.
- (b) El monto máximo de una operación de crédito será del equivalente de US\$10 millones.
- (c) El costo total máximo de un proyecto a financiar será del equivalente de US\$15 millones. Sin embargo los proyectos del sector de agua potable y alcantarillado cuyo costo total exceda del equivalente US\$8,0 millones, o de otros sectores cuyo costo total exceda del equivalente de US\$5 millones, se deberán someter a la consideración del BID, quién deberá expresar su no objeción.

4.11 Deberán someterse a la aprobación expresa del BID las situaciones en las cuales:

- (a) El saldo deudor con el Programa de un mismo prestatario excedería del equivalente de los US\$25 millones al aprobarse la operación más reciente.
- (b) El saldo deudor con el Programa de una provincia, sus municipios, sus instituciones públicas y otros entes localizados en ella excediera del equivalente de los US\$40 millones en su conjunto al aprobarse la operación más reciente. Para estos efectos, el área metropolitana de Buenos Aires se considerará como una jurisdicción y la Provincia de Buenos Aires excluirá las zonas suburbanas de la Capital Federal.

4.12 Los créditos otorgados con recursos del Programa no podrán exceder del 90% del costo total del proyecto y la cuota parte de ese crédito proveniente de los recursos del BID, no puede ser superior al 60%.

9. Distribución sectorial de los recursos

4.13 Con los recursos del Programa no podrán otorgarse créditos a un sector definido en el Capítulo III de este Reglamento, que exceda del equivalente de US\$ 100 millones de los recursos originales del Programa. Este límite, en el caso de los tres sectores de mayor volumen de créditos, no podrá exceder del equivalente de US\$ 200 millones.

10. Distribución territorial de los recursos

4.14 Los recursos serán distribuidos mayormente en ciudades intermedias, de acuerdo a los siguientes límites:

- (a) Ciudades con población inferior a los 150.000 habitantes, no menos del 25% de los recursos.
- (b) Ciudades intermedias entre 150.000 y 650.000 habitantes, no menos del 50% ni más del 75% de los recursos.
- (c) Grandes centros urbanos con más de 650.000 habitantes, no más del 25% de los recursos.

11. Financiamiento retroactivo y reconocimiento de gastos

4.15 A efectos de determinar la contribución de los prestatarios de los créditos al financiamiento del proyecto, la SVOA podrá reconocer parte de las inversiones o gastos ya efectuados por las partes con anterioridad a su aprobación y posterior a la recepción de la solicitud del crédito (pero en ningún caso durante un período que exceda los 12 meses previos a la aprobación). Los montos que se reconozcan deberán ser específicamente aprobados por la SVOA y deberán constituir parte de las inversiones y/o gastos del proyecto tal y como fue presentado en la solicitud. Tales gastos e inversiones deben haberse efectuado de acuerdo con las disposiciones del contrato de crédito y lo establecido en este Reglamento que sea pertinente.

4.16 Como parte del financiamiento otorgado, la SVOA podrá reembolsar al prestatario parte de los montos de las inversiones realizadas con anterioridad a su aprobación y posterior a la recepción de la solicitud de crédito (pero en ningún caso durante un período que exceda los 12 meses previos a la aprobación). Los montos a ser reembolsados deberán ser específicamente aprobados por la SVOA y deberán constituir parte de las inversiones y/o gastos del proyecto tal y como fue presentado en la solicitud. Tales gastos e inversiones deben haberse efectuado de acuerdo con las disposiciones del contrato de crédito y lo establecido en este Reglamento que seapertinente.

12. Anticipo de fondos

4.17 A efectos de agilizar la ejecución de las diferentes obras y servicios, parte de los créditos se podrán desembolsar a través de un mecanismo de anticipo de fondos, cuando se demuestre, a satisfacción de la OPDU, que no puede ejecutarse el proyecto o alguna de sus partes mediante los mecanismos tradicionales de desembolsos a través de reembolsos por obra ejecutada o servicio prestado o por gastos efectuados. El anticipo no podrá exceder del 10% del monto del crédito ni podrá cubrir un período superior a cuatro meses de los respectivos gastos, de acuerdo al cronograma de ejecución vigente; el correspondiente presupuesto deberá

acompañar la solicitud de anticipo. Antes de reconstituirse un anticipo, se deberá demostrar que la totalidad del mismo ha sido ya utilizada; esta demostración o justificación del anticipo deberá presentarse dentro de los seis meses de su constitución o reconstitución y en caso de retrasos en la justificación, la OPDU podrá suspender los demás desembolsos del crédito hasta tanto se presente la justificación requerida.

V. Preparación, análisis y aprobación de las solicitudes

- 5.01 Las solicitudes de crédito deben ser preparadas de acuerdo con las guías indicadas por el ejecutor del Programa para cada tipo de proyecto.
- 5.02 Todo proyecto será sometido a un análisis técnico, económico, financiero, institucional y legal que será realizado en base a:
- (a) un estudio de prioridades en el marco de los planes de desarrollo urbano, municipal, provincial y nacional según corresponda;
 - (b) tamaño y localización del proyecto;
 - (c) estudios y diseños de ingeniería;
 - (d) costos de las inversiones incluyendo escalamientos e imprevistos;
 - (e) financiamiento de las obras y capacidad de endeudamiento del prestatario.
 - (f) naturaleza de las garantías ofrecidas.
- 5.03 En el análisis de los proyectos se verificará la aplicación de los siguientes criterios generales:
- (a) que el proyecto sea diseñado de acuerdo con las normas técnicas expedidas por las entidades responsables del sector a nivel nacional y local y que los parámetros de diseño sean compatibles con las características socio-económicas de la población y de los objetivos que se pretenden alcanzar;
 - (b) que la solución propuesta resulte de una comparación de alternativas técnicamente viables, de las cuales se ha seleccionado la de mayor factibilidad económica;
 - (c) que las tecnologías utilizadas hayan sido experimentadas en el país y guarden relación con la experiencia y capacitación del organismo que estará al cargo de la explotación del sistema; y

- (d) que el organismo ejecutor tenga capacidad y experiencia en el tipo de proyecto presentado y disponga de los medios para efectuar la supervisión de las obras.
- 5.04 En el análisis económico de los proyectos se aplicarán las metodologías de costo-beneficio o de costo-eficiencia, así como sus respectivos criterios de aprobación, según las características particulares del proyecto, y de acuerdo con los lineamientos que se indican en el Anexo B de este Reglamento.
- 5.05 El análisis financiero se realizará a nivel del prestatario y de proyecto. En el primero de los casos se hará un análisis financiero-histórico y un análisis de las proyecciones financieras del prestatario para demostrar su capacidad de realizar el aporte local de su responsabilidad y el repago del préstamo. Asimismo se analizarán las proyecciones financieras (Estado de Resultados y de Origen y Aplicación de Fondos) que permitan determinar el comportamiento de la institución en el cumplimiento de las disposiciones tarifarias que correspondan o en su defecto que permitan establecer los mecanismos de recuperación de fondos que contemple el proyecto.
- 5.06 El análisis institucional deberá constatar la capacidad legal del prestatario para obligarse, del organismo ejecutor para contratar o ejecutar obras o adquirir bienes y de llevar a cabo el proyecto, así como del operador para explotar el servicio. Las metodologías detalladas del análisis financiero e institucional se describen respectivamente en el anexo B de este Reglamento.
- 5.07 Una vez aprobado el crédito, la SVOA y el prestatario procederán a constituir las garantías y a formalizar el contrato de préstamo.

VI. Condiciones de los créditos

1. Generales

- 6.01 En todos los contratos de créditos y/o de garantía, según corresponda, para las operaciones que se efectúen con cargo al Programa, deberán incluirse como condiciones contractuales, por lo menos, las siguientes:
- (a) El derecho de la SVOA y del BID de examinar los bienes, los lugares, los trabajos y las construcciones del proyecto correspondiente.
 - (b) El compromiso de que los bienes y servicios que se financien con el crédito se utilizarán exclusivamente en la ejecución del respectivo proyecto.
 - (c) La obligación de proporcionar estados financieros y toda otra información que razonablemente le solicite la SVOA o

el BID al prestatario con respecto al proyecto y a su situación financiera.

- (d) El derecho de suspender los desembolsos del crédito si el prestatario no cumple sus obligaciones contractuales.
- (e) El compromiso de que se tomarán todas las medidas que sean necesarias para asegurar que las contrataciones de construcción y de prestación, así como toda compra de bienes para el proyecto, se hagan a un costo razonable, que será generalmente el precio más bajo de mercado, tomando en cuenta factores de calidad, eficiencia y otros que sean del caso.
- (f) El compromiso de contratar y mantener seguros, cuando corresponda, sobre los bienes que garanticen el crédito contra los riesgos y en los valores que se acostumbren.
- (g) La aceptación previa de que el contrato del respectivo crédito, con todos los derechos y prerrogativas otorgadas a favor de la SVOA, pueda ser cedido al BID.
- (h) La obligación de que las obras ejecutadas dentro del proyecto serán administradas, operadas y mantenidas de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas y que estén de acuerdo con las políticas del BID, y que para ese efecto los operadores de los proyectos asignarán anualmente en sus respectivos presupuestos partidas adecuadas para el mantenimiento de las mismas.
- (i) En el caso de que proceda, el beneficiario y/o el garante, se comprometerán a tomar las medidas pertinentes para que las tarifas de los servicios públicos cumplan con las condiciones especificadas en el presente Reglamento.
- (j) El compromiso de llevar registros adecuados en el que consigne, de conformidad con el plan, catálogos o códigos de cuentas del Programa aprobado por la SVOA, las inversiones tanto de los fondos del crédito como de los demás recursos que deban aportarse para su total ejecución.
- (k) El compromiso de cumplir con las estipulaciones de este Reglamento, así como con las condiciones bajo las cuales fue aprobado el crédito por la SVOA.
- (l) El compromiso de que tomarán las medidas necesarias para que los contratos de construcción y prestación de servicios, así como las adquisiciones con cargo al proyecto, se hagan de acuerdo con el Procedimiento de Licitaciones que consta como Anexo C a este Reglamento.

- (m) El compromiso de presentar las informaciones periódicas que la SVOA pueda razonablemente exigir para establecer el avance de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de las cláusulas de los respectivos contratos de crédito y/o de garantía.
- (n) El compromiso de reunir y presentar informaciones periódicas requeridas para una eventual evaluación a posteriori del proyecto, así como el compromiso de realizar dicha evaluación, en correspondencia con los objetivos del proyecto, y de acuerdo a los lineamientos que se indican en el Anexo E de este Reglamento.

2. Tarifas de servicios públicos

- 6.02 Los contratos de crédito y/o de garantía deberán contener las previsiones necesarias para asegurar que las entidades de servicios públicos obtengan ingresos por concepto de tarifas u otras fuentes que están de acuerdo con lo estipulado en el Anexo D del presente Reglamento.

3. Recursos adicionales

- 6.03 Los contratos de crédito y/o garantía deberán contener las previsiones necesarias para asegurar el oportuno aporte de todos los recursos complementarios al crédito otorgado que permitan la completa ejecución del proyecto objeto del crédito.

VII. Disposiciones Generales

- 7.01 Sólo se financiará la adquisición de bienes de capital y de servicios provenientes de países miembros del BID.
- 7.02 El prestatario y/o garante que se encuentre en situación de mora en el pago de sus obligaciones derivadas del crédito, perderá su condición de elegible para continuar su participación en el Programa, mientras esta situación persista. En el caso de que el prestatario y/o garante sea la Provincia, tal limitación será extensiva a todas sus instituciones y municipios.
- 7.03 La recepción de las solicitudes no comprometerá a la SVOA a otorgar crédito alguno, lo cual será decidido una vez que se realice el análisis pertinente de la solicitud.
- 7.04 Ningún beneficiario podrá traspasar la deuda adquirida en el uso de los recursos del programa, a menos que sea autorizado previamente por la SVOA, con el acuerdo del BID.
- 7.05 El beneficiario se comprometerá a entregar la información necesaria para efectuar la evaluación de los resultados del Programa.

7.06 Con los recursos del Programa no podrán otorgarse financiamiento para:

- (a) Gastos generales y/o de administración
- (b) Adquisición de bienes inmuebles
- (c) Refinanciación de deudas
- (d) Costos de operación o mantenimiento

VIII. Exigibilidad de los Créditos

8.01 Los créditos otorgados podrán considerarse exigibles, sin perjuicio de otras previsiones incluidas en otras secciones de este Reglamento, de concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

- (a) si se comprobare la existencia de falsedad en las informaciones proporcionadas por el prestatario al formular la solicitud de crédito;
- (b) si el prestatario se opusiera a la inspección de las inversiones o de los bienes dados en garantía o de cualquier hecho susceptible de disminuir su valor o comprometer su dominio;
- (c) si el prestatario faltare al pago total o parcial de las cuotas amortización y/o intereses señaladas en el contrato de crédito, en las fechas en que debiera hacerlo;
- (d) en todos los casos de incumplimiento contractual del beneficiario con respecto a los créditos financiados con recursos del Programa o si dicho prestatario faltase a las estipulaciones señaladas en el presente Reglamento o a lo establecido en las resoluciones respectivas de crédito.

IX. Modificación del Reglamento

9.01 La SVOA podrá sugerir modificaciones a este Reglamento, para adaptarlo a nuevas circunstancias o condiciones que pudieran presentarse durante la ejecución del Programa, como un medio de asegurar el logro de los objetivos del mismo. Las modificaciones entrarán en vigencia luego de su examen y aprobación por parte del BID.

Anexos

- A: Criterios técnicos de elegibilidad
- B: Criterios de análisis
- C: Procedimiento de Licitaciones
- D: Política Tarifaria
- E: Lineamientos de evaluación a posteriori

5ta. revisión
Agosto 26, 1986

ANEXO A

CRITERIOS TECNICOS DE ELEGIBILIDAD

El financiamiento de un proyecto por parte del Programa de Crédito para Desarrollo Urbano está sujeto al cumplimiento de los criterios generales de elegibilidad establecidos en el Reglamento de Crédito, así como de los criterios específicos para cada sector que se formulan a continuación.

1. Sector desagüe cloacal

- que se disponga de servicio público de agua potable;
- que el sistema de disposición final incorpore el tratamiento adecuado para mantener las características mínimas de calidad bacteriológica del cuerpo receptor; tales características estarán en función del uso de dicho cuerpo y de la legislación nacional sobre la materia.
- en ampliaciones y/o reemplazos de sistemas, justificación de los mismos y relación con el estado de los demás componentes;

2. Sector agua potable

- que el proyecto sirva a poblaciones de más de 10.000 habitantes;
- demostración de que la calidad del agua está conforme a las normas nacionales sobre la materia;
- demostración de la disponibilidad de caudal suficiente para la vida útil del proyecto y evidencia del derecho de uso;
- en ampliación y/o reemplazos de sistemas, justificación de los mismos y relación con el estado de los demás componentes;

3. Sector equipamiento comunitario

- demostración de la existencia de una demanda insatisfecha en las áreas de influencia de los respectivos componentes del proyecto;
- demostración que la capacidad ofrecida por el proyecto puede colmarse en los primeros cinco años desde la fecha de su habilitación;
- demostración de la disposición de la entidad sectorial correspondiente de operar y mantener las obras del proyecto, así como de la disponibilidad de los recursos financieros y humanos requeridos para esta finalidad;

4. Sector defensa contra erosión e inundaciones

- descripción en forma precisa de la característica del fenómeno que afecta el área de influencia, relación con el plan urbano para la ciudad o comunidad afectada y cuantificación de los daños que actualmente causa el fenómeno.
- en el caso en que se planee recuperar los costos de la obra por el mecanismo de valorización, demostración de la viabilidad del sistema, principalmente desde los puntos de vista de capacidad de pago de la población beneficiada, manifestación expresa sobre su disposición a pagar y existencia de los mecanismos legales que posibiliten el cobro;

5. Mejoramiento Vial y desagües pluviales

- que se disponga de servicios de agua potable y cloacas;
- que el proyecto de acceso vehicular a zonas sin transporte público, a zonas donde están localizadas instituciones públicas o privadas o de servicios comunitarios;
- que el proyecto acorte longitud y tiempos de viaje en la malla existente;
- que el proyecto redistribuya flujos vehiculares con el propósito de descongestionar vías saturadas y mejorar la capacidad transportadora vial;
- que se incluyan las obras complementarias necesarias para una buena operación de la vía (demarcación, zonas verdes, zonas de estacionamiento, iluminación, señalización, etc);
- en el caso en que se planee recuperar los costos de la obra por el mecanismo de valorización, demostración de la viabilidad del sistema principalmente desde los puntos de vista de capacidad de pago de la población beneficiada, manifestación expresa sobre su disposición a pagar y existencia de los mecanismos legales que permiten el cobro;
- cuando el sistema de recuperación sea por tasas, demostración que éstas cubran como mínimo los costos de operación, mantenimiento y en lo posible depreciación;
- en el caso de mejoramiento vial, que se hayan realizado los estudios de demanda y oferta requeridos para definir los parámetros de diseño del Proyecto;
- en el caso de los desagües pluviales, que los parámetros de diseño sean función de la cuenca de aporte y del régimen de lluvia seleccionándose una curva de intensidad/frecuencia para una frecuencia no mayor de 5 años y que la disposición final no afecte al medio ambiente.

6. Sector energía eléctrica:

- que se disponga de fuentes aseguradas de alimentación.
- cuando el proyecto contemple ampliaciones o mejoras del sistema eléctrico actual, justificación de las mismas y relación con los sistemas a los que se integre el proyecto.

7. Sector gas:

- que Gas del Estado certifique: i) que la obra es aceptada para conexión de la red troncal; ii) que los diseños cumplen las normas de diseño y de seguridad; iii) que ejecutará la asesoría o supervisión de la construcción, pruebas y puesta en operación; iv) que Gas del Estado operará y mantendrá el proyecto una vez construido o que el organismo que lo haga tiene la capacidad y jurisdicción para hacerlo.
- que la demanda de consumo permita el uso de volúmenes económicos en la operación del gasoducto de aproximación.
- cuando el proyecto contemple ampliaciones o mejoras de redes de gas natural, justificación de las mismas y relación con los sistemas a los que se integre el proyecto, incluyendo la correspondiente aprobación de Gas del Estado.

ANEXO B

1. Metodología y Criterios de Evaluación Económica a Utilizarse en los Proyectos del Programa

En términos generales, la evaluación económica requiere que, en base a la identificación correcta de las situaciones con y sin el proyecto se: (a) demuestre la existencia de demanda insatisfecha, actual y futura (b) verifique un dimensionamiento adecuado del proyecto; (c) identifique correctamente el costo de oportunidad de los recursos absorbidos por el proyecto; (d) investigue y seleccione las soluciones técnicas de menor costo ^{1/}, y que para los sectores en donde los beneficios principales sean medibles en términos económicos, se (e) aplique un análisis beneficio-costos.

En todos los casos los flujos de costos y beneficios que han sido valorados a precios de mercado, deberán ser ajustados a flujos económicos eliminando transferencias financieras como son los subsidios y los impuestos. Bienes que son importados o potencialmente exportados y que constituyen flujos importantes, y sea de costos o beneficios de un proyecto, deberán ser valorados en base a su precio internacional, C.I.F. o F.O.B., como corresponda. Para los proyectos en donde aplica un análisis beneficio-costos, la tasa interna de retorno económico (TIRE) deberá ser igual o superior al 12%. Cuando los beneficios principales no son medibles en términos económicos, se deberá asegurar por lo menos una solución de mínimo costo.

A continuación se describen, en sus aspectos generales, los métodos y criterios de evaluación acordados con la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental para proyectos en cada uno de los sectores elegibles en el programa.

a) Agua Potable

Para los proyectos de expansión de oferta se deberá proyectar al futuro la situación de demanda y oferta en la localidad a servir, estimando así el déficit a atender. Se compararán alternativas de diseño del sistema, escogiendo la solución de menor costo en términos de valor presente, a una tasa de descuento del 12%.

Adicionalmente, se hará un análisis beneficio-costos, utilizando la guía del BID para la Evaluación de Proyectos de Agua Potable y el Modelo SIMOP, ambos provistos para estos fines. Se calculará una tasa interna de retorno. Las funciones de demanda para cada grupo beneficiario, requerido en la evaluación, se calcularán a partir de una encuesta

^{1/} Las soluciones técnicas de menor costo son aquellas que, para un mismo servicio y tiempo de vida determinado y una misma satisfacción de la demanda, presentan la menor cifra de valor presente de costos de inversión, operación y mantenimiento, habiendo utilizado una tasa de descuento del 12%.

levantada en esa localidad o en otras similares 1/. El TIRE deberá ser de por lo menos el 12%.

Para proyectos cuyo propósito exclusivo sea el mejoramiento de calidad de agua (tratamiento) se aplicará un análisis de alternativas, escogiendo la de menor costo para la dimensión adecuada del proyecto.

b) Desagues Cloacales

Para proyectos de expansión de servicios se deberá proyectar al futuro el déficit por atender y comparar las alternativas de diseño, escogiendo la solución de menor costo en términos de valor presente, a una tasa del 12%. Se hará un análisis beneficio-costó utilizando una estimación de costos evitados, obtenidos a partir del comparativo entre la proyección de la situación actual 2/ (la utilización de pozos con y sin cámara séptica, letrinas y otras) y la situación "con proyecto", y/o otros gastos evitados. Sobre esta base se calculará una tasa interna de retorno, la cual deberá igualar o superar el 12%.

Para los proyectos cuyo objetivo fundamental es la descontaminación del ambiente (proyectos de evacuación y tratamiento de efluentes), se deberá presentar evidencia documentada de daños actuales (o de peligro potencial). La evidencia documentada de daños actuales deberá basarse en información epidemiológica y/o biológica, mientras que la evidencia de peligro potencial se deberá basar en estudios físicos y biológicos de los suelos. En todo caso se deberá comparar alternativas de diseño del sistema, escogiendo la de menor costo.

En casos donde un proyecto tenga ambos propósitos, es decir de expandir el servicio y descontaminar el ambiente, se podrán separar los componentes del proyecto aplicándose beneficio-costó a la expansión de la red colectora y costo-eficiencia a la evacuación y tratamiento del efluente.

c) Pavimentos

En base a los resultados de un censo de tráfico o conteo de tránsito y las proyecciones de crecimiento de éste en el área de influencia, se compararán alternativas de materiales y trazados, escoger la solución de menor costo en términos de valor presente, a una tasa de descuento del 12%.

Adicionalmente se hará un análisis beneficio-costó, midiéndose los beneficios como los ahorros de tiempo y costo total de transporte, cuando se trate de vías principales, y cuando se trate de calles secundarias, como una estimación del valor incremental de los bienes raíces que ocurra como consecuencia del proyecto. En este último caso se deberá utilizar

1/ El contenido de las encuestas a emplearse se adaptará de acuerdo a las características propias de cada localidad.

2/ Se utilizarán encuestas diseñadas para estos fines. Será necesario en cada caso proveer una nota metodológica sobre la encuesta; número de observaciones, niveles de significancia, etc.

áreas urbanas comparables para deducir el aumento probable del valor de los bienes raíces. Se deberá calcular la tasa interna de retorno del proyecto, la cual deberá por lo menos igualar el 12%.

d) Energía (Electricidad y Gas)

Se proyectará al futuro el déficit por atender y se compararán alternativas de diseño del sistema escogiendo la de menor costo en términos de valor presente económico, a una tasa de descuento del 12%. Se hará un análisis beneficio-costos midiendo los beneficios como (a) ahorro de recursos provenientes de la liberación de energéticos alternativos, y/o (b) la disposición a pagar por el servicio y/o (c) el ahorro de gastos de mantenimiento evitados. Se calculará una tasa interna de retorno para el proyecto, la cual deberá igualar o exceder el 12%.

e) Equipamientos Comunitarios

Para cada componente del proyecto se presentará un estudio de demanda y oferta del servicio propuesto en función de la población existente y proyectada y sus necesidades ^{1/}. Se asegurará que la localización del proyecto es una de accesibilidad a la comunidad y que el diseño arquitectónico propuesto sea uno que minimice el valor presente del costo de inversión y operación, a una tasa de descuento del 12%. Adicionalmente, se efectuará un cálculo de costos unitarios de producción de los servicios a ofrecerse con el proyecto y se compararán con los costos o precios unitarios correspondientes a servicios similares existentes en la zona o en otras comunidades similares. En general, los costos del proyecto deberán ser igual o inferior a los de las facilidades comparativas. En los casos que no fuera así, se deberá analizar y explicar satisfactoriamente las razones.

f) Defensa Contra Erosión e Inundaciones

Para los proyectos cuyos objetivos sean evitar daños ocasionados por factores tales como erosión, aluviones, lluvias, inundaciones, u otros similares, se deberán analizar soluciones técnicas alternativas y escoger la de menor costo. Los beneficios se medirán mediante los gastos de prevención, limpieza y reparación evitados como consecuencia del proyecto ^{2/}, en base a la cual se calculará una tasa interna de retorno, la cual deberá igualar o exceder el 12%.

En los casos en que los objetivos del proyecto sean evitar daños comprobables a la salud de la población o pérdidas de vida humanas, se deberá realizar un análisis de costo-eficiencia de los componentes específicamente diseñados para esta finalidad.

^{1/} En el caso de centros comunitarios se deberá levantar una encuesta representativa sobre las necesidades sentidas en las poblaciones beneficiarias objeto de proyecto, verificando así la demanda.

^{2/} La estimación de costos evitados se deberá basar en los resultados de encuestas a una muestra representativa de beneficiarios en donde se haga preguntas sobre la naturaleza, frecuencia y extensión de daños, y otros.

2. Metodología de Análisis Institucional

I. Con Relación al Subprestatario

- a. Se analizarán los siguientes aspectos: el régimen legal-constitucional que es aplicable; en particular, el sustento normativo de su capacidad para obligarse. En el supuesto de organismos autárquicos, se analizará su ley de creación y en especial su constitución y organización y las facultades que ejerce.
- b. La normativa legal que regula sus ingresos: regalías, impuestos coparticipados, tasas municipales, etc.; y sus antecedentes en operaciones financieras con organismos de crédito externo.
- c. Un análisis institucional del régimen tarifario vigente en su jurisdicción.
- d. La facultad legal para establecer contribuciones de mejoras o tasas específicas de recuperaciones.
- e. Los instrumentos legales necesarios para la adquisición del crédito y de los procedimientos a cumplimentar para su formalización.
- f. Las garantías y sus sustentos legales, los avales propuestos y las modalidades y condiciones a que se someten.

II. Con Relación al Ejecutor

- a. Se analizarán los siguientes aspectos: el régimen legal que le es aplicable; en especial, el sustento normativo de su capacidad para contratar o ejecutar las obras o servicios o para adquirir bienes.
- b. La estructura técnico-administrativa, y en especial, la evolución de su personal durante los últimos tres años anteriores a la solicitud de crédito.
- c. En el caso de los organismos autárquicos, su composición, la forma de designación y las atribuciones del Directorio, de conformidad a las normas legales que las rigen.
- d. La legislación contable, de obras públicas y de personal aplicables al organismo y, en especial, los sistemas internos y/o externos de auditoría.
- e. La normativa aplicable al organismo en materia de asistencia técnica, refuerzo de unidades operativas, supervisión de consultoras y/o contratistas, coordinación con otros proyectos, etc., así como las funciones, modalidades y dependencia orgánica de la Unidad Ejecutora del Proyecto.

III. Con Relación al Operador

- a. Se analizarán los siguientes aspectos: las atribuciones para administrar y mantener el servicio y el marco normativo del servicio que se presta bajo responsabilidad del operador.
- b. La capacidad legal del mismo para la facturación y cobro del servicio.
- c. El estatuto de su personal y/o los convenios laborales de aplicación a su personal.

3. Metodología para el Análisis Financiero

I Organismos Intervinientes

1. El Operador

a. Situación Financiera

- Análisis de cobertura de los gastos de explotación y mantenimiento
- Origen y aplicación de fondos en los últimos tres ejercicios. Fuentes internas y externas
- Liquidez - Estado de situación de liquidez prevista para el ejercicio bajo análisis, incluyendo: recursos y obligaciones

b. Resultados de la Explotación

b.1 Ejecución presupuestaria en los últimos 3 años

- Estructura de los recursos
- Estructuras de las erogaciones
- Financiamiento
- Servicios de deudas

b.2 Análisis de Resultados en los últimos tres ejercicios

- Régimen e ingresos tarifarios
- Morosidad (análisis de antigüedad cuentas a cobrar y de la eficiencia de la cobranza)
- Erogaciones en operación y mantenimiento
- Resultados de la explotación
- Resultados después de gastos financieros

c. Proyecciones Financieras

- El proyecto y el régimen financiero del operador
- Descripción de la estrategia financiera institucional
- Mecanismo de captación de recursos
- Régimen tarifario del proyecto
- Cálculo de los niveles tarifarios necesarios para cumplir las cláusulas sobre tarifas

- Proyecciones de resultados de la explotación (con y sin proyecto)
- Proyecciones de origen y aplicación de fondos (con y sin proyecto)

2. El Subprestatario

- Composición de los ingresos
- Análisis de liquidez
- Recursos afectados
- Estructura de las erogaciones
- Composición de los gastos e inversiones
- Esquema - ahorro - inversión - financiamiento
- Análisis de evolución de la deuda en los últimos tres ejercicios: corto y largo plazo
- Análisis y proyección de los principales recursos ;
- Criterios para la afectación de recursos existentes o nuevos recursos a la devolución de los servicios de crédito
- Proyección de ingresos y egresos
- Proyección de los recursos afectados
- Impacto de los servicios del préstamo en la proyección financiera del subprestatario

3. GARANTE

- a. Para el caso que el avalista de la operación sea la provincia o un organismo de la misma, corresponderá el mismo análisis que el realizado al subprestatario.
- b. Para el caso de un organismo con un régimen de contabilidad patrimonial se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
 - Evolución de la empresa: cuadros de resultados
cuadros origen y aplicación de fondos
cuadros de situación financiera
 - Análisis de las cuentas que generan recursos corrientes: morosidad, deudores con atraso.
 - Liquidez - estado de situación de liquidez prevista para el ejercicio bajo análisis y su tendencia
 - Rentabilidad
 - Endeudamiento (corto y largo plazo)

II. EL PROYECTO

Proyecciones Financieras

- Composición y fuentes de los recursos financieros del proyecto por categoría de inversión.
- Calendario de financiamiento del proyecto (por trimestres).
- Análisis de la composición de los ingresos durante los 15 primeros años.
- Análisis de la composición de las erogaciones financieras (servicio de la deuda) y en operación y mantenimiento, durante los primeros 15 años.
- Cuadro de resultados de la explotación
- Cuadro de fuentes y usos del proyecto

ANEXO C

PROCEDIMIENTO DE LICITACIONES

Artículo 1o. Aplicación: Deberá utilizarse el sistema de licitación pública para la adquisición de bienes y/o la contratación de obras o servicios, en todos los casos en que el valor de las adquisiciones o de las contrataciones excedan del equivalente de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$200.000).

Artículo 2o. Ambito de licitaciones: Las licitaciones se limitarán a los países miembros del Banco.

Artículo 3o. Modalidad de licitaciones: Cuando para financiar total o parcialmente las contrataciones indicadas en el Artículo 1o. deban utilizarse dólares o moneda de otros países distintos a la Argentina y siempre que el valor de las contrataciones supere el monto determinado en el Artículo 1o. el procedimiento de licitación deberá tener carácter internacional. Cuando se utilicen exclusivamente recursos de contrapartida local, las licitaciones podrán restringirse al ámbito nacional de Argentina.

Artículo 4o. Otras modalidades: En las contrataciones y adquisiciones que se realicen por debajo del monto fijado en el Artículo 1o., el organismo licitante respectivo aplicará procedimientos que aseguren la debida atención a los aspectos de economía y eficiencia en la utilización de los recursos destinados al Proyecto. El Organismo Ejecutor velará por el debido cumplimiento al respecto.

Artículo 5o. Precalificación: En los casos de ejecución de obras que formen parte del Programa, financiadas con recursos del Banco, se efectuará la precalificación de las firmas proponentes con referencia a su experiencia e idoneidad técnica y financiera. El Banco y el Organismo Ejecutor podrán acordar la exención a la presente norma. Las aplicaciones del sistema de precalificación podrán regularse por el procedimiento de precalificación simultánea a la oferta, mediante el mecanismo del "doble sobre"

Los llamados a la precalificación se publicarán en la forma indicada en el Artículo 7o. y contendrán la información indicada en el Artículo 6o. en lo que corresponda. Los interesados dispondrán de un plazo mínimo de 30 días contado a partir de la última publicación para presentar al Prestatario sus antecedentes. Los formularios y las bases para la precalificación serán acordados entre el Organismo Ejecutor y el Banco previamente a la publicación del llamado a precalificación. Con los datos proporcionados por los interesados, el organismo licitante verificará, estudiará y analizará el informe de cada uno de ellos y determinará como elegibles solamente a aquellos que sean capacitados técnica, financiera, legal y administrativamente para ejecutar las obras de acuerdo con las

especificaciones requeridas y en el plazo fijado. Copia de los análisis hechos y de las listas de las firmas se presentará a la consideración del Banco, a través del Organismo Ejecutor, junto con los criterios generales que se utilizaron para la selección de los posibles contratistas. En estos casos, la licitación de las obras se efectuará únicamente entre las firmas precalificadas y la adjudicación se hará a la oferta de precios y condiciones más convenientes, prescindiendo de los factores de experiencia e idoneidad técnica y financiera ya evaluados en la precalificación, salvo para considerar hechos sobrevinientes con posterioridad a la presentación de los datos de la respectiva precalificación. Para el llamado a licitación bastará una notificación fehaciente a las firmas que hayan sido calificadas, la cual se cumplirá el mismo día. El organismo licitante deberá exigir a las firmas notificadas un acuse de recibo por escrito y enviará, a través del Organismo Ejecutor, copia de todo lo actuado al Banco.

Artículo 6o. Convocatoria a licitación: La convocatoria a licitación deberá indicar como mínimo el ámbito de la licitación, el organismo licitante respectivo, la prestación que motiva el llamado, el lugar, hora y fecha en que pueden obtenerse las bases de licitación, la oficina, lugar, hora y fecha en que deban presentarse las ofertas, el importe de la garantía, la fuente de financiamiento y las restricciones sobre los países de origen de las ofertas. En los casos de ejecución de obras debe indicarse además el lugar de emplazamiento de las obras. Dicho llamado deberá ser aprobado por el Organismo Ejecutor y el Banco antes de que se publique, a menos que la licitación vaya a ser financiada con recursos de contrapartida exclusivamente.

Artículo 7o. Publicidad: Las convocatorias a licitación se publicarán, como mínimo, en dos diarios de los de mayor circulación en la Capital Federal, así como en un diario de la provincia en donde se ejecutarán las obras respectivas, debiendo mediar, cuando menos, un intervalo de tres días entre cada publicación del correspondiente aviso de licitación, en el que se indicará como plazo para el recibo de las ofertas, un mínimo de 30 días corridos, contados a partir de la fecha de la última publicación. Cuando la licitación sea nacional bastará que la publicación se efectúe en sólo dos diarios de la Capital Federal.

Artículo 8o. Avisos a Embajadas y Consulados: Simultáneamente con la publicación de las convocatorias a licitación pública internacional, se cursarán invitaciones a cada una de las Embajadas, o en su defecto a los Consulados de los países miembros del Banco, que tuvieran representación acreditada ante el Gobierno de la Nación Argentina. Las invitaciones deberán contener copia de la convocatoria.

Artículo 9o. Pliego de condiciones: El pliego de condiciones, que incluye los planos y especificaciones de la licitación, será redactado por el organismo licitante respectivo y se entregará a los postores elegibles, al precio que el organismo licitante fije, una vez que el pliego haya sido aprobado entre el Organismo Ejecutor y el Banco antes de cada licitación. Las modificaciones y adiciones a dicho pliego que sean sustanciales, serán acordadas en la misma forma que el pliego original y automáticamente se prorrogará el plazo de presentación de ofertas por la mitad, por lo menos, del plazo original. Las consultas que evacúe el organismo licitante serán puestas

en conocimiento de todos los posibles oferentes y del Banco a través del Organismo Ejecutor, y no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de oferta.

Artículo 10o. Apertura de las ofertas: Las ofertas serán recibidas en el lugar, día y hora establecidos en las convocatorias a licitación, momento en que se abrirán en acto público anunciándose en tal oportunidad únicamente los nombres de los oferentes y los precios totales de cada oferta. Finalizada la apertura de ofertas, se levantará un acta en la que constarán los nombres de los oferentes y los precios de sus ofertas y que será suscrita por autoridades del organismo licitante y los oferentes presentes que desearan hacerlo. A partir de la hora indicada para la apertura de las ofertas, los proponentes no podrán alterar ni retirar las mismas. El organismo licitante podrá, con posterioridad a la apertura, solicitar a los proponentes aclaración de cualquier aspecto de las ofertas y los proponentes podrán formular las aclaraciones pertinentes siempre que no modifiquen las condiciones de la licitación o de la oferta.

Artículo 11o. Análisis de las ofertas y preselección: Presentadas las ofertas, el organismo licitante procederá a elaborar el cuadro comparativo de las mismas con los dictámenes correspondientes, los que serán enviados a través del Organismo Ejecutor, al Banco para su conformidad, antes de que sea comunicado el resultado a la firma así preseleccionada, junto con la indicación de la oferta que el organismo licitante ha evaluado como la de valor más bajo y las razones que tiene para llegar a dicha conclusión. Este requisito no rige cuando las licitaciones se financien exclusivamente con recursos de contrapartida adicionales a los financiamientos del Banco.

Artículo 12o. Modificación de la selección: Si se decidiera adjudicar la licitación a un oferente diferente al recomendado y respecto del cual el Banco hubiera dado su conformidad, o se introdujeran otros cambios sustanciales en el informe, se enviarán nuevamente al Banco los documentos pertinentes para su conformidad, debiéndose proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 13o. Adjudicación: Obtenido el acuerdo del Banco, el organismo licitante adjudicará la licitación comunicándolo a quien correspondiera según lo previsto en los pliegos de licitación. El organismo licitante enviará al Banco, a través del Organismo Ejecutor, copia de la notificación de adjudicación, y además le enviará para su aprobación, copia del proyecto de contrato que firmará con el adjudicatario.

Artículo 14o. Licitación desierta: El organismo licitante podrá declarar desierta la licitación en los casos en que no pueda adjudicar el contrato por falta de oferentes. Asimismo, se podrá declarar desierta la licitación en los casos en que no se presente oferta alguna con precio aceptable o ajustada a las condiciones del pliego o si la adjudicación no conviniera a los intereses del organismo licitante. Este deberá reservarse expresamente estos derechos en los pliegos de licitación. En las situaciones antedichas, el organismo licitante deberá oír al Banco antes de pronunciarse al respecto, salvo que la licitación se prevea financiar con recursos distintos a los del financiamiento del Banco. En todo caso en que se declare desierta una licitación a ser financiada con recursos del financiamiento del Banco se efectuará una segunda,

salvo que el organismo licitante, a través del Organismo Ejecutor y el Banco convengan en otra forma de proceder para la selección del adjudicatario.

Artículo 15o. Rescisiones: Cuando un contrato haya sido rescindido por falta de cumplimiento del contratista, ya sea que se trate de la calidad de la obra o del plazo de la ejecución, o de la calidad o plazo de entrega del a maquinaria, equipo y otros bienes y otras causales establecidas en el respectivo contrato, el organismo licitante, a través del Organismo Ejecutor y el Banco deberán acordar el curso a tomar frente a esta situación.

Artículo 16o. Márgenes de preferencia: En la evaluación y adjudicación de las ofertas que se reciban como consecuencia de una licitación internacional para la adquisición de bienes (maquinaria, equipo, materiales, etc.), se podrá reconocer a los bienes de origen argentino u originarios de países pertenecientes a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), un margen de preferencia conforme con las siguientes normas:

(a) Margen de preferencia nacional

- (i) Se considerará que un bien es originario de Argentina cuando el costo de los materiales, mano de obra y servicios argentinos empleados en su fabricación represente por lo menos un 40% del costo total del bien.
- (ii) A los efectos de la comparación de ofertas, se tendrá como precio de la oferta de productos de origen argentino, el precio de entrega del producto puesto al pie de la obra, una vez deducido lo siguiente: (1) los derechos de importación pagados sobre materias primas principales o sobre componentes manufacturados; y (2) los impuestos nacionales sobre ventas al consumo y al valor agregado, incorporados al costo del artículo ofertado.

El oferente deberá proporcionar la prueba documentada de las cantidades que de conformidad con los subincisos (1) y (2) anteriores, deben deducirse, con el solo objeto de facilitar el cotejo de ofertas.

- (iii) También a los efectos de esa comparación, se tendrá como precio de la oferta de productos de origen extranjero, el precio CIF del mismo producto (excluidos derechos de importación, consulares y portuarios), al cual deberá sumarse el importe de los gastos siguientes: (1) los de manipuleo en puerto; y (2) los de transporte local, desde el puerto o lugar fronterizo de entrada hasta el pie de la obra.
- (iv) Para efectuar el cotejo de precios entre ofertas de origen nacional y extranjero se estará a lo siguiente:
 - (1) los costos expresados en moneda extranjera se convertirán a su equivalente en australes, para lo cual se utilizará el tipo de cambio acordado por el Banco, a la fecha de comparación; y

- (2) al precio de las ofertas de productos extranjeros, calculado conforme se estipula en el inciso (iii), y expresado en el equivalente en australes, se sumará un margen de preferencia del 15% o el derecho aduanero real, según cual sea menor.

(a) Margen de preferencia regional

- (1) Se considerará que un bien es de origen regional cuando: (1) se lo produzca en un país miembro de la ALADI y cumpla con los requisitos establecidos en los instrumentos jurídicos que gobiernan esa asociación en cuanto a origen y otras materias vinculadas con los programas de liberalización el comercio regional; y (2) el costo de los materiales, mano de obra y servicios, empleados en su fabricación en el país originario, sea por lo menos el 40% del costo total del bien.
- (ii) Se sumarán al costo CIF del producto ofertado los costos locales referidos en (iii)(1) y (2) del párrafo (a) (margen de preferencia nacional) de este artículo.
- (iii) Para efectuar el cotejo de precios entre ofertas de bienes originarios de países de la ALADI y las de bienes originarios de otros países extranjeros elegibles, se estará a lo siguiente:
 - (1) también se convertirá a su equivalente en australes los precios expresados en moneda extranjera, sobre la misma base de cálculo establecida en el inciso (a)(iv)(1) anterior; y
 - (2) se sumará a las ofertas de bienes originarios de países que no sean parte de la ALADI, y expresadas en el equivalente en australes un margen del 15%, o bien la diferencia entre los derechos de importación aplicables a bienes originarios de países que integran esa asociación y los derechos aplicables a bienes originarios de países extranjeros elegibles que no sean parte de la ALADI, según cual sea menor.

Artículo 17o. Pronunciamiento oportuno del Banco: El Banco deberá pronunciarse sobre los documentos que se someten a su consideración en forma oportuna, para que no sufra perjuicio la marcha normal del Programa y se respeten los calendarios de ejecución oportunamente programados.

Artículo 18o. Origen de los bienes: El origen de los materiales y/o equipos a adquirirse, es el país en el cual el material y/o equipo ha sido extraído, cultivado o producido ya sea por manufactura, procesamiento o ensamble. El origen del artículo "producción", necesariamente es el país en el cual, como resultado de dicho procedimiento, manufactura o ensamble, resulta en otro artículo, comercialmente reconocido, que difiere sustancialmente en sus características básicas, en su propósito o finalidad de cualquiera de sus componentes importados. La nacionalidad de la firma que produce o vende los bienes o el equipo es irrelevante para determinar el origen de tales bienes y equipos.

Artículo 19o. Nacionalidad de firmas: Para determinar la nacionalidad de una firma constructora y su elegibilidad para participar en licitaciones de contratos financiados con recursos del Banco, se aplicarán las siguientes normas:

- (a) que esté constituida u organizada de otra manera, en un país elegible;
- (b) que tenga la sede principal de sus negocios en un país elegible;
- (c) (i) que más del 50% de su capital sea propiedad de una empresa o empresas en uno o más países elegibles (dicha empresa o empresas también deberán calificar en cuanto a su nacionalidad) y/o de ciudadanos o residentes "bona-fide" de esos países elegibles, y (ii) que constituya una parte integral de la economía del país elegible en que está domiciliada;
- (d) que no exista arreglo alguno en virtud del cual una parte sustancial de las utilidades netas o de otros beneficios tangibles de las empresas sean acreditados o pagados a personas que no sean ciudadanos o residentes "bona-fide" de los países elegibles; y
- (e) que por lo menos el 80% de todas las personas que presenten servicios conforme al contrato de construcción en el país donde ésta se lleva a cabo ya estén empleadas directamente por el contratista o por un subcontratista, sean ciudadanos de un país elegible. Para los efectos de este cómputo, y respecto de una firma proveniente de un país que no sea el de la localidad de la construcción, no se tendrán en cuenta ciudadanos o residentes permanentes del país donde se lleve a cabo la construcción.

Las normas anteriores se aplicarán a cada uno de los miembros de un "joint venture" o consorcio (asociación de dos o más empresas) y a cada empresa que se proponga para subcontratar parte del trabajo.

Artículo 20o. Criterios básicos: La aplicación de los anteriores procedimientos se basará en los principios de competencia, publicidad e igualdad entre oferentes.

Artículo 21o. Alcance del presente procedimiento: El presente instrumento es complementario de lo que disponen las respectivas cláusulas del contrato de préstamo, de manera que en el caso de oposición o pugna entre unas y otras prevalecerán las disposiciones del contrato de préstamo.

ANEXO D

POLITICA TARIFARIA

Objetivos

En la prestación de servicios públicos por empresas o cooperativas financiadas directa o indirectamente con recursos del Programa de Crédito para el Desarrollo Urbano, donde es identificable el consumo efectuado por cada beneficiario, se deberán cobrar tarifas a los beneficiados que permitan la recuperación de los costos de operación y mantenimiento de los servicios prestados a efectos de evitar la transferencia de recursos con la consecuente disminución en la capacidad de prestación de servicios.

Adicionalmente, de acuerdo al tipo de servicio público, como se detalla más adelante, deberán cobrarse tarifas que además de cubrir los costos mencionados, generen recursos adicionales para cubrir algunos o todos de los siguientes requerimientos, según sea el caso:

- depreciación de la planta en servicio
- obtención de una rentabilidad razonable sobre la inversión inmovilizada, debidamente revaluada
- generar recursos suficientes para cubrir el servicio de su deuda y/o parte de su programa de inversiones

Tipo de servicios públicos

De los sectores mencionados en el Reglamento de Crédito, los servicios públicos sujetos a estas regulaciones incluyen agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y distribución de gas; no incluyen los servicios relacionados con equipamiento comunitario, defensas contra erosión e inundaciones, mejoramiento vial y desagües pluviales y alumbrado público.

Niveles tarifarios

Para poder ser sujeto de crédito, la empresa, cooperativa o institución de servicio público, que sea objeto de las presentes regulaciones, deberá demostrar que, al momento de aprobar la solicitud y anualmente mientras dure la ejecución del proyecto objeto del financiamiento, los ingresos por concepto del cobro de los servicios prestados a todos sus clientes son suficientes para cubrir por lo menos los costos de operación y mantenimiento de la prestación de tales servicios.

Adicionalmente, a partir de un año después de completarse la ejecución del proyecto objeto del financiamiento, las tarifas deben, anualmente, cumplir con las siguientes disposiciones, como mínimo:

- Agua potable y alcantarillado

Las instituciones beneficiarias de créditos del Programa que presten servicios de agua potable y alcantarillado, deberán generar suficientes recursos mediante el cobro del servicio prestado que permita, durante el período de amortización del crédito, cubrir los costos de operación, mantenimiento y depreciación de los activos fijos en servicio. Adicionalmente, en el caso de que la institución sea sujeto de créditos, los recursos deberán ser suficientes para el servicio de sus deudas. Si la aplicación de lo anterior no generase los ingresos suficientes para cubrir el oportuno servicio de todas las obligaciones del beneficiario respectivo, el Garante y el Prestatario deberán adoptar las medidas necesarias, que pueden incluir el aumento de tarifas, para obtener los recursos adicionales que se requieran para alcanzar dicho fin.

- Electricidad y gas

Las instituciones beneficiarias de crédito del Programa que presten servicios de distribución de gas o de electricidad, deberán generar suficientes recursos mediante el cobro del servicio prestado que permita, durante el período de amortización del crédito, cubrir los costos de operación, mantenimiento y depreciación de los activos fijos en servicio debidamente revaluados. Adicionalmente, los recursos deberán ser suficientes para (a) la obtención de una rentabilidad operativa no inferior al 8% anual sobre la inversión inmovilizada revaluada, o (b) la cobertura de la totalidad del servicio de su deuda y de no menos del 30% de las nuevas inversiones en activos fijos y capital de trabajo neto efectuadas durante el año. Si la aplicación de lo anterior no generase los ingresos suficientes para cubrir el oportuno servicio de todas las obligaciones del beneficiario respectivo, el Garante y el Prestatario deberán adoptar las medidas necesarias, que pueden incluir el aumento de tarifas, para obtener los recursos adicionales que se requieran para alcanzar dicho fin.

Cumplimiento de las disposiciones

Los contratos de crédito y/o de garantía, según sea el caso deberán contener las cláusulas correspondientes que aseguren el cumplimiento de las disposiciones precedentes, así como la obligación de información periódica a la SVOA de la situación del cumplimiento de tales disposiciones. En caso de incumplimiento, la SVOA deberá informar al BID a efectos de coordinar las medidas pertinentes, que pueden incluir la exigibilidad del crédito.

ANEXO E

Lineamientos Para las Evaluaciones A Posteriori de los Proyectos del Programa

a) Consideraciones Generales

El propósito básico de las evaluaciones a posteriori es de reconstruir hechos reales asociados con la ejecución y funcionamiento del proyecto para dictaminar, a la luz de la información concreta y actualizada, sobre la bondad del proyecto, y la efectividad de los métodos de análisis ex-ante. Esto con el propósito de tener un mecanismo de retroalimentación de información que permita mejorar la selección, formulación, análisis, ejecución y funcionamiento de los proyectos de inversión.

Para cumplir con estos requisitos, los requerimientos de la evaluación a posteriori residen en determinar y recolectar oportunamente los valores de variables críticas como son el costo y cronograma real de inversión y el costo real de funcionamiento; la capacidad efectiva de oferta; la demanda efectiva por el servicio; problemas, soluciones, procedimientos asociados con el proyecto; así como hechos no previstos que inciden en forma significativa en las variables críticas del proyecto.

Para cumplir con estos requerimientos, será necesario estipular en los contratos de préstamos la necesidad de recolectar datos básicos iniciales, datos comparativos (que se reúnen anualmente) y al mismo tiempo estipular la metodología de recolección de datos y de evaluación socioeconómica. Esta última normalmente será una reaplicación de la metodología utilizada en la evaluación a priori.

En la siguiente sección se presenta, a título de ejemplo, los datos y pautas para evaluaciones a posteriori de un proyecto del sector de agua potable.

b) DATOS Y PAUTAS PARA EVALUACIONES EX-POST DE LOS PRESTATARIOS
AGUA POTABLE

A. Datos Básicos Iniciales

Corresponden al último año antes de iniciarse la operación del proyecto e incluyen la siguiente información:

1. Población del área del proyecto, número de conexiones y porcentaje de población servida.
2. Producción de agua.
3. Costo de operación y mantenimiento del sistema.
4. Consumo de agua por grandes categorías (residencial, industrial, comercial, sector público). Facturación en base a consumo medido.
5. En el grupo residencial, consumo de agua por familia, incluyendo el sistema público y otras posibles fuentes de abastecimiento (cisterna, arroyo o río, bomba manual o eléctrica, fuente pública, etc.) y costo para el usuario del agua de cada tipo de fuente. Estos datos se desagregarán según niveles de ingreso de los usuarios.
6. Tarifas, desagregadas según las grandes categorías de consumo, y dentro del sector residencial, desagregadas de acuerdo a los niveles típicos de consumo para diferentes niveles de ingreso.
7. Medición de la producción y el consumo y estimaciones del agua no contabilizada, que puede incluir según los casos los siguientes componentes:
 - a) pérdidas en las líneas de transmisión, redes, reservorios y conexiones antes de los medidores domiciliarios
 - b) usos fraudulentos del agua
 - c) errores en la macro y micro medición, incluyendo en esta última, conexiones sin medidor, con medidores defectuosos o no leídos regularmente
 - d) agua entregada sin medición para diferentes usos públicos como riego de jardines públicos, lavado de calles y redes de alcantarillado, contra incendios o para uso de edificios públicos o comunitarios.
8. Calidad del agua del sistema y otras fuentes disponibles. Los datos deberán ser presentados de manera que se pueda analizar el cumplimiento de los valores-pautas recomendados por la OMS, y se registrarán tanto a nivel del agua ingresada a la red de distribución como del agua distribuida.

9. Estadísticas sobre morbilidad y mortalidad por enfermedades parasitarias y gastrointestinales, incluyendo por separado la infantil.
10. Datos sobre disposición de excretas y otros indicadores de factores socioculturales complementarios del agua potable.
11. Proyecciones de población, conexiones y demanda futura de agua.

B. Datos Comparativos

Se presentarán datos anuales a partir de la puesta en operación del proyecto, para las mismas categorías indicadas para los datos básicos iniciales. En aquellas categorías donde pueda no ser relevante requerir datos todos los años (por ejemplo, puntos A.5, A.10 y A.11), se presentará información (a) cada vez que ocurran cambios importantes, y (b) para el año final del período de evaluación.

C. Metodología

Los datos a usarse se referirán al área específica del proyecto. Para consumo de agua por fuente de abastecimiento deberá recolectarse información mediante muestras estadísticamente representativas de la población de la zona del proyecto. En el caso de los datos sobre indicadores de salud, los mismos se recogerán en hospitales y/o centros de salud que sirvan a las comunidades objeto del proyecto. El informe de evaluación incluirá un análisis de: i) costo-beneficio del proyecto; ii) impacto distributivo del mismo; iii) los efectos del proyecto sobre la salud en la población servida, iv) otros efectos socioculturales relevantes, y v) recomendaciones y conclusiones. Para los dos primeros se utilizarán las Guías para la Evaluación de Proyectos de Agua Potable (BID, Monografías sobre Análisis de Proyectos, Número 4 y 5).

ARGENTINA

PROGRAMA DE PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO

REGLAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA

I. Propósito

- 1.01 El propósito de este Reglamento es establecer los términos y condiciones por los que se registrarán las actividades de asistencia técnica financiadas o promovidas con recursos del Programa de Promoción del Desarrollo Urbano (en adelante denominado "El Programa") a través del Subprograma de Asistencia Técnica (en adelante denominado "El Subprograma"). La Ejecución del Subprograma estará a cargo de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (SVOA) del Ministerio de Salud y Acción Social a través de la Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano (OPDU), con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los aportes de contrapartida local.

II. Objetivos y Descripción

- 2.01 El Subprograma tiene como objetivo el financiamiento y/o promoción de actividades de asistencia técnica relacionadas con la identificación, preparación y ejecución de proyectos de desarrollo urbano, sobre todo en los sectores de agua potable, desagües cloacales, equipamientos comunitarios, defensa contra erosión e inundaciones, mejoramiento vial y desagües pluviales, electricidad y alumbrado público y gas, así como la operación y administración financiera de servicios públicos urbanos.
- 2.02 El Subprograma contempla tres tipos básicos de intervención. En primer lugar a nivel del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales se apoyará la realización de estudios de política y planificación urbana con el objeto de identificar necesidades y determinar prioridades para inversiones de infraestructura y equipamientos urbanos en los distintos sectores, tamaños de ciudad y regiones del país. En segundo lugar, a nivel de los solicitantes de financiamiento al Programa para proyectos específicos de infraestructura y/o equipamiento, se otorgará créditos para la contratación de servicios profesionales de apoyo a la formulación de estos proyectos con base en los criterios establecidos en las guías y el Reglamento de Crédito del Programa. En tercer lugar, el Subprograma atenderá las necesidades de fortalecimiento institucional y financiero de los potenciales subprestatarios y ejecutores de los proyectos del Programa que puedan ser objeto de crédito dentro del Subprograma de Créditos, así como de otras entidades responsables por la operación de servicios urbanos, dando particular énfasis a la gestión de estos proyectos y servicios y al mejoramiento de los

sistemas tarifarios o mecanismos alternativos de recuperación de las inversiones realizadas.

III. Organización

1. Recursos del Subprograma

- 3.01 Los recursos del Subprograma estarán constituidos por los fondos de la parte correspondiente del préstamo del BID en moneda local para el financiamiento y promoción de actividades de asistencia técnica, que asciende a un monto del equivalente de US\$1,5 millones complementados por los recursos de contrapartida aportados por la SVOA provenientes del FONAVI que ascienden al equivalente de US\$1,5 millones, para un total del equivalente de US\$3 millones.

2. Actividades Financiadas

- 3.02 Los recursos disponibles podrán ser comprometidos en créditos de recuperación contingente o aportes no reembolsables, según el tipo de actividad, para la promoción de actividades de asistencia técnica en las siguientes áreas:

- (a) estudios de política y estrategias de desarrollo urbano, teniendo el objetivo de definir prioridades y/o identificar proyectos de inversión (aportes no reembolsables);
- (b) formulación de solicitudes de crédito al Programa en los sectores elegibles de recibir financiamiento para la ejecución de proyectos específicos de infraestructura y/o equipamientos urbanos (financiamientos de recuperación contingente a la aprobación de los proyectos formulados); y
- (c) fortalecimiento institucional y/o financiero de los potenciales subprestatarios, ejecutores y/o operadores de proyectos y servicios urbanos que puedan ser objeto de financiamiento con los recursos de crédito del Subprograma de Créditos del Programa.

IV. Operación

1. Beneficiarios Elegibles

- 4.01 Serán elegibles todos los sectores y beneficiarios incluidos en el Reglamento de Crédito del Programa, así como las entidades nacionales, provinciales y municipales responsables por la definición de políticas y estrategias de desarrollo urbano y/o la realización de actividades específicas de planificación urbana a nivel local.

2. Garantías

- 4.02 En los casos del financiamiento de actividades de asistencia técnica bajo el régimen de recuperación contingente, el servicio de los créditos podrá ser garantizado por los gobiernos provinciales, municipales y entidades bancarias.

3. Denominación de los Créditos

- 4.03 Los créditos serán denominados y serán pagaderos en australes.

4. Tasas de Interés

- 4.04 La tasa de interés a aplicar a los créditos a ser otorgados con los recursos del Subprograma bajo el régimen de recuperación contingente no podrá ser superior al 0.5 % mensual, calculada sobre los saldos deudores indexados.

5. Indexación

- 4.05 El cálculo de los desembolsos y las amortizaciones de los créditos para asistencia técnica se harán manteniendo su valor constante, de acuerdo al índice de precios mayoristas.

6. Plazos y Períodos de Amortización

(a) Desembolsos

- 4.06 Los plazos de desembolsos de los créditos y aportes no reembolsables de asistencia técnica no podrán ser superiores a 1 año y en ningún caso podrán exceder el plazo para el desembolso final del préstamo del BID en moneda local.

(b) Amortización

- 4.07 El plazo máximo de amortización de los créditos para asistencia técnica bajo el régimen de recuperación contingente será de 5 años contados a partir de la aprobación del crédito para el proyecto de inversión respectivo.

7. Limite de Crédito o Aporte No Reembolsable

- 4.08 El monto máximo de un financiamiento o aporte no reembolsable para asistencia técnica será del equivalente de US\$100.000. Todo financiamiento o aporte para asistencia técnica superior al equivalente de US\$ 50.000 requerirá la no objeción del BID.

8. Distribución Territorial y Sectorial de los Recursos

- 4.09 Los recursos del Subprograma se distribuirán de una manera consistente con los objetivos territoriales del Programa y con el

propósito de fortalecer las entidades responsables por la de identificación, preparación y ejecución de proyectos y la operación y administración de servicios urbanos en las ciudades intermedias y pequeñas en el interior del país. Asimismo, los créditos de recuperación contingente para asistencia técnica en la formulación de proyectos específicos serán distribuidos de acuerdo con las prioridades sectoriales del Programa.

V. Preparación, Análisis y Tramitación de las Solicitudes

- 5.01 Las solicitudes de asistencia técnica deben ser preparadas de acuerdo con las guías y formularios para cada tipo de actividad distribuidos a los potenciales beneficiarios por el Ejecutor del Programa.
- 5.02 Toda solicitud será sometida a un análisis por parte de la Oficina de Promoción del Desarrollo Urbano, a través de su Dirección de Asistencia Técnica, que recomendará la aprobación o no de cada operación al Director del Programa. Tendrán prioridad en la asignación de fondos las solicitudes que tienen las siguientes características:
- (a) su tramitación sea producto de una tarea previa de orientación para la preparación de un proyecto de inversión específica llevada a cabo por el personal propio y/o asesores de la OPDU;
 - (b) la factibilidad de ejecución del proyecto de inversión haya sido preliminarmente evaluada por la OPDU y existen elementos de juicio que permitan anticipar favorablemente las etapas posteriores a la formulación del mismo;
 - (c) se relacionan con proyectos aprobados y/o instituciones declaradas elegibles para beneficiarse del Subprograma de Crédito del Programa; y/o
 - (d) involucren la atención de problemas de urgente resolución, a juicio de las autoridades pertinentes del Gobierno Nacional o Provincial.
- 5.03 Una vez aprobada la operación de asistencia técnica, la SVOA y el beneficiario procederán a formalizar el convenio respectivo o, de ser el caso, el contrato de crédito de recuperación contingente con las garantías correspondientes.

VI. Ejecución de Actividades de Asistencia Técnica

1. Selección y Contratación de Consultores

- 6.01 Los consultores para apoyar la realización de estudios de política y

estrategias de desarrollo urbano y/o para el fortalecimiento institucional y/o financiero de entidades suministradoras de servicios urbanos, no beneficiarios de créditos del Programa para la ejecución de proyectos específicos de inversión, serán seleccionados y contratados por la SVOA, siguiendo procedimientos acordados con el BID. Los expertos y/o firmas consultoras para tareas de formulación de proyectos específicos de inversión a ser presentados al Programa, a su vez, serán seleccionados y contratados por los beneficiarios, siguiendo procedimientos aceptables al BID y a la SVOA.

- 6.02 Los procedimientos de selección y contratación de expertos individuales y/o firmas consultoras por parte de los beneficiarios de financiamientos de asistencia técnica para la formulación de proyectos específicos de inversión deberán ajustarse a lo instruido en el Documento "Selección y Contratación de Firms Consultoras y/o Expertos Individuales" del BID que se presenta como el anexo de este Reglamento, pudiéndose limitar su contratación al ámbito nacional.

2. Asistencia a los Beneficiarios

- 6.03 La OPDU podrá prestar asesoría a los beneficiarios de financiamientos de asistencia técnica para la formulación de proyectos específicos de inversión en la selección y contratación de firmas consultoras y/o expertos individuales, mediante la distribución de directrices y/o otra información sobre procedimientos de selección y contratación, material de referencia, costos y honorarios, etc, así como a través de la información sobre posibles candidatos para realizar los servicios necesarios, por área de especialización y experiencia profesional. Además de eso, la OPDU podrá cooperar en las etapas previas a la selección y firma del respectivo contrato y/o designar observadores para ayudar a examinar las propuestas recibidas y asistir a las reuniones en las cuales los representantes del beneficiario entrevisten, seleccionen o negocien con firmas de servicios profesionales.

3. Recursos Complementarios

- 6.04 Los beneficiarios de las actividades de asistencia técnica financiadas o promovidas con los recursos del Subprograma se comprometerán a aportar todos los recursos complementarios que sean necesarios para cumplir, en tiempo y forma, las tareas y obligaciones para las que se otorga el respectivo financiamiento o aporte. Estas obligaciones comprenderán la designación y/o contratación de profesionales y personal técnico de contraparte a los consultores, así como las prestaciones en servicios, equipamientos físicos, información y toda otra que sea necesaria para una adecuada realización de los servicios profesionales.

4. Desembolsos

- 6.05 Los desembolsos de los financiamientos o aportes para asistencia técnica se realizarán con base en cronogramas previamente acordados entre la OPDU y los beneficiarios. La autorización de los pagos finales de los consultores, no obstante, dependerá de la aprobación previa de sus informes finales por parte del beneficiario y de la no objeción de OPDU.

5. Supervisión

- 6.06 Los contratos firmados entre expertos individuales y/o entidades consultoras con los beneficiarios del Subprograma establecerán que la OPDU efectuará la supervisión de los trabajos de asistencia técnica a realizarse. A tales fines, la OPDU podrá requerir toda la información que estime pertinente para evaluar el progreso de la tarea incluyendo informes parciales de progreso. Adicionalmente, y cuando lo estime necesario, la OPDU podrá enviar misiones especiales de supervisión de estos trabajos.

VII. Modificación del Reglamento

- 7.01 La SVOA podrá sugerir modificaciones a este Reglamento, para adaptarlo a nuevas circunstancias o condiciones que pudieran presentarse durante la ejecución del Subprograma, como un medio de asegurar el logro de los objetivos del mismo. Las modificaciones entrarán en vigencia luego de su exámen y aprobación por parte del BID.

Anexo: "Selección y Contratación de Firms Consultoras y/o Expertos Individuales".

Agosto 26, 1986

ANEXO

SELECCION Y CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS
Y/O EXPERTOS INDIVIDUALES

En la selección y contratación de firmas consultoras y/o expertos individuales (en adelante denominados indistintamente "Consultores") necesarios para la ejecución del Programa se estará a lo siguiente:

I. DEFINICIONES

Se establecen las siguientes definiciones:

- 1.01 Experto individual es todo profesional o técnico especializado en alguna ciencia, arte u oficio.
- 1.02 Firma consultora es toda asociación legalmente constituida, integrada principalmente por personal profesional, para ofrecer servicios de consulta, asesoría, dictámenes de expertos y servicios profesionales de diversa índole.

Para los propósitos de este Anexo, organizaciones sin fines de lucro tales como universidades, fundaciones, organismos autónomos o semiautónomos u organizaciones internacionales que ofrezcan servicios de consulta, se considerarán como firmas consultoras.

II. INCOMPATIBILIDADES

- 2.01 No podrán utilizarse recursos del Banco para contratar consultores del país del Prestatario si ellos pertenecen al personal permanente o temporario del Estado o de la institución que recibe el Financiamiento o que es beneficiario de los servicios de los expertos, o si han pertenecido a cualquiera de ellos dentro de los seis meses previos a una de las siguientes fechas: (a) la de la presentación de la solicitud, o (b) de la de selección del experto individual, a menos que el Banco acuerde reducirse plazo.

III. ELIGIBILIDAD Y REQUISITOS SOBRE NACIONALIDAS

- 3.01 El Organismo Ejecutor no podrá introducir en la aplicación de los procedimientos establecidos en este Anexo, disposiciones o condiciones que restrinjan o impidan la participación de Consultores originarios de países miembros del Banco.

3.02 Sólo podrán constatarse Consultores que sean nacionales de países miembros del Banco. Para determinar la nacionalidad de una firma consultora se considerarán los siguientes criterios:

- (a) El país en el cual la firma esté debidamente constituida o legalmente organizada.
- (b) El país en el cual la firma tenga establecido el asiento principal de sus negocios.
- (c) La nacionalidad de las firmas o la ciudadanía o residencia bona fide de los individuos que tengan en la firma consultora la propiedad, con derecho a participar en las utilidades de dicha firma en exceso del cincuenta por ciento (50%), conforme con lo establecido mediante certificación extendida por un funcionario de la firma consultora, debidamente autorizado.
- (d) La existencia de arreglos en virtud de los cuales una parte sustancial de las utilidades o beneficios tangibles de la firma se destina a firmas o personas de una determinada nacionalidad.
- (e) La determinación por parte del Banco de que la firma constituye una parte integral de la economía de un país, comprobado por la residencia bona fide en el país de una parte sustancial del personal ejecutivo, técnico y profesional de la firma, y que la firma cuenta en el país con el equipo operativo u otros elementos necesarios para llevar a cabo los servicios por contratar.

3.03 Los requisitos de nacionalidad exigidos por el Banco serán también aplicables a las firmas propuestas para prestar una parte de los servicios requeridos, en virtud de asociación conjunta o de un subcontrato con una firma consultora calificada que satisfaga los requisitos de nacionalidad.

3.04 Para establecer la nacionalidad de un experto individual se estará a la que se determine en su pasaporte u otro documento oficial de identidad. El Banco, sin embargo, podrá admitir excepciones a esta regla en aquellos casos en que el experto individual, no siendo elegible por razón de nacionalidad: (i) tenga domicilio establecido en un país elegible, esté en situación legal de poder trabajar en él (fuera del status de funcionario internacional) y que haya declarado que no tiene intenciones de regresar a su país de origen en un futuro inmediato, o bien (ii) haya fijado su domicilio permanente en un país elegible y haya residido en él por 5 años como mínimo.

IV. PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y CONTRATACION

A. Selección y contratación de firmas consultoras

4.01 En el caso de selección y contratación de firmas consultoras:

(a) Antes de efectuarse la selección de la firma el Organismo Ejecutor deberá someter a la aprobación del Banco lo que sigue:

(i) El procedimiento que se utilizará en la selección y contratación de la firma. Si se estima que el costo de los servicios no excederá de cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$100.000) o su equivalente, calculado de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3.05(a) de las Normas Generales, bastará que se efectúe un concurso privado de servicios de consultoría, o que se aplique otro método similar. Si se prevé, en cambio, que el costo excederá esta suma, la selección y contratación deberá anunciarse en la prensa nacional y, si así procediere por la complejidad y grado de especialización del asesoramiento solicitado, en publicaciones extranjeras especializadas. Además, deberá informarse al Banco sobre esos anuncios y enviársele recortes de los mismos, con especificación de la fecha y nombre de la publicación en que hayan aparecido.

(ii) Los términos de referencia (especificaciones) que describan los trabajos que realizará la firma, junto con una estimación del costo, y

(iii) Una lista de por lo menos tres y no más de seis firmas a las cuales se proyecta cursar invitación para que presenten propuestas de trabajo.

(b) Una vez que el Banco haya aprobado los requisitos anteriores, se solicitará a todas las firmas aprobadas, la presentación de propuestas, conforme con los procedimientos y términos de referencia aprobados.

(c) En las invitaciones a presentar propuestas debe establecerse el uso de una de las modalidades siguientes, según sea pertinente:

(i) En el primer caso, se presentará un solo sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica, sin cotización de precios. El Organismo Ejecutor analizará las propuestas recibidas y establecerá el orden de mérito de éstas. Si la complejidad del caso así lo requiera, el Organismo Ejecutor podrá recurrir por su propia cuenta a un grupo de consultores para que examine las propuestas y proporcione asesoramiento técnico y especializado en la clasificación por mérito.

Una vez establecido este orden de mérito de las firmas, se invitará a negociar un contrato a la firma clasificada en primer lugar. En estas negociaciones se examinarán en forma completa los detalles de los términos de referencia a fin de que exista un pleno y recíproco entendimiento con la firma, se examinarán los requisitos contractuales y legales del acuerdo y, por último, se elaborarán costos detallados. Si no puede llegarse a un acuerdo con esta firma respecto

de las condiciones contractuales, se le notificará por escrito que se ha rechazado su propuesta y se iniciarán negociaciones con la segunda firma y así sucesivamente hasta que se llegue a un acuerdo satisfactorio.

- (ii) En el segundo caso deberán presentarse dos sobres cerrados, el primero de los cuales con la propuesta técnica, sin indicación de costos, y el segundo con el costo ofertado por los servicios.

El Organismo Ejecutor analizará las propuestas técnicas y establecerá el orden de mérito de éstas. La negociación contractual comenzará con la firma que ofrezca la mejor propuesta técnica. El segundo sobre presentado por esta firma se abrirá en presencia de uno o más representantes de la misma, y se lo utilizará en la negociación contractual. Todos los segundos sobres presentados por las otras firmas continuarán cerrados y, de llegarse a un acuerdo con la primera firma, serán devueltos a las firmas respectivas. De las condiciones contractuales se le notificará por escrito ese desacuerdo y se iniciará la negociación con la segunda firma, y así sucesivamente, hasta llegar a un acuerdo satisfactorio.

El no poder llegar a un acuerdo respecto de los costos detallados o la remuneración de los servicios, o el que el Organismo Ejecutor considere que dichos costos o remuneración son inapropiados o excesivos, será causa suficiente para notificar el rechazo de la propuesta e iniciar negociaciones con la firma que le siga en orden de mérito. Cuando se haya rechazado a una firma, no se la volverá a llamar para ulteriores negociaciones correspondientes a ese contrato.

- (d) El texto del proyecto del contrato negociado con la firma consultora deberá ser sometido a la aprobación del Banco, antes de su firma y de la iniciación de los servicios. Copia fiel del texto firmado deberá enviarse prontamente al Banco.

B. Selección El texto del proyecto del contrato negociado con la firma consultora

4.02 En el caso de selección y contratación de expertos individuales:

- (a) Antes de efectuarse la selección de los expertos, el Organismo Ejecutor deberá someter a la aprobación del Banco lo que sigue:
 - (i) el procedimiento de selección;
 - (ii) los términos de referencia (especificaciones) y el calendario referentes a los servicios a ser proporcionados;

(iii) los nombres de los expertos tentativamente seleccionados, señalando detalladamente su nacionalidad y domicilio, antecedentes, experiencia profesional y conocimiento de idiomas; y

(iv) el formulario del contrato que se utilizará para contratar a los expertos;

(b) Una vez que el Organismo Ejecutor y el Banco hayan aprobado los requisitos anteriores, el Organismo Ejecutor procederá a contratar los expertos. El contrato que haya de suscribirse con cada uno de ellos deberá ajustarse al modelo de contrato que el Banco y el Prestatario hayan acordado. Copia fiel del texto firmado de cada contrato deberá enviarse prontamente al Banco.

V. MONEDAS DE PAGO A LOS CONSULTORES

5.01 Se establecen las siguientes modalidades en cuanto a las monedas con que se pagará a los Consultores:

(a) Pagos a firmas consultores: Los contratos que se suscriban con las firmas consultoras deberán reflejar una de las siguientes modalidades, según sea el caso:

(i) Si la firma consultora está domiciliada en el país donde deba rendir los servicios, su remuneración se pagará exclusivamente en la moneda de ese país, con excepción de gastos incurridos en divisas para pago de pasajes externos o viáticos en el exterior, los que se reembolsarán en dólares o su equivalente en otras monedas que formen parte del Financiamiento, excepto la del país del estudio.

(ii) Si la firma consultora no está domiciliada en el país donde deba rendir los servicios, al máximo porcentaje posible de su remuneración se pagará en la moneda de ese país, y el resto en dólares, o su equivalente en otras monedas que formen parte del Financiamiento, excepto la de ese país, en el entendido que la partida correspondiente a viáticos deberá pagarse en la moneda del país o países en los cuales los respectivos servicios han de ser rendidos. En caso de que el porcentaje que vaya a pagarse en la moneda del país en que se va a rendir el servicio, sea inferior al treinta por ciento (30%) del total de la remuneración de la firma consultora, una justificación completa y detallada se someterá, según corresponda, al Banco para su examen y comentarios.

(iii) Si se trata de un consorcio integrado por firmas domiciliadas en el país y firmas no domiciliadas en el mismo la parte de la remuneración que corresponda a cada uno de los integrantes se pagará de acuerdo con las reglas señaladas en los párrafos (i) y (ii) anteriores.

(iv) Se aplicará lo dispuesto en el Artículo 3.05(a) de las Normas Generales respecto al tipo de cambio.

(b) Pagos a expertos individuales. Deben seguirse las mismas reglas del inciso (a) anterior. Sin embargo, si el experto individual fuera contratado para desempeñarse en país distintos de su país de domicilio por menos de cuatro meses su remuneración se pagará totalmente en dólares.

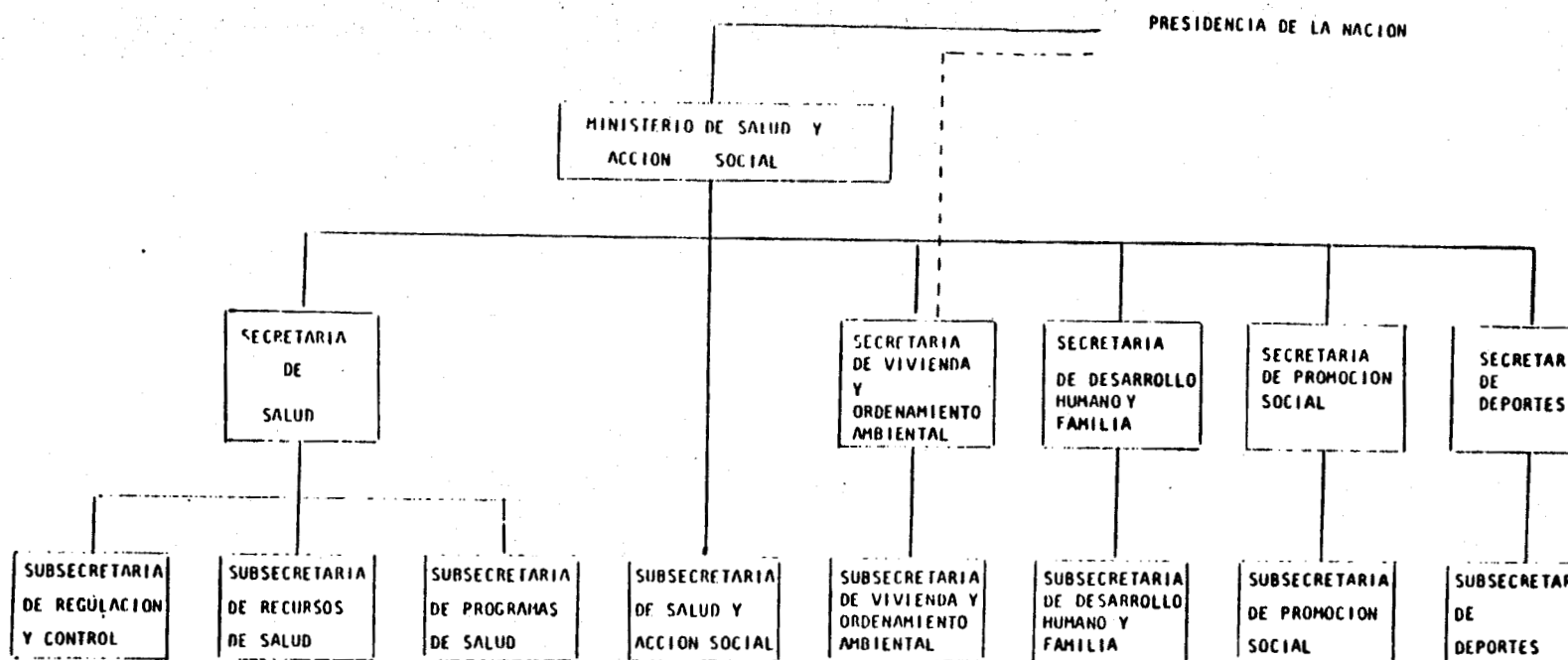
VI. RECOMENDACIONES DE LOS CONSULTORES

6.01 Queda establecido que las opiniones y recomendaciones de los Consultores no comprometen ni al Prestatario, ni a los beneficiarios ni al Banco, los que se reservan el derecho de formular al respecto las observaciones o salvedades que consideren apropiadas.

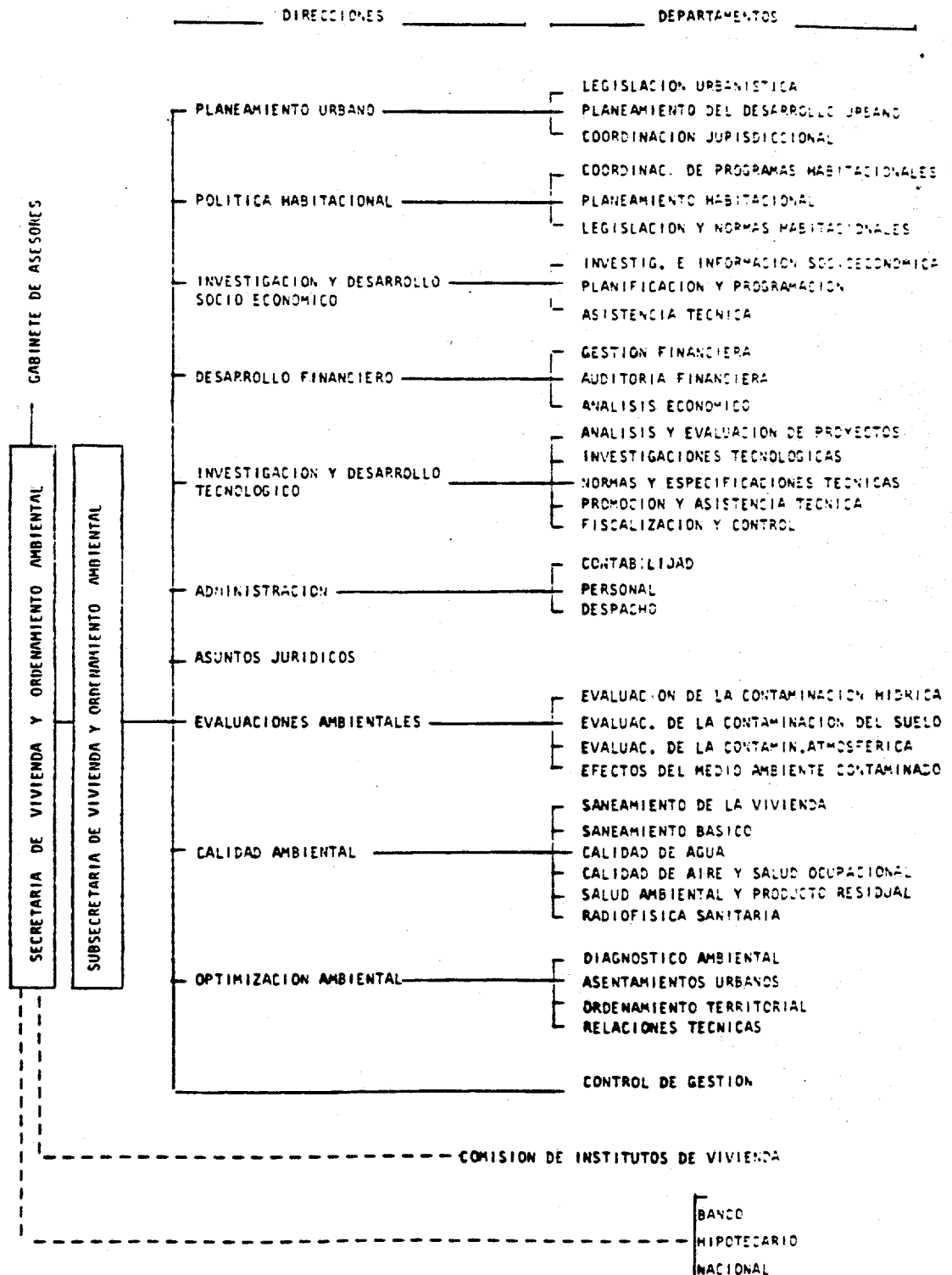
VII. ALCANCE DEL COMPROMISO DEL BANCO

7.01 Queda establecido que el Banco no asume compromiso alguno de financiar total o parcialmente ningún programa o proyecto que, directa o indirectamente, pudiera resultar de los servicios rendidos por los Consultores o de las recomendaciones formuladas por ellos.

Estructura del Ministerio de Salud y Acción Social



**Estructura de la Secretaría de Vivienda
y Ordenamiento Ambiental**



FUNCION VIVIENDA - PRESUPUESTO 1985

(miles de A) 2/

	EROGACIONES TOTAL	%	TOTAL RECARGO	RECURSOS ESPECIFICOS	TESORO NACION
<u>ADMINISTRACION CENTRAL</u>	<u>993</u>	<u>0,3</u>	<u>993</u>	<u>-</u>	<u>993</u>
Ministerio de Defensa	57	0,003	57		57
Secretaría E.Vivienda y Ordenamiento Ambiental	936	0,027	936	-	936
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>	<u>316.140</u>	<u>92,1</u>	<u>316.140</u>	<u>316.140</u>	<u>-</u>
Ministerio Salud y A.Social					
C.E. 325-Producido Explotación Juegos de Azar	13.642	4,0	13.642	13.642	-
Secretaría Vivienda y O.Amb.					
C.E. 516 - FONAVI	302.498	88,1	302.498	302.498	-
<u>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</u>	<u>25.939</u>	<u>7,5</u>	<u>25.939</u>	<u>25.939</u>	<u>-</u>
Ministerio de Defensa					
00.033-Instituto de Ayuda Financiera para pagos retiros y Pensiones	120	-	120	120	-
Ministerio de Economía					
006-Banco Hipotecario Nacional	25.819	7,5	25.819	-	
TOTAL FUNCION VIVIENDA	<u>343.072</u>	<u>100,0</u>	<u>343.072</u>	<u>993</u>	

FUENTE: Presupuesto General de Recursos y Gasto elevado a consideración del Congreso Nacional.

1/ Tasa de cambio .8US\$/Austral

SECRETARIA DE ESTADO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

PRESUPUESTO 1985

(miles de A) 1/

FINALIDAD-FUNCION CARACTER	TOTAL EROGACIONES	PERSONAL	BIENES Y S. NO PERSONALES	TRANSFERENCIAS	BIENES DE CAPITAL	INVERSION FINANCIERA
7. Bienestar Social						
10- Vivienda						
0.Administración central	936	582	288	33	33	-
1.Cuentas Especiales	302.498	-	11.404	9.351	-	281.743
4. Salud						
05 - Saneamiento Ambiental						
0 - Administración central	1.553	270	507	695	81	-
9. Ciencia y Técnica						
90 - Ciencia y Técnica sin discriminar						
1 - Cuentas Especiales	<u>915</u>	<u>-</u>	<u>373</u>	<u>531</u>	<u>11</u>	<u>-</u>
	305.902	852	12.572	10.610	125	281.743
	100,0%	0,3%	4,0%	3,5%	0,1%	92,1%

FUENTE: Presupuesto General de Recursos y Gastos elevados para
consideración del Congreso Nacional

1/ Tasa de cambio .8US\$/Austral

SISTEMA DE RECAUDACION

FUENTE DE RECURSOS	CONTRIBUYENTES	ORGANISMO RECAUDADOR	BASE DE CALCULO	RECIPCION DE FONDOS POR SVQA
EMPLEADORES (RESPONSABLES) AUTONOMOS	EMPRESAS DEL ESTADO EMPRESAS PRIVADAS TRABAJADORES INDEPENDIENTES	D.N.R.P. POR BANCO NACION	SOBRE SUMAS RECAUDADAS POR INRP EN CONCEPTO DE APORTES DEL MES INMEDIATO ANTERIOR, SE APLICA EL COEFICIENTE: 0,263804 O SEA QUE LA RECAUDACION REPRESENTA EL 4,3% DE LOS SALARIOS. LOS AJUSTES SE EFECTUAN DENTRO DE LOS NOVENTA DIAS DE LA CONCLICION DEFINITIVA DE LOS MISMOS.	DEL DIA 15 AL DIA 26 DEL MES SIGUIENTE AL QUE SE EFECTUO EL CALCULO.
PROVINCIALES	ORGANISMOS PROVINCIALES MUNICIPALES COMUNALES	S.V.O.A. POR B.H.N.	5% SOBRE SALARIOS ABONADOS POR LOS ORGANISMOS	INMEDIATO
ORGANISMOS NACIONALES	ORGANISMOS NACIONALES	T.G.N. POR LIBRA MIENTO DE PAGO	5% SOBRE SALARIOS ABONADOS POR LOS ORGANISMOS	MORA PROMEDIO (TGN) DE 3 MESES

(En 1000 u)

/010/SVQR/PNUD

PROYECCION DE RECAUDACIONES ANUALES DEL FONAVI

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
	59000000	59590000	60185900	6078775.9	61395637	62009593
			0.95	0.945	0.94	0.935
	784700.0	792547.0	800472.5	808477.2	816562.0	824727.6
	527774.0	685000.0	697281.1	709986.2	723054.6	736423.9
			1.79	1.82	1.84	1.85
	21.66	29.79	60.73	63.66	66.68	69.76
APORTE	21.66	57.90				
Anual			1.159	1.168	1.178	1.188
Acumulado		1.150				
ACION EN PBI	0.895					
			0.79	0.81	0.83	0.84
ON PARTIC. EN PBI		28.51	29.51	30.57	31.66	32.76
Anual						
Acumulado		28.51				

FONAVI - FUENTES Y USOS CON PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

(EN US\$ miles de 06/85)

	<u>2/85</u>	<u>1/86</u>	<u>2/86</u>	<u>1/87</u>	<u>2/87</u>	<u>1/88</u>	<u>2/88</u>	<u>1/89</u>	<u>2/89</u>	<u>1/90</u>	<u>2/90</u>	<u>1/91</u>	<u>2/91</u>	<u>Tot</u>
1. Fuentes	<u>395,872</u>	<u>505,707</u>	<u>573,861</u>	<u>658,102</u>	<u>714,706</u>	<u>748,363</u>	<u>756,723</u>	<u>745,989</u>	<u>726,331</u>	<u>715,061</u>	<u>707,474</u>	<u>709,323</u>	<u>713,934</u>	<u>4,98</u>
1.1 Saldo Anterior	71,615	157,131	223,158	293,946	349,200	375,126	382,573	362,619	339,209	316,299	303,320	292,317	290,749	7
1.2 Recaudaciones	318,957	342,500	342,500	348,641	348,641	354,993	354,993	361,527	361,527	368,212	368,212	375,016	375,016	4,6
1.3 Recuperos	1,790	1,700	2,825	9,891	11,633	13,767	15,585	18,794	22,951	28,110	33,666	39,694	45,799	24
1.4 Intereses	3,510	4,376	5,378	5,624	5,232	4,477	3,572	3,049	2,644	2,440	2,276	2,296	2,370	4
2. Usos	<u>238,741</u>	<u>282,549</u>	<u>279,915</u>	<u>308,902</u>	<u>339,580</u>	<u>365,790</u>	<u>394,104</u>	<u>406,780</u>	<u>410,032</u>	<u>411,741</u>	<u>415,157</u>	<u>418,574</u>	<u>421,992</u>	<u>4,6</u>
2.1 Comprom.al 30/6/85		221,213	229,230	155,400	97,036	36,657	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Obras a Iniciar	5,427	42,017	112,531	197,803	287,502	349,320	377,293	390,379	393,631	395,271	398,551	401,831	405,112	3,75
2.3 Otros Gastos	12,101	11,302	19,984	14,063	15,421	16,470	16,811	16,401	16,401	16,470	16,606	16,743	16,880	19
3. Disponibilidades														
Finales	<u>157,131</u>	<u>223,158</u>	<u>293,946</u>	<u>349,200</u>	<u>375,126</u>	<u>382,573</u>	<u>362,619</u>	<u>339,209</u>	<u>316,299</u>	<u>303,320</u>	<u>292,317</u>	<u>290,749</u>	<u>291,942</u>	<u>29</u>
Cantidad viviendas que se inician	3,309	19,000	24,000	28,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,000	31,000	31,000	31,000	34

\$US MILES

	AND:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	=TOTAL=
536	FUENTES											
537	-----											
538												
539	UTILIDAD NETA	-2788	-2842	3989	15461	5631	6907	7874	9190	10538	11976	65937
540	PARTIDAS NO CAJA :											
541	-----											
542	DEPRECIACION	4	10	14	16	15	10	6	4	1	0	80
543	PROVISION Y AMORTIZACION	51	79	109	136	155	155	155	155	155	155	1306
544	PROV. MANTENIMIENTO VALOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	PERDIDAS POR INDEXACION	0	884	0	0	5112	5616	5220	4606	4066	3550	29053
546	MENDS: BENEF. INDEXACION	0	0	1613	7751	0	0	0	0	0	0	9364
547	-----											
548	FONDOS PROVISTO OPERACION	-2733	-1869	2499	7863	10912	12688	13255	13955	14760	15681	87012
549	TOTAL RECUPERACIONES	0	0	1095	5625	11043	15482	19908	21496	23520	25770	123939
550	-----											
551	TOTAL FUENTES INTERNAS	-2733	-1869	3594	13487	21956	28170	33163	35451	38280	41451	210951
552	-----											
553	CAPITAL APORTADO (FONAVI)	10434	31351	40494	32641	20544	0	0	0	0	0	135464
554	CAPITAL APORTADO (PNUD)	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	500
555	PRESTAMO #1-BID	28715	23543	30896	23137	13710	0	0	0	0	0	120000
556	PRESTAMO #2-BID	463	669	553	155	160	0	0	0	0	0	2000
557	PRESTAMO #3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558	OTROS PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559	PRESTAMO TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	-----											
561	TOTAL FUENTES INVERSION	39737	55687	72068	56058	34414	0	0	0	0	0	257964
562	-----											
563	TOTAL FUENTES	37004	53819	75663	69545	56369	28170	33163	35451	38280	41451	468915
564	-----											
565												
566	APLICACIONES											
567	-----											
568	DESEMB. ORIG. (CAPITAL)	14830	50551	63331	48851	29958	0	0	0	0	0	
569	DESEMB. ORIG. (INTERESES)	740	3986	8724	10016	7217	0	0	0	0	0	
570	RECOLOCACION SALDOS CAJA	0	0	0	0	10790	12863	12688	13255	13955	14760	
571	-----											
572	TOTAL DESEMBOLSOS	15570	54537	72055	58866	47965	12863	12688	13255	13955	14760	316515
573	COOP. TECNICA RECIBIDA	729	262	263	192	34	0	0	0	0	0	1480
574	FIV BID	244	244	244	244	244	0	0	0	0	0	1220
575	RECOLOC. RECUPER. D EN D	0	0	0	0	110	672	2855	4876	7323	9982	25821
576	RECOL. RECUP. A+B+C EN D	0	0	1095	5625	10934	6676	8920	8486	8064	7652	57452
577	AMORTIZACION PTMOS. BID	0	0	0	0	0	8133	8133	8133	8133	8133	40667
578	AMORTIZACION OTROS PTMOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	CANCELACION PTMO.TRANSIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	COMPRA ACTIVOS FIJOS	30	20	10	10	10	0	0	0	0	0	80
581	OTRAS APLICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	FONDO MANTENIMIENTO VALOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	-----											
584	TOTAL APLICACIONES	16573	55063	73667	64937	59297	28344	32597	34751	37475	40530	443234
585	-----											
586	AUMENTO(DISM)CAJA ANUAL	20431	-1244	1995	4608	-2927	-174	567	700	804	921	25681
587	CAJA DISPONIBLE	20431	19187	21182	25790	22863	22688	23255	23955	24760	25681	
588	-----											
589	CAJA Y BANCOS	20431	19187	21182	15000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
590	CAJA PARA REINVERSION	0	0	0	10790	12863	12688	13255	13955	14760	15681	
591	-----											

ESTADO RESULTADOS PROGRAMA

\$US MILES

AND:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	=TOTAL=
INGRESOS											
INTERESES GANADOS A	99	626	1245	1543	1574	1457	1251	1047	853	668	10364
INTERESES GANADOS B	78	710	2386	4617	5934	6046	5400	4734	4098	3491	37493
INTERESES GANADOS C	562	2650	6469	10576	12518	12532	11375	10208	9093	8028	84010
INTERESES GANADOS D	0	0	26	238	1408	3456	5305	7326	9357	11414	38530
TOTAL INTERESES GANADOS	740	3986	10126	16974	21434	23491	23331	23315	23401	23601	170398
FIV BANADA	156	545	732	645	590	202	245	266	293	324	3998
BENEFICIOS INDEXACION	0	0	1613	7751	0	0	0	0	0	0	9364
OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	895	4531	12470	25370	22024	23693	23576	23581	23694	23925	183760
GASTOS											
GASTOS FINANCIEROS	2374	4595	6675	8731	10135	10476	9771	9065	8360	7655	77836
GTOS. ADMINIST. PROGRAMA	549	519	519	519	514	500	500	500	500	500	5119
COMISION BCO. HIPOTECARIO	78	273	366	322	295	101	122	133	147	162	1999
PERDIDAS INDEXACION	0	864	0	0	5112	5616	5220	4606	4066	3550	29053
ASIST. TECNICA PRESTADA	640	1040	840	240	240	0	0	0	0	0	3000
DEPRECIACION	4	10	14	16	15	10	6	4	1	0	80
PROVISION PTMOS. DUDOSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARGO MANTENIMIENTO VALOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORT.COOP. TEC. RECIBIDA	38	53	68	80	83	83	83	83	83	83	736
OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	3683	7373	8482	9909	16393	16786	15702	14391	13156	11949	117823
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-2788	-2842	3989	15461	5631	6907	7874	9190	10538	11976	65937

ESTADO SITUACION PROGRAMA											

US\$ MILES											
AND:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ACTIVO											

CAJA Y BANCOS	20431	19187	21182	15000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
CAJA PARA REINVERSION	0	0	0	10790	12663	12688	13255	13955	14760	15681	
FONDO MANTENIMIENTO VALOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CARTERA TOTAL BRUTA	15570	69223	142891	209509	252362	251475	250811	251326	253082	256159	1952407
MENDS: PROVISION ACUMULADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARTERA TOTAL NETA	15570	69223	142891	209509	252362	251475	250811	251326	253082	256159	1952407
ACTIVOS FIJOS NETOS	26	36	33	26	21	11	5	1	0	0	
CARGOS DIFERIDOS	922	1348	1746	2046	2169	2014	1859	1704	1549	1394	
OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVO	36949	89795	165852	237371	277415	276189	275930	276987	279391	283234	
PATRIMONIO Y PASIVO											

PASIVO											

PRESTAMO TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PORCION CORRIENTE L/PLZO.	0	0	0	0	8133	8133	8133	8133	8133	8133	
DEUDA LARGO PLAZO	29178	53389	84839	108130	113867	105733	97600	89467	81333	73200	
TOTAL PASIVO	29178	53389	84839	108130	122000	113867	105733	97600	89467	81333	
PATRIMONIO											

CAPITAL PROPIO	10559	42035	82654	115420	135964	135964	135964	135964	135964	135964	
RESERVA MANT. VALOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UTILIDAD RETENIDA	-2788	-5630	-1641	13820	19451	26358	34232	43423	53960	65937	
TOTAL PATRIMONIO	7771	36405	81013	129240	155415	162322	170196	179387	189925	201901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36949	89795	165852	237371	277415	276189	275930	276987	279391	283234	

RESULTADOS DEL ANALISIS SOCIOECONOMICO
DE LOS PROYECTOS DE LA MUESTRA

A. AGUA POTABLE

El análisis de la muestra para este sector se efectuó en proyectos ubicados en las ciudades de Cipolletti, Corrientes, Tandil y Neuquén. La metodología de evaluación socio-económica se basó en la determinación de curvas de demanda para la población beneficiada, calculando los beneficios del proyecto a partir de la disposición a pagar del usuario en función directa de su consumo. Se utilizó el modelo de Simulación de Obras Públicas (SIMOP) para desarrollar la metodología de análisis socio-económico, con alimentación de datos provista a partir de fuentes directas (levantamiento de encuestas para determinar el nivel de ingresos, consumo, disposición a pagar, calculando posteriormente las curvas de demanda, y su elasticidad-precio). En cada uno de los proyectos analizados se estudiaron varias alternativas técnicas en solución a la problemática planteada, habiendo seleccionado la de menor costo actualizado de inversión y costo de operación y mantenimiento, además de satisfacer todos los requerimientos de carácter técnico. A continuación se presenta una síntesis de los proyectos analizados y de los resultados obtenidos:

- Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro: El abastecimiento actual de agua potable en la ciudad se encuentra constituido por la vinculación entre los sistemas de las ciudades de Neuquén, Fernández de Oro, Allen, y el de Cipolletti mismo. Sin embargo, a partir de este año, debido a problemas de suministro, la ciudad de Neuquén no contará con excedentes en beneficio de Cipolletti. Asimismo, el exceso de oferta que se verificaba en Allen, por consideraciones de carácter técnico solo pueden transferirse parcialmente a Cipolletti (debido al tamaño de los acueductos). La situación anterior originaría que de no existir el proyecto, para 1988 solo se alcanzarían a proveer 50 lt/hab/día, siendo la demanda actual aproximadamente cuatro veces esta cifra. El proyecto pretende cubrir la demanda actual de la ciudad con 51,000 habitantes, y su expansión futura proyectada en 94,000 habitantes (tasa de crecimiento de 3.5% anual). Por otra parte, el proyecto también resolvería los problemas de calidad de agua y de presión, los cuales ahora existen en Cipolletti. Después de analizar cuatro alternativas técnicas en la solución a la provisión y abastecimiento de agua, y utilizando la metodología de evaluación socio-económica antes mencionada, se obtuvo una tasa interna de retorno (TIR) de 26.4%, con un valor presente neto (VPN) de US\$15.5 millones, utilizando un factor de descuento del 12%.

La población beneficiada en el proyecto se compone en su gran mayoría por beneficiarios de bajos ingresos de acuerdo con actualizaciones realizadas a diciembre de 1986 (3442 australes/familia/año). A partir de los flujos de beneficios netos obtenidos con el proyecto, se estimó la proporción de beneficios captados por el sector de bajos ingresos en 54%.

- Ciudad de Corrientes. Provincia de Corrientes: El abastecimiento de agua potable en la ciudad de Corrientes se considera sumamente deficiente, teniendo que 20% de la población no cuenta con este servicio, en 30% de los habitantes el servicio es precario, y en el resto de la población, el abastecimiento de agua es regular o bueno. Esta situación obedece a que la red primitiva de agua y sus ampliaciones, ya no son suficientes para satisfacer las necesidades de la creciente población de la ciudad. En resumen, el proyecto pretende proveer de agua potable a 41,000 habitantes que carecen de ella, mejorar las condiciones de 62,000 habitantes con servicio deficiente, y atender la demanda del crecimiento poblacional hasta el año 2019. Para decidir sobre la opción técnica del proyecto se analizaron dos alternativas posibles en la fuente de aprovisionamiento, dos en las obras de toma, dos en el establecimiento de potabilización, y tres en la opción del acueducto mayor, eligiendo la que a partir de su factibilidad técnica, representaba los mejores indicadores económicos (menor valor presente de las inversiones y de los costos de operación y mantenimiento). La tasa interna de retorno del proyecto se calculó en 17.3%, con un valor presente neto de US\$16.6 millones (tasa de descuento de 12%). La población beneficiada por el proyecto es la menos favorecida en la ciudad, teniendo que 87% de la población percibe ingresos menores a US\$6,000/año, y solo el 13% restante supera esta cifra. La proporción de beneficios captados por el sector de bajos ingresos se estimó en 72%.
- Ciudad Tandil, Provincia de Buenos Aires: El proyecto tiene por objetivo proveer del servicio de agua corriente a 42,000 habitantes (49% del total) de la ciudad de Tandil; mejorar la calidad del servicio prestado a 6,000 habitantes que tienen problemas de suministro durante los meses de verano; y, prevér el suministro para la población futura de la ciudad hasta el año 2018 (tasa de crecimiento anual de 1.8%). El proyecto es la segunda etapa del Plan Director de Obras Sanitarias de la ciudad, cuyo análisis de alternativas fue estudiado en 1983 (momento de definición del Plan Director). De lo anterior, se evidencia que la alternativa seleccionada en esta 2a. etapa está condicionada por lo realizado en la 1a. etapa, para aprovechar así la infraestructura construida previamente. Concretamente, las alternativas estudiadas se refirieron solo a la oportunidad de la ejecución de las obras. La tasa interna de retorno se calculó en 20.7%, con un valor presente neto de US\$8,3 millones. La mayoría de los beneficios del proyecto son destinados al grupo menos favorecido de la ciudad, habiéndose encontrado la proporción de beneficios captados por el sector de bajos ingresos en 87%.

- Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén: El servicio de agua potable a la población del área oeste de la ciudad es deficitario, tanto en cantidad, como en calidad. Unicamente se provee de 100 lt por día a cada habitante con aguas teniendo altas concentraciones de hierro y manganeso en valores no tolerables para el uso humano. El proyecto tiene como objetivo mejorar la cantidad y calidad del agua suministrada a la población actualmente conectada, y permitir el ingreso de nuevos usuarios al sistema hasta llegar a los 113,500 habitantes conectados en el año de 1998, representando el 82% de la población futura del área. Se realizó un estudio técnico-económico sobre dos alternativas básicas de diseño, seleccionando la ampliación y captación al sistema existente, en adición a una planta de tratamiento potabilizador como la opción con mejores indicadores económicos. La tasa interna de retorno del proyecto se estimó en 31.5%, con U.S.\$11.5 millones de valor presente neto. La proporción de beneficios netos captados por el sector de bajos ingresos se calculó en 61%.

A continuación se presenta un resumen de los principales indicadores obtenidos en el análisis de los proyectos en el sector de agua potable:

	CIPOLLETTI	CORRIENTES	TANDIL	NEUQUEN
BENEFICIARIOS				
DIRECTOS 1/	94,000	456,500	111,679	113,500
INVERSIONES				
(US\$ millones)	8.13	10.85	5.01	3.81
INVERSION PER CAPITA				
(US\$)	86.5	23.77	44.8	33.57
TIRE (%)				
	26	17	21	32
VPN 2/				
(US\$ millones)	15.5	16.6	8.3	11.5
INGRESO MEDIO				
(US\$/fam/mes)	401.4	233.7	206.8	268.2
BENEFICIOS				
SECTOR BAJOS				
INGRESOS (%)	54	72	87	61

1/ Para el año de estabilización

2/ Descontado al 12%.

B. DESAGUES CLOCALES

Los proyectos analizados en este sector se ubican en las ciudades de Caucete, Rawson y Neuquén. La metodología de evaluación socio-económica consistió en calcular un TIRE mínimo en base a una estimación de costos evitados derivados de la comparación entre la situación "sin proyecto" (soluciones alternativas) y la "con proyecto". En el primer caso, se estableció, a partir de encuestas, la proporción de habitantes que actualmente hacen uso de letrinas, de pozos negros, o de pozos negros con cámara séptica; de la misma forma se obtuvieron sus respectivos costos de reposición y de operación y mantenimiento. Los beneficios directos se calcularon a partir de la diferencia entre las inversiones y otros costos generados por el proyecto, y la de las soluciones alternativas. La metodología utilizada rinde TIRES mínimas, ya que la estimación de los beneficios no incluye el total de la disposición a pagar por el servicio ni las posibles externalidades asociadas, sino solamente lo que corresponde a costos evitados. Cabe destacarse que la solución técnica adoptada en el proyecto corresponde a aquella obtenida a partir de un análisis de alternativas técnico-económicas, decidiendo en favor de la de menor costo. A continuación se presenta una síntesis de cada uno de los proyectos analizados en este sector:

- Ciudad Caucete, Provincia de San Juan: Este proyecto pretende beneficiar a 4500 viviendas de la ciudad, de las cuales 70% cuentan con pozo y cámara séptica, 25% sólo pozo negro, y el 5% restante letrinas. Por otra parte, también se beneficiarían 15 bodegas vini-vitícolas ubicadas en la región del proyecto. Los objetivos específicos del proyecto responden a la necesidad de proveer de servicios cloacales a la población actual (17,500 hab.) y futura (25,500 hab.) de la ciudad, permitiendo la habilitación de los barrios FONAVI actualmente en construcción; asimismo, evitará la contaminación de las napas freáticas, canales de drenaje y el río San Juan, sometiendo a tratamiento previo los líquidos que conducirán el sistema propuesto, eliminando la actual fuente de contaminación proveniente de los pozos absorbentes y desagües superficiales. Se estudiaron diversas alternativas en los materiales de construcción, en la traza de colectores (2), y en la planta de tratamiento depurador (3), seleccionando la que, además de ser la opción técnica, proporcionaba la alternativa de menor costo. Al emplear la metodología de análisis descrita anteriormente, se obtuvo un TIRE mínimo de 11.5% , lo cual implica un TIRE real superior.

Se hizo un análisis de sensibilidad del TIRE mínimo con los siguientes resultados:

	<u>Costo Inversión</u>	<u>Costo Operación y Mantenimiento</u>	<u>Beneficios por Costos Evitados</u>
+ 15%	10.0	11.2	13.5
- 15%	13.3	11.8	9.3

Los resultados indicarían poco riesgo de equivocarse al estimar que el TIRE real del proyecto sobrepasa el 12%, razón por la cual le asignamos esta cifra como tasa básica de retorno económico.

La proporción de beneficios captada por el sector de bajos ingresos se estimó en 94%.

- Ciudad Rawson, Provincia de Chubut: Este proyecto permitirá servir al 78% de la población total de Rawson, beneficiando directamente a 11,200 personas en el año 2000, sumándosele a las 2529 ya atendidas en forma precaria. Los beneficios del proyecto provienen de sustituir los pozos, cámaras sépticas y letrinas ahora existentes en cerca de 3400 viviendas, por el sistema general de desagües cloacales, comparando el valor incremental entre sus costos de inversión y de operación y mantenimiento. La tasa interna de retorno se calculó en 14%, con un valor presente neto de US\$194.7 miles. El 90% de los beneficios será captado por el sector de bajos ingresos.
- Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén: Los objetivos generales del proyecto son proveer de servicios cloacales a la población que en la actualidad no lo tiene, y asegurárselo a la población futura de la ciudad; en otro sentido, garantizar el tratamiento depurador en beneficio de los ríos Limay y Neuquén. Al iniciarse la operación del proyecto (1989) se prevee que la población beneficiada por los nuevos servicios sea de 15,000 personas, mientras que la planta de tratamiento servirá a 48,000 habitantes. Para el año 2018, el sistema atendería a 255,000 nuevos usuarios (beneficiarios directos), y a la totalidad de la población de Neuquén a través de la planta de tratamiento. Se estudiaron cuatro alternativas técnico-económicas para determinar el diseño de la cloaca máxima. De acuerdo con la metodología de análisis antes mencionada se calculó la tasa de retorno del proyecto en 21% y un valor presente neto de US\$16.6 millones.

El impacto distributivo del proyecto demuestra el alto contenido social de este proyecto, encontrando que la proporción de beneficios captados por el sector de bajos ingresos corresponde al 78%.

A continuación se resumen los principales indicadores de los proyectos analizados en este sector:

	CAUCETE	RAWSON	NEUQUEN
BENEFICIARIOS DIRECTOS <u>1/</u>	25,600	15,259	255,000
INVERSIONES (US\$ millones)	4.1	1.43	10.1
INVERSION PER CAPITA (US\$)	158.4	93.4	39.53
TIRE (%) <u>2/</u>	12	14	21
VPN <u>3/</u> (US\$ millones)	-	0.195	16.6
INGRESO MEDIO (US\$/fam/mes)	120.0	370.0	281.6
BENEFICIOS SECTOR BAJOS INGRESOS (%)	94	90	78

1/ Para el año de estabilización.

2/ En el caso de Rawson y Neuquen, se refieren a tasas mínimas, mientras que para Caucete la tasa ha sido ajustada de una estimación de TIRE mínimo de 11.5%.

3/ Descontado al 12%.

C. Equipamiento ComunitarioProyecto Provincia de Santa Cruz(1) Descripción

El proyecto de equipamiento comunitario en la Provincia de Santa Cruz abarca las localidades de Río Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado. Su composición por tipo de obra, localización y costo unitario se muestra en el cuadro siguiente:

Costo Unit. (miles US\$)	Jardín de Infantes	Escuela Secundaria	Unidad Sanitaria	Centro Comunitario y Guardería
	359	1.188	146	381
Ciudad y Número				
RIO GALLEGOS	2	2	3	2
CALETA OLIVIA	-	-	1	2
PICO TRUNCADO	-	-	-	1
T O T A L	2	2	4	5

Los componentes de educación secundaria y jardín de infantes pretenden ampliar la oferta en zonas deficientemente servidas, en horarios adecuados y completos y así resolver las situaciones de hacinamiento y de horarios vespertinos, inadecuados para las edades de los alumnos concurrentes y las rigurosas condiciones climáticas del área.

Los centros comunitarios con guardería pretenden ampliar la escasa oferta existente en Río Gallegos y dar cobertura parcial a la demanda existente en Caleta Olivia y Pico Truncado donde, en la actualidad, no existe este tipo de servicio por parte de la provincia, apoyando tanto el mejoramiento nutricional y la creación de hábitos psico-motrices a niños de alto riesgo y/o cuyas madres trabajan, con el desarrollo e integración en las comunidades donde se localizan.

Los componentes de unidades sanitarias mejorarán las condiciones de atención sanitaria de la población de los barrios donde serán construidas estas instalaciones, dadas las barreras actuales de accesibilidad.

(ii) Demanda y Dimensionamiento

Para cada componente del proyecto se verificó la existencia de una demanda insatisfecha en el área de influencia relevante para el servicio a brindarse. En el sector educativo se cuantificaron las necesidades de plazas a 1988 y se comparó con las plazas disponibles en las estructuras ya existentes sumadas con aquellas en ejecución. Para los servicios a ofrecerse en los Centros Comunitarios y Guarderías, se verificó, que en los barrios propuestos no existiese un centro similar. También se constató mediante encuestas el interés por parte de la comunidad en beneficiarse de estos servicios en una proporción que justifique el tamaño y composición del Centro. Con respecto a las Unidades Sanitarias se constató que en los barrios de su localización existe una población de tamaño suficiente para garantizar un uso razonablemente intensivo del centro y que esta población, en la actualidad, no cuenta con adecuada atención sanitaria (Véase Cuadros explicativos C.1.1 a C.1.4).

(iii) Costo-Eficiencia

Se constató, mediante el cálculo del costo unitario de producción de los servicios a brindarse por el proyecto y la comparación con los costos de servicios similares existentes en la zona, que los costos de producción del proyecto son razonables, siendo éstos, en la mayoría de los casos, inferiores a los de comparación. Solamente en el caso de las Unidades Sanitarias se encontró que, para algunos de los servicios, el costo por atención era aparentemente más bajo en instituciones de cobertura social. Sin embargo, la diferencia no es de gran escala y se determinó que el costo comparativo contiene un elemento de subsidio que el cálculo del costo del proyecto no contiene (Véase cuadros explicativos C.1.5 a C.1.7).

(iv) Impacto Distributivo

Debido a las condiciones de vida existentes en Santa Cruz, tanto climáticas como de carencia de producción de bienes de consumo en el área, el costo de vida resulta significativamente más alto en esta ciudad que en la mayoría de otras localidades en Argentina. Para estimar la proporción de beneficiarios de bajos ingresos se ajusta la línea de A 675 anual per cápita hacia arriba en un 25% (que a su vez corresponde al 50% de la bonificación mínima ofrecida por empresas y administración pública en general, por residir en Río Gallegos). Este porcentaje es una estimación conservadora de la diferencia entre costo de vida en Santa Cruz y costo de promedio en Argentina. En base a datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares y se estimó que aproximadamente el 45% de los beneficiarios son de bajos ingresos.

Cuadro C.1.1
Santa Cruz
Oferta y Demanda
Educación Ciudad Río Gallegos

NIVEL	OFERTA 1988		DEMANDA 1988		DEFICIT 1988		PROYECTO	
	Plazas	Aulas	Plazas	Aulas	Plazas	Aulas	Plazas	Aulas
Jardin de Infantes	2,050	41	2,554	51	(504)	(10)	500	10
Escuela Secundaria	1,130	18	2,690	40	(1,560)	(22)	1,400	20

Cuadro C.1.2
Santa Cruz

Oferta y Demanda : Guarderías
Población de 45 días a 5 años

PROVINCIAS	OFERTA 1988	DEMANDA 1988	DEFICIT PROYECTO	COBERTURA PROYECTO
RIO GALLEGOS				
Barrio San Martin	326	1,427	(1,101)	120
Barrio Belgrano	132	958	(826)	120
CALETA OLIVA				
Barrio Miramar	0	1,365	(1,365)	120
	0	776	(776)	120
PICO TRUNCADO				
Barrio San Martin	61	847	(786)	120

Cuadro C.1.3
Santa Cruz
Oferta y Demanda
Centros Comunitarios

PROVINCIAS	Numero de Personas Deseosas de Tomar Cursos de Programas Especiales de Educacion1/ Poblacion de 18 a 41				Poblacion de 12 a 17			
	OFERTA 2/ 1988	DEMANDA 3/ 1988	DEFICIT 1988	COBERTURA PROYECTO	OFERTA2/ 1988	DEMANDA3/ 1988	DEFICIT 1988	COBERTURA PROYECTO
RIO GALLEGOS								
Barrio San Martin	0	768	(768)	20	0	291	(291)	40
Barrio Belgrano	0	587	(587)	20	0	220	(220)	40
CALETA OLIVIA								
Barrio Miramar	0	818	(818)	20	0	406	(406)	40
	0	405	(405)	20	0	233	(233)	40
PICO TRUNCADO								
Barrio San Martin	0	442	(442)	20	0	254	(254)	40

1/Los reesultados se basa en una encuesta realizada en Marzo de 1986.

2/La oferta se refiere a la infraestructura existente, sin considerar el proyecto.

3/La demanda se refiere a la demanda potencial maxima, cubierta y no no cubierta. Esta ultima ha sido estimado de acuerdo con el interes manifestado en la encuesta.

Cuadro C.1.4
Santa Cruz
Oferta y Demanda
Centros Comunitarios

Numero de Personas Deseosas de Participar en Otras Actividades 1/

PROVINCIAS	APOYO ESCOLAR: Pobl. de 6 a 11 anos				Cursos Diversos: Pobl. de 6 a 59 anos			
	OFERTA 2/ 1988	DEMANDA 3/ 1988	DEFICIT 1988	COBERTURA PROYECTO	OFERTA 2/ 1988	DEMANDA3/ 1988	DEFICIT 1988	COBERTURA PROYECTO
RIO GALLEGOS								
Barrio San Martin	0	872	(872)	150	0	2,050	(2,050)	575
Barrio Belgrano	82	460	(378)	150	67	2,006	(1,939)	575
CALETA OLIVIA								
Barrio Miramar	0	886	(886)	150	0	5,029	(5,029)	575
	0	549	(549)	150	2,441	2,441	0	575
PICO TRUNCADO								
Barrio San Martin	0	600	(600)	150	20	2,910	(2,890)	575

1/Los reesultados se basa en una encuesta realizada en Marzo de 1986.

2/La oferta se refiere a la infraestructura existente, sin considerar el proyecto.

3/La demanda se refiere a la demanda potencial maxima, cubierta y no no cubierta. Esta ultima ha sido estimado de acuerdo con el interes manifestado en la encuesta.

Cuadro C.1.5
Santa Cruz
Educación
Cuadro Comparativo de Costo Eficiencia
US\$

RUBRO DE COSTO	JARDIN DE INFANTES		ESCUELA SECUNDARIA	
	EXISTENTE	PROYECTADA	EXISTENTE	PROYECTADA
IMU. AMUALIZADO				
Terreno	1,389	1,989	4,391	3,679
Edificio	23,784	35,989	78,447	106,420
Muebles y Equip	1,788	4,031	20,170	31,256
Mant. del Edif.	2,184	2,974	7,204	8,795
Mant. Muebles y	1,095	823	4,116	6,379
COSTOS ANUALES				
Rec. Humanos	128,532	103,000	276,056	276,056
Materiales	4,983	4,983	6,645	6,645
TOTAL	163,755	153,790	397,029	439,229
Plazas 1/	252	250	600	700
Costo por plaza	650	615	662	627

1/ Dos turnos.

Cuadro C.1.6
Santa Cruz
Unidad Sanitaria
Costo Por Atencion Medica
US\$

SERVICIO	COSTO POR ATENCION POR BENEFICIARIO PROYECTO	COSTO ALTERNATIVO POR ATENCION SECTOR PRIVADO	COSTO ALTERNATIVO POR ATENCION COBERTURA SOCIAL 1/
Pediatría	1.99	13.29	2.89
Clinica Medica	2.52	13.29	2.89
Gineco-Obstreti	3.27	13.29	2.89
Odontologia	4.06	9.97	5.47
Enfermeria	1.83 2/	1.14	0.70

1/ Se considera que esta cifra subestima costos reales.

2/ Incluye turno nocturno.

Cuadro C.1.7
Santa Cruz
Centro Comunitario
Costos Unitarios Anuales
Por Servicio
US\$

ACTIVIDAD	CAPITAL	OPERACION	TOTAL	NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO ANUAL POR BENEFICIARIO	COSTO COMPARATIVO
Guarderia	27,346	127,350	154,696	100	1547	1700 1/
Educacion	8,304	50,740	59,044	210	281	2/
Capacitacion	9,813	32,096	41,909	575	73	2/
6. Autogenerados	2,732	3,911	6,643	170	39	47 - 65 3/
A. Social	1,925	34,756	36,681	1,600	23	4/
Total	50,121	248,852	298,973			

1/Costo de guarderia privada ajustada para incluir servicios adicionales prestados por guarderia propuesta.

2/Raonable en comparacion con instituciones educativas.

3/Rango de Alquiler • gastos de funcionamiento en locales alternativos.

Proyecto Cipolletti(i) Descripción

El proyecto tiene como objetivo incrementar y readecuar espacialmente la oferta de equipamiento comunitario para la población actual de Cipolletti (48,222) habs.) y la que se localizara hasta el año 1990 en el área noreste de expansión de esta ciudad. El siguiente cuadro muestra la localización específica de cada una de las obras que componen el proyecto, así como su costo.

	Jardín de Infantes	Escuela Primaria	Escuela Secundaria	Unidad Sanitaria	Guardería
Número	2	2	1	1	2
Barrio y Costo (en miles US\$)					
Anai Mapu	203	833	-	94	190
1224 Viv.	194	671			182
Don Bosco	-	-	668		

(ii) Demanda y Dimensionamiento

Para cada componente del proyecto, se verificó que dentro del área de influencia relevante existiese una demanda insatisfecha (y/o su proyección, dado un crecimiento previsto) para el servicio a brindarse. En el sector educativo se cuantificaron las necesidades de plazas a 1990 y se comparó con las plazas disponibles en las estructuras ya existentes sumadas con aquellas en ejecución. Para las Guarderías, se verificó que en los barrios propuestos no existiese un centro similar y que su dimensión garantice un uso relativamente intensivo. Para el dimensionamiento de los diferentes servicios a ser ofrecidos en la Unidad Sanitaria se ha tenido en cuenta la proyección de la población en el área de influencia (10,000 habs.), el radio de influencia, los niveles de cobertura social, la estimación de los habitantes con cobertura que se incorporarán al sistema y las metas a alcanzar en cada especialidad (Véase cuadros explicativos C.2.1 y C.2.2.).

(iii) Costo-Eficiencia

Se calculó el costo unitario de producción de los servicios a brindarse por el proyecto y se comparó con los costos de servicios similares existentes en la zona (Véase Cuadros explicativos C.2.3 a C.2.6). En el caso de los Jardines de Infantes del proyecto, éstos resultan tener un

costo anual por alumno muy similar a uno ya existente. La escuela secundaria propuesta tiene un costo por alumno 11% superior a una existente, que se explica mayormente debido al rubro de equipamiento y mobiliario. Se considera que la escuela existente se encuentra sub equipada según las normas del sistema escolar. El costo por beneficiario de la Guardería propuesta es ligeramente inferior al costo de una existente. En el caso de la unidad sanitaria, solamente para el servicio de gineco-obstetricia el costo era aparentemente menos costoso en un en instituciones de cobertura social. Con respecto a las escuelas primarias, ambas escuelas propuestas resultan con un costo por alumno superior a la existente que se usó de comparación. En un caso esta diferencia resulta porque las escuelas del proyecto están diseñadas para cumplir con un curriculum más amplio de actividades que el edificio utilizado como referencia, incurriendo así en gastos adicionales de espacio y equipamiento. En la segunda escuela (barrio Anai Mapu) la diferencia se explica parcialmente por el curriculum mas amplio. El costo excesivo de esta escuela se debe a una propuesta poco económica de adecuar y ampliar una construcción existente. Por este motivo se considera que este componente no cumple con la condición de ser costo-eficiente.

(iv) Impacto Distributivo

De acuerdo a una muestra de solicitudes para viviendas FONAVI del área influencia, aproximadamente el 90% de beneficiarios FONAVI clasifican como de bajos ingresos. A su vez, se estima que los beneficiarios FONAVI constituyen el 80% del universo de beneficiarios, y que el resto de beneficiarios son de menor ingreso aun. Por estos motivos, se estima el coeficiente de impacto distributivo en 95%.

Cuadro C.2.1

Oferta y Demanda en la Ciudad de Cipolletti 1/

	JARDIN DE INFANTES 3/	NIVEL PRIMARIO 4/	NIVEL SECUNDARIO 5/
Oferta 2/			
Aulas	30	207	61
Plazas	1,500	10,350	3,630
Demanda			
Aulas	36	235	75
Plazas	1,800	11,750	4,517
Balance			
Aulas	(6)	(28)	(14)
Plazas	(300)	(1,400)	(887)
Proyecto			
Aulas	6	20	10
Plazas	300	100	600
No. Est.	2	2	1
M2/Alumno	5.63	7.04	4.98
		5.13 6/	

1/Los datos de oferta y demanda estan a nivel agregado de la ciudad.

2/Se incluyen los establecimientos existentes en 1985 y los que se encuentran bajo construccion, tanto oficiales como privados.

3/Se refiere a la capacidad de alumnos en doble turno diurno de la poblacion en edad escolar de 5 años.

4/Se refiere a la capacidad de alumnos en doble turno diurno de la poblacion escolar comprendida entre los 6 y los 12 años, que se espera matricular.

5/Se refiere a la capacidad de alumnos en doble turno diurno y uno nocturno de la poblacion escolar comprendida entre los 13 a los 18 años.

6/Este dato es solo para la escuela primaria del barrio 1224 Viviendas, mientras que el anterior es para la escuela del barrio Anai Mapu.

C.2.2

Oferta y demanda de Plazas en las
Guarderías de la Ciudad de Cipolletti

	ACTUAL 1/ 1985	FUTURA 1990	SUPERFICIE
Oferta	300	300	
Demanda	1,680	2,104	
Saldo	(1,380)	(1,804)	
Proyecto		196	422.20

1/La oferta actual se refiere a las tres existentes mas la que se encuentra bajo construccion.

Cuadro C.2.3
Cipolletti
Estructura de Costo Anual en Educacion
US\$

RUBRO	JARDIN DE NIÑOS		ESCUELA SECUNDARIA	
	JARDIN No 1	PROYECTO	ESC. No 15	PROYECTO
Terreno	3,465	951	2,422	3,670
Edificio	35,235	22,875	77,940	68,273
Muebles y Eq.	8,693	6,929	6,448	30,955
Mant. Ed. y Eq.	4,686	3,739	7,757	13,618
Rec. Humanos	62,332	50,787	208,858	165,829
Materiales	960	4,400	5,624	2,500
Total	115,371	89,681	309,049	284,845
Plazas	200	150	720	600
Costo Unitario	576.86	597.87	429.23	474.74

Cuadro C.2.4
Cipolletti
Estructura de Costos Unitarios En Educacion Primaria
US\$

RUBRO	ESC. No 131		PROYECTO BARRIO 1224		PROYECTO ANAI MAPU			
	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Total	Costo
	Equivalente	Anual	Equivalente	Anual	Equivalente	Equivalente		Anual
	Anual	Plaza 1/	Anual	Plaza 2/	Anual Refac.	Anual Ampl.		Plaza 2/
Terreno	2,279	4.56	3,126	4.47	1,533	0	1,533	2.19
Edificio	39,886	79.77	68,691	98.13	12,028	72,165	84,193	120.28
Infraestructura	0	0.00	1,924	2.75	1,309	4,003	5,312	7.59
Mob. y Equipo	6,523	13.05	28,627	40.90	2,617	32,247	34,864	49.81
Mantenimiento	6,340	12.68	13,295	18.99	3,936	12,031	15,967	22.81
Rec. Humanos	83,312	166.62	109,795	156.85	62,391	55,827	118,218	168.88
Materiales	16,500	33.00	21,303	30.43	8,400	14,144	22,544	32.21
Total	154,840	309.68	246,761	352.52	92,214	190,417	282,631	403.76

1/ 500 plazas.

2/ 700 plazas.

Cuadro C.2.5
Cipolletti
Costos Por Atencion Medica de Cada
Servicio
US\$

SERVICIO	COSTO UNIT. DEL PROYECTO	COSTO COMPAR. PRIVADO	COSTO COMPARATIVO COBERTURA SOC.
Pediatría	1.1	6.67	2.71
Clinica Medica	2.82	6.67	2.71
Gineco-Obstr.	6.27	6.67	2.71
Odontologia	2.67	10.00	4.06
Enfermeria	0.48		0.6

Cuadro C.2.6
Cipolletti
Estructura del Costo Anual En Guarderias
US\$

RUBRO	REFERENCIA	PROYECTO
Terreno	558	951
Edificio	16,626	22,356
Muebles y Eq.	3,087	5,502
Mant. Ed. y Eq.	2,004	3,351
Rec. Humanos	44,655	47,721
Materiales	34,000	47,000
Total	100,930	126,881
Plazas	125	166
Costo Plaza	807.44	764.34

D. Defensa Contra Inundaciones y Erosiones

Proyecto Canalización Río Ancho - Salta

(i) Descripción

El objetivo del proyecto consiste en proteger un area habitado así como preparar tierra con la infraestructura apta para el asentamiento humano. El área de influencia del proyecto cuenta con 2000 viviendas, y se encuentra sometida periódicamente a las inundaciones provocadas por las crecidas del río Ancho cerca de la ciudad de Salta. La solución propuesta consiste en la canalización del río por una longitud de 6.7 km.

(ii) Rentabilidad

La realización del proyecto liberará recursos provinciales, que, en la actualidad, deben destinarse a la limpieza del cauce. Estos se estiman en el equivalente de US\$ 239 mil al año, mientras que el costo de inversión del proyecto es de US\$1,422,374 y el mismo tendrá un costo de mantenimiento de US\$15 mil anuales.

No tomando en consideración los beneficios provinientes del evitar daños, se calculó una tasa mínima de retorno económico en base a costos de inversión y mantenimiento del canal y el ahorro que se obtendrá de liberar los fondos que la provincia actualmente utiliza en la limpieza del río. La tasa mínima resultó del 15%.

(iii) Impacto Distributivo

Según datos de la Encuesta de Permanente de Hogares, el 100% de los beneficiarios en el área de influencia son de bajo ingresos por lo cual se estima un coeficiente de impacto distributivo del 100%.

E. Mejoramiento Vial

Proyecto Salta

(i) Descripción

El proyecto tiene por objetivo resolver el problema de agotamiento de la capacidad de la Avenida Combatientes de las Malvinas, eje urbanístico de los conjuntos habitacionales existentes y a construirse en la zona sur de la ciudad de Salta. El proyecto contempla la ampliación a 4 carriles de la avenida, mediante ensanche de la calzada existente. La arteria a ensanchar conecta en su origen con una amplia avenida de penetración hacia el centro de la ciudad. La longitud efectiva del proyecto es de 4.17 km. y la zona de influencia de la vía cuenta actualmente con 5,291 viviendas, con áreas importantes aún por urbanizarse.

(ii) Demanda y Dimensionamiento

De acuerdo a los resultados de censos vehiculares y el factor de estacionalidad correspondiente se estableció el tránsito medio diario y

éste se proyectó a una tasa de 3,9%, factor de crecimiento poblacional en la ciudad de Salta, dando como resultado un tránsito medio diario de 34.000 vehículos, cifra que considera un crecimiento más acelerado del área, debido a los conjuntos habitacionales planificados en la zona.

(iii) Análisis de Alternativas

En cuanto a superficies se analizaron dos alternativas factibles:

1. pavimento flexible con concreto asfáltico (con segunda etapa a los 15 años); y
2. pavimento rígido de hormigón simple.

Los resultados de esta comparación fueron los siguientes:

Valor Presente de Costos (en miles de US\$)

	Construcción		Mant.	Total
	la. etapa	2a. etapa		
Pavimento Flexible	607	58	80	745
Pavimento Rígido	673	--	54	727

De acuerdo a los resultados obtenidos, se seleccionó la alternativa de pavimento rígido.

(iv) Análisis Costo-Beneficio

El análisis beneficio-costos fue realizado sobre la base de ahorro de costos de operación vehicular, así como por el ahorro de tiempo de pasajeros. Para el cálculo de costos de operación vehicular se diferencié tanto la estructura de tráfico (en vehículos livianos, omnibuses, y camiones), como la misma avenida que para propósitos de análisis se dividió en 10 tramos. Se proyectó el tráfico actual en cada uno de los 10 tramos a una tasa del 3.9%, calculándose velocidad promedio en cada tramo, con y sin el proyecto. El ahorro de operación vehicular se derivó de aplicar las siguientes curvas de costo para las situaciones con y sin el proyecto y obtener la diferencia:

Costo de Operación (en US\$)

$$\begin{aligned}
 \text{Vehículos Livianos} &= .0076 V^2 - 1.53 V + 136 \\
 \text{Omnibus} &= .0975 V^2 - 20.4 V + 1517 \\
 \text{Camión} &= .0350 V^2 - 4.81 V + 296
 \end{aligned}$$

en donde V = velocidad promedio

Con respecto a la valorización del tiempo, los ocupantes de vehículos livianos fueron tomados el 25% del ingreso medio del área. Los usuarios de omnibus, cuyos viajes eran motivados por el trabajo, recibieron una evaluación de su tiempo igual al de los vehículos

livianos, al resto su valor fue calculado en el 10% de éstos. Para este análisis se utilizó un modelo desarrollado por la SVOA. Los supuestos del análisis se encontraron razonables y la tasa de retorno resultó 21%, habiendo ajustado los cálculos originales para reflejar las nuevas proyecciones del costo de combustibles y simulando una tasa conservadora de crecimiento del tráfico.

(v) Impacto Distributivo

En base a información prominente de la Encuesta Permanente de Hogares se determinó que, en el área influencia directa, aproximadamente el 95% de los beneficiarios son de bajos ingresos y se estima que el coeficiente de impacto distributivo asciende a 80%.

F. Electricidad

Proyecto Ciudad de Posadas

(i) Descripción

El proyecto consiste en reemplazar una línea obsoleta de baja capacidad de conducción (13 KV) por una nueva de 33KV, lo cual significará una distribución mayor de electricidad, evitando cortes y satisfaciendo la demanda en el área de influencia del proyecto que en la actualidad cuenta con 2369 usuarios y tiene 2516 viviendas en construcción. Actualmente el servicio eléctrico se presta con fuertes restricciones de oferta y es de baja calidad dadas las frecuentes caídas de tensión en sus líneas, como consecuencia del grado de obsolescencia y baja capacidad de conducción de la línea existente. Esta situación hace que el mantenimiento del servicio actual sea relativamente caro y que el abastecimiento de energía eléctrica al futuro crecimiento del área se encuentre comprometido. El diseño del proyecto se basó en un ejercicio de comparación de alternativas, escogiéndose la de menor costo económico.

(ii) Demanda y Dimensionamiento

El proyecto permitirá satisfacer la demanda del área de influencia hasta el año 2004, proyectándose ésta con crecimiento moderado. En el año 2004 se llevaría a cabo una inversión adicional que duplicará la oferta de energía al área del proyecto (Véase también Cuadro explicativo F.1.1.).

Año	Usuarios		Demanda Mwh		Oferta Mwh
	Domest.	Comer.	Domest.	Comer.	
1992	5030	560	9600	1700	16200
2004	7184	800	13700	2400	16200

(iii) Costos Económicos de Operación

Para el consumo incremental que habría como consecuencia del proyecto, el costo de operación se determinó para el período hasta 1985, en base al costo marginal actual de generación de EMSA, .07US\$/M3. Para los siguientes años, cuando el sistema de Posadas operará como parte del sistema interconectado de Argentina, se utilizó el costo marginal de largo plazo de generación y transmisión de electricidad, .063 US\$/M3, calculado por el Banco en base a información disponible.

(iv) Beneficios

Los beneficios se midieron de dos maneras alternativas. En la primera se hizo el cálculo de ingresos incrementales vía tarifas. En el segundo caso se postuló una curva de demanda de carácter conservador, Kwhs mes = $300 - 2128 * t$, en donde t es la tarifa por Kwh expresado en US\$. En base a ésta curva se hizo una estimación de excedente del consumidor que se cree al pasar de una situación de restricción de oferta a otra de menor restricción, debido al proyecto.

Año	Consumo Incremental (Mwh)	Ingresos Tarifarios (miles US\$)	Excedente (miles US\$)
1992	9100	638	788
2004	13900	976	1314

(v) Resultados

La estimación de rentabilidad mínima resultó en un TIRE de 1, mientras que la estimación ajustada para incluir el excedente del consumidor resultó en un TIRE del 13%, por lo cual el proyecto se considera rentable (Véase Cuadro explicativo F.1.2).

(vi) Impacto Distributivo

Aproximadamente el 80% de los beneficiarios viven o vivirán en viviendas FONAVI, y el ingreso familiar tope para acceder a este conjunto en la península IPRODHA es de US\$250 por familia. Esta cifra define una situación de ingreso per cápita algo inferior a aquella definida por el nivel de bajos ingresos del Banco, indicando que al menos el 60% del beneficio es absorbido por grupos de bajos ingresos.

Cuadro F.1.1
Análisis de Oferta y Demanda
Proyecto Electricidad Posadas
En MWh

Año	Demanda Área de Proyecto	Demanda Otros Áreas ^{1/}	Demanda Total	Oferta Sin Proyecto	Oferta Con Proyecto			Consumo Sin Proyecto	Consumo Con Proyecto	Consumo Incremental
					Proyecto	Liberada	Total			
					2/					
1987	9,772	3,617	13,389	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	13,389	7,559
1988	10,065	3,617	13,682	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	13,682	7,852
1989	10,367	3,617	13,984	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	13,984	8,154
1990	10,678	3,617	14,295	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	14,295	8,465
1991	10,998	3,617	14,615	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	14,615	8,785
1992	11,328	3,617	14,945	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	14,945	9,115
1993	11,668	3,617	15,285	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	15,285	9,455
1994	12,018	3,617	15,635	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	15,635	9,805
1995	12,379	3,617	15,996	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	15,996	10,166
1996	12,750	3,617	16,367	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	16,367	10,537
1997	13,133	3,617	16,750	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	16,750	10,920
1998	13,527	3,617	17,144	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	17,144	11,314
1999	13,933	3,617	17,550	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	17,550	11,720
2000	14,351	3,617	17,968	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	17,968	12,138
2001	14,781	3,617	18,398	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	18,398	12,568
2002	15,224	3,617	18,841	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	18,841	13,011
2003	15,681	3,617	19,298	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	19,298	13,468
2004	16,152	3,617	19,769	5,830	16,200	3,617	19,817	5,830	19,769	13,939
2005	16,636	3,617	20,253	5,830	32,400	3,617	36,017	5,830	20,253	14,423
2006	17,135	3,617	20,752	5,830	32,400	3,617	36,017	5,830	20,752	14,922
2007	17,649	3,617	21,266	5,830	32,400	3,617	36,017	5,830	21,266	15,436
2008	18,179	3,617	21,796	5,830	32,400	3,617	36,017	5,830	21,796	15,966
2009	18,724	3,617	22,341	5,830	32,400	3,617	36,017	5,830	22,341	16,511
2010	19,286	3,617	22,903	5,830	32,400	3,617	36,017	5,830	22,903	17,073
2011	19,864	3,617	23,481	5,830	32,400	3,617	36,017	5,830	23,481	17,651
2012	20,460	3,617	24,077	5,830	32,400	3,617	36,017	5,830	24,077	18,247
2013	21,074	3,617	24,691	5,830	32,400	3,617	36,017	5,830	24,691	18,861

1/Corresponde a los áreas que se beneficiarán indirectamente por una liberación de electricidad de la línea reemplazada.

2/Corresponde a la electricidad liberada al retirar de servicio la sección final de una línea existente. (Esta sección final es la que es reemplazada por el proyecto.)

Cuadro F.1.2
Análisis Beneficio-Costo
Proyecto Electricidad Posadas
En Miles de US\$ de 1985

Año	Costos			Estimación Mínima		NETO	Estimación Ajustada		NETO
	Inversion	Mant.	Operación/	Beneficios			Beneficios		
				Ingresos Tarifarios 2/	Ahorros Mant.Línea Vieja		Excedente del Consumidor 3/	Ahorros Mant.Línea Vieja	
1987	1,843				20	(1,823)		20	(1,823)
1988		5	550	550	20	15	653	20	119
1989		5	571	571	20	15	686	20	130
1990		5	593	593	20	15	719	20	141
1991		5	615	615	20	15	753	20	153
1992		5	638	638	20	15	788	20	165
1993		5	662	662	140	135	825	140	298
1994		5	686	686	20	15	863	20	191
1995		5	640	712	20	86	902	20	276
1996		5	664	738	20	89	942	20	293
1997		5	688	764	20	91	983	20	310
1998		5	713	792	20	94	1,026	20	328
1999		5	738	820	20	97	1,070	20	347
2000		5	765	850	20	100	1,116	20	366
2001		5	792	880	20	103	1,163	20	386
2002		5	820	911	20	106	1,212	20	407
2003		5	848	943	20	109	1,262	20	428
2004	258	5	878	976	20	(145)	1,314	20	192
2005		5	909	1,010	140	236	1,367	140	593
2006		5	940	1,045	20	119	1,422	20	497
2007		5	972	1,081	20	123	1,479	20	521
2008		5	1,006	1,118	20	127	1,537	20	546
2009		5	1,040	1,156	20	131	1,598	20	572
2010		5	1,076	1,195	20	135	1,660	20	599
2011		5	1,112	1,236	20	139	1,724	20	627
2012		5	1,150	1,277	20	143	1,790	20	656
2013		5	1,188	1,320	20	147	1,858	20	685

Estimación Mínima del TIRE= 1.30 Estimación Ajust. TIRE= 13.07

1/Consumo incremental por el costo marginal a largo plazo de .063US\$/M3, calculado por el Banco en base a información oficial suministrada.

2/Consumo incremental por la tarifa esperada de .07 US\$/M3.

3/Calculado en base al supuesto conservador de que la curva de demanda por usuario es igual a: $Kwhs_{ges} = 300 - 2128 \cdot t$, en donde t es la tarifa por Kwh expresado en US\$. Se estimó 6500 usuarios inicialmente afectados por el proyecto (5000 directamente y 1500 indirectamente).

Proyecto Ciudad de Salta(i) Descripción

El proyecto tiene el objetivo de sustituir una línea urbana en malas condiciones de 13.2 KV y 2.42 KW de potencia, por una línea nueva de 13.2 KV y 3.950 KW. Esto significa cubrir un déficit actual y futuro con respecto a la cantidad y calidad de energía eléctrica demandada en un área de influencia de aproximadamente 6,000 usuarios. Desde el punto de vista económico lo anterior implica incurrir en gastos presentes y futuros para ofrecer un servicio valioso a la comunidad. El diseño del proyecto se basó en un ejercicio de comparación de alternativas, escogiéndose la de menor costo económico.

(ii) Demanda y Dimensionamiento

El proyecto permitirá satisfacer la demanda proyectada de crecimiento moderado hasta el año 1990, año después de cual se tendría que programar la inversión de una terna auxiliar que, a su vez, permitiría duplicar la oferta de energía al área del proyecto.

Año	Usuarios			Demanda Mwh			Oferta Mwh
	Domest.	Comer.	Otros	Domest.	Comer.	Otros	
1990	6322	560	31	8300	1200	6000	15600
2000	7700	680	31	15000	1500	6500	31260

(Véase también Cuadro explicativo F.2.1)

(iii) Costosa) Costo de Inversión (en miles US\$):

Línea 13.2KV	662
Adm., Ing., e Imprev.	145
Total	807

b) Costos Económicos Incrementales de Operación

Dado que el sistema eléctrico de Salta opera como parte del sistema interconectado de Argentina, para la determinación de este costo se utilizó el costo marginal de largo plazo de generación y transmisión de electricidad, 0.063 US\$/Kwh, calculado por el Banco en base a la información disponible.

(iv) Beneficios

Los beneficios se midieron de dos maneras alternativas. En la primera se hizo el cálculo de ingresos incrementales vía tarifas. En el segundo caso se postuló una curva de demanda de carácter conservador: $Kwhs\ mes = 300 - 2128 * t$, en donde t es la tarifa por Kwh expresado en US\$. En base a esta curva se hizo una estimación de excedente del consumidor que se crea debido al proyecto, al pasar de una situación de restricción de oferta a otra de menor restricción. En ambos casos, los beneficios incrementan notablemente después del año 1996. Esto se debe a que en la situación sin proyecto no habría manera de prolongar la vida de la línea existente más allá del año citado.

Año	Consumo Incremental (Mwh)	Ingresos Tarifarios (miles US\$)	Excedente (miles US\$)
1990	2624	198	228
2000	2300	1720	2480

(iv) Resultados

La estimación de rentabilidad mínima resultó con un TIRE del 10%, mientras que la estimación ajustada para incluir el excedente del consumidor resultó en un TIRE del 23%, por lo cual el proyecto se considera rentable (Véase Cuadro explicativo F.2.2).

(v) Impacto Distributivo

En base a información proveniente de la Encuesta Permanente de Hogares se determinó que, en el área de influencia directa, aproximadamente el 95% de los beneficiarios son de bajos ingresos, y, se estima que el coeficiente de impacto distributivo asciende a 80%.

Fin	Demanda San Proyecto Con Proyecto Incremental			
	Oferta	Consumo	Consumo	Consumo
1985	12,050	12,050	12,050	12,050
1986	12,050	12,050	12,050	12,050
1987	12,765	12,050	15,630	12,050
1988	14,316	12,050	15,630	12,050
1989	14,008	12,050	15,630	12,050
1990	15,404	12,050	15,630	12,050
1991	16,102	12,050	15,630	12,050
1992	16,747	12,050	15,630	12,050
1993	17,417	12,050	15,630	12,050
1994	18,114	12,050	15,630	12,050
1995	18,838	12,050	15,630	12,050
1996	19,592	12,050	15,630	12,050
1997	20,375	0	0	0
1998	21,190	0	0	0
1999	22,038	0	0	0
2000	22,920	0	0	0
2001	23,836	0	0	0
2002	24,790	0	0	0
2003	25,781	0	0	0
2004	26,812	0	0	0
2005	27,885	0	0	0
2006	29,001	0	0	0
2007	30,161	0	0	0
2008	31,367	0	0	0
2009	32,622	0	0	0
2010	33,927	0	0	0

Cuadro F.2.2
Análisis Costo - Beneficio
Proyecto Electricidad de Salta
(en Miles US\$ de 1985)

Año	Costos		Estimación Mínima					Estimación Ajustada				
			Beneficios			NETO		Beneficios			NETO	
			Ingresos Tarifarios 2/	Ahorro Mant.	Disminución de Pérdidas del Sistema			Excedente del Consumidor 3/	Ahorro Mant.	Disminución de Pérdidas del Sistema		
1985												
1986												
1987	987				34		(773)		34			(773)
1988		92	5	110	35	12	59	126	35	12		75
1989	182	128	5	153	36	12	(115)	176	36	12		(92)
1990		166	5	198	37	12	75	228	37	12		106
1991		175	5	209	38	12	79	245	38	12		114
1992		175	5	209	39	12	79	249	39	12		120
1993		175	5	209	41	12	81	253	41	12		125
1994	500	175	5	209	42	12	(418)	257	42	12		(369)
1995		277	5	449	43	12	122	532	43	12		204
1996		475	5	506	44	12	132	601	44	12		227
1997		1,284	5	1,528		12	251	2,221		12		944
1998		1,335	5	1,589		12	261	2,304		12		976
1999		1,388	5	1,653		12	271	2,391		12		1,009
2000		1,444	5	1,719		12	282	2,480		12		1,042
2001		1,502	5	1,788		12	293	2,572		12		1,077
2002		1,562	5	1,859		12	304	2,668		12		1,113
2003		1,624	5	1,934		12	316	2,768		12		1,150
2004		1,689	5	2,011		12	328	2,871		12		1,188
2005		1,757	5	2,091		12	341	2,977		12		1,227
2006		1,827	5	2,175		12	355	3,088		12		1,268
2007		1,900	5	2,262		12	369	3,203		12		1,309
2008		1,969	5	2,345		12	382	3,314		12		1,351
2009		1,969	5	2,345		12	382	3,346		12		1,383
2010		1,969	5	2,345		12	382	3,376		12		1,414

Estimación Mínima del TIRE : 9.89

Estimación Con Ajuste TIRE : 22.86

1/Calculado en base al consumo incremental por el costo marginal de largo plazo de electricidad, CMLE.

El CMLE de .063 US\$/KWh se estima en base a información oficial suministrada al Banco.

2/Igual al consumo incremental por la tarifa promedio esperada de .075 US\$/KWh.

3/Calculado en base al supuesto conservador de que la curva de demanda por usuario es igual a: $KWh_{\text{us}} = 300 - 2128 * t$, en donde t es la tarifa por KWh.

expresado en US\$. Se estima 10,000 equivalente usuarios afectados por el proyecto.

G. Gas

Proyecto James Craik(i) Dimensionamiento

La demanda actual de combustible en la ciudad de James Craik se estima en 1260 M3/hr. max. y 7000 M3/día max., equivalente de gas natural. El 33% de esta demanda es de carácter doméstico y el resto es industrial, particularmente de la industria láctea. El proyecto está diseñado para atender una demanda máxima de 3000 M3/hr., lo cual permitirá satisfacer la demanda adecuadamente durante un período de aproximadamente 30 años (Véase Cuadro explicativo G.1).

(ii) Costos

a) Costo de inversión (miles US\$):

	1987	1988
Gaseoducto de Aproximación		
Red de distribución		
Estaciones reductoras		
Subtotal	797	623
Conexiones Internas	81	142

b) Costo de Económico de Operación

Para reflejar la situación restrictiva de oferta del gas proveniente del gaseoducto al cual se conecta el proyecto, se utiliza, para los primeros dos años de operación, el costo de oportunidad del gas, calculado en base a una reducción de sustitución de fuel oil por parte de industrias conectadas al mismo gaseoducto. Para los siguientes años se hizo una estimación del costo marginal de largo plazo de la explotación y transporte del gas, CMLPG (en base a información suministrada por Gas del Estado), al cual se le agregó un 3%, para cubrir gastos administrativos y de mantenimiento, dando como resultado 0.0458 US\$/M3.

	1980	1995
Ventas (en M3)	2,397,397	2,433.328
Costo Oper. (miles US\$)	237	112

(iii) Beneficios

En base a datos obtenidos de proveedores particulares e industriales de James Craik, con respecto a cantidades y utilizando precios de combustibles calculados de acuerdo a proyecciones existentes del precio internacional del crudo, se proyectó el ahorro en divisas debido a la sustitución de combustible importado (o exportable). A este se le aplicó un factor de conversión de la divisa de 1.15 calculado en un estudio reciente de precios cuenta. Adicionalmente se calculó,

suponiendo una curva de demanda lineal, el excedente del consumidor correspondiente al consumo incremental de energético que se espera resulte con el proyecto.

Combustible Liberado	1990	1995
Gas Licuado (Kgs.)	277,466	291,620
Kerosene (Lts.)	378,363	397.663
Fuel Oil (Ton.)	1,199	1,199
Gas Oil (M3)		
Beneficios en Miles de US\$	265	365
Excedente del Consumidor	6	12

(iv) Resultados

El Proyecto tiene una tasa interna de retorno básica del 13% y, como es de esperarse, es sensible al precio internacional de combustibles. En base a resultados de este análisis y tomando en consideración que Argentina tiene una política deliberada de sustitución de combustibles de venta internacional, política mediante la cual el país manifiesta su deseo de evitar el riesgo de pérdidas asociadas con movimientos súbitos del precio internacional de combustibles, el proyecto se considera socialmente rentable (Véase Cuadro explicativo G.2).

Cuadro 6.1
Análisis Sustitución y Demanda
Proyecto Gas James Craig

Años Básicos	Demanda Energéticas a Sustituírse		Ahorros Esperados 3/ (US\$-años)		Demanda Gas Natural Equivalente M3 4/
	Doméstico 1/	Industrial 2/			
Any	Pobl. Gas Lic. Keros. (Kg/Año) (lts/año)	Fuel Oil Gas Oil (ton/año) (m3/año)			
1985	3,110 264,000 360,000	1,044	54		1,908,409
1986	3,141 266,640 363,600	1,073	59		1,952,146
1987	3,173 269,306 367,236	1,103	63		1,997,226
1988	3,204 271,999 370,908	1,134	69		2,043,705
1989	3,236 274,719 374,617	1,166	75	177	2,091,645
1990	3,269 277,467 378,364	1,199	81	223	2,141,107
1991	3,301 280,241 382,147	1,199	81	235	2,149,104
1992	3,334 283,044 385,969	1,199	81	261	2,156,538
1993	3,368 285,874 389,828	1,199	81	273	2,164,045
1994	3,401 288,733 393,727	1,199	81	304	2,171,628
1995	3,435 291,620 397,664	1,199	81	317	2,179,287
1996	3,470 294,536 401,641	1,199	81	345	2,187,022
1997	3,504 297,482 405,657	1,199	81	346	2,194,835
1998	3,539 300,457 409,714	1,199	81	348	2,202,725
1999	3,575 303,461 413,811	1,199	81	350	2,210,695
2000	3,611 306,496 417,949	1,199	81	351	2,218,744
2001	3,647 309,561 422,128	1,199	81	353	2,226,874
2002	3,683 312,656 426,350	1,199	81	354	2,235,085
2003	3,720 315,783 430,613	1,199	81	356	2,243,378
2004	3,757 318,941 434,919	1,199	81	357	2,251,754
2005	3,795 322,130 439,268	1,199	81	359	2,260,214
2006	3,833 325,351 443,661	1,199	81	361	2,268,759
2007	3,871 328,605 448,098	1,199	81	362	2,277,389
2008	3,910 331,891 452,579	1,199	81	364	2,286,105
2009	3,949 335,210 457,104	1,199	81	366	2,294,908
2010	3,988 338,562 461,676	1,199	81	368	2,303,800

1/Estimaciones en base a datos de 23 expendedoras privadas.

2/Encuesta directa a industriales del área.

3/Proyección de precios:	1990	1995	1996+
Kg. Gas Lic.	0.156	0.217	0.230
Lt. Keros.	0.142	0.198	0.210
In. Fuel Oil	96	134	150
M3 Gas Oil	130	182	230

4/Factores de Equivalencia por M3 de Gas Natural:

Kg. Gas Lic.	1.274194
Lt. Keros.	1.010753
In. Fuel Oil	1.108
M3 Gas Oil	961

Cuadro 6.2
 Analisis Beneficio-Costo
 Proyecto Gas James Craig 1/
 Miles de US\$ de 1985

Año	Costos				Beneficios		NETO	Analisis de Sensibilidad Precio de Energeticos Substituidos		
	Inversion		Operacion 2/		Ahorros por Sust. 3/	Exced. 4/				
	Syst. Conex.	Venta M3	CMLEPG UCE/M3	Total						
								+20%	-20%	
1987	848						(848)	(848)	(848)	
1988	556						(556)	(556)	(556)	
1989		81	1,905,247	0.0813	178	204		25	66	(15)
1990		142	2,373,397	0.0867	237	256	6	26	77	(25)
1991			2,385,264	0.0458	109	270	7	168	222	114
1992			2,397,190	0.0458	110	300	9	199	259	139
1993			2,409,126	0.0458	110	314	9	213	276	150
1994			2,421,222	0.0458	111	350	11	250	320	180
1995			2,433,328	0.0458	112	365	12	265	338	192
1996			2,445,495	0.0458	112	397	14	299	378	219
1997			2,457,722	0.0458	113	398	14	299	379	220
1998			2,470,011	0.0458	113	400	14	301	381	221
1999			2,482,361	0.0458	114	403	15	303	384	223
2000			2,494,773	0.0458	114	404	15	304	385	224
2001			2,507,247	0.0458	115	406	15	306	387	225
2002			2,519,783	0.0458	115	407	15	307	388	226
2003			2,532,382	0.0458	116	409	16	309	391	227
2004			2,545,044	0.0458	117	411	16	310	392	228
2005			2,557,769	0.0458	117	413	16	312	394	229
2006			2,570,558	0.0458	118	414	16	313	395	230
2007			2,583,411	0.0458	118	416	17	315	398	231
2008			2,596,328	0.0458	119	419	17	317	400	233
2009			2,609,309	0.0458	120	421	17	319	403	234
2010			2,622,356	0.0458	120	422	17	319	404	235
TIR :							12.66	16.02	8.831	

1/Usease documento SUMA Proyecto Gas J. Craig y cuadro sgte. con respecto a datos basicos.

2/El costo unitario para los primeros dos años de operacion refleja una limitacion de oferta durante este periodo y por eso se refiere al costo de oportunidad de sustitucion de fuel oil por parte de industrias conectadas al mismo gasoducto. El cost total resultante se multiplica por un factor de conversion de la divisa de 1.15 (en base a un estudio reciente precios de cuenta). Para los años siguientes se hizo una estimacion del costo marginal de largo plazo de explotacion y transporte de gas, CMLEPG, en base a informacion suministrada por Gas del Estado.

3/Igual a ahorros por sustitucion de energeticos multiplicado por el factor de conversion de la divisa de 1.15.

4/El excedente del consumidor se calcula como 0.5 (precio prom. de energeticos sustituidos - tarifa del gas) * incremento esperado en consumo de energetico.